



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

La Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA:

Dina Esthefany Alvarado Miñano

ASESOR:

Mg. Elías Gilberto Chávez Rodríguez

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Constitucional

LIMA – PERÚ

2017

Página del jurado

José Jorge Rodríguez Figueroa

Presidente

Ricardo Salvatierra Yi

Secretario

Guisseppi Paul Morales Cauti

Vocal

Dedicatoria

A mi padre Isaac y a mi abnegada madre Patricia, quienes con sus enseñanzas y sabiduría han logrado guiar siempre mi vida de manera correcta; a mi querido hermano Anderson por su cariño incondicional; y a mi mejor amigo, Shadito, quien hoy no se encuentra físicamente conmigo pero si espiritualmente.

Agradecimiento

A Dios, por mostrarme el camino correcto
en los momentos de angustias y dudas.

Declaración jurada de autenticidad

Yo Dina Esthefany Alvarado Miñano con DNI N° 47702253, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no han sido falseados, duplicados, ni copiados y por lo tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude, plagio, auto plagio, piratería o falsificación, asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

Lima, 19 de julio de 2017

Dina Esthefany Alvarado Miñano

DNI N° 47702253

Presentación

Señores miembros del Jurado:

La presente investigación lleva por nombre **La Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho**, la misma que tiene por objetivo principal analizar exhaustivamente la citada figura parlamentaria con el propósito de adaptarla a los lineamientos que exige el nuevo modelo garantista, esto consiste principalmente en dar a conocer el verdadero contenido de la Inmunidad Parlamentaria en el contexto contemporáneo.

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consigna la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo de investigación cuyo estudio se encuentra orientado a la comprensión, de tipo básica y de diseño teoría fundamentada. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y, evidencias que se plasmarán en el anexo del presente trabajo de investigación.

La autora.

Índice

	Pág.
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración jurada de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
RESUMEN	xii
ABSTRACT	xiii
I. INTRODUCCIÓN	14
Aproximación temática	17
Trabajos previos	19
Teorías relacionadas al tema	21
Formulación del problema	76
Justificación del estudio	78
Objetivos	80
Supuestos jurídicos	81
II. MÉTODO	83
2.1. Tipo de investigación	84
2.2. Diseño de la investigación	85

2.3. Caracterización de sujetos	86
2.4. Población y muestra	93
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	93
2.6. Métodos de análisis de datos	95
2.7. Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorización	96
2.8. Aspectos éticos	97
III. RESULTADOS	98
IV. DISCUSIÓN	141
V. CONCLUSIONES	168
VI. RECOMENDACIONES	170
VII. REFERENCIAS	172
ANEXOS	186
Anexo 1 Matriz de consistencia	187
Anexo 2 Ficha de validación de instrumentos	190
Anexo 2-A Validación de guía de entrevista	191
Anexo 2-B Validación de cuestionario	196
Anexo 3 Instrumentos	199
Anexo 3-A Guía de entrevista	199
Anexo 3-A.1 Guía de entrevista a Especialistas en Derecho Constitucional ⁽¹⁾	202
Anexo 3-A.1.1 Transcripción de entrevistas	205
Anexo 3-A.2 Guía de entrevista a Especialistas en Derecho Constitucional ⁽²⁾	221

Anexo 3-A.2.1 Transcripción de entrevista	223
Anexo 3-A.3 Guía de entrevista a Especialista en Derecho Parlamentario	237
Anexo 3-A.3.1 Transcripción de entrevista	240
Anexo 3-B Cuestionario	251
Anexo 3-B.1 Resumen de las encuestas	253
Anexo 4 Fragmento de la Constitución Política del Perú	255
Anexo 5 Fragmento del Reglamento del Congreso de la República	257
Anexo 6 Sentencia del Tribunal Constitucional: Francisco Errázuriz	260
Anexo 7 Legislación Comparada de la Inmunidad Parlamentaria	262
Anexo 8 Venezuela: Tribunal Supremo quita inmunidad a parlamentarios	267
Anexo 9 Inmunidad Parlamentaria en la Historia Constitucional	270
Anexo 10 Reglamento del Procedimiento Judicial para requerir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria	272
Anexo 11 Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tendrá quince integrantes	275
Anexo 12 Alejandro Yovera y otros Congresistas que fueron desaforados	276
Anexo 13 Evidencias	277
Anexo 14 Videos, audios, fotos de entrevista y otros	280

Índice de Tablas

	Pág.
Tabla 1 Caracterización de sujetos	88
Tabla 2 Población y muestra	93
Tabla 3 Unidades Temáticas, Categorías y Subcategorías	96
Tabla 4 Pliego de preguntas en general	124
Tabla 5 Concepto de inmunidad parlamentaria	126
Tabla 6 Desnaturalización de la inmunidad parlamentaria	127
Tabla 7 La inmunidad parlamentaria genera impunidad	128
Tabla 8 Acciones para fortalecer el Congreso	129
Tabla 9 Percepción de la opinión pública	130
Tabla 10 Procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria	131
Tabla 11 Corrupción e inmunidad	132
Tabla 12 Eliminación de la inmunidad parlamentaria	133
Tabla 13 Consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria	134
Tabla 14 Estado Constitucional de Derecho	135
Tabla 15 Organización de preguntas y respuestas	136
Tabla 16 Resumen de respuestas	138

Índice de Gráficos

	Pág.
Gráfico 1 Delitos por los que se requirió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria	58
Gráfico 2 Concepto de inmunidad parlamentaria	126
Gráfico 3 Desnaturalización de la inmunidad parlamentaria	127
Gráfico 4 La inmunidad parlamentaria genera impunidad	128
Gráfico 5 Acciones para fortalecer el Congreso	129
Gráfico 6 Percepción de la opinión pública	130
Gráfico 7 Procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria	131
Gráfico 8 Corrupción e impunidad	132
Gráfico 9 Eliminación de la inmunidad parlamentaria	133
Gráfico 10 Consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria	134
Gráfico 11 Estado Constitucional de Derecho	135
Gráfico 12 Objetivo general	142
Gráfico 13 Objetivo general y Supuesto general	142
Gráfico 14 Objetivo específico 1 y Supuesto específico 1	161
Gráfico 15 Objetivo específico 2 y Supuesto específico 2	165

RESUMEN

En razón a la imperiosa necesidad de tener una democracia fuerte y sólida que garantice a todos sus ciudadanos, sus derechos por igual sin importar la condición social que este tenga, resulta fundamental hacer un estudio sobre la prerrogativa parlamentaria de carácter procesal penal, pues en diversas ocasiones se ha confundido esta institución jurídica con la palabra más repudiable que podría existir en un Estado Constitucional de Derecho, la impunidad. Hemos vivido momentos en los que con frecuencia inusitada no hay semana o mes en el que no llegue al Congreso de la República, al menos, un pedido para desaforar a uno de sus integrantes por la comisión de presuntos ilícitos penales. Es necesario analizar a profundidad la inmunidad parlamentaria para hacer de ella una verdadera institución del Derecho Parlamentario con el propósito de garantizar una democracia legítima y genuina donde el respeto por la Carta Magna sea prioridad de todos y no solo de unos cuantos. El método a emplear en la citada investigación es de tipo básica, de diseño teoría fundamentada, de alcance descriptivo y de enfoque cualitativo. La figura de la inmunidad parlamentaria no debe ser objeto de abolición sino por el contrario debemos de mantener una figura parlamentaria que proteja al Congresista y al mismo tiempo que evite que sus representantes obtengan la posibilidad de no responder ante la justicia por los delitos que cometen.

Palabras claves: Inmunidad Parlamentaria, Estado Constitucional de Derecho, Operadores Legislativos, Congreso de la República.

ABSTRACT

In reason to the imperious need to have a strong and solid democracy that guarantees all his citizens, his rights equally without importing the social condition that this one has, it turns out to be fundamental to do a study on the parliamentary prerogative of procedural penal character, since in diverse occasions there has got confused this juridical institution with the word more repudiable that might exist in a Constitutional State of Law, the impunity. We have lived through moments in those who often unusual do not exist week or month in which an order does not come to the Congress of the Republic, at least, to behave in an outrageous way to one of his members for the commission of supposed illicit penal. It is necessary to analyze to depth the parliamentary immunity to do of her a real institution of the Parliamentary Law with the intention of guaranteeing one democracia legitimizes and genuine where the respect for the Magna Carta is a priority of all and not only of a few. The method to using in the mentioned investigation is of type basic, of design based theory, of descriptive scope and of qualitative approach. The figure of the parliamentary immunity must not be an object of abolition but on the contrary we must support a parliamentary figure that protects the Congressman and at the same time as he prevents his representatives from obtaining the possibility of not answering before the justice for the crimes that they commit.

Key words: Parliamentary immunity, Constitutional State of Law, Legislative Operators, Congress of the Republic.

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación lleva por título La Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho. Esta investigación tiene como propósito analizar exhaustivamente la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria y poner al descubierto sus fortalezas y debilidades con relación a los preceptos del orden constitucional.

En diversas ocasiones vigorosamente hemos indicado que la Constitución Política del Perú, es la norma suprema e imperante en nuestro país; sin embargo actualmente se ha puesto al descubierto que la ley suprema que se encuentra instaurada en nuestra circunscripción territorial, no es acatada de manera genuina por la colectividad, incluyendo a los funcionarios públicos, aquella clase política y económica enquistada en nuestra sociedad.

Por esa razón, estudiaremos rigurosamente el empleo que se le da a la figura de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República; es decir investigaremos todo lo relacionado a la aplicación de dicha garantía para después en base a argumentos sólidos decir, si la prerrogativa en mención se ha desnaturalizado o no, si los padres de la patria emplean o no correctamente esta institución parlamentaria, si esta garantía procesal lesiona o no el Estado Constitucional de Derecho, o si la actitud errada de emplear incorrectamente esta inmunidad parlamentaria ejerce una presión dañina al modelo garantista.

Decimos esto, porque en la actualidad el Parlamento Peruano aún presenta notoriamente un descrédito excesivo a tal grado de llegar a encontrarse inmersa en la esfera de las instituciones más corruptas de nuestro país.

Teniendo claro lo que se va a investigar, pasaremos a brindar toda la información necesaria y concreta sobre el presente tema.

En primer lugar, estudiaremos el problema tal cual se presenta en la realidad, esto quiere decir que la incógnita principal establecerá el fundamento del porqué la Inmunidad Parlamentaria se instauró en nuestro ordenamiento jurídico y si esta prerrogativa se encuentra a la par con los cánones del Estado Constitucional de Derecho.

Igualmente, cabe manifestar que a ello incorporaremos los problemas específicos siendo estos concretos y determinados, por una parte conoceremos cuál es la percepción de la opinión pública sobre la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos períodos legislativos; y por el otro, cuáles son las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Posteriormente, observaremos los objetivos; principal y específicos. Los cuales sirven para dirigir el desarrollo de la investigación con la finalidad de protegernos ante cualquier desvío que se pueda presentar en la búsqueda del conocimiento científico (Cauas, 2006, p.11).

Del mismo modo, resulta indispensable utilizar como respaldo los supuestos jurídicos, los cuales se sustentan y existen por la recolección de las diversas opiniones de los expertos, es decir esta información al ser recogida y analizada nos permite brindar un resultado extraído de la realidad.

Aproximación temática

Esta investigación tiene por finalidad analizar la figura de la inmunidad parlamentaria, en tal sentido ahondaremos en la aplicación de dicha garantía, toda vez que en la actualidad tal prerrogativa viene siendo muy cuestionada por disímiles factores, hecho que ha originado que se presuma que tal prerrogativa ha sido desnaturalizada y con ello ha logrado transgredir los cimientos sólidos que todo Estado Constitucional de Derecho presenta en un sistema democrático.

Atrozmente, ciertos legisladores, han sacado provecho de tal privilegio para prevalecer sus intereses personales, efectuando para ello actos ilícitos y empleando de manera irregular la garantía parlamentaria.

De lo precedido, es fundamental dar a conocer que ha esta figura parlamentaria se le atribuye el nombre de impunidad y esto se debe a la mala utilización por parte de los operadores legislativos.

Por otro lado, a fin de contextualizar la problemática que se abordará en la investigación, resulta necesario citar a Quispe, quien nos menciona:

La prerrogativa de la inmunidad antiguamente era conocida como un privilegio, la misma que se originó en Inglaterra como medida protectora a favor de los diputados en su pugna permanente con la Corona; fueron épocas difíciles en el que la Monarquía, (...) no soportaba oposiciones de ningún tipo y, menos, que se pretenda recortarle atribuciones cuyos orígenes estimaban divinos. Entre los años que van de 1046 a 1544, la Cámara de los Comunes obtienen la libertad de palabra y la inviolabilidad como asedio que van a influir en otras colectividades que demandan su inserción y práctica (1998, p.186).

Ahora bien la figura de la inmunidad parlamentaria surgió con el fin de proteger, preservar y tutelar la institucionalidad del Parlamento, en razón a las funciones que los mencionados realizan, situación peculiar que dota al legislador con esta prerrogativa, siendo tal una excepción a las normas.

Según Izaga (citado en Ramos, 2013, p.1) sostiene al respecto:

Los parlamentarios, en aras de cumplir su misión, deben gozar de completa seguridad y para ello, se les otorga determinadas prerrogativas que poseen el calificativo de inmunidades parlamentarias y cuyo fin es protegerlos de toda clase de

obstáculos que las autoridades o simples ciudadanos pudieran oponer al ejercicio de sus funciones y ponerlos a cubierto de toda índole de perjuicios, persecuciones y menoscabo que contra ellos se pudiera pretender.

La postura expuesta supra, se condice con el fin supremo por el cual tal garantía fue introducida a nuestra legislación, contrario sensu, resulta ser la praxis que se le brinda a tal prerrogativa, toda vez que ello es tergiversado por algunos legisladores que se resguardan en ella a fin de evitar cualquier situación que ponga en riesgo su estabilidad legal.

Es así que la prerrogativa del fuero constituyente, establecida en nuestra Carta magna, es el centro de discusión, toda vez que numerosos individuos y partidos políticos con poco o mucho tiempo de creación ven en ella un privilegio vital e importante que les permite realizar actos contrarios a las normas sin ser castigados o sancionados.

Es importante mencionar que la inmunidad parlamentaria no se trata de blindar al Congresista, lo que se busca con la aplicación de esta prerrogativa es garantizar la institucionalidad del parlamento, el correcto funcionamiento de este y la legitimación por parte de la sociedad, hecho que no ocurre, pues la ciudadanía no avala determinados actos que los legisladores efectúan, más aún cuando los Parlamentarios desvirtúan la prerrogativa parlamentaria para sus fines personales originando así que los fines institucionales se perciban alterados.

El presente proyecto de investigación, busca instituir una correspondencia significativa entre la inmunidad y el modelo garantista, pues lamentablemente esta prerrogativa de carácter procesal ha sido relacionada en diversas ocasiones con la impunidad, la misma que para algunos permite realizar actos de corrupción sin que la justicia alcance a los representantes del Parlamento; es así que se tiene que llegar a identificar el problema que subyace en esta situación, verificar si tales circunstancias realizan una suerte de causa-efecto, y plasmar que daño le hace la misma al Estado de Constitucional de Derecho; para luego brindar determinadas recomendaciones para una correcta aplicación y funcionamiento de la misma, garantizando indudablemente la correcta legitimación del Congreso.

Trabajos previos

Al respecto conviene decir que los antecedentes o trabajos previos se procederán a delimitar de la siguiente manera:

Antecedentes a nivel nacional

En relación a los antecedentes, señalaremos que a nivel nacional existe una tesis que lleva por título Inmunidad Parlamentaria: vigencia o eliminación en el Sistema Constitucional Peruano, la cual ha sido de difícil acceso pero en virtud a la investigación que se está realizando es necesario mencionarla.

Albán (2016, párr.7), en su investigación titulada: “¿Inmunidad o impunidad?, concluyó: La inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada totalmente, al punto de haber adoptado insistentemente el carácter de privilegio individual, encaminado hacia una suerte de garantía de exención (...). Resulta ineludible empezar una decidida cruzada para eliminar esta institución parlamentaria que hoy se ha transformado en la antesala de la impunidad.

Ferrero (2016, párr. 11), en su investigación titulada: “¿Inmunidad o impunidad parlamentaria?”, concluyó: La inmunidad que se les otorga a los Congresistas de la República no simboliza la impunidad. Todo lo contrario, le requiere al representante parlamentario efectuar una conducta de respeto a la legalidad vigente y no abusar del cargo para el cual ha sido elegido; sin embargo no todos desempeñan a cabalidad sus funciones, lo que ha originado el desprestigio del Congreso y el de sus integrantes.

Gutiérrez (2016, p.130), en su investigación titulada: “La inmunidad parlamentaria en el Estado Democrático Constitucional: un estudio a partir del caso peruano”, concluyó: La Comisión del Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria debe ser designada por 05 años para impedir que sea parte de la negociación política anual.

Rezkalah (2012, p.28), en su investigación titulada: “La inmunidad parlamentaria: ¿Una prerrogativa suficiente o necesaria?”, concluyó: Una inmunidad parlamentaria con demasiadas exigencias para el levantamiento de su fuero

constitucional genera doble imagen ante la ciudadanía; en primer lugar proyecta que somos un país con una democracia muy frágil, muy endeble; y en segundo lugar que es un bien apreciado y valorado en demasía por los postulantes al Congreso y que favorece indudablemente a los partidos políticos cada cinco años.

Abad (2011, párr. 6), en su investigación titulada: “Inmunidad Parlamentaria Restringida”, concluyó: La primera opción es eliminar la inmunidad parlamentaria y que la Corte Suprema disponga la detención y el procesamiento de los Parlamentarios vinculados a los delitos comunes, y la segunda opción es restringirla, estableciendo que ningún delito cometido antes de ser elegido Congresista permita la inmunidad parlamentaria, aun así el proceso penal se inicie cuando este ya ostente el cargo representativo.

Bernales (2011, párr.15), en su investigación titulada: “Inmunidad convierte a algunos en intocables”, concluyó: Los partidos políticos que seleccionan a personas inadecuadas como sus candidatos demuestran notoriamente la debilidad orgánica de los mecanismos de control intrapartidos.

Antecedentes a nivel internacional

Del mismo modo, a nivel internacional mencionaremos que existen diversas tesis, artículos, ensayos y libros que se encuentran vinculados a la problemática de la referida investigación.

Espigado (2013, p.33), en su investigación titulada: “Los Privilegios Parlamentarios en cuestión: Una revisión de la Inmunidad y el aforamiento en el derecho Español”, concluyó: El Tribunal Supremo no es el órgano judicial en el que la imparcialidad e independencia se ven mejor garantizadas.

El referido autor menciona que se forma un círculo vicioso, pues el Órgano Legislativo es quien elige a los magistrados que van a formar parte del Órgano Judicial, y esto y esto lógicamente no es lo aconsejable, menos en un país donde las instituciones no funcionan correctamente y donde la corrupción se encuentra enquistada.

Soriano (2012, p. 32), en su investigación titulada: “La inmunidad de los parlamentarios: más privilegio que garantía”, concluyó: Son más los perjuicios que beneficios que proporciona la inmunidad, por ello propongo la supresión de la autorización de la Cámara Parlamentaria para proceder criminalmente contra un parlamentario y, en su lugar la obligación del Tribunal Supremo de solicitar preceptivamente un informe de la cámara argumentando sobre las eventuales discrepancias políticas de la iniciativa procesal.

Carro (1981, p.108), en su investigación titulada: “La Inmunidad Parlamentaria”, concluyó: Que la inmunidad parlamentaria solo juega un rol predominante cuando las Cámaras están reunidas, pues en los periodos de vacaciones o de suspensión no existe función parlamentaria que deba ser resguardada.

Punset (2001, p.262), en su investigación titulada: “Estudios Parlamentarios”, concluyó: En los Estados con un régimen jurisdiccional improductivo y sometido a la arbitrariedad de la ley, en particular, a los procedimientos estáticos y burocráticos, la inmunidad parlamentaria se transforma en una institución semejante a la impunidad.

Teorías relacionadas al tema

Conociendo lo antes referido, resulta esencial brindar los alcances del marco teórico respecto a la presente investigación permitiendo así, la interpretación de la problemática del estudio en mención.

La prerrogativa constitucional de la Inmunidad Parlamentaria

En el presente segmento vamos a desarrollar todas las particularidades propias que se desprenden de ésta garantía constitucional con el propósito de conocer las razones que respaldan su existencia.

Antecedentes y Orígenes de la Inmunidad Parlamentaria

En cuanto a los antecedentes de ésta institución podemos decir que gran parte de la doctrina menciona que la inmunidad parlamentaria apareció en el derecho inglés con el denominado enunciado *freedom from arrest or molestation* entre los siglos XIII al XV.

Sin embargo, lo que surgió en el derecho inglés fue el Parlamento y con ello la denominada gracia del monarca, la misma que consistía en cubrir con un manto protector a quienes acudían al Parlamento sin ser detenidos por deudas, es decir este privilegio era nada más y nada menos un mecanismo que imposibilitaba el arresto de los burgueses cuando estos se dirigieran a la corte del Rey con la finalidad de que los referidos cumplieran a cabalidad la órdenes del mencionado aun así estos tuvieran deudas impagas al momento del llamamiento (Gutiérrez, 2010, párr. 12).

En puridad, es propicio decir que este antecedente histórico sirvió para impulsar el origen de la garantía constitucional que existe hoy en día en gran parte de los ordenamientos jurídicos del mundo.

Entonces, si bien este antecedente fue de mucha utilidad, no resulta propicio considerarlo como una postura que contiene el verdadero origen de esta prerrogativa que surgió con fines distintos a los postulados del derecho inglés, el cual será desarrollado con más profundidad en los acápites posteriores.

De lo antes dicho, es prudente señalar que pasaremos a desarrollar las diversas posturas que hablan sobre los orígenes de la inmunidad parlamentaria cada una con sus típicas características.

Existen esencialmente tres posturas que nos hablan sobre el origen de ésta garantía parlamentaria.

La primera postura nos dice que la inmunidad parlamentaria tiene sus orígenes en los precedentes medievales españoles gran parte de los autores que avalan esta posición sitúan su recorrido en el cuerpo jurídico o reglamentario de la Siete Partidas de Alfonso X.

La raíz de los Parlamentos medievales se encuentra en el emplazamiento que instituye el Rey a sus servidores o súbditos al Consejo. El Rey percibe que los individuos que se alejan de sus territorios para realizar una misión forzada deben ser resguardados al momento de realizar sus viajes, esto concierne su integridad física y sus pertenencias que transportaban consigo durante la ida, estadía y regreso, ésta ley únicamente se encargaba de proteger fundamentalmente a los que asistían a la Corte por órdenes del Monarca (Martín, 2008, p.23).

Es decir, esta tutela evita que se produzcan afectaciones al patrimonio del sujeto comisionado, esto manifiesta claramente que la ausencia del vasallo no solo se

presenta por acatar las disposiciones obligatorias del Rey sino también por la permanencia de manera forzada en zonas distintas a la de su hogar.

De los preceptos antes aludidos podemos decir que se descarta en su totalidad todo vínculo con la inmunidad parlamentaria, pues el deber de asistir al llamamiento del Soberano consistía en defender los objetos de tan alta onerosidad que transportaban.

Con esto quiero decir que los privilegios de la corona se crearon y se instauraron con un propósito distinto al que se originó, pues la esencia no recae en el amparo de la persona sino en los objetos de alta onerosidad que debían ser tutelados por los sujetos encomendados a tal misión. Al respecto, es preciso mencionar que el rey otorgaba sin lugar a duda una garantía protectora a sus súbditos pero en temas propios de la Corte no era considerado como un amparo propiamente funcional.

En definitiva, se rechaza completamente el vínculo que pueda llegar a existir entre los privilegios o distinciones medievales y la figura de la inmunidad parlamentaria pues lo primero no sostiene los argumentos suficientes para ser considerado como tal.

La segunda postura refiere que dicha figura parlamentaria tiene sus principios en la cronología medieval inglesa.

En este contexto histórico medieval podemos observar las dos figuras históricas inglesas conocidas como freedom of speech y freedom from arrest or molestation.

Para definir la freedom of speech, Barrios (2002) señala que se trata del modelo histórico de una garantía que en las monarquías absolutas otorgaba el Rey a aquellos grupos estamentales o sociales sobre los cuales éste se reservaba el derecho de llamarlos a consulta en el Parlamento, y al amparo de esta gracia sus consejos serían escuchados sin amenazas ni intimidaciones (p.9).

Sabiendo esto, es fundamental expresar que ésta figura histórica inglesa es una de las prerrogativas parlamentarias que se encargaba de autorizar la libre expresión de cada uno de sus integrantes, es decir a los comisionados se les

permitía emitir juicios u opiniones con total liberalidad sin recibir sanción alguna por exteriorizar lo que pensaban o consideraban.

De lo manifestado es fundamental mencionar que ésta prerrogativa parlamentaria en la actualidad es conocida con el nombre de inviolabilidad.

Por otro lado, la freedom from arrest or molestation «libertad frente al arresto o molestia» como lo denominaron originalmente los ingleses. Este privilegio consistía en la defensa a la libertad física del parlamentario contra toda detención que se quisiera impetrar durante los periodos de sesiones y que se extendía, además, a un periodo de gracia de cuarenta días antes de las sesiones y cuarenta días después (Barrios, 2002, p.10).

Al mismo tiempo, esta situación genera un desconcierto debido al carácter que presenta, pues la libertad personal del parlamentario en el contexto inglés respondía a temas propios del derecho civil y no a los de naturaleza criminal o penal.

Generando así, que la finalidad de la misma no sea compatible con los pronunciamientos de las prerrogativas parlamentarias debiendo de asignarse como tal el nombre de privilegios funcionales.

Los precedentes medievales ingleses que aportan a la freedom from arrest or molestation son tan irrelevantes como los precedentes españoles. Puesto que, su identidad y su formulación resultan ser muy semejantes a la figura que se empleaba en la antigua España, pues ambos responden a la misma idea de custodia patrimonial de los asistentes a la Curia Regis, es decir ambos emplean el mismo alcance civil (Miranda, 1984, p.12).

En síntesis, la freedom from arrest or molestation defendía la libertad individual ante situaciones judiciales de naturaleza civil, más no se encarga de amparar las actuaciones legales de carácter criminal o penal. Por ello, opinamos que la definición que se le brinda a la citada figura no debería ser considerada como una teoría del origen histórico de la inmunidad parlamentaria puesto que difiere en demasía al objetivo que persigue dicha garantía procesal.

Por último, la tercera postura explica que el inicio de la prerrogativa parlamentaria que surge en la Francia revolucionaria.

Aquí podemos manifestar a total cabalidad que gran parte de la doctrina considera que en Francia el proceso ha tenido distintos componentes, toda vez que al margen de los antiguos y empolvados precedentes medievales ingleses y españoles el único origen de esta institución se desprende con el surgimiento del Estado liberal para ser más exactos esto se lo debemos a la Revolución Francesa (Alonso de Antonio, 2000, p.86).

Estos datos permiten conocer sin duda alguna que la Revolución Francesa fue un factor preponderante para el surgimiento de la prerrogativa en mención. Por otro lado, es preciso advertir que en Francia la inmunidad parlamentaria es conocida como inviolabilité, la cual surgió ante el miedo de que el gobierno o los tribunales de justicia pudieran quebrantar e interrumpir las funciones representativas de la Cámara Legislativa.

Resulta sustancial conocer más a fondo lo que significa los verdaderos inicios de esta prerrogativa.

Al respecto, Martín (2008, p.24) sostiene:

Los que defienden esta posición conocen que esta garantía fue promulgada el 26 de junio de 1790 por Decreto de la Asamblea Nacional, [...] la misma que declara que [...] los diputados pueden ser detenidos conforme a las ordenanzas, en caso de flagrante delito. Posteriormente, [...] la Ley 13-17 de junio de 1791 manifestó [...] que los representantes de la Nación podrán, por actos criminales cometidos fuera de sus funciones, ser detenidos bien en flagrante delito, bien en virtud de una orden de arresto; pero el procesamiento no podrá ser llevado a cabo hasta que el Parlamento declare que hay argumentos firmes para la acusación [...].

Lo cierto es que en el año 1790 el Parlamento Francés se vio en la imperiosa necesidad de cautelar la autonomía de la Asamblea Representativa floreciendo para ello una institución que se encargara de dicha protección.

La inmunidad parlamentaria surgió para que ninguno de sus miembros sea detenido o juzgado sin previa autorización del respectivo Cuerpo Legislativo, ya que la acusación penal cubierta de algún móvil partidario podría sin duda alguna

privar a la Cámara Legislativa de alguno de sus representantes perjudicando así el normal funcionamiento de la misma (Santaolalla, 2013, p.141).

De lo anterior, es necesario mencionar que su objetivo es dotar de autonomía e independencia al Cuerpo legislativo al no privarlo innecesariamente de alguno de sus representantes, pues de hacerlo se estaría impidiendo incuestionablemente que éste cumpla a cabalidad las funciones encomendadas por el Órgano legislativo, lo cual sin duda alguna terminaría aceptando la intromisión mal intencionada del Gobierno o del Tribunal de Justicia.

En el mismo correlativo de ideas, Figueruelo (1992) sostiene que el origen contemporáneo que ha dado lugar a las prerrogativas parlamentarias que hoy en día tenemos ha sido gracias a las pugnas ideológicas, políticas y jurídicas que se originaron entre los representantes revolucionarios y los poderes del antiquísimo régimen. Es así que en la Francia de 1789, el Cuerpo representativo revolucionario, órgano imperante y símbolo de la soberanía nacional, se vio en la necesidad de enfrentarse con la monarquía personificada en aquel entonces por los poderes del ejecutivo y el judicial; con el propósito de tomar las medidas indispensables para resguardar y defender la independencia del Parlamento, así como la protección inmediata de sus miembros frente a los ataques continuos del monarca y de su aparato policial y judicial (p.38).

Vinculado a lo descrito, podemos afirmar que la postura francesa se aproxima al verdadero propósito que persigue la prerrogativa parlamentaria, esto a razón del surgimiento del Decreto de la Asamblea Nacional, la cual claramente nos dice que si los diputados comenten un hecho ilícito en flagrancia, es decir si ellos realizan un ilícito penal y éste es observado en el mismo instante que se están ejecutando los hechos ilegales, los diputados deberán ser detenidos; sin embargo, el procesamiento de los mismos estará sujeto al pronunciamiento del Cuerpo Legislativo.

Del enunciado antes manifestado, se puede apreciar que el propósito de tal contexto era evidentemente mostrar que existe una separación de poderes, lo cual resulta lógico que cada Institución otorgue ciertas garantías que protejan a cada uno de sus miembros.

Por consiguiente, es necesario advertir que la garantía parlamentaria antes referida se inspiró en el dogma de la soberanía parlamentaria debido a la principal

confianza que se le atribuía al Parlamento, siendo así, considerado desde ese entonces como el único órgano capaz de resguardar la indefectible voluntad de la Nación (García, 1989, p.444).

En efecto, esta garantía se concibe a la luz de ser un poder popular autónomo e independiente de la corona, de ello deviene que en principio ésta se encuentre relacionado con el mandato representativo.

Después de conocer los orígenes de la inmunidad parlamentaria y de entender que dicha prerrogativa no surgió en España ni en Inglaterra sino en Francia resulta esencial y necesario para la investigación recopilar toda información transcendental que permita dominar todos los alcances que tiene la Inmunidad Parlamentaria con la finalidad de cumplir con los requerimientos suscritos en el presente estudio.

Concepto de la Inmunidad Parlamentaria a nivel doctrinal

Antes de brindar los alcances de la conceptualización de la presente garantía constitucional resulta necesario aclarar que esta institución que es materia de estudio forma parte de las prerrogativas parlamentarias que tiene toda Cámara Legislativa.

Las prerrogativas parlamentarias son aquellas garantías que tienen como objetivo principal asegurar el libre y eficaz funcionamiento de las Asambleas Legislativas. Por otro lado, las prerrogativas más importantes que las amparan son, especialmente, del mandato no imperativo, la inviolabilidad del voto y opinión y la inmunidad de arresto y proceso (Reynaga, 2016, p.249).

Ciertamente es que estas prerrogativas surgieron con la finalidad de asegurar el correcto desempeño de las Cámaras, las mismas que dotan al representante popular de las suficientes garantías para que ejecuten de manera independiente las funciones que le han sido encomendadas.

De manera similar, García (2009) las prerrogativas parlamentarias son el conjunto de derechos y garantías que la Carta Magna le otorga al Parlamento como institución y a sus representantes de manera individual, con el fin de preservar su

independencia así como el libre y normal desempeño de sus funciones y paralelo a ello, resguardar la seguridad personal del Congresista (p.1).

Aquí se puede observar claramente que el autor refiere que las prerrogativas parlamentarias resultan ser una suerte derechos y garantías que se desprenden de las normas supremas con la intención de dotar al Parlamentario del suficiente respaldo institucional para que este pueda realizar sus funciones de manera regular y libre.

Según Pérez (como se citó en Fernández, 2011, p.18), los privilegios parlamentarios son garantías que se emplean para proteger la independencia y el correcto desenvolvimiento de los órganos legislativos que a la actualidad se siguen contemplando en los diversos textos constitucionales del mundo producto de las grandes pugnas revolucionarias que surgieron en aquel entonces para salvaguardar la autonomía del Parlamento.

Las prerrogativas parlamentarias son las facultades, derechos, obligaciones y responsabilidades estatutarias inherentes al Parlamentario una vez que asume el cargo representativo. Por lo tanto, estas garantías que forman parte de las Asambleas Parlamentarias y que le son otorgadas al representante del pueblo para que realicen sus funciones con total independencia, no son una clase de privilegios individuales sino todo lo contrario, pues el conjunto de los elementos referidos le pertenecen únicamente a los órganos legislativos y no a los sujetos que forman parte de él.

En suma, se dice que estas garantías estatutarias son una especie de piedra angular que sirven para respaldar al Parlamento, no solo por la finalidad que tienen sino porque además estas prerrogativas sirvieron de base para creación de las demás disposiciones reglamentarias. Cabe precisar, que la existencia de las referidas no significa que el Parlamentario, Diputado o Senador puedan hacer lo que se les plazca de hacerlo esto podría implicar la existencia de un derecho sin control materializado en abusos e impunidad (Dworak, 2010, p.3).

Ahora bien, teniendo en mente lo que en cierta forma puede llegar a ser el mencionado tema a tratar, empezaremos a desarrollar los conceptos de la referida prerrogativa parlamentaria.

Según el Tribunal Constitucional nos dice que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de los representantes del Congreso, que se asienta en la posibilidad de que éstos sean procesados o detenidos, salvo delito flagrante, previo levantamiento del fuero constitucional del correspondiente Poder Legislativo. Configurándose así, como un obstáculo procesal para la apertura de instrucción penal, dado que constituye un elemento de especial relevancia del procedimiento preestablecido por norma y, desde tal perspectiva, como atributo integral del derecho al debido proceso (Expediente N° 1011-2000-HC/TC, Fundamento Jurídico N° 1). (Ver Anexo N° 06).

En palabras generales y entendibles, la garantía institucional aludida es una prerrogativa que se les otorga a los representantes parlamentarios para que estos no puedan ser detenidos o juzgados, salvo delito flagrante, sin la debida autorización del respectivo cuerpo legislativo al que pertenecen.

Al respecto, García (como se citó en Latorre, 2008, p.163-164), la inmunidad parlamentaria puede ser conceptualizada en dos sentidos, uno amplio y otro restringido. En consideración al sentido amplio podemos decir que la referida, es el derecho inherente a la condición parlamentaria en virtud del cual se confiere a los representantes una cierta indemnidad respecto de las acciones judiciales que en su contra pudieran promover el gobierno o los particulares (...). Mientras que en sentido estricto, la inmunidad parlamentaria consiste en que los parlamentarios no pueden ser detenidos ni procesados sin la autorización del Cámara Legislativa de la cual forman parte, salvo cuando son sorprendidos en plena comisión del delito.

Entonces, la doctrina concibe dos niveles de valoración conceptual que, sin duda alguna deben tomarse en cuenta.

En ese sentido, el mencionado autor refiere que en el mundo conceptual y real esta institución parlamentaria debe entenderse como aquel derecho funcional que le otorga la Asamblea Parlamentaria a sus representantes -Diputado, Senador o Congresista- por el cargo que ostentan, más no debe ser entendido como un privilegio o derecho individual, toda vez que esto resulta ser una garantía o condición procesal que tienen casi todos los Parlamentos.

Sin embargo esto no acaba ahí, pues en el segundo parámetro podemos concebir que las cosas cambian ya que este derecho inherente a la condición funcional se

ve materializado o concretado en la autorización que debe emitir el Cuerpo Legislativo para que sus miembros puedan ser detenidos o procesados por la presunta comisión de un ilícito penal, salvo delito flagrante.

De manera similar, Bermúdez sostiene al respecto:

En primer lugar, la inmunidad parlamentaria, en sentido amplio responde a la concepción de un derecho inseparable a la condición funcional parlamentaria, en virtud de la cual se confiere a un funcionario público una condición procesal que le otorga una cierta indemnidad respecto de las acciones judiciales que se pudieran promover en su contra, sin importar el cargo o condición de la parte acusadora. Y en segundo lugar, la Inmunidad Parlamentaria, en sentido restringido se limita a la condición por la cual un congresista no puede ser procesado ni arrestado por órgano jurisdiccional alguno, sin que de por medio antes exista la autorización expresa del Congreso de la República (2012, p.10).

Conociendo los dos arquetipos a nivel conceptual es conveniente desarrollar la conceptualización exacta de la exención procesal antes citada.

La inmunidad parlamentaria es una garantía de independencia para un Congresista, la misma que sirve como escudo de protección ante presiones políticas, a fin de proteger la función representativa que tiene un Parlamentario respecto de quienes sufragaron por él (Rezkalah, 2012, p.24).

En efecto, esta institución procesal es asignada a los representantes populares con el objetivo de resguardar la independencia e integridad del órgano Legislativo para el normal desempeño de sus funciones respetando así la voluntad popular. No obstante, la Cámara es quien otorga el permiso para que sus miembros puedan ser arrestados o procesados siempre y cuando el motivo sea justificado en criterios legales y no políticos.

Para Wieland (2010), la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa procesal que los miembros del Parlamento disfrutaban en cuanto sean representantes de las Asambleas Legislativas por tanto no debe ser entendido como un derecho particular (p.291).

En ese sentido, los Parlamentarios no deben de hacer suyos los derechos o garantías que les brindan los Cuerpos Legislativos para el cumplimiento de sus funciones porque éstas facultades o prerrogativas son propias del Congreso.

Este tipo de prerrogativa parlamentaria cumplen un rol preponderante en lo que respecta a la libertad del sujeto, toda vez que la Cámara correspondiente es quien da la autorización para que se arreste o procese al inculpado si hay mérito a ello.

Indicó asimismo que la inmunidad parlamentaria es una de las prerrogativas características de la función congresal que forma parte del llamado Estatuto de los Parlamentarios, que viene hacer en buena cuenta ese conjunto de derechos, prerrogativas, obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, legalmente inherentes al cargo que ostentan (Latorre, 2008, p.163).

Es una garantía constitucional típica de la función parlamentaria que se percibe en el Estatuto jurídico de los Congresistas, la misma que presenta un conglomerado de elementos que se deben cumplir a cabalidad.

De lo referido es sustancial decir que el fin de la inmunidad consiste en evitar detenciones arbitrarias de sus miembros o representantes del Congreso.

Por otro lado, resulta necesario manifestar que esta prerrogativa parlamentaria es la que más propagación ha obtenido en los diversos Estados del mundo, mientras que la inviolabilidad no es tan difundida, ni estudiada como la antes citada.

En tal sentido la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria (...) no es un privilegio personal en beneficio de los diputados o senadores, sino que se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias, a las que la inmunidad tiene como finalidad proteger (Abellán, 1992, p.72).

En suma, la integración de la referida figura cumple un rol preponderante, puesto que se encarga de proteger la funcionalidad correcta del Congreso de la República, permitiéndose así que sus miembros cumplan sus deberes encomendados sin ningún tipo de obstáculo e intromisión.

Es crucial entender que la inmunidad parlamentaria protege la función del parlamentario, no implica un juicio de culpabilidad o no culpabilidad, en la medida

que no entra al fondo mismo del proceso judicial que afecte al parlamentario; es simplemente una garantía formal, de tipo procesal (Tirado, 2000, p.89-90).

En cuanto al alcance de esta prerrogativa, a diferencia de la inviolabilidad parlamentaria (...), la inmunidad busca evitar el apresamiento e inclusive el encauzamiento judicial que pudiera sufrir arbitrariamente un congresista por delitos extra funcionales. La inmunidad propiamente dicha entraña que el parlamentario no sea sometido a medidas represivas limitadoras de su libertad personal por presuntos comportamientos fuera del ejercicio de las funciones públicas; protege a los parlamentarios por actos ajenos a su función propiamente parlamentaria (Vergottini, 1983, p. 337).

En definitiva, la prerrogativa de la inmunidad tiene como fin evitar que los miembros de las diferentes bancadas políticas que encontramos en el parlamento sean detenidos o privados de su libertad sin previa manifestación por parte del presente Cuerpo legislativo.

Los efectos de la aplicación de la inmunidad parlamentaria son un quiebre o una suspensión de la actividad jurisdiccional frente a una situación concreta. Es un supuesto jurídico que entraña una suerte de sustracción de una materia determinada del ámbito jurisdiccional de manera temporal, por lo mismo que resulta aconsejable utilizar restrictivamente la inmunidad, limitándola a los procedimientos judiciales que puedan ocasionar la privación de libertad de los parlamentarios y aplicándola, por tanto, sólo a las causas penales (Abellán, 1992, p. 81).

Resulta que la actividad jurisdiccional se encuentra a potestad de lo que resuelva el órgano legislativo. Por ende, tras la acusación, el criterio será puramente legal o jurídico, no cabe de ninguna manera otro tipo de fundamento.

La inmunidad en nuestro ordenamiento ampara al congresista solamente cuando se trata de acciones de naturaleza penal más no los protege de acciones de distinta índole.

La inmunidad parlamentaria es el atributo que ostentan los parlamentarios, que los exime de ser detenidos o procesados judicialmente por sus actos u opiniones que realicen en el desempeño de sus funciones como representantes de un mandato legal, salvo autorización o permiso motivado de la cámara a la cual pertenecen (Chanamé, 2013, p.11).

Ese es el sentido final de la inmunidad, brindar la protección necesaria a sus miembros en la medida que representen al órgano parlamentario.

Coincidentemente opinaba Paz, quien sostenía que las inmunidades no deben considerarse como privilegios en la vida social y política respecto de los demás ciudadanos, por tanto, tampoco debe entenderse como una patente de impunidad (1979, p.421).

Naturaleza Jurídica

Según lo estipulado en la Normatividad Suprema, la inmunidad parlamentaria es realmente un requisito de procedibilidad, en el que se garantiza el derecho del representante popular de no ser juzgado sin la autorización correspondiente del órgano al cual pertenece (Bermúdez, 2012, p.10).

En la Carta Magna del Perú podemos apreciar que ésta institución parlamentaria es un requisito procesal que debe cumplirse para que el órgano jurisdiccional pueda procesar o detener al Congresista si es que hay lugar a ello.

En otras palabras, la condición que se le otorga al Parlamentario no debe ser concebida como una razón de exclusión o liberación de la responsabilidad penal, pues el Congresista puede ser detenido o juzgado independientemente del cargo representativo que tenga y su participación en el Poder Judicial deberá respetar en principio la división de poderes, la condición y la investidura que detenta, producto de una elección democrática libre (Santaolalla, 2004, p. 303).

Esta condición descende del carácter corporativo de la inmunidad parlamentaria, la cual permite amparar los actos realizados en el cumplimiento del mandato parlamentario, prioritariamente de los que provienen de la fiscalización, representación y control político (Fernández, 2001, p.16).

Por lo tanto, esta condición no debe ser entendida como un derecho propio o individual, sino como una condición estipulada a razón de las funciones que deberá realizar el Congresista en nombre del Órgano Legislativo.

Según Paz y Abellán (como se citó en Bermúdez, 2012, p.11) concuerdan, especialmente, en el mecanismo garantista a favor de la institucionalidad

parlamentaria, la cual puede padecer de algún detrimento o restricción por la imposibilidad de que alguno de sus miembros participe en las sesiones o actividades ordinarias encomendadas.

En términos específicos, la doctrina tradicional señala que la garantía parlamentaria nunca debe ser considerada como un derecho privado, puesto que este privilegio se reconoce en razón del cargo que ostentan y no en virtud del sujeto que lo ejerce.

Características de la Inmunidad Parlamentaria

La institución parlamentaria antes referida posee ciertas características que mostraremos a continuación:

a. Excepcionalidad de su aplicación

Este tipo de características consiste en que solo el carácter político de la persecución defenderá la aplicación de la inmunidad parlamentaria, es decir si la investigación de carácter penal estuviera disfrazado de una intencionalidad política de cualquier tipo, sería legal la aplicación de la garantía parlamentaria de ser contrario esto no tendría la mayor relevancia y la investigación seguiría su curso (Latorre, 2008, p.165).

Lo mencionado, resulta ser una suerte de sustracción de la materia -causal de improcedencia- que incapacita al órgano jurisdiccional de tomar las acciones pertinentes para procesar o detener a un parlamentario por un tiempo estimado o momentáneo.

Por otro lado, la doctrina nos dice que si se emplea la inmunidad parlamentaria sus efectos pueden originar, en cierta forma, el quiebre o la suspensión de la actividad jurisdiccional frente a una situación determinada.

De vital consideración, es recomendable emplear restrictivamente la inmunidad, limitándola a los procedimientos judiciales que puedan ocasionar la privación de la libertad de los Congresistas, y aplicándola, por consiguiente, únicamente a las causas penales (Abellán, 1992, 81).

La inmunidad parlamentaria sólo existe ante la posible una utilización política del proceso penal contra un parlamentario (Tirado, 2000, p. 91-92).

Entonces, este criterio de excepcionalidad reside en que para autorizar o no el levantamiento del fuero constitucional, el Órgano Legislativo tiene que comprobar si la acusación encubre o no algún móvil político contra el Congresista.

De observarse que efectivamente la denuncia está cubierta de algún móvil partidario, la Cámara Legislativa no levantará la inmunidad parlamentaria; sin embargo si esto resultase ser lo contrario, el Congreso deberá de alzar el fuero constitucional para que el Órgano Jurisdiccional cumpla con sus funciones.

b. Carácter Corporativo de la prerrogativa

La inmunidad parlamentaria tiene la misión de resguardar la integridad del Parlamento, así como su independencia para el normal ejercicio de sus funciones, principalmente la legislativa, control político y fiscalización (Abellán, 1992, p.72).

Asimismo, esta prerrogativa de carácter corporativo puede considerarse también como un medio de control político, pues busca salvaguardar la independencia de los parlamentarios, por lo que ésta garantía se consagra a favor de la Cámara Legislativa para evitar que se altere la distribución de mayorías y minorías resultante del proceso electoral (Latorre, 2008, p.166).

Cabe decir que este tipo de característica radica en la razón de ser del Parlamento, pues esta prerrogativa forma parte del Órgano Legislativo y por ende le pertenece únicamente a él y no a sus miembros representativos, sin duda alguna esta prerrogativa es un derecho corporativo y no individual que se mantiene en vigencia para salvaguardar su autonomía según el principio de separación de poderes.

Concluyendo con estas líneas, resulta preciso poner de conocimiento que esta garantía parlamentaria permite que los Congresistas de la República puedan ejecutar sus funciones con entera normalidad, en especial cuando se trate de temas de legislación, fiscalización o control político.

Sin este escudo protector, la Asamblea Legislativa estaría mellada por los constantes ataques y atropellos del Poder Ejecutivo.

Cabe mencionar que si el Gobierno quisiera que determinada ley no se apruebe basta con realizar ciertas mañas políticas para que el Órgano Jurisdiccional prive de su libertad a unos cuantos Parlamentarios, originando que estos no vayan a votar el día de la aprobación de dicha norma, logrando favorecer por último los intereses del Gobierno o el entorno de éste; ejemplo que no dista mucho de la realidad.

c. Irrenunciabilidad

Esta tipo de peculiaridad tiene un empalme con la característica corporativa de la prerrogativa y su razón de ser radica en que esta institución parlamentaria es de carácter irrenunciable.

En ese sentido, el miembro de la Asamblea Legislativa no puede disponer libremente de tal protección, toda vez que ésta prerrogativa le pertenece al Parlamento, y si el diputado o senador disfrutan de ella es gracias a un interés legítimo y no a un derecho público subjetivo [...] Por esa razón, el diálogo sobre esta institución parlamentaria se produce entre el órgano juzgador y la cámara, siendo que el interés de hacer valer la garantía constitucional se concede a la referida y no al parlamentario (Abellán, 1992, p.79).

En pocas palabras, se dice que es irrenunciable porque esta prerrogativa parlamentaria no le corresponde al sujeto que la ostenta, sino a la Cámara Legislativa que representa.

Mientras tanto, García (1989) sostiene al respecto:

Desde el instante en que el bien jurídico tutelado pasa a ser la libertad del parlamentario individual, no hay justificación alguna para oponerse a que la titularidad efectiva del derecho a la inmunidad pase al representante parlamentario. Por tanto, la inmunidad se instituye como un legítimo derecho subjetivo, como un poder que se puede ejercitar frente a terceros en forma de deber u obligación, exigible judicialmente y del que, al igual que cualquier otro de su mismo género, el parlamentario puede hacer dejación voluntaria de la referida (p. 61-62).

Aquí podemos presenciar que el citado autor nos dice que la inmunidad parlamentaria es un derecho subjetivo que le corresponde al representante popular y que en cualquier momento puede renunciar a esta, si así lo considera conveniente.

En tanto, cabe aclarar que esta institución parlamentaria no es un derecho propio del Congresista sino de la Cámara Parlamentaria a la que pertenece, en tanto se le concede o se le proporciona esta garantía constitucional al Congresista para que pueda desempeñar sus labores sin ninguna dificultad.

Finalmente, una de las características es de ser irrenunciable, es por ello que al no ser un derecho subjetivo o propio del Parlamentario, este no puede renunciar a algo que no le pertenece.

d. Temporalidad

En este aspecto diremos que el Parlamento tiene la posibilidad de retrasar durante un período de tiempo definido, la responsabilidad penal de alguno de sus miembros (Abellán, 1992, p.76).

Cabe recordar, que la inmunidad parlamentaria es un requisito procesal que en cierta forma resulta ser un impedimento, en algunos casos, para detener o procesar a un Parlamentario.

Con el propósito de aclarar el significado de la característica en mención, diremos que se trata por lo tanto de una garantía temporal, que exclusivamente suspende por un tiempo la persecución judicial del parlamentario, pero que de ninguna manera lo excluye de su responsabilidad (Latorre, 2008, p.167).

Entonces, si la Cámara respectiva toma la decisión de no levantar la inmunidad parlamentaria esto no significa que el Congresista se libera de la responsabilidad penal que hubiere lugar, simplemente se suspende hasta que el representante elegido democráticamente termine su mandato.

e. Irrevisable

Esta es una de las características más controversiales de la inmunidad parlamentaria por las disconformidades que producen en la población.

A merced de ello, García (como se citó en Tirado, 1996, p.94) nos dice que la decisión del Parlamento de permitir la continuidad del proceso penal de uno de sus representantes, ha sido considerada en más de una oportunidad como una

cuestión no justiciable en atención a su determinación como un acto de mera voluntad política, o por configurar un acto de efectos simplemente internos.

De lo expresado, resulta necesario hacer un paréntesis con la finalidad de dar a conocer lo que significa cuestión no justiciable.

Para definir, la cuestión no justiciable, Sarmiento manifiesta al respecto:

El acto político no debe ser invalidado por los magistrados; sin embargo esto no significa que sea aceptable políticamente; la no aprobación política del acto puede motivar la destitución del funcionario que lo emitió y a la larga, la derogación o revocación del acto en cuestión. [...] En todos los gobiernos representativos se acude generalmente al principio de división de poderes, por ser uno de los más grandes principios que forman el alma de nuestra organización política, la misma que justifica la existencia de actos políticos no invalidables por los jueces; señalándose que si tal limitación no existiera, se habría concentrado potencialmente en la Corte Suprema sobre todo, la suma de poderes, alterando la concepción que la Constitución ha formado al racionalizar cuidadosamente el poder en cada uno de sus órganos (2015, p.1).

Queda claro que la cuestión política no justiciable resulta ser una especie de barrera o limitación para que el Poder Judicial pueda actuar ante la no autorización del levantamiento del fuero; es decir si el Congreso de la República opta por esa decisión no se puede hacer nada más al respecto, solo esperar que termine el mandato parlamentario del Congresista para que el proceso penal siga su curso.

Volviendo al tema en mención, es necesario conocer los diversos puntos de vista sobre la referida característica.

En este sentido, la decisión que adopta la Asamblea Legislativa de levantar o no la institución parlamentaria, es un acto de control político de carácter constitucional y emitido por las Cámaras en ejercicio de la potestad política que ha sido conferida por la Constitución; al ser un acto político contra él no cabe ningún tipo recurso, por tanto la Cámara decide en forma discrecional y asentado en el principio de separación de poderes (Gómez, 1985, p.145-149).

En similitud de ideas, se sabe que la Congreso de la República es quien autoriza o deniega el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Esta decisión

adoptada por la Cámara Legislativa es un acto político por excelencia, motivo por el cual los recursos procesales no le alcanzan, pues esta decisión no es susceptible de revisión alguna.

Por último, el control del Tribunal Constitucional sobre el Parlamento encuentra un límite infranqueable en la naturaleza política y no jurídica de la función representativa, lo que significa que mal que pese, existen determinados ámbitos y esferas de la vida pública en los que la decisión última pertenece a los votantes y no a los magistrados (García, 1989, p.64).

Si bien, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Norma Suprema, él tampoco puede invadir la esfera de independencia de la cual goza el Congreso de la República, pues en principio la misma Constitución establece o menciona claramente que cada poder del Estado es autónomo y como tal se deben respetar los fueros, más aún si el Parlamento responde a la voluntad popular.

Finalmente, si se admite o no la posibilidad de revisar la decisión del Órgano Legislativo, esto depende únicamente de la voluntad de todos.

Tipos de Inmunidad Parlamentaria

En este punto en particular mencionaremos que la inmunidad parlamentaria encierra dos aspectos de amparo o protección, la primera es la inmunidad de arresto y la segunda es conocida como la inmunidad de proceso. Las referidas impiden que un Parlamentario pueda ser detenido o sometido a un proceso judicial según sea el caso. Asimismo, la garantía parlamentaria no impide que se realicen investigaciones a nivel policial o de fiscalía.

a. Inmunidad de Arresto

La inmunidad de arresto protege al Congresista para que este no pueda ser arrestado, sin la antepuesta toma de conocimiento y autorización de la Cámara Legislativa; es decir el Parlamentario está protegido contra las denuncias que puedan impedirle el cumplimiento de su cargo, mediante su detención policial o judicial. Alcanza a las detenciones generadas en procesos civiles (Delgado, 2008, p.17).

Esta garantía consiste en proteger la libertad personal del Congresista con la finalidad de que no lesionen las funciones confiadas por el Parlamento.

Resultando aceptable la teoría referida, toda vez que el representante popular carga en sus hombros la defensa de los intereses de los ciudadanos que votaron por él; y de concretarse el arresto, esto imposibilitaría el cumplimiento de sus labores.

Por otra parte, el levantamiento de la inmunidad de arresto produce la suspensión de las funciones del parlamentario, esto ocurre como consecuencia de la autorización que le concede la Cámara Legislativa al Órgano Jurisdiccional para que le aplique las medidas de seguridad que garanticen el correcto procesamiento del Congresista, según las circunstancias que requieran la detención preventiva del inculcado (Delgado, 2011, p.351).

En realidad, autorizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de arresto es permitirle al Poder Judicial que detenga al representante y lo prive o limite de la libertad personal que posee, esta detención claramente es una forma física de no poder ejercer su función.

b. Inmunidad de Proceso

Esta inmunidad de proceso ampara al representante para que no pueda ser procesado judicialmente por la vía penal. Hay que tener presente que este tipo de inmunidad solo alcanza a los procesos penales y no a los procesos civiles.

Asimismo, el proceso de levantamiento de la garantía parlamentaria se genera como resultado de la presunta comisión de un hecho delictivo por un representante parlamentario. Una primera relevancia de la inmunidad de proceso la hallamos en su naturaleza penal, ningún congresista puede ser involucrado en una acción judicial sin autorización previa del Congreso. Otra relevancia de la inmunidad de proceso se presencia en el tiempo que se extiende esta prerrogativa al final del mandato parlamentario, pues esta cuenta con 30 días más de protección finalizado su cargo representativo (Delgado, 2011, p.350-351).

En otro apartado de ideas, el efecto del levantamiento la inmunidad de arresto radica en que el Órgano Jurisdiccional puede desarrollar con total normalidad el juicio, es decir puede investigar y citar al congresista cuando este crea conveniente. Sin embargo, este levantamiento no impide que el parlamentario realice sus funciones, aunque muchas veces se ha creído lo contrario, cabe aclarar que esto no equivale a la suspensión en el ejercicio de su función, cargo o mandato. La interrupción de sus funciones puede darse como consecuencia de la facultad disciplinaria y la acusación constitucional, por la comisión de un delito de función (Delgado, 2011, p.351).

En suma, para que se procese o enjuicie a un congresista no es necesario que se suspenda el ejercicio de la función, cargo o mandato que ostenta el representante parlamentario, pues de darse el caso estaríamos presenciando el levantamiento de la inmunidad de arresto. De igual consideración, el permiso que el Poder Judicial le solicita a la Cámara Legislativa es para que este Órgano Jurisdiccional pueda cumplir con sus funciones a cabalidad.

Por otro lado, la inmunidad de proceso tiene como propósito aseverarle al Congreso de la República que este permanecerá integrado y funcionalmente obrante con quienes el pueblo eligió para que desempeñen el mandato representativo (Delgado, 2011, p.353).

Finalmente, la inmunidad parlamentaria de proceso y de arresto son prerrogativas parlamentarias reconocidas a nivel constitucional, las mismas que forman parte del Estatuto Parlamentario y tienen como justificación y premisa el principio de la independencia del Congreso en el ámbito de la separación de poderes que fijan el régimen político peruano.

Ámbitos de Protección de la Inmunidad Parlamentaria

a. Ámbito personal

Esta garantía constitucional se aplica para los miembros del Congreso de la República, sin embargo la Ley Suprema Peruana ha extendido esta protección a los miembros del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Según Mill (como se citó en Meléndez, 2016, p.4) menciona que para concebir la razón que fundamenta la protección especial que gozan los congresistas, hay que apreciar en primer lugar las principales funciones que cumplen en la sociedad, pues estas son el soporte de una verdadera democracia representativa. Es así que el ejercicio correcto de su labor reside en (...) vigilar y controlar al gobierno; es decir evidenciar sus actos ante la opinión pública, exponer y justificar todo lo que se piense dudoso por parte del mismo, y reprocharlo si lo haya indigno.

Según el Tribunal Constitucional representar a la población no significa cumplir prioritariamente con la tradicional función parlamentaria de legislar, sino que implica fortalecer aún más su dinamismo controlador. Para ello debe estar completamente legitimada con el respaldo popular; es ahí donde se vincula el mandato representativo con la inmunidad parlamentaria (Expediente N° 0026-2006-PI/TC, 2007, Fundamento N° 9).

b. Ámbito material

Este ámbito material de la inmunidad está escindido en dos tipos, la inmunidad de procesamiento y la inmunidad de arresto, lo que evidencia que la inmunidad parlamentaria sólo rige para los procesos penales.

La inmunidad tiene un ámbito exclusivamente penal, no puede alegarse causas de naturaleza civil, sanciones administrativas o disciplinarias, procedimientos que sin duda alguna no requieren de la autorización del Congreso para su apertura. Una aclaración a este tipo de prerrogativas emana de la propia Constitución Peruana en su artículo 93°, la misma que señala que al llevarse a cabo el procesamiento este puede recaer en una detención; es más en este mismo cuerpo normativo fundamental podemos encontrar que uno de los límites al levantamiento de la inmunidad se produce cuando existe un delito flagrante (Expediente N° 0026-2006-PI/TC, 2007, Fundamento N° 22).

De manera análoga, la protección concedida por la inmunidad parlamentaria se sustentan en acciones de naturaleza penal, pues son estos los únicos que involucran la posibilidad de una condena privativa de la libertad (Latorre, 2008, p.168).

Concebimos que la ratio de la inmunidad parlamentaria se circunscribe a prevenir sustracciones injustas de los representantes de Parlamento, por lo que no parece existir razón suficiente para emplear el principio de la inmunidad en aquellas causas perpetuas por faltas, pues estas no están sujetas a determinar penas que priven de la libertad al parlamentario, en cuyo caso será innecesaria y trivial la autorización previa para la inculpación o procesamiento (Santoalalla, 1983, p.92).

c. *Ámbito temporal*

El Tribunal Constitucional manifiesta que desde el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones proclama la elección del Congresista este queda protegido de la inmunidad parlamentaria de arresto y de proceso (Expediente N° 0026-2006-PI/TC, 2007, Fundamento N° 29).

En ese sentido, con la proclamación del congresista electo empieza la defensa contra el arresto y la detención. Entonces, queda justificado que la inmunidad de proceso o procesamiento alcance a los procesos penales iniciados con posterioridad a la elección, indistintamente del momento en el que se cometió el delito. Por otra parte, si el proceso penal no se inició antes de que el Jurado Nacional de Elecciones manifieste la proclamación del parlamentario, entonces el miembro electo permanecerá amparado por la inmunidad de arresto y de proceso debiendo solicitarse al Congreso de la República, el levantamiento del fuero constitucional (Meléndez, 2016, p.6).

Igualmente, si bien el proceso penal iniciado con anterioridad a la proclamación del congresista persistirá después de la elección, es claro también que la inmunidad de arresto se conserva y solo procederá su detención siempre y cuando el Congreso de la República así lo faculte, instituyéndose tal garantía en un límite a la regla del segundo párrafo del artículo 16° del Reglamento del Congreso (Expediente N° 0026-2006-PI/TC, 2007, Fundamento N° 29).

Por otro lado, en relación a la aplicación de esta garantía vamos a dar a conocer el nivel extensivo que esta posee entre los periodos de sesiones y los que se encuentran fuera de este alcance.

Esta institución parlamentaria, no tiene el carácter de ser perpetuo sino que se circunscribe al período que dure el mandato parlamentario.

El tiempo del mandato parlamentario de esta garantía parlamentaria incluye incuestionablemente los periodos de sesiones y el receso parlamentario, tiempo en el cual las funciones de los parlamentarios alternan simplemente en su forma. Por esta razón, los parlamentarios se encuentran protegidos tanto en los periodos entre sesiones o fuera de sesiones, este último es cuando las Cámaras Legislativas no se encuentran reunidas. Como resultado de ello, la doctrina ha considerado que este amparo es demasiado extenso, toda vez que al estar fuera del periodo de sesiones, es complicado que las actuaciones judiciales contra un representante parlamentario perjudiquen sus labores en la Cámara Legislativa, salvo que el parlamentario integre la Diputación Permanente (Abellán, 1992, 92-93).

Esta acotación última es muy importante, puesto que el razonamiento doctrinal mayoritario considera que esa extensión es excesiva, imaginemos que el congresista sea elegido una y otra vez, puede alcanzar a la total impunidad. Lo ideal sería que opere solamente en los periodos de sesiones y que en los intervalos de tiempo entre un periodo ordinario de sesión y otro, los congresistas permanezcan sujetos al derecho común; sin inconveniente alguno de que al iniciarse el período sucesivo, el Parlamento pueda solicitar al Órgano Jurisdiccional los informes necesarios y, de evidenciarse que existe evidentemente una persecución política, pedir la interrupción de las diligencias realizadas por el Poder Judicial (Latorre, 2008, p.168).

d. Ámbito espacial

En razón a la esfera espacial de la aplicación de la garantía institucional del Parlamento, tenemos que esta se consigna a toda la demarcación del territorio nacional, donde los parlamentarios gozarán de la defensa funcional que les otorga esta prerrogativa. Fuera de esta circunscripción geográfica, la institución parlamentaria no tiene validez alguna (Latorre, 2008, p.168).

Como se ha dicho, el ámbito espacial de la institución parlamentaria únicamente surtirá efectos en el territorio nacional peruano; es decir los congresistas gozaran de este tipo de prerrogativa para proteger sus funciones en cuanto estos permanezcan en el Perú, salvo se manifieste lo contrario.

De lo expresado, resulta prudente indicar que en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 832, se observa que los congresistas peruanos cuentan con el pasaporte diplomático, los mismos que se encuentran sujetos de protección diplomática en el exterior. No obstante, en el artículo 6° del referido cuerpo normativo, hemos presenciado que una de las causales que origina la pérdida del pasaporte diplomático es el levantamiento de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria (Latorre, 2008, p.168).

En síntesis, el ámbito espacial de protección se da a nivel nacional y extranjero, este último de manera condicionada, pues una de las exigencias para mantener el pasaporte diplomático es que no exista de por medio el levantamiento del fuero constitucional del congresista, de haberse dado el caso el parlamentario pierde el derecho a contar con el pasaporte diplomático y por ende, la protección que disfrutaba en el extranjero.

La Inmunidad Parlamentaria en el Derecho Comparado

Antes de recurrir al Derecho Comparado y empezar analizar cada una de las Constituciones Políticas que contienen esta prerrogativa, resulta esencial mencionar la tipología de la institución parlamentaria, en razón al contenido particular que ostenta.

Los tres tipos de inmunidad parlamentaria son:

- a. Inmunidad Parlamentaria Absoluta: Se le conoce también con el nombre de inmunidad parlamentaria amplia, total o completa.

En términos concretos este tipo de inmunidad resguarda al Parlamentario para que este no sea procesado ni arrestado sin la debida autorización de la Cámara a la que pertenece, desde el inicio hasta el final de su mandato. Por otra parte, en algunos países, este tipo de inmunidad alcanza a los procesos penales y civiles, por estas razones se le concedió el nombre de inmunidad parlamentaria absoluta.

Resulta necesario mencionar que esta inmunidad parlamentaria al ser absoluta, el Asambleísta por un lado puede estar protegido por la inmunidad parlamentaria contra acciones de naturaleza penal (puede darse el caso que

los proteja también contra los procesos civiles), y por el otro puede estar amparado contra los procesos que surjan durante el inicio o final de su mandato; sin embargo si las Cámaras respectivas no se pronuncian a tiempo, el diputado ya no podrá ser perseguido por ese supuesto delito nunca más.

Los países que presentan esta tipología son: Grecia y Costa Rica.

- b. Inmunidad Parlamentaria Limitada: Igualmente se le conoce con la denominación de inmunidad parlamentaria relativa, parcial o restringida.

Este tipo de inmunidades parlamentarias son aquellas que no tienen un ámbito protector amplio sino por el contrario es restrictivo porque a la par su propósito radica en proteger al Parlamento pero también en respetar el derecho de igualdad ante la ley.

Los países que presentan esta tipología son: Perú, España, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Venezuela, Colombia, El Salvador, Panamá, Alemania.

- c. Inmunidad Parlamentaria Nula: Conocida también con el nombre de inmunidad parlamentaria abolida, derogada o suprimida.

En términos concretos, en este tipo de inmunidad no solo se encuentran comprendidos los países que han eliminado esta garantía parlamentaria sino también aquellos que no lo contemplan, no la aplican, no la reconoce, lo tienen en desuso o que se encuentran suprimidas mediante reforma constitucional.

Estos países que en buena cuenta, han abolido de sus ordenamientos jurídicos a la inmunidad parlamentaria gozan de democracias bien asentadas o fuertes que sin duda alguna no necesitan de la referida para imponer su autonomía o independencia.

Los países que presentan esta tipología son: Holanda (no existe), Australia y Canadá (no la contemplan), México (no la reconoce), Estados Unidos (inaplicable), Reino Unido (en desuso), Francia e Italia (suprimida) y Honduras (derogado).

Ahora bien, conociendo lo antes referido resulta fundamental desarrollar el marco comparado en relación a las Constituciones Contemporáneas que enmarcan esta garantía parlamentaria. Es preciso aclarar, que solo vamos a presentar la esencia del contenido de las normas supremas, pues el desarrollo de la misma se encontrará en los agregados (Ver Anexo N° 07).

De acuerdo a su clasificación, se divide de la siguiente manera:

a. Constituciones de Países de América del Sur

Argentina: Se encuentra plasmado en su artículo 69°, la cual refiere que ningún senador o diputado podrá ser detenido, excepto sea sorprendido en flagrancia delictiva ejecutando algún crimen que merezca pena de muerte. Por otro lado, cuando se forme querella, la Cámara Legislativa podrá suspender las funciones del acusado con los dos tercios de votos y de inmediato será puesto a disposición del juez competente.

Bolivia: Con la reciente Constitución Política, en el artículo 152°, el referido país elimina la inmunidad parlamentaria.

Ecuador: Estipulado en su artículo 128°, la cual establece que si en el plazo de 30 días la Asamblea Nacional no concede la autorización para el enjuiciamiento, esta se entenderá como permitida.

Chile: Se presencia la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria en su artículo 61°, la referida establece que los diputados o senadores gozan de la inmunidad de arresto y proceso. Por otra parte, si el Tribunal de Alzada en pleno no concede previamente la acusación, se entenderá como denegada; dicha decisión podrá ser apelada por la Corte Suprema.

Colombia: Señalado en su artículo 186°, gozan del amparo de la inmunidad de arresto, a su vez la única autoridad que puede decretar su detención será la Corte Suprema de Justicia.

Paraguay: Establecido en su artículo 191°, esta legislación contiene ambas inmunidades de arresto y procesamiento, en relación a esta última se requiere de la mayoría de los dos tercios para que la Cámara se pronuncie si

procede o no el desafuero. Dependiendo de la decisión que se adopte, el Órgano Jurisdiccional podrá o no someter al diputado o senador al proceso penal que corresponda.

Venezuela: Plasmado en su artículo 200°, la protección brindada refiere en tres puntos. Primero: Cualquier diputado que pertenezca a la Asamblea Nacional gozará de la inmunidad parlamentaria desde su proclamación hasta el término o renuncia de su cargo. Segundo: El Tribunal Supremo de Justicia es el único órgano que puede ordenar la continuación del enjuiciamiento y el arresto respectivamente, siempre y cuando la Asamblea haya dado su consentimiento. Tercero: Si el delito se cometió de manera flagrante, el parlamentario será puesto bajo resguardo en su domicilio y se comunicara de manera inmediata el hecho delictivo al Tribunal Supremo de Justicia (Ver Anexo N°08).

b. Constituciones de Países Centroamericanos

Costa Rica: Citado en su artículo 110°, existen muchos datos curiosos que distan de las diversas legislaciones analizadas con anterioridad. Primero: No será detenido por causas de naturaleza civil durante las sesiones, salvo la Asamblea lo autorice o el diputado lo tolere. Segundo: Tanto el asambleísta titular como suplente estarán amparados por la inmunidad parlamentaria hasta que finalice su periodo legal de mandato, de ninguna manera será privado de su libertad por motivo penal, salvo que haya sido suspendido por la Asamblea Legislativa. Tercero: La inmunidad parlamentaria no surte efectos si el diputado renuncia a ella o si ha sido descubierto en flagrancia delictiva. Cuarto: Si la Asamblea lo considera necesario puede ordenar que liberen al diputado así haya sido detenido por flagrante delito.

Salvador: Mencionado en su artículo 238°, los representantes de la Asamblea no podrán ser juzgados por delitos graves durante todo el periodo que persista su mandato parlamentario; mientras que por los delitos leves no podrán ser privados de su libertad, ni llamados a declarar hasta que haya concluido el tiempo de su elección. No obstante, en los delitos flagrantes, el

diputado podrá ser detenido por cualquier persona común o autoridad, quién quedará forzado a entregarlo y ponerlo a disposición de la Asamblea.

Honduras: El artículo 200° que contemplaba a la inmunidad parlamentaria fue derogado por Decreto 175/2003, es por eso que el texto constitucional no lo reconoce.

Panamá: Indicado en su artículo 155°, los Asambleístas Nacionales solo gozan de la inmunidad de arresto. Pueden ser investigados o procesados sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa; sin embargo cuando se pretenda impartir alguna detención preventiva o medida cautelar que altere la libertad personal del Asambleísta, esta será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el Diputado Principal o Accesorio podrá ser demandado civilmente pero de ninguna forma podrá fijarse medidas cautelares sobre sus propiedades sin que de por medio haya existido antes una autorización expresa del Pleno.

República Dominicana: Señalado en su artículo 86° y 87°, la referida pone de conocimiento que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante el periodo que dure la legislatura sin la autorización de su respectiva Cámara, un caso curioso en esta legislación consiste en que si alguno de sus representantes es arrestado, la misma Cámara Legislativa hasta incluso cualquiera de sus compañeros pueden exigir la liberación del senador o diputado por el intervalo de tiempo que dure la legislatura.

c. Constituciones de Países de Norteamérica

México: La apreciamos en su artículo 61°, el referido texto constitucional reconoce a la inviolabilidad parlamentaria pero no a la inmunidad.

Estados Unidos: Se aprecia la mencionada garantía constitucional en el artículo 1° de su Sexta Sección, la misma que manifiesta que los Senadores y Representantes solo gozaran del privilegio de no ser detenidos; adicional a ello resulta prudente decir que esta prerrogativa hoy en día resulta ser algo alegórico.

d. Constituciones de Países Europeos

Alemania: Podemos contemplarlo en su artículo 46º, su rasgo diferenciador reside en el silencio negativo que presenta; el diputado podrá ser detenido sin la autorización del Bundestag cuando haya perpetrado el delito y sea descubierto, también podrá ser arrestado al día siguiente de haber cometido el ilícito penal.

España: Podemos presenciarlo en su artículo 71º, texto constitucional muy similar a la Carta Magna del Perú. Por otro lado, en su Reglamento del Congreso de los Diputados en su Art. 14.2, se puede presenciar una característica diferenciadora, la misma que reside en el silencio negativo que presenta; pues se concebirá denegado el suplicatorio judicial si la Cámara no se manifiesta en el término de 60 días naturales.

Grecia: Se concibe en su artículo 62º, en este ordenamiento jurídico se aprecia claramente que si el suplicatorio no ha sido decidido en el plazo de tres meses se deduce que ha sido denegado. Asimismo, si la Cámara no se pronuncia en el término de 90 días, el diputado no podrá ser perseguido penalmente por el presunto hecho ilícito nunca más, esto en cierta parte resulta ser una absolución.

La Inmunidad Parlamentaria en la Legislación Nacional

En la historia constitucional de la democracia peruana hemos podido presenciar que la inmunidad parlamentaria ha sido reconocida en todos los textos constitucionales que hemos tenido.

Asimismo, resulta preciso mencionar que la Constitución de Cádiz de 1812 reconocía a la inmunidad parlamentaria en sus artículos 27º y 128º respectivamente.

Ahora bien, la inmunidad parlamentaria estuvo concebida en las Constituciones de 1823 (artículos 57º y 59º), 1826 (artículos 32º y 33º), 1828 (artículos 42º y 43º), 1834 (artículos 45º y 46º), 1839 (artículo 17º y 18º), 1856 (artículo 50º y 51º), 1860

(artículos 54º, 55º y 107º), 1867 (artículos 53º, 54º y 55º), 1920 (artículo 80º), 1933 (artículos 104º y 105º) y 1979 (artículo 176º). (Ver Anexo N°09)

Actualmente la inmunidad parlamentaria se encuentra estipulada en la Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 93º en el párrafo tercero, la misma que manifiesta que ningún Congresista podrá ser procesado o arrestado sin la debida autorización de la Cámara Legislativa a la que pertenecen, desde que son elegidos hasta 30 días después de haber culminado sus funciones, a excepción de que se trate de un delito flagrante, cuestión por la cual serán puestos a disposición del Parlamento o de la Comisión Permanente, la que hace sus veces de la antes referida por encontrarse en receso parlamentario; en un plazo de 24 horas a fin de que se conceda o no la privación de la libertad del Congresista y su respectivo enjuiciamiento.

Por otro lado, la inmunidad parlamentaria se encuentra regulada en el Artículo 16º del Reglamento del Congreso, la misma que manifiesta que los Congresistas de la República se encuentran protegidos por esta prerrogativa, en razón de que no pueden ser procesados o arrestados sin que medie antes la debida autorización del Congreso o de la Comisión Permanente.

A ello cabe agregar que esta protección solo se da por el tiempo que dure el mandato representativo hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, es decir el Parlamentario solo estará protegido por este quinquenio y 30 días después de haber finalizado el periodo para el que fue elegido. Adicional a ello el texto reglamentario referido manifiesta que esta garantía parlamentaria protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza penal, mas no de otra índole.

A ello, cabe expresar que esta prerrogativa constitucional no resguarda la libertad personal del parlamentario si es que este ha cometido algún hecho delictivo antes de ser elegido Congresista de la República del Perú, de observarse que hay un proceso judicial en contra de determinado Parlamentaria este deberá seguir su curso si sus penderse, pues aquí la inmunidad parlamentaria no surte sus efectos.

Finalmente, es importante mencionar que el artículo 84º del Código Penal refiere que se queda en suspenso el transcurso del plazo para la prescripción mientras

no se produzca una decisión respecto al pedido de levantamiento del fuero parlamentario o si éste es rechazado, debiendo reanudarse dicho cómputo sólo desde el momento en que la prerrogativa de la inmunidad de proceso haya culminado (Eguiguren, 2007, p.718).

El Levantamiento del Fuero Parlamentario

El levantamiento de la inmunidad parlamentaria consiste en la autorización que le otorga el Congreso al Órgano Jurisdiccional para que investigue algún caso parlamentario que pueda tener ciertos indicios de haberse cometido algún ilícito penal.

En levantamiento del fuero constitucional puede emplearse tanto en la inmunidad de proceso como la de arresto.

Respecto al primer tipo de inmunidad parlamentara, diremos que el procedimiento que se lleva a cabo el levantamiento de la inmunidad de proceso empieza con la elevación del expediente hasta la Corte Suprema, es decir el Juez ordinario le remite todo los actuados a la Corte Suprema, esta Corte Suprema posee una comisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, la misma que está integrada por Vocales Supremos, los cuales tienen por finalidad asegurarse de que estén todos los elementos de juicio necesarios en el expediente para poder iniciar el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, posterior a ello el Presidente de la Corte Suprema (Ver Anexo Nº 10), le emplaza todo los actuado más la solicitud de levantamiento de la inmunidad al Presidente del Congreso para que se sirva a tramitar el pedido del levantamiento de la inmunidad.

Por otro lado, una vez que el Presidente del Congreso recibe el pedido del levantamiento del fuero parlamentario, el expediente pasa a la Comisión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria que está integrada por cinco Congresistas (Ver Anexo Nº11) ellos reciben el expediente y evalúan si es que está información es suficiente para poder determinar, opinar o recomendar el levantamiento de la inmunidad o archivarlo, la comisión tiene que evaluar la evidencia suministrada por el Poder Judicial y a la vez contando con la evidencia

debe dictaminar respecto a si existe una motivación distinta a la legal que sesgue el pedido del levantamiento de la inmunidad.

Por su parte, el objetivo de la Comisión consiste en pronunciarse si es que este requerimiento presenta algún móvil de carácter político o si por el contrario realmente se debe autorizar el levantamiento de esta prerrogativa para que el Órgano Judicial realice las funciones que estime conveniente. Bajo ningún fundamento la Comisión deberá de pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues esta no es la función propia de la Asamblea Legislativa.

Al mismo tiempo, resulta necesario mencionar los elementos que impedirían que la Comisión se pronuncie a favor del levantamiento del fuero constitucional, estos factores serían por ejemplo que se presencie un factor de discriminación de cualquier tipo o que exista alguna pretensión política.

Por ejemplo la Comisión debe evaluar si es que quien está solicitando el levantamiento de la inmunidad es el candidato que dentro del distrito electoral por el cual ha postulado el Congresista es quien inicia ese proceso, eso indudablemente sería un indicio de que hay lógicamente una pretensión maliciosa de alterar el resultado de la votación para sacar de camino a quien fue elegido por quien quedó en segundo o en tercer lugar, esto se ha podido percibir en diversas ocasiones, en efecto hay muchos Congresistas que se han quedado como el inmediato sucesor y en su mayoría son los que inician el pedido para que se levante la inmunidad.

Entonces a través de estos ejemplos hemos podido presenciar que los argumentos que se utilizan son impropios o carecen de fundamento penal, motivo por el cual la Comisión deberá de rechazar y enviar al archivo cuando exista de por medio este tipo de fundamentos, no sería coherente de que al Congresista se levante la inmunidad para afrontar un proceso penal del cual no debería formar parte porque no ha cometido ningún ilícito.

No obstante, cabe manifestar que hace un tiempo atrás para ser exactos a mediados del año 2011 hubo un caso muy sonado en los medios de comunicación, los mismos que informaron que la Congresista Cecilia Anicama estuvo robando señales de cable sin autorización alguna, lo cual hizo que se

quedara con apelativo de la Roba Cable (Congresista de Gana Perú roba y vende señales de cable en Ica, 2011, párr.2).

Sin duda alguna, en este tipo de casos si se puede levantar la inmunidad parlamentaria porque los actos realizados por esta Congresista configuran un delito.

Por ende, ese tipo de valoraciones se forman dependiendo del peso que se le da a la evidencia o la ausencia de evidencia y en la sobreexposición del candidato, la Comisión dictamina si esto es un caso político o no.

Si el tema en cuestión no es un caso político, sino un caso evidentemente legal, se recomienda que se levante la inmunidad de proceso, luego el dictamen pasa al pleno del Congreso y en el pleno el Congresista afectado tiene derecho a la defensa, este si así lo desea puede llevar a un abogado, luego el Congreso resuelve si hay merito o no al levantamiento del fuero constitucional.

De manera general, este es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo si se desea levantar la inmunidad de proceso de un determinado Congresista.

En cuanto a la inmunidad de arresto, el caso es totalmente diferente porque en principio hay dos situaciones, la situación en la que el Congresista ha cometido delito flagrante, aquí indiscutiblemente la policía lo detiene pero de inmediato lo tiene que poner a disposición del Congreso para que éste se pronuncie respecto de la formalización del levantamiento de la inmunidad de arresto y lo ponga a disposición de las autoridades policiales o judiciales o de la fiscalía de la nación, esa es la situación de la inmunidad de arresto en materia de delito flagrante.

Sin embargo, cabe otra situación que el levantamiento de la inmunidad de arresto se produzca cuando el Congresista habiendo sido procesado no tiene mandato de detención pero avanza el proceso y el Juez cree necesario que se detenga al Congresista porque no tiene la seguridad de que pueda seguir concurriendo a las citaciones, entonces pide el levantamiento de la inmunidad de arresto, la Comisión nuevamente se pronuncia luego que llega el pedido de la Corte Suprema y dirán si es que procede o no procede el levantamiento de la inmunidad de arresto para ese Congresista.

Se considera, que este tipo de inmunidad si vulnera la función representativa porque se le priva de su libertad al Congresista, por ende no puede seguir realizando las funciones encomendadas fruto de la voluntad popular.

En líneas generales, en eso consiste el proceso del levantamiento de la inmunidad de proceso y de arresto.

Por otro lado, una consecuencia importante del proceso del levantamiento de la inmunidad es que cuando se levanta la inmunidad de proceso, el Congresista no está privado del ejercicio de la función, es decir se mantienen todos sus derechos funcionales y todas sus obligaciones para seguir desempeñando la función parlamentaria.

El levantamiento de la inmunidad de proceso únicamente quiere decir que el fuero parlamentario queda en suspenso y por lo tanto el fuero competente deja de ser el parlamentario y pasa hacer el fuero jurisdiccional u ordinario, por lo tanto no se suspende el ejercicio de la función, lo que ocurre es que el Congresista puede ser procesado, nada más, es decir puede seguir sesionando, votando y recibir sus remuneraciones como habitualmente lo hace, también sigue teniendo su personal de confianza, su oficina, etcétera.

En resumidas palabras tiene absolutamente todo, la única diferencia es que está obligado a concurrir a una sede judicial para que se le continúe el proceso penal y está obligado a acudir a todas las citaciones hasta que haya un pronunciamiento sea este favorable o desfavorable.

Finalmente, la inmunidad parlamentaria yace en la protección de la libertad personal de sus miembros con el único objetivo de garantizar la voluntad popular y una democracia instituida en el amparo representativo del primer poder del Estado.

Proyecto de Resolución Legislativa: Inmunidad Absoluta

Al respecto, tenemos el Proyecto de Resolución Legislativa N° 3490/2009-CR que tiene como propósito restaurar la vigencia del antiguo texto reglamentario y modificar el segundo párrafo del artículo 16° del Reglamento del Congreso,

iniciativa presentada por el ex Congresista de la República, Javier Valle-Riestra González Olaechea, el 03 de octubre de 2008 y admitido por el área de trámite documentario el 10 de septiembre del 2009.

Este proyecto de ley señala que existe una limitación indebida a la función congresal, a razón de que la norma presuntamente vulnera el principio de presunción de inocencia, toda vez que la referida le impide al Congresista participar en la Comisión de Fiscalización y en las demás Comisiones, por el solo hecho de estar inmerso en un proceso judicial por delito doloso; sin embargo esta inhibición que realiza el Parlamentario se realiza aun así, el Congreso o la Comisión Permanente no haya concedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

También señala que la norma infringe el derecho a la igualdad ante la ley, ya que los demás funcionarios aforados, que gozan del derecho del antejuicio político, no tienen una restricción igual en el desempeño de la función pública.

Haciendo un paréntesis a la información antes referida, es imprescindible decir que el antejuicio político versa sobre los delitos cometidos en el ejercicio de función mientras que la garantía institucional estudiada versa sobre los delitos comunes, esos ilícitos que pueden ser realizados por cualquier persona.

Retomando el tema, cabe precisar que los argumentos propuestos en el Proyecto de Ley en mención, se derivan gracias a que el Tribunal Constitucional declaró infundada a la interposición de una acción de inconstitucionalidad por parte del 25% del número legal de miembros del Congreso de la República (Exp.0026-2016-PI/TC), esta acción reseñada exigía que se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 16º y el inciso d) del artículo 20º, por vulnerar diversos derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, presunción de inocencia, el ejercicio de la función congresal y la propia inmunidad parlamentaria que se encuentran previstos en nuestra Carta Magna.

Nuevamente, cabe decir que el máximo intérprete máximo de la Constitución resolvió declarar infundada la demanda convirtiéndose en una resolución que ostenta la calidad de cosa juzgada.

Lógicamente, aquí podemos apreciar el interés desmedido que presenta el Congresista al querer que se restituya el enunciado anterior del texto reglamentario del año 2005, con la única finalidad claro está de que la inmunidad parlamentaria vuelva hacer absoluta y no restringida.

Cabe mencionar que antes de la modificación del texto reglamentario del año 2006, se observaba que la protección que otorgaba la inmunidad parlamentaria a sus representantes era demasiado amplia, toda vez que en el Reglamento del Congreso del año 2005, en su artículo 16º no se plasmaba declarativamente si tal protección se extendía o no a los delitos cometidos en con anterioridad al ejercicio representativo.

De manera tal, que los Parlamentarios interpretaron de que dicha protección avalaba o resguardaba al representante popular de los procesos anteriores en el que estuviera inmerso, en buena cuenta para ellos esto significo la carencia de la persecución penal por parte de los Órganos de Justicia.

Asimismo, la Carta Suprema tampoco manifestaba si es que dicha protección parlamentaria se ampliaba o no a los procesos penales iniciados con anterioridad al mandato, asumiéndose nuevamente que la garantía institucional amparaba a los representantes parlamentarios antes de su elección.

En suma, esto origino que la población perdiera la confianza en sus representantes populares, pues algunos de ellos se resguardan en esta institución parlamentaria con el fin de no ser sancionados por los delitos que hubiera cometido en un tiempo atrás.

Es por eso, que el Congreso de la República al presenciar que sus miembros tergiversaban esta garantía constitucional que se le otorgó únicamente para procurar el buen funcionamiento de la Cámara Legislativa, decidieron ponerles límites a la inmunidad con el fin de que el fuero parlamentario no sea utilizado o empleado de manera inadecuada, confundiéndose como si este garantía constitucional fuera un derecho particular o propio cuando no es, ya que este derecho funcional por así decirlo forma es del Congreso de la República, le corresponde únicamente a este Órgano Legislativo y no a sus miembros como se cree que es.

Casos de Inmunidad Parlamentaria en el Perú (Ver Anexo N° 12)

De otro lado, en cuanto al periodo legislativo 2001 – 2006, en este intervalo de tiempo se presentó 41 solicitudes de las cuales solo dos fueron declaradas procedentes, el caso de ex Congresista González Salazar y del ex Congresista Torres Ccalla (Expediente N° 0026-2006-PI/TC, 2007, Fundamento Jurídico N° 29 Fundamento N° 19).

Gráfico N° 01

Delitos por los que se requirió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria

(Periodo 2001 - 2006)

<i>Delito</i>	<i>Casos</i>
<i>Abuso de autoridad</i>	2
<i>Fraude en la administración de personas jurídicas</i>	1
<i>Contra la administración de justicia</i>	1
<i>Contra el honor</i>	15
<i>Malversación de fondos</i>	1
<i>Contra los medios de comunicación</i>	1
<i>Desobediencia a la autoridad</i>	2
<i>Contra la libertad de trabajo</i>	1
<i>Contra el patrimonio</i>	1
<i>Contra la fe pública</i>	1
<i>Peculado</i>	12
<i>Violencia contra funcionario público</i>	1
<i>Violencia de libertad sexual de menor</i>	1
<i>Enriquecimiento ilícito</i>	1

Fuente: Elaboración del Tribunal Constitucional

Es así, que en el año 2004, con 97 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el pleno aprobó el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del Congresista de la República Alfredo Gonzáles Salazar, por la presunta comisión de resistencia a la autoridad y sustracción de documentos, existiendo una grabación en la que se observa al indicado agrediendo a la secretaria judicial Rosario Ludeña con la complicidad de sus secuaces, y posteriormente le arrebatan los documentos de la medida cautelar que devolvía la

administración del estadio Monumental a la empresa Gremco (Congreso desaforó a congresista González, 2014, p.1).

Otro caso, que llamó la atención fue la del Congresista de la República por el departamento de Huancavelica, Miró Ruíz Delgado, a quién se le acusaba de haber matado a un perro, en circunstancias en que éste canino había ingresado a su domicilio y le ocasionó la muerte a una de las mascotas de sus hijas, por lo que el referido Congresista enfurecido por el dolor de sus hijas disparó contra el perro, no obstante el indicado no contaba con licencia para portar arma (Informe de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria a Miro Ruiz Delgado, 2009, Fundamento N° 04-07).

En ese contexto, el 24 de julio de 2009, la Corte Suprema de la República, procedió a solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del indicado, quien invocando su derecho de defensa, sostuvo que los móviles de tal requerimiento no sólo eran políticos sino de discriminación por su origen andino, arguyendo ello, no sólo por la celeridad con la que se ha tramitado su caso, sino también por el sensacionalismo ejercido por los medios de comunicación.

En éste caso con los votos de los Congresistas de la República, Beteta, Moyano y Lombardi, la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria denegó el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del Congresista de la República Miró Ruíz.

En el año 2012, Alejandro Yovera Flores, Congresista de la República, fue denunciado por falsa declaración en procedimiento administrativo, toda vez que consignó en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, información errónea respecto a la obtención de su título profesional y en cuanto a su condición de egresado de una Maestría en la Universidad Nacional de Piura, afirmación que fue contrariada por la universidad en mención.

Es así que, mediante el Informe del 16 de mayo de 2012, la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, recomendó aprobar el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria para el procesamiento por los delitos atribuidos contra Yovera Flores.

Posterior a ello, en sesión plenaria del 24 de mayo de 2012, el Pleno del Congreso de la República, con 102 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, aprobó el pedido, consecuentemente el Poder Judicial condenó a dos años de prisión suspendida e inhabilitación para la función pública por el mismo marco temporal, siendo esto así, el 16 de junio de 2015, se declara su vacancia del cargo de Congresista de la República, mediante Resolución N°046-2014-2015-P/CR (Congreso declara vacancia del parlamentario Alejandro Yovera, 2015, p. 1).

De otro lado, un caso controversial, tuvo como implicados a los legisladores Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo por el caso “La Centralita”, los hechos acontecieron el 13 de julio de 2011, fecha en que si bien, aún no asumían el cargo de Congresistas de la República, ellos ya habían sido electos, por lo que si les amparaba ésta garantía constitucional; ambos fueron acusados por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, receptación y violencia contra la autoridad, por impedir que un Fiscal cumpla con su función de allanamiento de una vivienda denominada como La Centralita.

El 16 de diciembre de 2014, la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la República, declaró procedente dicha solicitud y el 03 de diciembre de 2015, el Pleno del Congreso de la República, rechazó el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, con cincuenta votos a favor, veintiséis en contra y seis abstenciones (Pleno rechazó levantamiento de la inmunidad de Benítez y Crisólogo, 2015, p.1).

Finalmente, otro caso que, es necesario señalar, viene a ser el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los legisladores Luis Galarreta y Virgilio Acuña, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en el tipo penal de peculado doloso, ello por haber aprobado, cuando eran regidores de la Municipalidad de Lima, el pago de una bonificación al Alcalde de Lima, Luis Castañeda Losio, por su función como gobernador regional, la Fiscalía consideró que dicho pago fue ilegal.

No obstante la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria acordó el 08 de marzo de 2016, devolver la solicitud a la Corte Suprema, toda vez que el expediente no tenía certificación, ni estaba fedateado; luego de subsanado estos errores de forma, dicho expediente se encuentra pendiente de votación en la

referida Comisión (Pedido para levantar inmunidad a Galarreta y Acuña fue devuelto, 2016, p.1).

Llegado a este punto, es necesario recalcar que el último tema a tratar es Estado Constitucional de Derecho; sin embargo antes de desarrollar a profundidad el tema referido, es de vital importancia conocer de manera breve y precisa lo que se entiende por Estado de Derecho.

En ese contexto, cabe mencionar que el Estado Constitucional y el Estado de Derecho no solo son términos que proceden indiscutiblemente de la doctrina y la jurisprudencia constitucional sino que además éstas las acoge como parte de ellas (Rubio, 2006, p.94).

En consecuencia, éstos calificativos son admitidos y reconocidos de manera universal en las diversas culturas jurídicas, es así que nuestro Estado Peruano ha logrado insertar con éxito ambos modelos que con el pasar del tiempo han ido evolucionando dejando de ser un Estado Liberal para ser un Estado garantista donde prima evidentemente el principio de la supremacía constitucional.

Ahora bien, conociendo lo que se pretende analizar y explicar, procederemos a detallar como surge el actual modelo garantista.

Historia del Estado Constitucional de Derecho: Antecedentes, Concepto y Características.

Para Jellinek (como se citó en Doxrud, 2016, párr.7), el Estado es la unidad de asociación dotado originalmente de poderío de dominación, y formada por individuos estables en una demarcación territorial.

Del mismo modo, Posada (como se citó en Ossorio, 2004, p.382), sostiene que el Estado es una organización social instituida en un territorio propio, con fuerza para conservar en él y asignar dentro de él un poder superior de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política.

En término generales, al hablar del Estado hacemos referencia a aquella organización jurídica que a través de su autoridad ejerce su soberanía sobre un

conjunto de personas en un determinado territorio.

Resulta fundamental señalar, que el Estado se ha ido transformando desde su origen; pues en consecuencia es un concepto que siempre se ha encontrado en constante evolución asentándose en formas de organización simples como también complejas.

Desde esa perspectiva, uno de los primeros Estados que trascendió fue el Estado Monárquico o absoluto, éste último término que procede del latín absolutus (acabado, perfecto), principal modelo de gobierno en Europa durante la época moderna, caracterizado por la teórica de concentración de todo el poder del Estado en manos del monarca gobernante.

El Estado Absolutista es una forma de Estado en la que el detentador del poder lo ejerce sin dependencia o control por parte de otras instancias, superiores o inferiores (Castel, 1997, p.123).

La fundación del absolutismo representó un cambio sustancial en la concepción sobre la dependencia de las autoridades intermedias entre el súbdito y el Estado, situación que comportó la creación de una burocracia eficaz, un ejército permanente y una hacienda centralizada.

Posterior a ello, se origina el Estado de Derecho a causa del poder absoluto del príncipe. Conjunto de elementos que configuran un orden jurídico-político en el cual, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, se somete la actuación de los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución y a ley. El poder del Estado principal era el Poder Legislativo.

Posteriormente, tras la finalización de la guerra en la Europa continental, el final de este desorden de cosas sólo podía llegar si se avanzaba simultáneamente en el sometimiento de todos los poderes públicos a valores y principios absolutos.

Por lo que, este sometimiento solo podía darse si se controlaba materialmente el contenido de las normas expedidas por el legislador, siendo necesario para ello reconocer en la Constitución ya no solo como la guía suprema o la norma reguladora del procedimiento legislativo, sino una norma de naturaleza especial, capaz de sujetar materialmente en sus decisiones a los órganos del poder

legislativo, y entregar a un tribunal independiente el papel de guardián de las normas previstas en la Constitución, restableciendo con ello, de manera simultánea, la dignidad de la ley.

Así, podía prevenirse mejor el llamado gobierno de los jueces, y se sometía formal y materialmente a los legisladores a valores y principios superiores.

Por lo que surge el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, el cual hace referencia principalmente a un sistema político y económico que se encuentra orientado hacia la realización de la justicia por medio de la libertad política y la igualdad económica. Asimismo, este Estado Constitucional, Republicano – Democrático nace con cuatro elementos clave: una res pública; una ley fundamental que legitima y limita el poder estatal; una estructura basada en la división de poderes y un catálogo de derechos fundamentales (Schmitt, 1992, p.70).

Nos encontramos frente a uno de los momentos más brillantes de lo que se conoce como la “hora inaugural” del Estado constitucional; la Declaración representa, junto con la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, una suerte de acta de nacimiento del constitucionalismo (Alexy, 2008, p.125).

Según Sanchís (2003), estos conceptos sirven para designar un modelo teórico, pero también para referirse a una forma de organización política que se viene abriendo paso desde mediados del siglo XX (p.245).

Así, nuestra carta magna se transforma en la norma directiva fundamental que todo estado debe tener, frente al poder constituyente esta carta política se convierte en un texto jurídico supremo, válido, vigente y garantizado.

El resultado de esta combinación, Ferrajoli señala:

El Estado constitucional de derecho, es un nuevo modelo de derecho y democracia que es fruto de un verdadero cambio de paradigma respecto al modelo paleo-positivista del Estado legislativo de derecho y en el cual la Constitución es fuente del derecho en un triple sentido; primero, por contener normas, segundo, por disponer parámetros sustantivos para abrogar y/o invalidar normas inferiores, y tercero por entenderse que las normas constitucionales son idóneas para disciplinar directamente no solo la organización estatal y las relaciones entre el Estado y las personas, sino también las que ocurran entre estas últimas, y son por tanto susceptibles de ser aplicadas por cualquier juez y no solo por el juez constitucional (1998, p.245).

Por su parte, la Constitución irrumpe como fuente del derecho en el sentido pleno de la expresión, es decir, como la apertura inmediata de derechos y obligaciones, y no solo como fuente de las fuentes.

Ello perturba la relación Constitución-ley, pues la ley ahora opera como un mero factor de mediación entre las pretensiones constitucionales y las exigencias prácticas.

Los elementos primordiales en estas nuevas Cartas Fundamentales radican en los principios y los lineamientos que estas sostienen.

De manera similar, el Estado Constitucional tiene que ver con la constitucionalización del ordenamiento jurídico, lo cual no es más que un proceso de permeabilización de la actividad de todos los actores sociales, políticos, jurídicos y culturales, los mismos que se sujetan a los principios y las reglas de la Constitución.

Por otro lado, Cabrera (2009) menciona que las características y rasgos más resaltantes del Estado Constitucional de Derecho son:

Primero: La división de poderes, la misma que permite que ningún poder del Estado pueda tomar decisiones absolutas; Segundo: Primacía de la Constitución sobre la ley, aquí se tiene que dejar claro que si alguna ley de inferior jerarquía va en contra de los preceptos de la Constitución inmediatamente se deja sin efecto ya sea total o parcialmente; Tercero: Obediencia a la Constitución tanto de los poderes públicos como de los particulares, absolutamente todos deberán respetar indudablemente los preceptos constitucionales debiendo actuar dentro de los límites establecidos en la Carta Magna; Cuarto: La existencia de una jurisdicción total, al ser la Constitución la norma de mayor jerarquía que presenta todo Estado, es lógico que exista un Órgano que se encargue de interpretarla y protegerla por esa razón surgen los Tribunales Constitucionales aquellos que tienen como única finalidad velar por el respeto irrestricto de la Norma Suprema (párr.12).

Asimismo, cabe recalcar que si no se respeta el principio de supremacía constitucional, ni mucho menos los fundamentos que lo sustentan, siempre estaremos bajo un Estado de Derecho y jamás lograremos alcanzar el Estado idealista, ese Estado que todos desean lograr y que muy pocos lo han

conseguido, lamentablemente esto se debe a los sujetos que administran el poder.

Finalmente, si seguimos enquistados en modelos superfluos o vacíos siempre vamos a estar bajo la sombra de aquellos países que verdaderamente respetan la democracia y la igualdad entre sus habitantes.

La Neoconstitucionalización

Para conocer lo referente a éste punto, partiremos señalando que el Estado constitucional democrático se solidifica sobre los pilares de las libertades, siendo estas individuales y colectivas. Lo que está claro es que a la hora de tutelar estas libertades con ellas mismas se van consolidando garantías fundamentales, las cuales trazan los paradigmas de un Estado creado bajo aristas de libertad, orden y justicia social.

En este orden de ideas, el Estado democrático constitucional trata de ser imparcial, jugando un papel mediador entre la moral y el derecho.

Es bien sabido que esta nueva corriente llamada Neoconstitucionalismo, se debe a un proceso histórico de emancipación de los pueblos (Carrillo, 2008, p.224).

Nuestro Estado moderno se inició amparando un modelo de Estado liberal de derecho, pero teniendo inconvenientes muy notorios y de gran importancia como las desigualdades sociales, el gobierno se percató de esta situación motivo por el cual el Estado comenzó a intervenir en todos estos problemas para regular la vida en sociedad, tanto la privada como la pública pasando a convertirse en el actor de la gestión social del hombre y de la comunidad.

Por otra parte, el neoconstitucionalismo es conocido también con el nombre de constitucionalismo contemporáneo, o a veces simplemente constitucionalismo, la misma que se alude a una presunta nueva cultura jurídica, y de la cual se han identificado cuatro acepciones.

En primer lugar, el constitucionalismo puede encarnar un cierto tipo de Estado de Derecho, designando por tanto el modelo institucional de una determinada forma de organización política. El Constitucionalismo se proyecta en ocasiones en filosofía

jurídica que afecta a cuestiones conceptuales y metodológicas sobre la definición del derecho, el estatus de su conocimiento o la función del jurista; esto es, cuestiones tales como la conexión, necesaria o contingente del Derecho y de la moral, la obligación de obediencia, la neutralidad del jurista o la perspectiva adecuada para emprender una ciencia jurídica (Sanchís, 2003, p.215)

Recordemos los dos modelos y las dos ramas del derecho constitucional: la norteamericana –la que vale aclarar, creó una Constitución sin contenidos normativos– y la europea: con un denso contenido normativo pero sin dotarle garantías.

A partir de allí podríamos afirmar que el neoconstitucionalismo armoniza tales modelos y deriva como consecuencia de ello un sistema de constituciones normativas garantizadas en última instancia por el control de constitucionalidad, descansando, en forma exclusiva, en el Poder Judicial (Pozzolo, 1998, p.356).

Al respecto, Sanchís (2003, p.101) señala:

En éste ámbito conceptual el neoconstitucionalismo presenta una faz estructural, presupuesto esencial de dicho modelo, que persigue los siguientes elementos caracterizadores: 1) carácter normativo o fuerza vinculante de la constitución; 2) supremacía de la constitución dentro del sistema de fuentes; 3) eficacia o aplicación directa de la ley fundamental; 4) Garantía judicial; 5) presencia de un denso contenido normativo que tiene como destinatarios a los ciudadanos en sus relaciones con el poder y con los particulares, integrados por principios, derechos y directrices más o menos precisos, pero que siempre que resulten relevantes, llamados a ser aplicados sólo en aquéllas cuestiones concretas; 6) rigidez constitucional, esto es en cuanto a la posibilidad de alterar el texto fundamental por la mayoría legislativa, mayor fortaleza tendrá el modelo constitucional.

Asimismo, Bernal sostiene al respecto:

De la constitución considerada fundamentalmente como carta política dirigida básicamente al Parlamento, se pasa a su consideración como norma jurídica suprema y de aplicación directa, dirigida fundamentalmente a los tribunales, en especial al tribunal constitucional. Del Estado legal de Derecho se pasa al Estado Constitucional de Derecho, donde la Constitución, mucho más que la ley, se convierte en el centro de todo el sistema normativo. De la centralidad del Estado y de sus prerrogativas, se da lugar a la consideración de la persona humana y sus derechos

como ejes del sistema jurídico. De la soberanía del legislador se pasa a la palabra final a cargo de los jueces (2007, p.123).

El neoconstitucionalismo detenta un carácter parcial respecto al constitucionalismo visto como totalidad, le concierne especialmente una parte de la problemática constitucional, la relacionada con la protección de los derechos humanos.

Su meta es tanto afianzar y garantizar la vigencia de los derechos humanos, este nuevo modelo tiene un carácter marcadamente garantizador y garantista de los derechos constitucionales, pues se atiende fundamentalmente, su sistema normativo (Bernal, 2007, p.213).

Afirmaba Zagrebelsky, que:

El neoconstitucionalismo supone una modificación importante de este esquema básico del sistema de fuentes del derecho ya que, por un lado, se incorporan los Tratados Internacionales y, por el otro, el juez puede aplicar directamente la Constitución sin que sea indispensable la mediación legislativa. Es así que, el derecho se transforma en una realidad “dúctil” en manos de los jueces, abandonando así las rigideces legalistas (2008, p.142).

El neoconstitucionalismo también puede ser visto como la teoría jurídica que describe, explica, comprende las consecuencias y alienta el proceso de transformación del ordenamiento jurídico.

Con el neoconstitucionalismo se da un cambio importante en el concepto de derecho, en la teoría de la interpretación y en la metodología jurídica. Pareciera que el estudio del neoconstitucionalismo interesa más a los filósofos del Derecho y a los que se ocupan de la Teoría del Derecho, que a los propios constitucionalistas (Ferrajoli, 2011, p.223).

En suma, la Constitución, su contenido, sus principios y valores y su función jurídica y política pasan a ser el centro de la reflexión jurídica, de la Teoría General del Derecho del Neoconstitucionalismo.

Para finalizar, podemos señalar que, tanto desde el derecho constitucional, como desde la filosofía del derecho habrá que seguir de cerca la evolución de esta

nueva corriente del neoconstitucionalismo para realizar una lúcida tarea de discernimiento que potencie sus posibilidades a favor del aseguramiento de la dignidad de la persona humana y esté atento para neutralizar sus riesgos y amenazas (Ferrajoli, 2004, p.225).

Reflexión sobre el modelo garantista

El planteamiento originario deriva de la solución a ese choque que se está presentando entre una y otra norma. Claro está que la pretensión de aislamiento debe estar en manos del fallador y no del legislador para apartarse de esta, siempre y cuando éste considere que se está violando un derecho fundamental, es decir, si se considera que se está actuando contrario a la norma y con ello se vulnera la carta política (Nogueira, 2003, p.114).

La razón de ser es que el fallador goza de la facultad de buscar el camino que lleve a una decisión justa y equilibrada, entendiendo que no puede actuar con pasiones, sino con decisiones ajustadas a derecho, valiéndose de la norma indicada, de la doctrina y de la jurisprudencia.

Es por eso que la acción de tutela debe garantizar la libertad de los derechos fundamentales sin que exista la colisión de los principios. La creación de dicho juicio nace para garantizar la tutela de las libertades fundamentales de sus coasociados, pues estos emanan del poder para representarlos legalmente, el del soberano, porque fueron aquellos ciudadanos los que cedieron parte de sus derechos para que un ente desempeñara esa labor y gobierne (Moreso, 2009, p.231).

En la aplicación de los principios se debe tener en cuenta la diferencia de las reglas, entendiendo estas como normas jurídicas. La concepción de mandatos de posibilidades fácticas en la aplicación judicial del derecho.

Es decir, en la medida real de concreción, atendiendo a características de resultado y cumplimiento, teniendo condiciones de determinación, diversidad de grados y, como ya se mencionó, posibilidades fácticas y jurídicas de operatividad.

En este orden de ideas, es trascendental en la visión de principios el cambio del paradigma que el operador jurídico venía aplicando en el derecho, ya que la teoría del derecho moderna establece herramientas en el uso de la argumentación jurídica y, en el caso especial de los principios, la ponderación (Bernal, 2007, p.422).

Asemejando los unos a los otros y estando en la imposibilidad de establecer un orden jerárquico de valores, estaríamos enfrentándonos a un dilema al no poder determinar un orden de principios, pues la Constitución no nos dice de manera expresa qué principio que lleve inmerso un derecho fundamental debe anteceder al otro (Sanchís, 1998, p.111).

Es el conjunto de garantías políticas y jurisdiccionales cuyo objeto es efectivizar el modelo de Estado Constitucional de Derecho.

Según Ferrajoli (2007, p.113), este se manifiesta en las llamadas garantías negativas, que establecen límites o prohibiciones impuestos por los derechos de la libertad; garantías positivas, que son obligaciones impuestas por los derechos sociales; y las garantías secundarias que son las que tiene como finalidad el control de la supremacía constitucional.

De ello se deduce que un sistema de garantías adecuado será aquel que potencie en su mayor dimensión la tutela de los principios y valores más trascendentes del sistema jurídico en el que se inserten. Su naturaleza procesal o instrumental se basa en que sobre ella recaen bienes y objetos a los que tiene que proteger. Y es gradual, toda vez que nunca se garantiza todo o nada sino que hay grados de garantías (Pozzolo, 1998, p.365).

Por último cabe señalar que la faz instrumental descripta tiene por único objeto dotar de eficacia a lo estructural (ámbito, en el que ya se ha señalado, se determinarán las formas de producción del derecho y las sustancias constitucionales) pero nunca es posible desde lo instrumental – campo de validez – definir lo estructural (Schmitt, 1992, p.224).

La influencia de los medios de comunicación en la sociedad peruana

Vivimos un tiempo de laberinto de la información, abundante y contaminada. La opinión está presente no solamente en los artículos firmados y de opinión específicamente, sino también en los titulares, en las notas breves, en las caricaturas, etcétera. Hay que desarrollar, como en los alimentos orgánicos, una ecología de la información descontaminar y consumir la información que consideremos más pura y basada en la confianza. Esto pasa por una relación más fuerte con las firmas y las personalidades en los medios (Martínez, 2006, p.112).

Los medios de comunicación contribuyen a perfilar la identidad cultural de las personas, a modular las formas de conocer y aprender, y tienen un gran potencial que continúa creciendo.

La información actual se caracteriza por su abundancia (a pesar de que durante siglos fue escasa); por su ritmo rápido y porque su valor está cada vez más referido a la mercancía como parte de las leyes del mercado. Informar es esencialmente hacer asistir a un acontecimiento, es decir, mostrarlo, situarse a un nivel en el que el objetivo consiste en decir que la mejor manera de informarse equivale a informarse directamente. La idea del auto información se va imponiendo como parte de un sistema que incorpora la idea de que ver es comprender (Nugent, 2010, p.112).

Por ese motivo, la actualidad es básicamente lo que dice el medio de comunicación dominante. Si éste afirma que algo forma parte de la popularidad, los demás medios de comunicación lo repetirán.

Nos encontramos en un sistema que poco a poco considera que hay valores importantes (instantaneidad, masificación) y valores menos importantes, es decir menos provechosos (los criterios de verdad). La información se ha convertido ante todo en una mercancía que ya no exterioriza una función cívica.

Por ello, lo más importante en una información periodística es que esta sea confiable y creíble, es decir que contenga un mínimo de garantías, las cuales deberán estar relacionadas con la ética, la honestidad y la moral.

De tal consideración, Martínez expone:

Los medios ya no pueden mostrarse simplemente como un ojo que mira, y que no puede verse. La ciudadanía espera que los medios hagan una autocrítica, que se analicen a sí mismos. Los medios de comunicación deberían proceder a estudios más

serios sobre su propio funcionamiento, aunque sólo fuera para que todo el mundo conociera cómo trabajan y que no se resisten a la crítica. No poseen una posición privilegiada, ni existen sólo para juzgar a los demás, sino para que estos sean juzgados también y más aún cuando se cometen errores, deben ser reconocidos como tal y no ocultarse (2006, p.222).

La pérdida de la calidad provoca falta de adhesión y desconfianza en la democracia, lo cual hace a ésta aún más frágil y precaria.

Esto se hace evidente en la Encuesta recaída en el mes setiembre del 2003 respecto a la Opinión ciudadana sobre partidos políticos del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, Transparencia e Idea Internacional.

Los resultados indican que si bien un 81% prefiere un gobierno democrático a una dictadura, un 88% está poco o nada satisfecho con ella. Asimismo, más de un 80% no confía ni en los partidos políticos ni en el gobierno y un 55% tampoco confía en los medios de comunicación (Malca, 2005, p.141).

Cifras que demuestran la realidad que nos toca vivir, donde los medios de comunicación tienen como misión contribuir a la construcción de un verdadero Estado Constitucional de Derecho, hacen todo lo contrario en desmedro de éste último.

Podemos concluir señalando que, efectivamente se debe poner más énfasis en los contenidos y en el funcionamiento adecuado de los medios de comunicación, toda vez que ello contribuirá enormemente para el desarrollo sostenible de nuestra ciudadanía, así también y no menos importante, para el afianzamiento de la democracia en nuestro país.

¿Por qué es importante destacar este efecto de los medios en la vida política de las sociedades? Porque los medios son uno de los filtros fundamentales que tamizan el acceso al espacio público y, consiguientemente, a la esfera de la política. Las corporaciones, y específicamente las personas y grupos que controlan los medios —propietarios, directores y periodistas—, se configuran como una suerte de porteros —gatekeepers— del moderno espacio público (Rodríguez, 2008, p.161).

Así mismo, Martínez (2006, p.222) nos dice que, los medios de comunicación tienen éxito en fijar en la opinión pública los temas y comportamientos mediante los cuales se ha de juzgar el desempeño de las autoridades y los políticos en general. Establecen, en gran medida, la agenda y enmarcan los temas y comportamientos que serán sometidos al escrutinio y crítica pública

El seguimiento de los medios, sus agendas y encuadres, es un insumo clave para planificar estrategias y tácticas en materia democracia y en el campo de la gestión pública en general.

El rol de los partidos políticos en la elección de sus representantes

Los partidos son formas especiales de organizaciones políticas, los cuales no deben confundirse con otros grupos sociales como son los grupos de interés o las asociaciones.

Por otro lado, un partido político es un grupo de personas que buscan el control del aparato de gobierno a través de los puestos representativos en una elección llevada a cabo de forma correcta (Downs, 1997, p.241).

Los grupos políticos a través de las elecciones buscan alcanzar un puesto representativo para poder realizar el bien común, a través de las sugerencias y necesidades que les hace notar el pueblo.

Para Sartori (1999, p.229), un partido es cualquier grupo político reconocido legalmente, que participa en las elecciones y que es capaz de postular candidatos para ocupar cargos públicos a través de las elecciones.

Al respecto, Crabtree (2006, p.231) señala que las funciones de los partidos políticos consisten en articular y unificar los intereses sociales; reclutar al personal político y promover la formación de nuevos cuadros; desarrollar programas políticos; promover la socialización política y la participación ciudadana; organizar el gobierno y contribuir a la legitimidad del sistema político.

Ciertos partidos políticos enuncian en sus denominaciones los objetivos sociopolíticos con los que están primordialmente comprometidos. De esta manera dan una idea de cómo quieren ser percibidos ante los demás. Esto explica porque

las diversas tipologías de los partidos políticos no solo son un ejercicio académico, sino también una parte de la competencia política entre grupos.

Por su parte, estos partidos políticos necesitan de un enlace constante con los medios de comunicación quienes son los “guardianes” del sistema político en una democracia de medios, pues estos se encargan de construir la imagen pública de los candidatos ante la ciudadanía (Dammert, 1995, p.144).

Asimismo, el grupo o partido político debe elaborar su propio perfil estructurado y formular sus objetivos y soluciones que lo diferencien de los demás y a la vez lo mantengan a la altura de las dificultades reales de la época.

Además, el partido político debe ser capaz de ejercer y desempeñar un liderazgo propio y diferenciado. En suma, esto es la capacidad de equilibrio entre la apariencia cerrada y el diálogo polémico a lo interno del partido. La capacidad de liderazgo también incluye la selección y la promoción de los cuadros políticos.

En cambio, los miembros son la base del partido y su esencial vínculo con la sociedad. Además son votantes leales, contribuyentes económicos, fuente de nuevas ideas, activistas y potenciales candidatos a cargos públicos, en fin, son un recurso importante para los partidos. Por lo tanto, los partidos modernos y exitosos procuran tener una gran base de miembros que provengan de un estrato de grupos sociales lo más amplio posible. La fuerza de los miembros tiene un impacto directo sobre la formación de opinión política dentro del partido (Downs, 1997, p.25).

En esa línea de ideas, el rol que cumplen los partidos políticos en la elección de sus representantes debe de estar sujeto a la diligencia debida y a la responsabilidad que amerita tal función teniendo en consideración aspectos éticos, morales así como la meritocracia interna, por lo que actuar de esta forma coadyuvará a contar con personas integras en todos los aspectos y por lo tanto los políticos que nos representen van a desempeñar una función integral dirigida al de servicio de la población y no de sus intereses propios.

Conociendo esto, es vital desglosar cada una de las sub categorías de análisis que se contemplan en la investigación. Para ello, resulta conveniente establecer algunos conceptos o juicios de mayor transcendencia que utilizamos

frecuentemente en el referido estudio, entendimiento del a su vez este conjunto de términos van permitir garantizar de manera más amplia el presente trabajo.

Según Escriche (1986, p.269), la inmunidad es la libertad o exención de alguna carga, pena, impuesto, cargo, gravamen u obligación. Esta palabra se deriva del latín munus, la cual significa don o regalo [...].

La Real Academia Española nos dice que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de los parlamentarios, que los exime de ser detenidos o procesados sin autorización de la cámara a que pertenecen, salvo en los casos que estimen prudentes las leyes.

La corrupción es la utilización indebida del poder para adquirir beneficios irregulares (económicos o no) transgrediendo la ley y afectando la legitimidad de la autoridad y los derechos fundamentales de la persona (Montoya et al., 2013, p.15).

La impunidad se da cuando no existe responsabilidad penal por parte de los autores que cometen hechos delictivos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque huyen de toda investigación con miras a su procesamiento, acusación y arresto. En resumidas cuentas, es la falta de castigo ante la comisión de un ilícito (Gómez, 2011, p.42)

Según Morales (como se citó en Cordero, 2010, p. 9), el delito flagrante necesita imprescindiblemente de una evidencia sensorial; es decir presenciar el momento en el que se perpetró el actuar ilícito, de ninguna forma se considera como delito flagrante la simple presunción o sospecha.

El Congreso de la República es un órgano esencial que personifica a la Nación, está facultado para realizar las funciones legislativas, de control político, fiscalizadora, representativa y las demás que instituye la Constitución Política del Estado. Es unicameral y está compuesto por ciento treinta Congresistas. (Reglamento del Congreso, 2016, p. 7).

La garantía es una institución de Derecho Público que brinda seguridad y resguardo a favor una persona, sociedad o Estado, la misma que dispone de

medios que hacen efectivo la posesión o el goce de los derechos subjetivos frente al peligro de que sean desconocidos (Machicado, 2013, párr.1).

Irrenunciable es aquello que no se puede desistir, abandonar, declinar ni rechazar. En el ámbito jurídico se utiliza este adjetivo para definir, por ejemplo, a los Derechos Humanos, en el sentido de que éstos son irrenunciables y necesarios pues pueden disfrutarse durante toda la vida (San Martín, 1999, p.806).

En resumidas cuentas, es de renuncia imposible o prohibida.

Irreversible es lo que no se puede revocar, anular o deshacer legalmente. Se considera como aquella decisión que ante ella no existe ni cabe recurso impugnatorio alguno. Es inmodificable, y por lo tanto ejecutivo, o definitivamente denegatorio (Cabanellas, 1993, p.235).

Comisión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria como aquel grupo de trabajo que, tiene la función de procesar los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria que solicita el Poder Judicial.

La Comisión Permanente es un órgano formado por el Parlamento que tiene como finalidad cumplir las funciones de la institución cuando este está en receso parlamentario, cierre de legislatura o cualquier otra emergencia; es decir, suple al Pleno del Congreso cuando este no está en vigor.

El Recesso parlamentario es el lapso de tiempo durante el cual el Congreso interrumpe su funcionamiento integral como órgano colegiado, asumiendo cada una de sus diversas actividades que renuevan su percepción de los requerimientos sociales, y estudiando y redactando proyectos legislativos.

En suma, el receso parlamentario está vinculado al periodo de trabajo de los parlamentos y hace referencia a los momentos en los que este no se encuentra convocado y reunido la asamblea. A consecuencia de ello, la Comisión Permanente es quien asume las funciones del Congreso cuando no se está en un periodo ordinario (Centro de capacitación y estudios parlamentarios, 2013, p.13)

La democracia es el sistema en que el pueblo en su conjunto ostenta la soberanía y en uso de ella elige su forma de gobierno y, consecuentemente, sus gobernantes (Ossorio, 2006, p.287).

Desnaturalizar es disipar de una entidad sus cualidades propias, su esencia, para lo que fue creado, añadiéndole algo o modificándola.

De otro lado, respecto al marco espacial, consideramos que el lugar en el que se obtiene gran parte de los principios del conocimiento recae en el Congreso de la República del Perú por concentrarse en éste aparato institucional las prerrogativas parlamentarias que les otorga este Cuerpo Legislativo a los diferentes miembros de cada fuerza política instaurada en nuestro país.

En cuanto al marco temporal, es oportuno decir que la presente investigación tomará como punto de partida el mes de enero del 2001 a diciembre del 2016.

De otro lado, respecto al marco espacial, consideramos que el lugar en el que se obtiene gran parte de los principios del conocimiento recae en el Congreso de la República del Perú por concentrarse en éste aparato institucional las prerrogativas parlamentarias que les otorga este Cuerpo Legislativo a los diferentes miembros de cada fuerza política instaurada en nuestro país.

En cuanto al marco temporal, es oportuno decir que la presente investigación tomará como punto de partida el mes de enero del 2001 a diciembre del 2016.

Formulación del problema

Antes de proceder a precisar los conceptos que rodean a la formulación del problema de investigación, es fundamental conocer que se entiende por la palabra problema; pues a raíz del presente término se puede inferir sin duda alguna que éste es, el punto de partida de toda investigación de carácter científico.

El problema es un término que se utiliza para referirse a un asunto que no ha sido resuelto aún. De tal forma que se deberá seguir ciertos parámetros para poder encontrar una solución teórica o práctica, científica o trivial, social o individual,

cuyo único fin es resolver ya sea parcial o totalmente la incógnita que se suscitó (Cerdeña, 1991, p.139).

Además, cabe decir que gran parte de las personas que inician un proyecto de investigación no saben qué tema seleccionar o elegir, el solo hecho de tener una idea no significa que el paso de éste al planteamiento del problema llegue a ser de manera inmediata o casi automático, ya que en ocasiones se ha podido observar que el tiempo que le toma al investigador plantear el problema de investigación de manera clara y coherente es muy extenso, tardando inclusive mucho más del esperado. Todo esto dependerá de que tan familiarizado este el investigador con su tema, la dificultad misma de la idea que se presenta, la existencia o no de estudios relacionados al tema de su elección, el ánimo o la energía del investigador y las aptitudes personales de éste.

El seleccionar un tema o una idea, no pone al investigador rápidamente en una situación que le permita estimar que información deberá de recolectar, que métodos utilizará o como analizará los datos que vaya recolectando u obteniendo (Quintana, 2008, p.241)

Por otro lado, el problema o la incógnita que se haya originado deberá ser susceptible de una manifestación expresa por parte del investigador; es decir al recabarse toda la información necesaria y vital del tema esto logrará alcanzar el mayor acercamiento posible a la solución del problema originado.

Entonces, queda claro que primero debemos localizar el problema para después ejecutar los siguientes pasos que posee toda investigación de aspecto científico, cuyo éxito radica lógicamente en el desenlace de la misma.

Por ende, después de haber conocido lo que significa el término problema procederemos a exponer las ideas y conceptos que se entrecruzan entre el problema y la formulación de ésta.

Behar, concibe el problema de investigación del siguiente modo:

Es la consecuencia de una recóndita y sosiega reflexión ejecutada por el investigador después de haber estudiado tendidamente la literatura pertinente (precedentes teóricos y empíricos) e interiorizado las principales nociones y proposiciones teóricas

que le permiten proponer con toda claridad y dominio el problema que se pretende resolver con la indagación y el profundo estudio del tema seleccionado (2008, p.27).

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista, sostienen que:

La formulación del problema radica en perfeccionar y estructurar explícitamente las ideas a floradas producto de la investigación. Adicionando a lo referido, un problema correctamente planteado siempre va a estar parcialmente solucionado. Por ende, es fundamental saber y destacar que todo estudio al cierre del planteamiento debe concluir con interrogantes tanto general como específicas (2006, p.230).

Problema general

¿En qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

Problema específico 1

¿Cuál es la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos?

Problema específico 2

¿Cuáles son las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

Justificación del estudio

Se basa en proponer una explicación precisa de los argumentos por los cuales se piensa válido, apropiado e indispensable elaborar la investigación; dichos argumentos deber ser contundentes de tal manera que justifique o respalde la inversión de recursos, esfuerzos, sacrificios, y tiempo (Monje, 2011, p.68).

De manera más detallada, podemos decir que cualquier tipo de investigación que se pretenda realizar está encaminada a la solución de algún problema; de tal forma que resulta inevitable justificar o explicar los motivos que ameritan el desarrollo de la investigación.

Por tanto, la justificación viene hacer los argumentos consolidados del por qué y el para qué se debe efectuar o realizar dicha investigación; es decir, justificar una investigación consiste nada más y nada menos en exponer los motivos por los cuales es de suma importancia llevar acabo el pertinente estudio. Al respecto, cabe mencionar que la justificación del estudio presenta tres clases o tipos de justificación: teórica, metodológica y práctica. Sin embargo, no todas las investigaciones pueden requerir de los tres tipos de justificación, hay algunos estudios que solo presentarán dos clases y otros solo uno. Esto dependerá mucho de las características y cualidades de cada investigación (Bernal, 2010, p. 109).

Resulta necesario mencionar que la problemática que surge de la inmunidad parlamentaria ha sido poco analizada por la doctrina nacional, en cuanto a la relación que guarda consustancialmente con el modelo garantista. Por lo que urge una profunda investigación en torno a esta problemática, pues esta institución parlamentaria con el pasar del tiempo ha originado en la ciudadanía una sensación de repudio y malestar al pensarse que esta prerrogativa como tal, ha desencadenado una serie de obstáculos para la administración de justicia.

La población en general con sus aciertos y desaciertos exige en buena cuenta acabar con la impunidad que es pan de cada día a nivel estatal y conjunto. Para ello, en diversas ocasiones se ha puesto en debate si esta prerrogativa institucional debería seguir vigente en nuestro ordenamiento jurídico o por el contrario debería eliminarse por completo.

A ello, la falsa percepción que emiten los medios de comunicación ha originado que la población crea que esta inmunidad parlamentaria es un privilegio personal que atenta contra el derecho de igualdad ante la ley, nada más lejos de la realidad, pues esta figura no es exclusiva del parlamentario sino del Congreso.

Es por eso, que surge el interés de investigar a fondo esta prerrogativa institucional, más allá de los lo serios cuestionamientos que puedan surgir de esta garantía, es necesario indagar y conocer que tan cierto es que la inmunidad parlamentaria se ha convertido en un sinónimo de impunidad, que tan cierto es que la culpa de la inacción de los operadores de justicia se lo debemos al Congreso de la República y no tal vez a los partidos políticos, a la ciudadanía, a la prensa misma, a los sujetos que detentan el poder, al Gobierno, entre otros, que

tan cierto es que hoy en día gozamos de una Constitución Política resonante y vigorosa que muchos respetan, que tan cierto es que los candidatos a los cargos representativos son personas idóneas y preparadas para asumir la conducción de un país, si nos pasáramos exponiendo cada parte que origina una desfragmentación en el país tal vez no terminaríamos esta investigación.

Justificación Teórica: La presente investigación se ejecuta con el propósito de generar reflexión sobre los alcances que envuelven a la garantía constitucional estudiada desde una perspectiva integral al Estado Constitucional de Derecho.

Justificación Práctica: En esta investigación existe la necesidad de poner evidencia los aciertos y desaciertos de esta prerrogativa parlamentaria con la única finalidad de mejorar la legitimidad del Congreso y su imagen ante la opinión pública, pues actualmente los ciudadanos no confían en el Congreso que los representa.

Justificación Metodológica: La investigación genera un conocimiento válido y confiable porque se ha recurrido a especialistas en la materia, los mismos que nos han brindado amplias referencias sobre la concepción de esta garantía parlamentaria. Complementando a los criterios o juicios que emitieron los expertos en Derecho constitucional y Parlamentario, hemos recabado información a través de encuestas realizadas a los ciudadanos de los diferentes distritos de Lima, los mismos que manifiestan una total disconformidad con la existencia de esta institución parlamentaria.

En tal sentido, a raíz de la tergiversación de esta garantía, se justifica la imperiosa necesidad de investigar esta problemática.

Objetivos

Para Ramos y Rousseau (2011), los objetivos de la investigación constituyen los fines cognitivos que el investigador desarrollará con el propósito de contestar a las interrogantes surgidas en la investigación y así solucionar la problemática producida (p.4).

Según Herrera (como se citó en Gómez, 2012, p.28), nos manifiesta lo siguiente:

Los objetivos son guías del estudio que en el proceso de la investigación siempre estarán presentes. Asimismo, los objetivos deben ser coherentes, racionales, pertinentes y lógicos en relación con el tema, el planteamiento del problema, el objeto de la investigación, y con la formulación de los supuestos.

Objetivo general

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Objetivo específico 1

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos.

Objetivo específico 2

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Supuestos Jurídicos

Resultan ser recursos que brindan una solución al enigma del estudio. La autenticidad se comprueba mediante datos empíricos, reglas de raciocinio o en forma cualitativa. Los supuestos son presunciones acerca de características, fundamentos de un contexto determinado o problemas específicos vinculados al fenómeno que se va a investigar. Los supuestos no se representan en métodos estadísticos aunque (...) puede utilizarse para respaldar o rechazar los supuestos. Deben ser únicamente cualitativas y no cuantitativas (Romero, 2006, p.23).

Sobre los aspectos referidos, señalaremos que gran parte de los estudios que tienen o presentan un enfoque cualitativo deben de emplear los supuestos más que utilizar o disponer de las hipótesis que en su mayoría éstas son aplicadas en los estudios de tipo cuantitativos.

Supuesto general

La inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho consiste en preservar la independencia funcional del Órgano Legislativo; esta prerrogativa

estatutaria se viene empleando de manera irregular por parte de los Congresistas de la República, a tal grado de llegar a desnaturalizarse y transformarse en un medio para la impunidad, circunstancia que ha originado el debilitamiento de los cimientos del Estado Constitucional de Derecho.

Supuesto específico 1

La percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos correspondientes a los años 2001-2006, 2006-2011, 2011-20016 sobre la inmunidad parlamentaria es negativa, la sociedad en general sostiene que el Congreso de la República cubre con un manto de impunidad a los Congresistas.

Supuesto específico 2

El abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho trae como consecuencias el debilitamiento de la democracia, la impunidad, la corrupción, la afectación desmedida al sistema de justicia, la crisis de representación, la pérdida de legitimidad de la función parlamentaria y el descrédito del Congreso de la República.

II. MÉTODO

Son aquellas pautas que tienen por finalidad brindar la estabilidad y firmeza al actual conocimiento que busca integrarse al ya existente, esto quiere decir que no se trata de un manual que produce comprensión, sino por el contrario son reglas de valoración que nos permite obtener y recopilar nuevas opiniones (Sánchez, 2011, p.321).

Complementando estas líneas, se entiende por la metodología a la táctica ordenada que se continúa para establecer el significado de los hechos, situaciones y fenómenos hacia los que se encamina el interés científico para encontrar, demostrar, refutar y aportar un conocimiento (Muñoz, 1998, p.188).

2.1. Tipo de investigación

Guarda relación con la clase de análisis que se va a ejecutar. Se sitúa sobre el propósito general del estudio y sobre el modo de recolectar las informaciones o datos ineludibles (Palella y Martins, 2006, p. 97).

Es decir, la investigación tiene el propósito de dar a conocer tanto los aspectos positivos como negativos que engloba la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria en relación con el Estado Constitucional de Derecho con la finalidad de brindar las posibles soluciones al citado enigma. Asimismo, el gran aporte de los expertos en la materia hará posible un proyecto viable, sustentado y regido por conclusiones que apoyaran al conocimiento científico. Por ello, resulta fundamental establecer el tipo de investigación a emplear.

El tipo de investigación a emplear es básica, se le conoce también con el nombre de pura o fundamental, la misma que tiene como objetivo buscar el progreso científico, es decir acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles consecuencias prácticas, en pocas palabras tiene un sentido formal porque se encarga de perseguir el desarrollo de una teoría en base a principios y leyes (Alfaro, 2012, p.18).

De manera global y entendible diremos que este tipo de investigaciones tienen como propósito principal mejorar el conocimiento por sí mismo, pues la referida se encuentra orientada a la comprensión por medio de la recolección de datos.

Por otro lado, para el trabajo de investigación suscitado adoptaremos el enfoque cualitativo. En ese mismo orden, Hernández, Fernández, Baptista (2010) manifiestan que el referido enfoque emplea la recopilación de datos sin cotejo numérico con el fin de revelar o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (p.7).

Por esa razón, la investigación realizada va a recolectar y analizar la información sobre las categorías de análisis estudiadas con el propósito de llegar al entendimiento íntegro sobre la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho. Por ende, le corresponde el enfoque antes aludido.

De vital importancia, resulta necesario plasmar y definir el alcance que emplearemos en el referido estudio.

Para Bavaresco (2006, p.26), la exploración descriptiva consiste en explicar y examinar metódicamente las particularidades homogéneas de los fenómenos analizados sobre el contexto de la realidad (individuo, comunidades).

Según Best (como se citó en Tamayo, 2004, p.46), la investigación descriptiva trabaja sobre contextos de hecho, representándose básicamente por exteriorizar una exégesis acertada y apropiada.

Por otro lado, podemos manifestar que la investigación descriptiva radica en la personificación de una situación, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su organización o comportamiento (Arias, 2012, p.24).

2.2. Diseño de la investigación

Para Pérez (2009), el diseño de investigación viene a ser la etapa en el cual el estudiante señala la forma y el procedimiento operante que aplicará para reunir la información (p.22).

Sin embargo, de manera más específica resulta importante mencionar a (Quintana, 2006, p.49), cuando manifiesta que:

El diseño de la investigación es el acto que consiste en disponer de un plan flexible (o emergente, como prefieren llamarlo otros) cuyo propósito es encaminar tanto el contacto con la realidad objeto de estudio como la forma en la que se logrará obtener el

nuevo conocimiento científico. En otras palabras, vamos a contestar las interrogantes ¿Cómo se realizará la investigación? y ¿en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar?

Sabiendo esto, es necesario precisar los diseños que utilizaremos en la presente investigación.

Por un lado, tenemos a la teoría fundamentada la cual se encarga de utilizar una secuencia de instrucciones que, a través de la inducción origina una teoría explicativa de un determinado fenómeno investigado (Cuñat, 2006, p.1).

En ese orden de ideas, es necesario señalar que estos procedimientos van permitir generar una teoría profunda y reflexiva, en cuanto refiere a la utilización que se le da a la garantía de la inmunidad parlamentaria. En otras palabras, la recolección de datos que vamos a obtener a través de la información extraída de la realidad nos va a permitir generar conocimientos nuevos cuyo fin es contribuir al conocimiento científico.

Asimismo, sabiendo esto resulta de vital importancia mencionar que aunado a ello también se trabajará con análisis o estudios de casos.

En conclusión, el propósito reside en explicar la realidad actual de determinado fenómeno que se presencie en nuestra sociedad peruana pero sin modificarse. Para ello resulta indispensable conocer los alcances de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

2.3. Caracterización de sujetos

En el siguiente parámetro vamos a presentar a cada uno de los sujetos que van a intervenir en la presente investigación. Estos sujetos son conocidos con el nombre de expertos o especialistas, reciben el referido nombre pues ellos forman parte de un determinado grupo de personas que gozan de trayectoria reconocida, es decir que por medio de los diversos aportes que han brindado a la sociedad jurídica y al entorno colectivo son considerados como fuente creíble, segura y sobre todo de vital transcendencia respecto a los temas a consultar.

En consecuencia, los especialistas manejan determinados temas que guardan estrecha relación con cada categoría de análisis que se presenta en la referida investigación.

Como punto principal, decimos que las ideas, pronunciamientos y cualquier otra información que fluya por parte del especialista permitirán al investigador sustentar, avalar y afianzar cada una de las teorías presentadas con anterioridad proporcionando así una teoría científica garantizada y fiable.

Por ese motivo, la caracterización de los sujetos comprenderá a los operadores del Derecho tanto abogados especialistas en Derecho Constitucional como especialistas en Derecho Parlamentario.

Todos ellos deberán tener el grado académico de magíster o de doctor, tener en su haber publicaciones de libros reconocidos, experiencia mayor a 08 años, edad cronológica superior a los cuarenta años, y en lo posible, no es obligatorio cabe mencionar, que dicten cátedra sobre temas de su especialidad.

Tabla N° 01
Caracterización de sujetos

ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL				
VÍCTOR ÓSCAR SHIYIN GARCÍA TOMA				
PROFESIÓN/ GRADO Y ESPECIALIDAD	SEXO	TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL	CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD	LUGAR DONDE LABORA
Abogado/Magíster/ Derecho Constitucional	Masculino	<ul style="list-style-type: none"> • Bachiller y Abogado por la Universidad San Martín de Porres (1978) • Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villareal (2002). • Asesor del Fiscal de la Nación (1986-1989). • Supervisor del Proyecto de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) y el Ministerio Público (1987). • Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Presidencia (1987). • Delegado de la Comisión Presidencial (1988). • Asesor Secretario de la Junta de Fiscales Supremos (1989). • Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (1989). • Miembro del Directorio del Banco de Comercio (1989-1990). • Magistrado del Tribunal Constitucional (2002-2007). • Presidente del Tribunal Constitucional (2005-2006). • Juez Ad Hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008-2009). • Ministro de Estado en la cartera de Justicia (2010) • Socio del Buffet de Abogados: Benites, Forno & Ugaz (2011-Actualidad). 	Abogado Constitucionalista	Buffet de abogados: Benites, Forno & Ugaz

Fuente: Elaboración Propia

ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL				
RAÚL ROOSEVELT CHANAMÉ ORBE				
PROFESIÓN/ GRADO Y ESPECIALIDAD	SEXO	TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL	CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD	LUGAR DONDE LABORA
Abogado/Doctor/ Derecho Constitucional y Ciencia Política	Masculino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bachiller y Abogado por la Universidad Mayor San Marcos. ▪ Magister en Derecho Civil y Comercial. ▪ Doctor en Derecho y Ciencia Política. ▪ Postgrado en Derecho Constitucional General por la Universidad de Salamanca, España. ▪ Postgrado en Derecho Constitucional Comparado por la Universidad de Zaragoza, España. ▪ Ex Decano del Colegio de Abogados de Lima (2012-2013). ▪ Ex Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. ▪ Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política. ▪ Profesor Honorífico de la Universidad Autónoma de México. ▪ Profesor de postgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el CAEN. ▪ Consultor de la Enciclopedia Jurídica Omeba de Argentina. ▪ Investigador de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra en España. ▪ Director de la Revista Abogados. ▪ En la actualidad es Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones. 	Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones	Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Fuente: Elaboración Propia

ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL				
CÉSAR LANDA ARROYO				
PROFESIÓN/ GRADO Y ESPECIALIDAD	SEXO	TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL	CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD	LUGAR DONDE LABORA
Abogado/Doctor/ Derecho Constitucional y Ciencia Política	Masculino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares - España ▪ Posdoctorado en el Bayreuth Universität y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Alemania. ▪ Docente de Derecho Constitucional en la PUCP y en la UNMSM. ▪ Autor de Derecho Político del gobierno y de la oposición democrática; Tribunal Constitucional y Estado Democrático; Teoría del Derecho Procesal Constitucional; entre otras. ▪ En el 2003 fue nombrado Juez Ad Hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ▪ En el 2004 fue nombrado Viceministro de Justicia de la Nación. ▪ En diciembre de 2004, el Congreso de la República lo designó como Magistrado del Tribunal Constitucional ▪ Posteriormente fue elegido presidente del TC durante el periodo de diciembre de 2006-julio de 2008 ▪ Actualmente es Catedrático Principal de la PUCP 	Catedrático Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú	Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Fuente: Elaboración Propia

ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL				
GERARDO ETO CRUZ				
PROFESIÓN/ GRADO Y ESPECIALIDAD	SEXO	TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL	CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD	LUGAR DONDE LABORA
Abogado/Doctor/ Derecho Constitucional/ Derecho Público	Masculino	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bachiller por la Universidad Nacional de Trujillo (1985) ▪ Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo (1986). ▪ Doctor en Derecho Público por la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia – España ▪ Profesor Asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Trujillo. ▪ Docente de Derecho Constitucional en PUCP ▪ Docente de Derecho Procesal Constitucional en la USMP ▪ Director de la Revista Jurídica Órgano Oficial del Colegio de Abogados de La Libertad. ▪ Ex Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú (mandato asumido desde septiembre del 2007). ▪ Director General del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. ▪ Ha publicado numerosos libros y artículos científicos, entre sus libros más recientes tenemos: Bondades y defectos de la Constitución Política del Perú de 1993, Gaceta Jurídica, Lima, 2000; La Justicia Militar en el Perú, edit. Nuevo Norte, Trujillo, 2000; Introducción al Derecho Civil Constitucional, Normas Legales, Trujillo, 2000; Estudios de Derecho Constitucional, edit. Nuevo Norte, Trujillo, 2002; entre otros. 	Docente Principal de la Academia de la Magistratura	Academia de la Magistratura (AMAG)

Fuente: Elaboración Propia

ESPECIALISTA EN DERECHO PARLAMENTARIO				
CÉSAR ALFONSO DELGADO GUEMBES				
PROFESIÓN/ GRADO Y ESPECIALIDAD	SEXO	TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL	CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD	LUGAR DONDE LABORA
Abogado/Magister/ Ciencias Políticas/ Estudios de Perfeccionamiento en Derecho Parlamentario	Masculino	<ul style="list-style-type: none"> Bachiller y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado de la Maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Maestría en Ciencia Política en la Escuela de Graduados de la Universidad Católica (1997- 2005). Docente Principal de Derecho Parlamentario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dicto el curso de Seminario de Tesis (Maestría en Derecho Constitucional) – PUCP. Realizó diversos estudios de perfeccionamiento en el extranjero, entre ellos: Visita de información y estudio al Parlamento alemán (Bundestag y Bundesrat) para informarse sobre la organización parlamentaria alemana (marzo, 1992). Visita a los Congresos de los Estados Unidos de América: Washington D.C. A lo largo de su vida ha escrito numerosos libros sobre su especialidad: ¿Qué Parlamento queremos? Congreso. Procedimientos internos. Régimen de gobierno y poder presidencial. Los viajes del Presidente. La Constitución comentada, tomo 2, (obra colectiva). Prerrogativas Parlamentarias. Manual del Parlamento, entre otros. 	Jefe del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas	Congreso de la República

Fuente: Elaboración Propia

2.4. Población y muestra

Tabla N° 02
Población y Muestra

La Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho				
Población		Muestra		
Congreso de la República del Perú Centro de Lima		▪ 1	Especialista en Derecho Parlamentario	
		▪ 4	Especialistas en Derecho Constitucional	
		▪ 40	ciudadanos	

Fuente: Elaboración Propia

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Al respecto, Hernández et al. (2006) señala lo siguiente:

Después de seleccionar el diseño de investigación adecuado y el modelo conveniente (probabilística o no probabilística), de acuerdo con nuestra incógnita de estudio e hipótesis (si es que se establecieron), la subsiguiente fase consiste en reunir todos los datos oportunos sobre las características, juicios, habilidades (...) de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetos implicados en el presente estudio (p. 274).

A. Técnicas para la Recopilación de datos:

En este punto se señalará aquellos métodos a utilizar a fin de recabar los elementos informativos de convicción que coadyuvará a viabilizar la investigación, ello en aras de concretar la demostración de los supuestos planteados.

- **Análisis Documental:** Es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el

documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo (Tamayo, 2004, p.241).

- Entrevista: La entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad (Pérez, 2009, p.312).
- Encuesta: La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población (Monje, 2011, p.143).

B. Instrumentos para la Recopilación de Información:

De manera universal mencionamos que el instrumento citado reduce en cierta medida toda la labor previa de una indagación que en los criterios de selección de estas herramientas se exteriorizan y evidencian las directivas preponderantes del marco metodológico, especialmente aquellas destacadas en el sistema teórico, (variables o categorías de análisis, indicadores e hipótesis o supuestos) para el caso del paradigma empírico-analítico y los cimientos teóricos y conceptuales incorporados en este medio (Cerdeña, 1991, p. 235).

Ahora bien, una vez identificado los métodos propuestos para llevar a cabo la presente investigación, resulta necesario identificar aquellas herramientas por las cuales plasmaremos las técnicas a utilizar, en ese sentido tenemos:

- Guía de Análisis documental: Es un instrumento para el análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él contenida (Gómez, 2012, p.226).
- Guía de Entrevista: La entrevista es una técnica o instrumento de recolección de datos, que implica una pauta de interacción verbal, inmediata y personal, mediante una conversación, generalmente oral, entre dos o más

personas -dependiendo de si sea personal o grupal-, de los cuáles, una parte es el entrevistador y la otra el entrevistado, tiene como finalidad obtener información (Arias, 2012, p.111).

- Cuestionario: El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Bavaresco, 2006, p.432)

2.6. Métodos de análisis de datos

Para la presente investigación se empleará los siguientes métodos:

Método analítico: Primero vamos a fragmentar la información y para ello hemos dividido la búsqueda en dos partes: la inmunidad parlamentaria propiamente dicha y el Estado Constitucional de Derecho como factor integrador, la misma que permitirá observar sus causas, su naturaleza y sus efectos.

Asimismo, a través de la forma mencionada vamos a poder filtrar mejor la información y seleccionar la de mayor relevancia, con el único objetivo de estudiar y comprender a cabalidad el comportamiento de cada una de ellas para después establecer la relación entre ambas y formar nuevas teorías o nuevos estudios que no se han realizado preliminarmente.

Método Comparativo: Hemos recogido de los diferentes ordenamientos jurídicos las normas que contienen la prerrogativa institucional de la inmunidad parlamentaria, la misma que ha servido para comprender como es el tratamiento que se le brinda a la referida en otros países.

Método Hermenéutico: Después de haber analizado las indagaciones previas empleadas en el presente trabajo, se pasa a explicar, a traducir o interpretar a detalle la información que se obtuvo previamente, con el fin de entender lo que nos manifestaron los diversos autores, doctrinarios, expertos y jueces. En el caso de la interpretación de textos legislativos se empleara el método hermenéutico jurídico, el mismo que tiene como principal fin conocer el sentido de las leyes y la

intensión del legislador, y esto es en relación al Artículo 93º de la Constitución Política del Perú y al Artículo 16º del Reglamento del Congreso de la Republica.

Método Sintético: Después de recopilar, analizar y explicar el razonamiento impartido en los antecedentes, teorías, sentencias, casos, proyectos de ley, normativa nacional, legislación comparada, entrevistas y encuestas; se pasa a procesar todo lo recabado con el fin de construir una información solidificada, la misma que permitirá concebir conclusiones y recomendaciones breves, ordenadas y concisas con el propósito de que el lector no entre en la confusión y pueda comprender a cabalidad el tema abordado.

2.7. Tratamiento de la información: Unidades temáticas, categorías y subcategorías

Tabla N° 03
Unidades Temáticas, Categorías y Subcategorías

UNIDAD TEMÁTICA	
Inmunidad Parlamentaria	
Categoría	Subcategorías
<p>Inmunidad</p> <p>Es la libertad o exención de alguna carga impuesta u obligación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inmunidad de Arresto: Es aquella garantía que protege al Congresista para que este no pueda ser privado de su libertad, sin la antepuesta toma de conocimiento y autorización de la Cámara Legislativa. Alcanza a las detenciones generadas en los procesos civiles. ▪ Inmunidad de Proceso: Esta inmunidad de proceso ampara al representante para que no pueda ser procesado judicialmente por la vía penal. Hay que tener presente que este tipo de inmunidad solo alcanza a los procesos penales y no a los procesos civiles.

UNIDAD TEMÁTICA	
Estado Constitucional de Derecho	
Categoría	Subcategorías
<p>Estado</p> <p>Se puede definir al Estado, como el territorio que cuenta con organización jurídica para gobernar a la sociedad integrante del mismo, en pro de la convivencia, la armonía, la paz social y el bien común</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estado Monárquico o Absoluto: Tiene que ver con un cambio sustancial en la concepción sobre la dependencia de las autoridades intermedias entre el súbdito y el Estado. ▪ Estado de Derecho: Conjunto de elementos que configuran un orden jurídico-político en el cual, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, se somete la actuación de los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución y a ley. El principal poder del Estado era el Legislativo. ▪ Estado Constitucional de Derecho: Es fruto de un verdadero cambio de paradigma en el cual la Constitución es fuente del derecho en un triple sentido: primero, por contener normas, segundo, por disponer parámetros sustantivos y procedimentales para abrogar y/o invalidar normas inferiores preconstitucionales e invalidar normas posteriores que la contravengan, y tercero por entenderse que las normas constitucionales son idóneas para disciplinar directamente no solo la organización estatal y las relaciones entre el Estado y las personas, sino también las que ocurran ente estas últimas, y son por tanto susceptibles de ser aplicadas por cualquier juez y no solo por el juez constitucional.

Fuente: Elaboración Propia

2.8. Aspectos éticos

El presente trabajo de investigación cumple con todos los parámetros establecidos en el Manual Apa y en el Reglamento de Grados y Títulos, de tal forma que asevero indiscutiblemente que la referida investigación es de mi autoría.

III. RESULTADOS

En el presente capítulo se organizará y describirá, los resultados de los datos acopiados, los mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes instrumentos de recolección de datos; Guía de entrevista, cuestionario, análisis documental; dicha organización y descripción se realizará teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación.

GUÍA DE ENTREVISTA

La suscitada entrevista tiene como finalidad conocer las diversas opiniones de los expertos en Derecho Constitucional y en Derecho Parlamentario respecto al estudio realizado en la presente investigación, cuyo tema es la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Especialistas en Derecho Constitucional – Orientación Inmunidad Parlamentaria

Objetivo general

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta Nº 1: ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?

García (2017) al respecto señala que la inmunidad es una prerrogativa que tiene antecedentes medievales y que está destinada a salvaguardar la autonomía e independencia del poder legislativo de las acechanzas que pudieran presentarse de cualquier agente de carácter político o económico.

Por otro lado, Chanamé (20117) nos dice que la Inmunidad Parlamentaria, es la protección constitucional que tiene el Congresista o Parlamentario para ejercer sus funciones de fiscalización y control político sobre los Organismos del Estado. Asimismo, menciona que la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en su labor funcional, históricamente la Inmunidad Parlamentaria nace como una institución noble con el fin de garantizar que el Congresista que representa a una parte del electorado cumpla una función de fiscalización y control.

Finalmente, Landa (2017) señala que la Inmunidad Parlamentaria es un privilegio que tienen los representantes del pueblo en una democracia, a efectos de que puedan ejercer sus funciones constitucionales establecidas en la norma magna, funciones que son la de legislar, fiscalizar y representar, sin interferencias, sin acosos de los poderes distintos al Poder Legislativo y de los poderes privados.

Pregunta Nº 2: ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Como es indicado por García (2017), el principal obstáculo que hay en razón a la inmunidad en el Perú es el de que no existe en el Reglamento del Congreso un mecanismo expeditivo o rápido que permita un pronunciamiento por parte del Parlamento, que por lo general de manera deliberada, el trámite se hace moroso, es poco transparente y finalmente ya en términos subjetivos encubre una voluntad de protección, protección digamos viciosa protectora que se encubre bajo el concepto de otorongo no come otorongo.

Al respecto, Chanamé (2017) expresa que de igual manera como existe un procedimiento de investidura que recorre el tema de la elección, proclamación de alguien que se le entrega la inmunidad parlamentaria, también debe existir un procedimiento riguroso para el levantamiento de esta inmunidad, razón por la cual, en el caso se compruebe que este Congresista ha faltado al Estatuto de Representación se le pueda excepcionalmente y por tiempo determinado levantar la inmunidad con la finalidad de que el sistema judicial pueda ventilar algún tipo de controversias o casos que tenga esta persona.

Por otro lado, Landa (2017) considera que en el procedimiento de levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, hay una sensación de protección entre ellos mismos, sobre todo si son de la mayoría parlamentaria que tienen mayoría en las comisiones. Otro punto a rescatar es cuando el entrevistado manifiesta que cuando el Poder Judicial le solicita al Congreso que levanten el fuero para que puedan ser procesados, el Congreso demora, dilata y a veces ni siquiera responde o simplemente puede hasta rechazar porque consideran que puede ser una persecución, entonces a veces hay un mal entendimiento de la mayoría parlamentaria de que ninguno de sus miembros puede ser juzgados, por eso a veces son renuentes a ir al poder judicial.

Pregunta Nº 3: ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

En ese contexto, García (2017) argumenta que el poder judicial no brinda ninguna seguridad de transparencia, históricamente el poder judicial ha estado sometido o ha estado al servicio de los intereses políticamente más ocultos, entonces no es recomendable.

De manera similar, Chanamé (2017) expresa que no en nuestro país donde el poder judicial es débil, hay mucha influencia política y no es un poder autónomo como si existe en las democracias desarrolladas, en nuestro caso esto es darle una competencia a un poder que históricamente ha demostrado mucha debilidad ante la autoridad, entonces eso indudablemente no sería una garantía para el Congresista sino podría eventualmente usarse contra esta impunidad.

De manera distinta, Landa (2017) refiere que yo creo que si el poder judicial tiene un carácter independiente y neutral, es preferible (...) es cierto que en la técnica parlamentaria siempre se ha dicho que hay un principio interna corporis acta, es decir, el Parlamento tradicionalmente como un poder político, independiente y democrático ha tenido reglas para resolver sus problemas internos sin interferencia de otros poderes pero ese concepto incluso ya en Europa que es un régimen parlamentario por excelencia ante todos los países, ya ido debilitándose al punto que se permite que el Poder Judicial pueda participar pero sin que se convierta en el órgano supervisor de todas las actuaciones Parlamentarias (...), entonces el Poder Judicial en la medida que sea neutral tiene esa tarea mejor que el Parlamento; sin embargo en la medida que no sea neutral, no sería el competente.

Pregunta Nº 4: ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

Al respecto es preciso decir que García (2017) manifiesta que cada legislación expresa una situación particular y concreta. No tomo como receta a ningún país en particular; si señalaría que estamos en actitud, ya después de un tiempo bastante prudente para establecer algunas enmiendas al Reglamento y obtener de un lado la medida de salvaguarda que todo Parlamentario tiene y merece, pero por otro dar una solución práctica e impedir que esta institución sea un elemento de impunidad.

Chanamé (2017) concibe que idealmente se inclinaría por la legislación Holandesa pero eso es lo ideal, hasta que lleguemos a un nivel de desarrollo de un Estado de Derecho sólido creo que todavía nos va a tomar tiempo. Razón por la cual yo me

mantendría con la legislación que tenemos en este momento a condición de que no se cumpla pues ese adagio popular de la ley del otorongo donde jamás ante hechos evidentes se sanciona de manera imparcial aquel que sea de la mayoría o la minoría que ha transgredido el Reglamento del Congreso. No se trata a mi juicio de un problema de normas sino de un problema de aplicación.

En suma, Landa (2017) refiere que la mejor legislación es la que no existe, para el tema de la inmunidad. El tema de fondo es que hay una crisis de representatividad, porque tenemos si bien elecciones con filtros y mecanismos pero se burlan, entonces la ciudadanía termina eligiendo representantes de los cuales después los detesta, los rechaza y la credibilidad del Parlamento en la cual las encuestas de opinión que se hacen cada cierto tiempo solamente creo que un 18% a los más cree en el Parlamento.

Pregunta Nº 5: ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

García (2017) expresa que sí deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria pero no debería eliminarse, esos límites deberían de estar fijados en el Reglamento del Congreso. Lo primero es que tendría que haber un procedimiento rápido, expeditivo, célere; lo segundo es que ninguna causa que hubiese tenido como hecho o incluso con denuncia anterior al acceso al cargo, debería ser objeto de intervención parlamentaria, es decir eso debería quedar en manos enteramente del poder judicial.

Por otra parte, Chanamé (2017) considera que el Reglamento y el Estatuto ético han planteado los límites, desde mi punto de vista no es un tema normativo es un tema de aplicación. El sistema parlamentario, lamentablemente, se basa en mayorías matemáticas e históricamente en el Perú se han basado en mayorías precarias entonces un voto, dos votos tienen trascendencia en el Perú.

En otro aspecto, Landa (2017) manifiesta que bueno partiendo de que la inmunidad parlamentaria no debería existir. Límites en todo caso deberían de haber y muchos; por ejemplo, la inmunidad parlamentaria para temas de orden estrictamente político no judiciales, es decir la inmunidad parlamentaria habría que reducirla a los ámbitos de las funciones que ellos realizan, es inmune en la medida que en el debate político parlamentario hace una propuesta de ley o hay un debate.

Pregunta Nº 6: ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

García (2017) considera que el mal uso de la inmunidad va asociada con la impunidad, eso está claro.

En ese contexto, Chanamé (2017) nos dice que no necesariamente. Si hay un Congresista que fiscaliza, que controla, el tema por ejemplo la corrupción, creo que es importante que exista inmunidad, porque de lo contrario el parlamentario sería querrellado, enjuiciado, y se evitaría que el fiscalice. Debe existir la inmunidad parlamentaria para ese tipo de casos y actividades Congresales pero de ninguna manera esto debe convertirse en un Estatuto de privilegios personales para liberarse de procesos civiles, de alimentos o procesos penales que han surgido antes de su ejercicio Congresal.

Asimismo, Landa (2017) nos dice que, en algunos casos sí porque en el momento que se apela a la inmunidad no pueden ser objeto de procesamientos y tendrá que sobreseerse provisionalmente o de pronto continuar el proceso pero con figuras paralelas.

Pregunta Nº 7: ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

A su vez, García (2017) expresa que sí en efecto, la inmunidad que era una prerrogativa para salvaguardar la majestad del Congreso del cabal cumplimiento de las funciones, ha terminado siendo y convirtiéndose en una suerte de valla de acceso a la justicia para alcanzar la verdad jurídica de algunos casos.

Cabe señalar que Chanamé (2017) considera que sí, en muchos casos si, se ha desnaturalizado la inmunidad parlamentaria; cuando se ha hecho aprovechamiento, abuso de esta condición. Han habido reportajes recientes sobre un Congresista que usó la berma a su favor y lo trató de justificar en actos de fiscalización me parece pues, que esos abusos parlamentarios desnaturalizan la función Congresal y le restan toda legitimidad a los parlamentarios.

En suma, Landa (2017), concibe que por todo lo señalado con anterioridad, sí, la inmunidad parlamentaria si ha sido desnaturalizada porque han habido personas que habiendo infringido la ley o no cumpliendo los mandatos de la legislación para llegar al cargo de representantes se encumbren en la inmunidad parlamentaria cuando tienen pendientes con la justicia ya sea por negocios u obligaciones alimentarias o controversias penales inclusive apelan a la ésta prerrogativa para no cumplir con sus citaciones, entonces como quiera, los infractores de la ley parecen que han encontrado de manera no sé si individual u organizada en el Parlamento, la forma de evadir sus obligaciones. Entonces es un abuso el que se hace del derecho de los

parlamentarios, utilizando esta figura de la inmunidad, creo que se ha desvirtuado totalmente.

Pregunta Nº 8: ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

García (2017) refiere que el Estado Constitucional de Derecho plantea la tesis de una comunidad política en donde el concepto tuitividad, protección, defensa están muy marcado; defensa de los derechos ciudadanos, defensa del orden constitucional y legal. En esa perspectiva se entiende también que la inmunidad y la inviolabilidad son instrumentos para garantizar la cabal actuación del parlamento como principio rector, nos parece importante su mantenimiento, el problema es su desnaturalización por las cuchipandas parlamentarias que es otra cosa.

En ese contexto, Chanamé (2017) indica que el Estado Constitucional de Derecho nació con un Congreso potente basado en la Inmunidad Parlamentaria esa es la historia, esa es la génesis del Derecho Constitucional y Parlamentario, lamentablemente en nuestro medio se ha ido desnaturalizando crecientemente hasta afectar la propia figura de la inmunidad, por eso hay encuestas de opinión que señalan mayoritariamente que debería desaparecer ésta institución y eso se debe a que los electores han visto mal representados a sus Congresistas que han hecho abuso de la Inmunidad Parlamentaria.

Sin embargo, Landa (2017) menciona que el Estado Constitucional de Derecho se ha fundado bajo dos principios, el principio de distribución y el principio de organización. Por el principio de distribución, la libertad de las personas es ilimitada en principio, porque la ley puede regular los límites como es obvio, pero de ahí se desprende un segundo principio, que es el principio de organización que el poder del Estado se organiza y se divide en competencias técnicas para garantizar esa libertad y dentro de esas formas de organización está el principio no solamente de división de poderes sino el de control y balances de poderes. Entonces el Parlamento dicho más claramente, es uno de los garantes de la libertad de las personas porque representa la voluntad del pueblo y establece las leyes con las cuales se organiza y se ordenan el ejercicio también de las libertades y los derechos para que no haya abusos.

Pregunta Nº 9: ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Respectivamente García (2017) nos dice que la Inmunidad Parlamentaria no vulnera las bases o fundamentos del Estado Constitucional de Derecho, por el

contrario esta prerrogativa parlamentaria lo que hace es garantizar la democracia representativa.

De manera particular Chanamé (2017) refiere que la Inmunidad Parlamentaria no lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho, aquel que lo lesiona es la impunidad, por eso digo si de 130 Congresistas, al menos hay 10 Congresistas que cumplen su labor fiscalizador entonces va la Inmunidad para proteger a esos 10 Congresistas que cumplen eficientemente su labor.

Landa (2017) considera que en principio no debería ser, porque el Parlamento debe tener esas garantías de inmunidad, desde el punto de vista orgánico, es decir, la independencia, la autonomía se le da al órgano, ahora el órgano tiene miembros, esos miembros en tanto cumplan esas funciones deberían gozar de ello, pero aquí más bien se ha entendido que la inmunidad es un derecho subjetivo, un derecho individual en la medida que llego al Parlamento, lo importante es llegar al Parlamento y después ya no respeto, entonces hay que atar nuevamente esa inmunidad desde un punto de vista objetivo, es decir que esa inmunidad esta otorgada al Congreso y el Congreso la reconocerá en tanto sus miembros cumplan sus funciones pero sino no es que el Parlamentario diga yo tengo inmunidad, no, el Parlamento dirá si ha ejercido una función digamos en el marco de sus competencias y por tanto tiene inmunidad (...) entonces yo creo que es connatural pero dado el mal desarrollo que habido lamentablemente en muchos representantes parlamentarios de algunos partidos es que hoy por hoy esa inmunidad parlamentaria está afectando como un cáncer a la institución del Congreso.

Objetivo específico 1

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos.

Pregunta N° 10: ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos períodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

García (2017) en efecto considera que esto forma parte del karma con el que tiene que cargar el Congreso. El Congreso se ha visto afectado primero por la presencia masiva de los medios que hoy ocupa los debates y asuntos de interés público; lo segundo la vorágine normativa del Poder Ejecutivo; tres la presencia de los gobiernos descentralizados particularmente los gobiernos regionales que le han quitado cierta presencia política a los Congresistas; cuarto lugar el tema de la inmunidad que es un

baldón. La percepción de la opinión pública es desfavorable, si alguien dijera nuevamente disolver, disolver no tengo ninguna duda que equivocadamente la ciudadanía accedería a ello.

De modo semejante, Chanamé (2017) refiere que la percepción es negativa, si vemos la correspondencia entre la legitimidad del Congreso con los electores, es baja, empiezan en 40 % y rápidamente llegan a 20% o 10%, hoy día estamos en 30% pero estamos al inicio de la legislatura, entonces me temo que pueda ir descendiendo, creo yo que es un tema de percepción ciudadana negativa en relación al sistema parlamentario y eso debilita el sistema democrático.

Landa (2017) concibe y menciona que la Inmunidad Parlamentaria está vinculada también con la talla y el status que tiene el Parlamentario, esa talla de dirigentes ante la crisis de los partidos ya es escasa, o mínima o prácticamente inexistente, entonces la opinión pública ya no tiene esos representantes, esos señores que tenían intereses por el país desde su punto de vista pero que además tenían conocimiento, cultura, formación política, entonces hay una falta de credibilidad del representante al punto que ya los propios Parlamentarios tienen que pasar por los programas éstos de bromas, porque finalmente están a ese nivel, el nivel que ellos pueden vender al ciudadano de credibilidad es asimilándose a payasos o a payasas, o sea ese es el nivel que han llegado. Por todo lo referido, la percepción de la ciudadanía es altamente negativa situación que se refleja cada cierto tiempo en las encuestas de opinión, el 80% no cree en el Parlamento.

Objetivo específico 2

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta N° 11: ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

De acuerdo con García (2017), señala que en primer lugar se lesiona el sistema político, en segundo lugar fomenta la impunidad y en tercer lugar el Parlamento por lo general se ve entrampado o cubierto en este tipo de medidas y distrae su atención en otros temas.

De igual modo Chanamé (2017) percibe que el abuso lleva inevitablemente a la pérdida de legitimidad de la función parlamentaria, muchas de las críticas que existen en el Perú de la opinión pública es porque el sentido común achaca a que los

excesos del Parlamento se basan en que no existe un control orgánico interno del Congreso para limitar los excesos que cometen muchos Congresistas, esa es la razón por la cual se sostiene una crítica y cerca del 70% de los peruanos no se sienten solidario con el Congreso, esa es una mala señal, lo contrario es que el Congreso tenga legitimidad a la actuación.

En efecto, Landa (2017) precisa que el abuso degrada la democracia representativa porque los ciudadanos pierden credibilidad cuando ven que una Congresista que no asiste al Poder Judicial cuando lo requieren, cuando tienen deudas alimentarias, cuando no lo pueden enjuiciar, cada caso que hay en cada año hace que la ciudadanía pierda confianza en la representación y sobre todo en la democracia que es lo peor de todo.

Pregunta Nº 12: ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

García (2017), Chanamé (2017) y Landa (2017) manifiestan de cierto modo lo mismo, pues ellos consideran que los abusos de ésta prerrogativa por parte de los Congresistas vulneran indefectiblemente las bases sobre las que se asienta el Estado Constitucional de Derecho.

Especialistas en Derecho Constitucional – Orientación Inmunidad Parlamentaria y Estado Constitucional de Derecho

Objetivo general:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta Nº 1: ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?

En efecto Eto (2017), expresa que la Inmunidad es una prerrogativa, una suerte de privilegio, exención que tienen los miembros del Parlamento, del Congreso. Históricamente la Inmunidad Parlamentaria tiene un punto de origen en el Parlamento Británico en la medida en que los Parlamentarios tienen dos roles, históricamente siempre ha sido así, el de Legislar y el de Fiscalizar, justo en el ámbito de la fiscalización esas competencias les genera una serie de conflictos y potencialmente las personas involucradas en las investigaciones iniciaban sendos procesos penales de denuncias, de querellas y entonces la actividad libre del parlamentario se veía menoscaba por estos procesos penales, entonces surge históricamente esa inmunidad como una prerrogativa, o sea prerrogativa en el sentido de que es una suerte de privilegio por su condición en que él va estar investigando y los investigadores no se van a quedar con los brazos cruzados es por eso que tiene un fundamento político. Esos escenarios constituyen sus orígenes (...), en las viejas monarquías constitucionales, donde ya existía esa prerrogativa y se mantiene en el tiempo sobre eso es un poco el fundamento.

Pregunta Nº 2: ¿Podría decirme Ud. a qué se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?

Asimismo, Eto (2017) manifiesta que es un derecho fundamental que tienen en su condición de cargo (...) hace mucho tiempo hice un deslinde entre derechos fundamentales y derechos constitucionales. Hay algunos derechos constitucionales como son en este caso la condición de Parlamentario, por lo tanto en su prerrogativa de Parlamentario le asiste ese derecho, como derecho constitucional. Entonces, hay algunos derechos constitucionales que solamente lo tienen determinados funcionarios (...) derecho que le otorga la Constitución por la condición que ostenta, por lo tanto es irrenunciable ese cargo. (...) De igual forma, la Corte Suprema no puede interponer un recurso ante la denegatoria del Congreso porque el Poder Judicial tiene que ser un respetuoso de la Constitución y por lo tanto es una prerrogativa que tiene el Congreso, el Congreso tiene que cuidar a sus miembros (...) en la dinámica política

hay veces que se presenta lo que se llama choque de trenes y (...) hay veces que se presenta conflicto de competencias y atribuciones (...)

Pregunta Nº 3: ¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en los períodos de receso parlamentario y no solo en los períodos de sesiones?

No obstante, Eto (2017) expresa que es una solución de continuidad, el periodo es por cinco años, es un argumento muy pedestre muy baladí. Entonces en esta partecita (receso parlamentario), en esta rendija no, es algo absurdo. La prerrogativa se da o se ofrece por el quantum del quinquenio.

Pregunta Nº 4: ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Al respecto, Eto (2017) declara que simplemente hay todo un procedimiento, un protocolo. Cometió una conducta que puede ser una infracción o un delito, un Parlamentario, entonces se cumple con los requisitos que establece el Reglamento interno del Congreso pasa a una comisión, luego pasa a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, hay una subcomisión y el Parlamentario tiene que defenderse allí o a lo mejor él dice no tengo ningún problema levántenme (allanarse) y se le levanta, luego ya, llegado a ese status simple llanamente se somete la persona al proceso penal que está ciente de iniciarse(...) La dinámica Parlamentaria es distinta a la del Poder Judicial muchas veces se fija día y hora pero luego surge un tema prioritario y lo postergan, y a lo mejor puede postergarse por mucho tiempo y eso puede generar una falsa impresión de que están apañando, de que están protegiendo pero a la larga tiene que terminar con el procedimiento y ya la persona sometida a una investigación judicial, que se someta, pero eso no podemos calificar ni descalificar. Si alguien ha calificado que es por dilación yo diría que eso es relativo porque eso está en función a la dinámica parlamentaria.

Pregunta Nº 5: ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

A la par, Eto (2017) manifiesta que el Poder Judicial no puede ser quien dirima esa situación, porque la prerrogativa es consustancial al tema del Parlamento y no al órgano jurisdiccional.

Pregunta Nº 6: ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

De hecho, Eto (2017), refiere que no toma como referencia a ningún país en especial porque la naturaleza de la garantía institucional de la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad está expresa en las Constituciones Europeas y Latinoamericanas. Todas la Constituciones le otorgan esa inmunidad a los Parlamentarios.

Pregunta Nº 7: ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

De otro modo, Eto (2017) expresa que lo que está ocurriendo en el Perú y en América Latina, (...) en los últimos tiempos es que se está generando una política criminal de híper penalizar, híper criminalizar cualquier presunto bien jurídico tutelado, eso en doctrina se denomina populismo penal mediático, que es prácticamente un enfoque sociológico del derecho penal en mérito del cual los legisladores precisamente piensan que el derecho penal es una suerte de panacea que va a solucionar todos los problemas criminalizando todo, cuando realmente la situación es que hay que atacar la etiología, las causas. (...)

Pregunta Nº 8: ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

En suma, Eto (2017) considera que la inmunidad no conlleva a la impunidad porque el propio derecho constitucional está lleno de valores y de principios que no permiten este tipo de acaecimientos; la inmunidad es una prerrogativa que no desencadena la impunidad, si alguien realmente goza de esta prerrogativa y con el pasar del tiempo comete un latrocinio que colindan con el delito, el Parlamento le levanta el fuero constitucional y esa representante se somete a un proceso penal de manera que no puede haber impunidad, esa es otra falsa percepción que se ha venido generando.

Pregunta Nº 9: ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

En virtud a la interrogante, Eto (2017) considera que la institución esta como tal, que haya algunas personas que utilicen como una especie de blindaje es otra cosa pero el instituto como tal no está desnaturalizado.

Pregunta Nº 10: ¿Qué relación existe entre la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes?

A su vez, Eto (2017) revela que (...) El poder político en un Estado es uno solo, en el Estado hay un solo poder político lo que pasa es que ese poder político tiene diversos órganos, se dice que existen solamente tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, hoy la ciencia política dice que no, eso eran los tres poderes clásicos hoy se ha expandido a partir de la Constitucionalización del poder, a partir del CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, JNE, ONPE, RENIEC, en fin. Entonces el poder político es uno solo y cuando se habla de división de poderes significa de división de funciones que le atribuye la Constitución a cada órgano y eso solo existe en un verdadero Estado Constitucional como proclama Peter Häberle en un célebre libro que se llama justamente El Estado Constitucional que es un requisito sine qua non para que haya una democracia tiene que haber división de poderes que en realidad son división de funciones, si no hay eso entonces el ejecutivo se entromete todo y existe prácticamente una dictadura.

Pregunta Nº 11: ¿Cómo surge el Estado Constitucional de Derecho?

Para empezar, Eto (2017) exterioriza que lo que existió posterior a la Revolución Francesa fue el Estado de Derecho que es el Estado Clásico, decimonónico, dieciochesco que fue acuñado por un politólogo Robert Von Mohl pero luego en el tránsito de la posmodernidad, posterior a la Segunda Guerra Mundial para ser más específico, se produjo un cambio radicalmente Copernicano, el Estado de Derecho que había sido el Estado Gendarme dejar de hacer dejar pasar y que imperaba el principio de legalidad y que la boca de la ley eran los jueces, aquellos que sintonizaban con lo que había dicho el legislador, el Estado de Derecho, el señor del derecho era la ley, todo eso radicalmente cambia a partir de la Segunda Guerra Mundial.

En el correlativo de ideas, Eto (2017), expresa que la ley fundamental del boom o sea la Constitución Alemana de 1949 genera un nuevo cambio a partir del boom del Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional Alemán quien empieza a desarrollar nuevas fronteras de control constitucional y nuevas tutelas a los derechos fundamentales, entonces hoy los Tribunales Constitucionales, ha generado en las últimas décadas la presencia de un Estado Social y Constitucional de Derecho, lo de

Social es porque era el Estado de Bienestar en donde se cumplían los derechos fundamentales de la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales.

En términos finales, Eto (2017), concibe que hoy en términos categóricos se habla de un Estado Constitucional de Derecho que es una especie de Estado idealizado y que se debe concretar porque hay frenos y contrapesos a través de la división de los poderes, hay un órgano que controla los excesos del poder que es el Tribunal Constitucional, hay instrumentos procesales que garantizan la tutela de los derechos fundamentales, hay un fenómeno que se llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico que ha sido desarrollado por el neoconstitucionalismo en buena cuenta la presencia de una democracia real y actuante pasa no solamente porque haya elecciones formales y cronológicas cada cierto tiempo sino que haya una democracia real en donde haya también presencia de los mecanismos que yo le decía de la democracia semidirecta, en donde el pueblo participe todo eso envuelve prácticamente un Estado Social y Constitucional de Derecho que forma parte del cosmopolitismo constitucional contemporáneo.

Pregunta N° 12: ¿Qué es el Estado Constitucional de Derecho?

Asimismo, Eto (2017) declara que el Estado Constitucional de Derecho es un Estado donde se afirma la división de poderes, donde hay la vigencia de los derechos fundamentales, donde existe los mecanismos de control al poder sea vertical u horizontal, donde exista prácticamente una inclusión, donde exista políticas de servicio a las mayorías que son las políticas públicas, donde haya un multiculturalismo que consiste en incluir a los desiguales, a los marginales, que haya consultas previas, que haya igual de opciones de identidad sexual en buena cuenta que haya una democracia en donde todos participen del bienestar que da un territorio llamado Estado en donde haya libertad de pensamiento, de expresión, de ideas todo eso envuelve un Estado Constitucional, pluralismo, tolerancia, afirmación del principio Kantiano de la dignidad, yo como profesor le puedo dar una conceptualización. El Estado Constitucional es aquel Estado en donde se afirma la vigencia efectiva de la Constitución y de los derechos fundamentales, prefiero mejor enunciarle descripciones para que Ud. pueda tener un ajedrez geopolítico y le sea interesante la entrevista.

Pregunta N° 13: ¿Podría decir Ud. que tipo o modelo de Estado venimos presenciado actualmente?

Consecuentemente, Eto (2017) expresa que Peter Häberle, fue quien replanteo los escenarios de que el Estado Constitucional prácticamente es un Estado en donde la

Constitución es practicada, es internalizada, es vivida, es cuando los gobernantes como los gobernados tienen apego, se identifican a ese credo filosófico, axiológico, valorativo que es la Constitución solo así podremos decir que hay un Estado Constitucional, no puede haber un Estado Constitucional si simplemente hay poderes facticos en donde el bienestar es restringido para las grandes mayorías y simplemente una elite de empresarios gozan de los bienes y servicios. Entonces, un verdadero Estado Social y Constitucional de Derecho significa que se practique los derechos de la segunda generación que los niños tengan alimentación, que haya cultura, que haya educación, vivienda, salubridad todo eso son parte de los derechos que progresivamente deben fortalecerse en un país si no hay eso realmente se vive un Estado de Derecho nada más pero el ideal es que haya prácticamente la consolidación de que, y eso reivindico a Karl Max, la plusvalía sea repartida en términos equitativos, la riqueza sea distribuida conforme corresponda también.

Del mismo modo, Eto (2017) considera que lo que estaríamos presenciando en la actualidad sería el Estado de Derecho visto desde una perspectiva desde la Constitución Económica (...). Muchos derechos de la segunda generación, no han sido conseguidos como maná del cielo, han caído porque se ha derramado sangre, sudor y lágrima y por lo tanto esos derechos no pueden ser retrocedidos por eso es que quiero que quede claro que deberíamos vivir un Estado Social y Constitucional de Derecho pero eso no se da. Por otro lado, los ciclos históricos en la evolución de los derechos humanos son de marchas y contramarchas, o sea por ejemplo puede haber marchas a favor de los derechos humanos en este tiempo pero de repente por otras circunstancias se retrocede, no es una evolución lineal (...).

Finalmente, Eto (2017) nos dice que en el Estado Constitucional de Derecho hay un análisis diacrónico y sincrónico, el análisis sincrónico es la evolución natural cronológica de la vida pero esa no es la evolución que ocurre en el tema de la democracia, de los derechos humanos porque realmente también hay una evolución diacrónica que a veces salta y hay derechos extraordinarios que corresponden a un tiempo que no correspondían y de repente en estos momentos que son los tiempos contemporáneos hay muchos derechos que van a empezar hacer retrocedidos.

Pregunta Nº 14: ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

Eto (2017) manifiesta que ambos son consustanciales. No puede haber un Estado Constitucional de Derecho si no hay Inmunidad Parlamentaria, porque para eso existe el Parlamento. El parlamentario para que investigue tiene que tener cierto blindaje, ningún parlamentario se atrevería a denunciar absolutamente nada si no estuviera investido de esta prerrogativa. Por otro lado, Eto (2017) menciona que hay un sector

de personas que conciben la idea de que la inmunidad parlamentaria no debería de existir; a lo que él indica que si eliminan esta garantía constitucional fruto de la presión mediática, lamentablemente los congresistas al no tener esta protección institucional, cualquier persona podría tranquilamente denunciarlo, querellarlo, y lógicamente perdería el tiempo en asuntos irrelevantes en vez de estar viendo los grandes temas nacionales.

Pregunta N° 15: ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Eto (2017) expresa que por todo lo expuesto, considero que no, definitivamente no.

Objetivo específico 1

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos.

Pregunta N° 16: ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos periodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Del mismo modo, Eto (2017) manifiesta que (...) la Constitución maneja una serie de dinámicas que si se cumplieran no habría actos de corrupción, no habría situaciones de desgobierno, no habría latrocinios. Por ejemplo le pongo casos, en estos últimos tiempos habido inconductas funcionales de Alcaldes, de Gobernadores que están terminando en la cárcel pero si hay mecanismos para solucionar y prevenir eso (...). La percepción de la ciudadanía es altamente negativa ante todo esto que nos plasma la prensa (...) Todo este tipo de bodrios y situaciones negativas, no ocurriría si se cumpliera con los mecanismos que establece la Constitución.

Objetivo específico 2

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta N° 17: ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

En la misma línea, Eto (2017) manifiesta que (...) lo que puede ocurrir es que muchas personas que son parlamentarios postulan bajo el pretexto de que

cuando ya estén en una curul parlamentaria pueden hacer una dilación en algunos casos de procesos que estén siendo investigados.

Pregunta Nº 18: ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Naturalmente, Eto (2017) alega que habría que verse que Parlamentarios hacen ese abuso de la prerrogativa parlamentaria (...) si algún miembro del Parlamento tiene algún delito que enfrentar se le levanta la inmunidad y este queda sujeto a los preceptos del órgano jurisdiccional. La ciudadanía tiene una forma distorsionada de ver las cosas gracias a los medios de comunicación que generan una falsa percepción y por ende una presunta corriente de opinión de medias verdades.

Especialista en Derecho Parlamentario

Objetivo general

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta Nº 1: ¿Cómo surge la inmunidad parlamentaria?

Al respecto, Delgado (2017) manifiesta el origen histórico data de los orígenes parlamentarios. (...) el origen de la inmunidad parlamentaria está relacionado con la preservación del carácter representativo de la democracia, este carácter representativo se basa en el principio de que los ciudadanos no pueden ejercitar el poder por ellos mismos y necesitan representantes que lo hagan por él, por lo tanto deben de elegir en un proceso de entre ellos quienes van a representarlo para que se ejercite el poder en el Estado, entonces lo que la ciudadanía necesita es que el cuerpo de representantes al que se le entrega el mandato para que ejerza el poder en nombre y por cuenta de la ciudadanía tenga protegido el rol de representantes frente a cualquier tipo de perturbación de la elección que realizan los ciudadanos, entonces el bien constitucionalmente protegido es la voluntad popular de acuerdo a nuestra Constitución y a todas las Constituciones democráticas del mundo.

Pregunta Nº 2: ¿Qué es la inmunidad y en qué se fundamenta?

De tal consideración, Delgado (2017) nos dice que la inmunidad parlamentaria (...), se trata de la protección que un puesto representativo recibe a través del ordenamiento constitucional. La Inmunidad Parlamentaria por el hecho de ser una prerrogativa no debe constituirse ni entenderse como un derecho subjetivo, no hay derechos subjetivos es en todo caso si cupiese hablar de algún tipo de derecho sería un derecho funcional, es un derecho que está relacionado con el ejercicio de una función en el Estado, es la protección que recibe el ejercicio de una función estatal para que la función no quede desprotegida, el concepto radica en que es una prerrogativa porque protege el ejercicio de la función, no el derecho subjetivo por ningún individuo en particular.

En virtud al fundamento, Delgado (2017) considera que el fundamento de la existencia de la inmunidad parlamentaria radica en la protección del bien constitucional que es la voluntad popular y por lo tanto es la necesidad de que se preserve la decisión popular dentro del sufragio, ese es el objetivo de la Inmunidad Parlamentaria.

Pregunta Nº 3º: ¿Podría decirme Ud. a que se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?

En suma, Delgado (2017) declara que en realidad lo que es irrenunciable es el cargo del Congresista porque el Reglamento del Congreso sí permite que tú te allanes al levantamiento de tu inmunidad existe un momento en el que lo puedes hacer, no lo puedes hacer antes de que se inicie el proceso (...) te puedes allanar una vez que existe un proceso del levantamiento ante la Comisión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria una vez que existe, tú dices bueno yo me allano y la comisión en base a tu allanamiento elaborara un dictamen diciendo dado el allanamiento, la comisión está de acuerdo y recomienda al pleno que se le levante la inmunidad y se acabó o sea no es irrenunciable, no es irrenunciable cabe que tú te allanes y el allanamiento equivale a una suerte de renuncia de la protección del puesto.

Pregunta Nº 4: ¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista también en los periodos de receso parlamentario y no solo en los periodos de sesiones?

A su vez, Delgado (2017), menciona que de acuerdo a nuestra Constitución se extiende hasta un mes después del ejercicio del periodo constitucional, es decir te protege desde que eres elegido hasta un mes después de que haya cesado en el cargo. El representante es elegido por los 05 años, no es elegido solamente durante el periodo en el que funciona la legislatura, el receso parlamentario tampoco significa que los Congresistas dejan de desempeñar funciones representativas, si bien no hay actividades propiamente corporativas como son las sesiones de comisiones o del pleno pero los Congresistas tienen que acudir a sus circunscripciones para contactar a la población que los ha elegido para acoger sus denuncias, sus demandas, sus propuestas, etcétera.

Pregunta Nº 5: ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Delgado (2017) manifiesta que el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria no es largo, es cortísimo es una de las cosas más sumarias que pueden haber, entonces no es un problema de normas, es un problema de operadores.

Pregunta Nº 6: ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

Sin duda, Delgado (2017) nos dice que yo trato de proteger la identidad de nuestro sistema parlamentario histórico. Si nosotros lo hemos tenido y por alguna razón no funciona lo que tenemos que hacer es que funcione mejor lo que nos da nuestra identidad histórica probablemente en España, en Europa o donde sea la regulación sea diferente, la verdad yo no puedo legislar en mi país a partir de lo que hagan en otros países, yo primero tengo que ver qué cosa es lo que yo busco como país, que cosa es lo que me ha servido, que cosa es lo que yo quiero, si bien es cierto la interacción entre los países es muy grande y los niveles de emparentamiento jurídico, normativo, estructural, institucional existe y es innegable, es perfectamente válido pero primero hay que ver cuál es la causa de los problemas, no porque esté funcionando mal nuestro sistema yo voy a decir bueno como funciona mal entonces cambiémoslo por otro porque funciona bien en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda o en el Congo (...) lo más importante es ver qué cosa es lo que funciona mal en el Perú y como corrijo lo que está mal en el Perú (...).

Pregunta Nº 7: ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

Delgado (2017) concibe que a mí me parece que el Derecho Comparado puede ser muy interesante pero en realidad más me preocupa saber cómo debe funcionar el Perú, primero necesito datos, (...) yo tengo que ver cuáles son los datos y a partir de esos datos que se hagan las correcciones dentro de lo que está funcionando mal, yo soy partidario de que primero investiguemos como funciona las cosas y determinemos las causas sin tener que fijarse del costado (...) lo más importante es conocer el problema de acuerdo a su aplicación social y política en una circunstancia concreta si tiene un problema de funcionamiento hay que pensar como lo corrijo, cuál es la causa del problema para eliminar el origen y no concentrarme en el síntoma (...) tenemos que ver porque el país o las normas que tiene no funcionan correctamente, nuestro problema no se solucionan porque veamos cómo funciona la norma en otro país, en muchos casos puede funcionar muy bien porque la gente ha llegado a esa norma como consecuencia del mejor conocimiento que tienen de sí mismos, nosotros no nos conocemos lo suficiente y estamos pensando haber como lo hace el otro para copiarnos, esa es una de las alienaciones más grande que tiene nuestro país.

Pregunta Nº 8: ¿Cree Ud. que si el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se deniega, éste se convertiría en una causa de exclusión de la pena?

En virtud, Delgado (2017) manifiesta que puede ser, (...) yo debo penar solamente a quien le corresponde que se lo sancione pero si el Congreso detecta que un bien constitucional como es la voluntad popular está siendo afectado por una distorsión que introduce una persona y la Comisión del levantamiento de la inmunidad llega a la conclusión de que no existe motivo legal puro sino que hay una voluntad de distorsionar el mandato popular, el Congreso es quien tiene que tomar esa decisión, cuando se está dejando de proteger el bien que es la voluntad popular en nombre de la supuesta comisión de un delito, (...) por otro lado siempre cabe que si no ha prescrito la acción penal ni el delito cabe que se le puede iniciar el proceso una vez que ha concluido el mandato por eso es que hay que determinar también si es que dentro de nuestro sistema durante el ejercicio del mandato parlamentario existe una suerte de interrupción de la prescripción respecto de la acción penal o del delito, si se incluye dentro de nuestra legislación penal la prescripción de la acción penal o del delito mientras que se desempeña el cargo parlamentario no hay ninguna afección en absoluto al proceso jurisdiccional penal.

Pregunta Nº 9: ¿Cree Ud. que el principal obstáculo del levamiento de la inmunidad parlamentaria se debe a la carencia de mecanismos céleres?

Delgado (2017) nos dice que no, no, no a mí no me parece que los problemas de inmunidad o de impunidad tengan que ver con el Reglamento del Congreso. Si los sujetos son competentes los sujetos van a responder de acuerdo a la urgencia de los problemas que enfrentan, es más el proceso parlamentario tal como está en el Reglamento es bastante expeditivo porque los plazos son bastante corto, el problema no es que las normas no prevean un proceso corto, el problema de que quienes tienen que aplicar y ejecutar las normas no lo están haciendo, entonces como haces que el operador de la norma cumpla con la norma le creas otra norma que le dices que cumpla con la norma, o sea es absurdo no es un problema normativo es un problema de operadores, es un problema de cómo llegan al puesto representativo quienes asumen el mandato que el pueblo les da, ese es un problema diferente, ese no tiene nada que ver con la institución de la inmunidad

Asimismo, Delgado (2017) menciona que el mal uso de la inmunidad parlamentaria es un síntoma de que hay un problema más grande, ese síntoma nos está hablando de que los partidos políticos no están cumpliendo su misión ahí es donde hay que corregir el problema, no hay que eliminar la inmunidad o disminuir los niveles de

intensidad de la inmunidad parlamentaria porque eso no va a solucionar el problema si tenemos los mismos operadores

Pregunta Nº 10: Para Ud. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político?

Entre otros, Delgado (2017) nos dice que son cosas totalmente diferentes. La Inmunidad Parlamentaria es una protección del puesto representativo en relación con los presuntos delitos comunes que pudieran cometer los representantes; el antejuicio es una de las modalidades en las que se concreta la otra prerrogativa parlamentaria que es la acusación constitucional que comprende tanto el antejuicio político como el juicio político. El antejuicio es por la comisión de delitos en el ejercicio de la función y el juicio político es respecto de las infracciones constitucionales que pudieran haber realizado no solamente los Congresistas sino cualquiera de los otros altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución.

Pregunta Nº 11: ¿Cree Ud. que el Perú debería eliminar de su ordenamiento jurídico la inmunidad parlamentaria?

En particular, Delgado (2017) refiere que no. La causa está en que los partidos políticos no filtran correctamente el menú de candidatos que tenemos, ahí está el problema, eso es lo que hay que corregir, no eliminar la Inmunidad eso es una cosa totalmente periférica.

Pregunta Nº 12: ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

Delgado (2017) considera que bueno ya hay algunos límites, como que la inmunidad no protege respecto de la comisión de delitos cometidos antes de la elección por la protección respecto de procesos iniciados antes de la elección, eso ya es una limitación y eso ha sido avalado por el Tribunal Constitucional pero nuevamente esos son paliativos respecto del problema central, cómo han llegado esos personajes que han cometido delitos a hacer candidatos, quién permitió que eso ocurriera han sido los partidos, entonces el problema es cómo fortalecer los partidos para que ellos filtren mejor a ese tipo de candidatos que no mientan en su hoja de vida, que no te digan que son abogados y no han terminado primaria ese tipo de cosas, el problema está ahí, no está en que se establezcan mayores o menores limitaciones respecto de la inmunidad por más limitaciones que tú le pongas a la inmunidad sí la causa del problema subsiste, esas limitaciones no van a impedir que siga utilizándose mal la prerrogativa de la inmunidad.

Pregunta Nº 13: ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

En concreto, Delgado (2017) expresa que en sí misma no, de ninguna manera. Es como si dijéramos que la legislación a favor de las mujeres lleva a la impunidad, no lo sé, puede ser que el abuso de la mujer que está más protegida con la legislación contra el feminicidio lleve al abuso de la mujer contra el hombre también, entonces debiera eliminarse la legislación contra el feminicidio, debieran eliminarse las reglas que impiden la discriminación, debiera eliminarse las reglas relativas a las cuotas para ocupar puestos públicos porque lleva al abuso, no creo.

Pregunta Nº 14: ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

En la misma línea, Delgado (2017) concibe que desnaturalizada cuando los operadores no la utilizan correctamente, sí existen distorsiones en el uso de la inmunidad parlamentaria pero la desnaturalización es nuevamente por los operadores no es por la institución en sí misma, entonces volvemos a lo mismo si se ha desnaturalizado esto es porque los operadores lo están haciendo mal, ¿por qué los operadores lo están utilizando mal?, porque no son los operadores aptos, idóneos ni competentes para el puesto, no tienen habilidades suficientes para ocupar un puesto representativo le hacen un daño al pueblo cuando se postula un menú de candidatos que no reúnen las condiciones para emprender el puesto representativo.

Pregunta Nº 15: ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

Al respecto, Delgado (2017) menciona que para mí están indiscerniblemente unidas las dos cosas porque si el Estado Constitucional de Derecho se basa en el principio de protección de la voluntad popular y la Constitución protege la relación entre el pueblo y el mandato representativo no hay manera de que esa voluntad popular y ese mandato representativo se cumplan si no se cuentan con las condiciones de protección suficientes para el puesto representativo.

Pregunta Nº 16: ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Delgado (2017) manifiesta que no para nada, no lo creo.

Objetivo específico 1:

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos.

Pregunta Nº 17: ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos períodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Por otra parte, Delgado (2017) menciona que en general la percepción de la opinión pública es negativa. Los medios de comunicación que no conocen lo suficiente de cómo funcionan las cosas y no saben cuál es la etiología del problema generan que todo el mundo crea que a partir de lo que te dicen los medios de comunicación esa es la naturaleza de las cosas y en muchos casos coinciden porque efectivamente pues hay malos usos en el ejercicio de la función parlamentaria y tiene que dársele la razón a los medios cuando así lo denuncian pero en lo que no se le debe dar la razón es en que tiene que eliminarse la inmunidad parlamentaria por el mal uso, el mal uso es un síntoma de un problema anterior y mucho más grave que está en la raíz del sistema político que son las deficiencias en el sistema de intermediación a través de los partidos políticos.

Pregunta Nº 18: ¿Cree Ud. que existe una sensación de protección entre sus miembros parlamentarios en el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

En efecto, Delgado (2017) expresa de manera clara que eso es perfectamente posible y es más eso ocurre muy a menudo, nuestro sistema político funciona a partir del grupo parlamentario, los sujetos procesales básicos de los procesos parlamentarios son los grupos parlamentarios y entre ellos existen vínculos importantes que inhiben el ejercicio absoluto de la imparcialidad, (...) pero frente a ese mal ejercicio de las atribuciones políticas y constitucionales también existe la obligación de dejar libertad para que los actos morales se realicen sin ningún tipo de restricción, yo no puedo dejar de reconocer una prerrogativa que protege el sistema político, que protege las bases del sistema democrático en nombre del mal ejercicio que realizan las personas que protegen indebida y parcializadamente a quien no

merece que se le proteja, entonces lo que hay que hacer es corregir a los sujetos que desempeñan mal su función, ese es un problema de los operadores no es un problema de los principios a partir de los cuales se organiza el sistema político.

Objetivo específico 2:

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta Nº 19: ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

Por otra parte, Delgado (2017) exterioriza que el descrédito, o sea precisamente el mal uso de la inmunidad lleva a niveles de impunidad, lo que hace es ahondar la crisis de representación pero nuevamente eso es un síntoma de que algo está mal, el problema no es que los abusos se produzcan porque existe la inmunidad, no, lo que pasa es que la inmunidad se utiliza como una herramienta para el abuso, entonces el problema no es la herramienta que es la inmunidad, el problema son los sujetos que abusan de la herramienta, es decir los sujetos que se apoderan del poder mediante un acto de corrupción para tener un goce privado de un bien público.

Pregunta Nº 20: ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Asimismo, Delgado (2017) nos dice que ahí sí podría haber un problema porque ya no estamos hablando de la institución de la inmunidad parlamentaria sino de los usos que de la inmunidad hacen los operadores del sistema representativo, si la usan mal, están contrariando la razón de ser de la prerrogativa, entonces nuevamente es un problema de operadores, es un problema de sujetos, no es un problema de instituciones.

Tabla N° 04
Pliego de preguntas en general

ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y EN DERECHO PARLAMENTARIO		
N° P R E G U N T A S	1	¿Cómo surge la inmunidad parlamentaria?
	2	¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en que se fundamenta?
	3	¿Podría decirme Ud. a que se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?
	4	¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en los períodos de receso parlamentario y no solo en los periodos de sesiones?
	5	¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?
	6	¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?
	7	¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?
	8	¿Cree Ud. que si el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se deniega este se convertiría en una causa de exclusión de la pena?
	9	¿Cree Ud. que el principal obstáculo del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se debe a la carencia de mecanismos céleres?
	10	¿Cuál es la diferencia entre inmunidad parlamentaria y el antejuicio político?
	11	¿Cree Ud. que el Perú debería eliminar de su ordenamiento jurídico la inmunidad parlamentaria?

P R E G U N T A S	12	¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?
	13	¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?
	14	¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?
	15	¿Qué relación existe entre la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes?
	16	¿Cómo surge el Estado Constitucional de Derecho?
	17	¿Qué es el Estado Constitucional de Derecho?
	18	¿Podría decir Ud. que tipo o modelo de Estado venimos presenciado actualmente?
	19	¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?
	20	¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?
	21	¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos períodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?
	22	¿Cree Ud. que existe una sensación de protección entre sus miembros parlamentarios en el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria?
	23	¿Cuáles son las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?
	24	¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Fuente: Elaboración Propia

CUESTIONARIO

La referida encuesta se le realizó del 15 al 18 de mayo del 2017 a 40 (Cuarenta) personas, el promedio de las edades de los encuestados oscilan entre los 25 a los 65 años de edad, pertenecientes al distrito del Cercado de Lima.

Objetivo general:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta N° 1

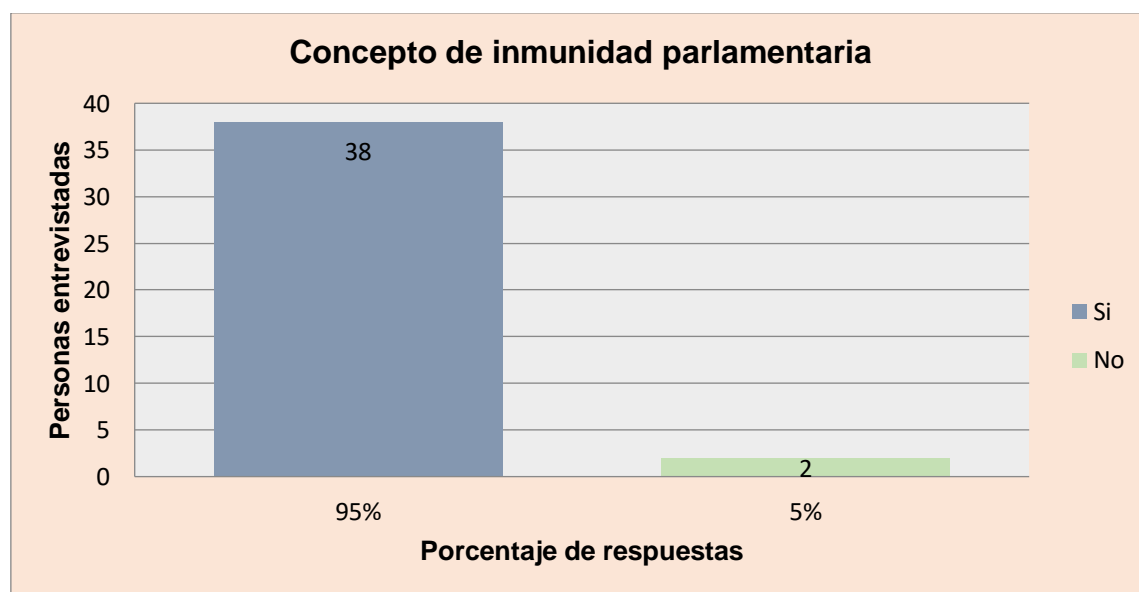
¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria consiste en proteger a los Congresistas de la República para que éstos no vayan a prisión por los delitos que cometen?

Tabla N° 05

Concepto de la inmunidad parlamentaria	Frecuencia	Porcentaje
Si	38	95,0
No	2	5,0
Total	40	100,0

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 02



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: De todas la personas encuestadas, el 95% (38) considera que la inmunidad parlamentaria consiste en proteger a los Congresistas de la República para que éstos no vayan a prisión por los delitos que cometen. Solo el 5%(2) de los encuestados señala que este concepto no define a la inmunidad parlamentaria.

Pregunta N° 2

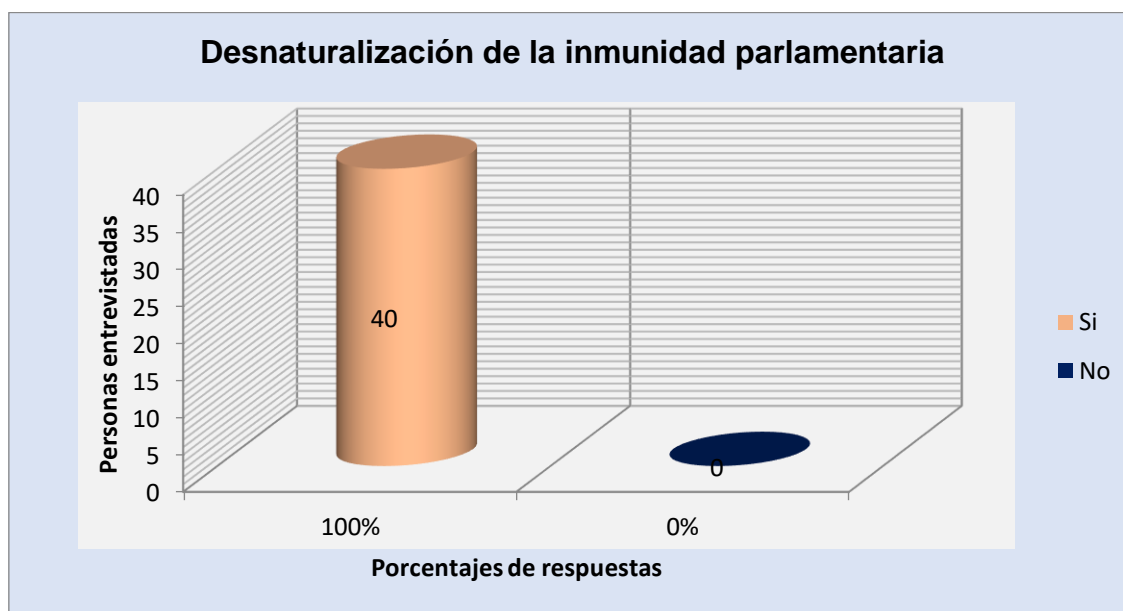
¿Considera Ud. que los Congresistas de la República han originado que la inmunidad parlamentaria se desnaturalice y pierda su verdadera finalidad para la cual fue creada?

Tabla N° 06

Desnaturalización de la inmunidad parlamentaria	Frecuencia	Porcentaje
Si	40	100
No	0	0
Total	40	100,0

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 03



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: Todos los encuestados, 100%(40), señalan que los Congresistas de la República han originado que la inmunidad parlamentaria se desnaturalice y pierda su verdadera finalidad para la cual fue creada.

Pregunta N° 3

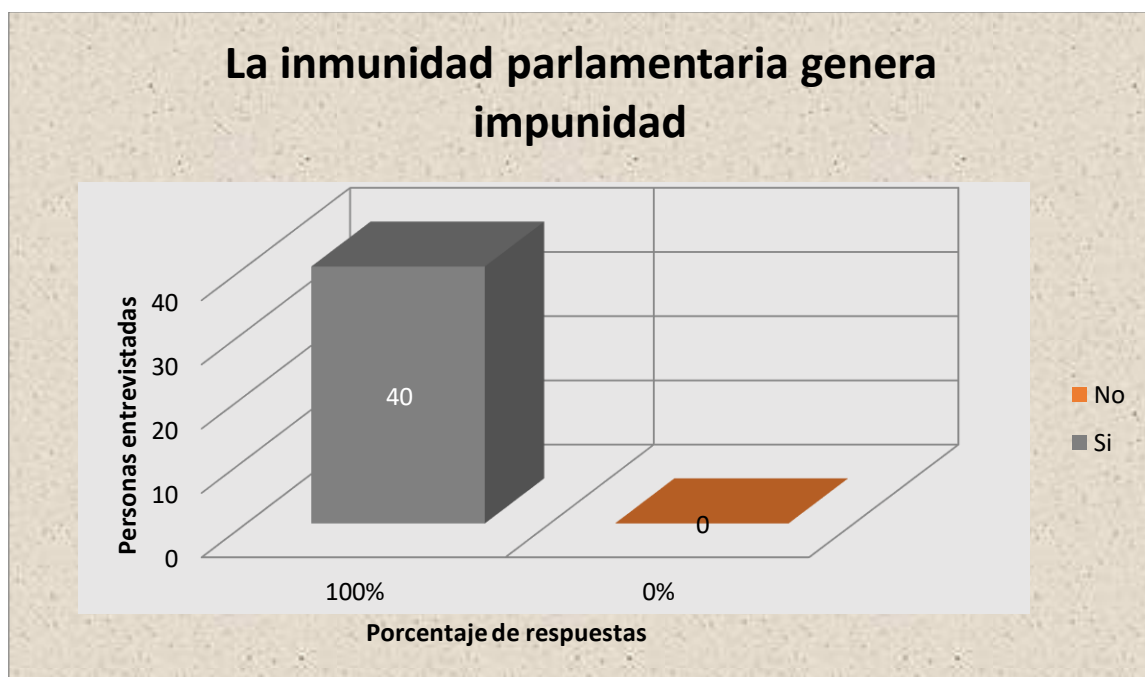
¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

Tabla N° 07

La inmunidad parlamentaria genera impunidad	Frecuencia	Porcentaje
Si	40	100
No	0	0
Total	40	100,0

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 04



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: El 100% (40) cree indefectiblemente que la Inmunidad Parlamentaria conlleva a la impunidad; es decir estas personas que fueron encuestadas sienten sin duda alguna que ésta garantía procesal esta enquistada a la impunidad.

Pregunta N° 4

¿Ud. cree que el Congreso de la República debería tomar las siguientes acciones para fortalecer sus Institucionalidad?

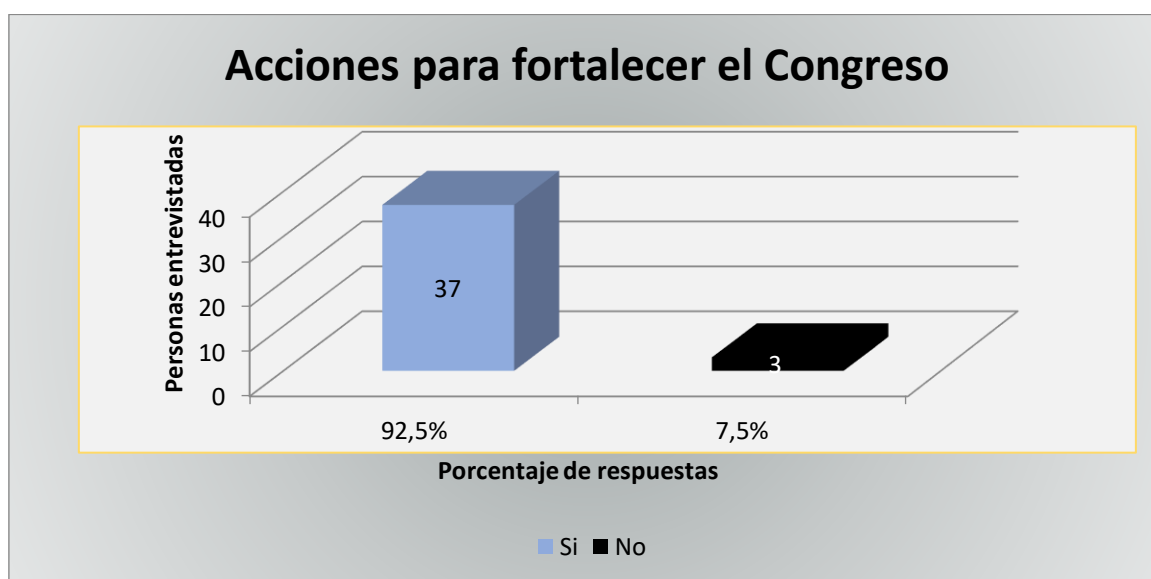
- Eliminar la reelección inmediata de los padres de la patria.
- Reformar la Constitución Política: Art.93 – Inmunidad Parlamentaria.
- Efectuar cambios al Reglamento del Congreso.
- Realizar ciertas modificaciones en la Comisión de Ética Parlamentaria.
- No permitir que personas procesadas obtengan una curul.

Tabla N° 08

Acciones para fortalecer el Congreso	Frecuencia	Porcentaje
Si	37	92,5
No	3	7,5
Total	40	100,0

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 05



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: El 92,5% (37) de los sujetos encuestados creen que el Congreso de la República debería tomar las siguientes acciones (eliminar la reelección inmediata de los padres de la patria, Reformar la Constitución Política: Art.93 – Inmunidad Parlamentaria, Efectuar cambios al Reglamento del Congreso, Realizar ciertas modificaciones en la Comisión de Ética Parlamentaria, No permitir

que personas procesadas obtengan una curul; mientras que el 7,5% (3) señalan claramente que no se debería de Reformar la Constitución Política del Perú.

Objetivo específico 1:

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos.

Pregunta N° 5

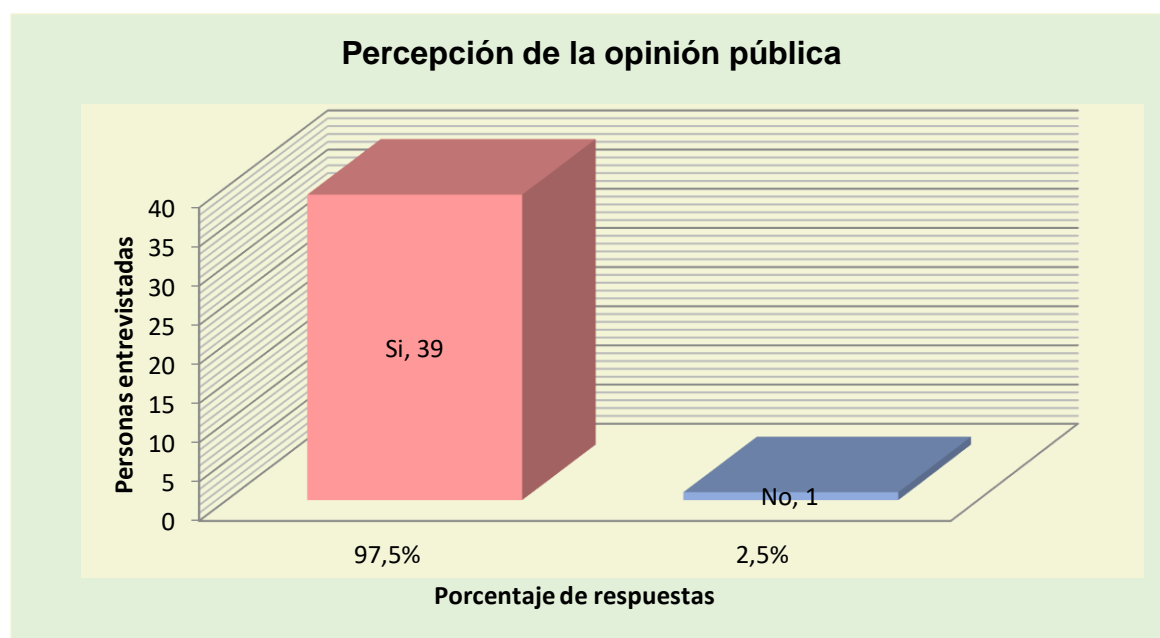
¿Siente Ud. que la percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos (2001-2016) es desfavorable gracias a que el Congreso de la República envuelve con un manto de impunidad a los Congresistas?

Tabla N° 09

Percepción de la opinión pública	Frecuencia	Porcentaje
Si	39	97,5
No	1	2,5
Total	40	100,0

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 06



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 97,5% (39) del total de las personas encuestadas estiman que la percepción de la opinión pública en estos tres últimos

períodos legislativos (2001-2016) es desfavorable gracias a que el Congreso de la República envuelve con un manto de impunidad a los Congresistas; mientras que el 2,5% (1) del resto de encuestados expresan que la percepción de la opinión pública del Congreso no resulta ser desfavorable porque éste no envuelve con un manto de impunidad a sus representantes.

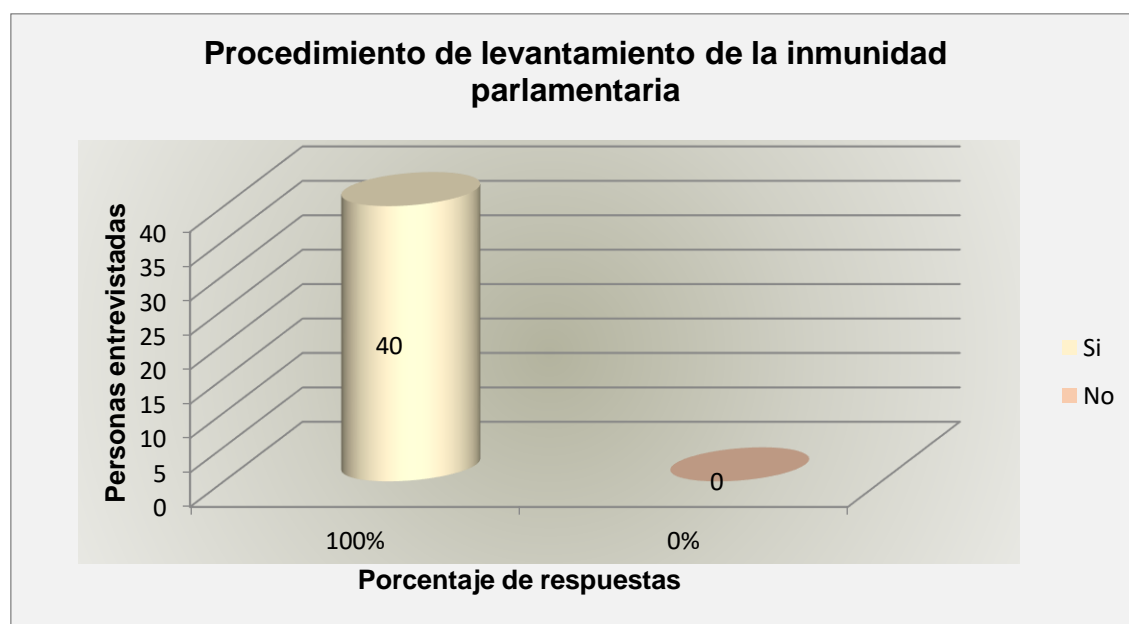
Pregunta N° 6

¿Cree Ud. que el trámite de levantamiento de la inmunidad parlamentaria es demasiado lento y poco transparente porque encubre una voluntad de protección a sus miembros?

Tabla N° 10

Procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria	Frecuencia	Porcentaje
Si	40	100,0
No	0	0
Total	40	100,0

Gráfico N° 07



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: Del citado gráfico se puede apreciar que, el 100% (40) de las personas encuestadas mencionan que el trámite de levantamiento de la

Inmunidad Parlamentaria es demasiado lento y poco transparente porque encubre una voluntad de protección a sus miembros.

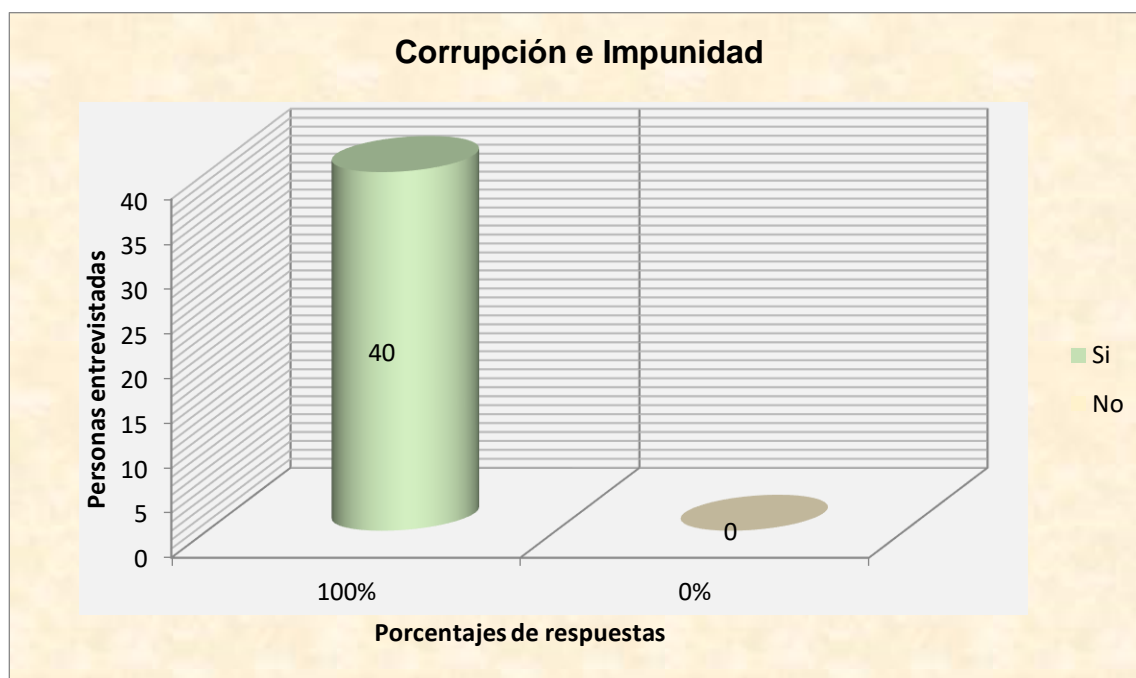
Pregunta N° 7

¿Cree Ud. que el Congreso de la República es una de las entidades que permite que la corrupción y la impunidad vayan de la mano?

Tabla N° 11

Corrupción e impunidad	Frecuencia	Porcentaje
Si	40	100,0
No	0	0
Total	40	100,0

Gráfico N° 08



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: El 100% (40) de los encuestados sienten que el Congreso de la República es una de las entidades que permite que la corrupción y la impunidad vayan de la mano.

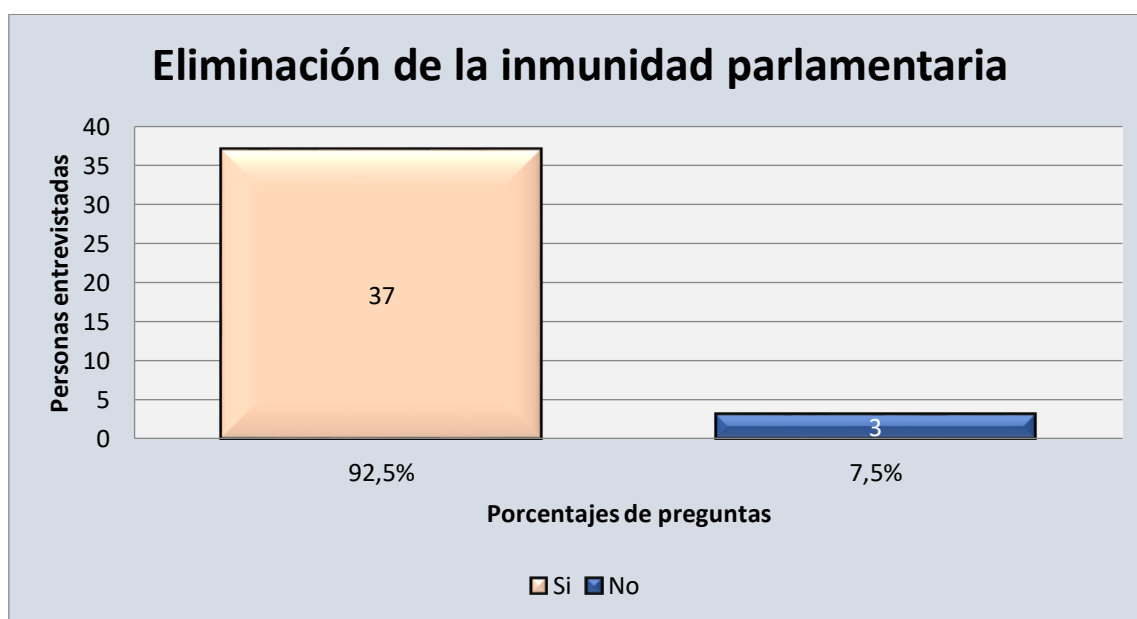
Pregunta N° 8

¿Cree Ud. que se debería eliminar la inmunidad parlamentaria de nuestro ordenamiento jurídico?

Tabla N° 12

Eliminación de la inmunidad parlamentaria	Frecuencia	Porcentaje
Si	37	92,5
No	3	7,5
Total	40	100,0

GRÁFICO N° 09



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar que la mayoría de encuestados, que viene hacer el 92,5% (37), consideran necesario que la inmunidad parlamentaria se elimine por completo de nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo 7,5% (3) menciona que la prerrogativa parlamentaria antes referida no debe eliminarse bajo ningún contexto.

Objetivo específico 2:

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Pregunta N° 09

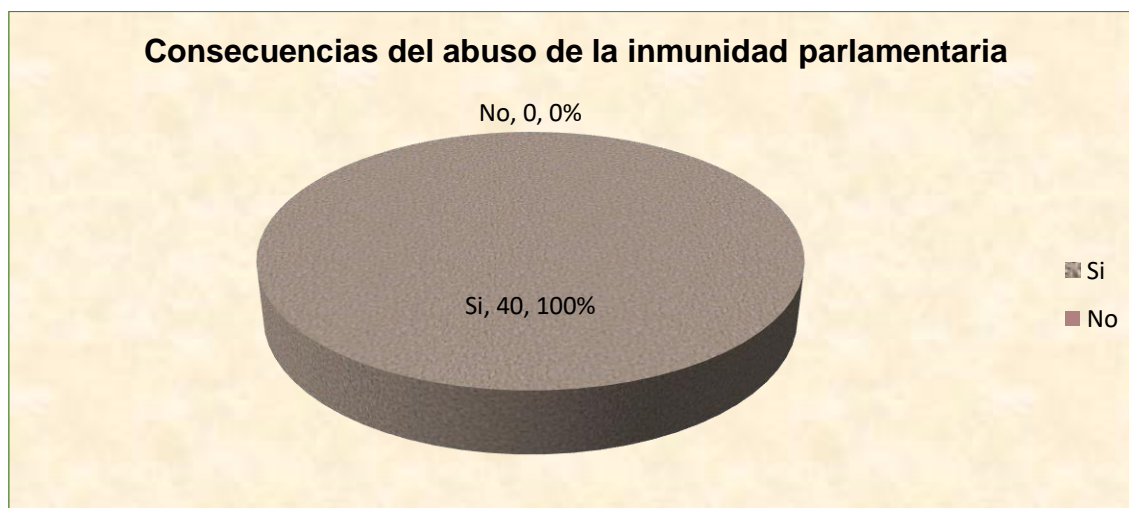
¿Cree Ud. que el abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho produce las siguientes consecuencias?

- Debilitamiento de la democracia
- Presencia de la corrupción
- Impunidad
- Daño desmedido al sistema de justicia
- Pérdida de legitimidad
- Imagen del Congreso de la República seriamente afectada.

Tabla N° 13

Consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria	Frecuencia	Porcentaje
Si	40	100,0
No	0	0
Total	40	100,0

Gráfico N° 10



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: El 100% (40) de los encuestados refieren que el abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho produce las siguientes consecuencias: Debilitamiento de la democracia, Presencia de la

corrupción, Impunidad, Daño desmedido al sistema de justicia, Pérdida de legitimidad e Imagen del Congreso de la República seriamente afectada.

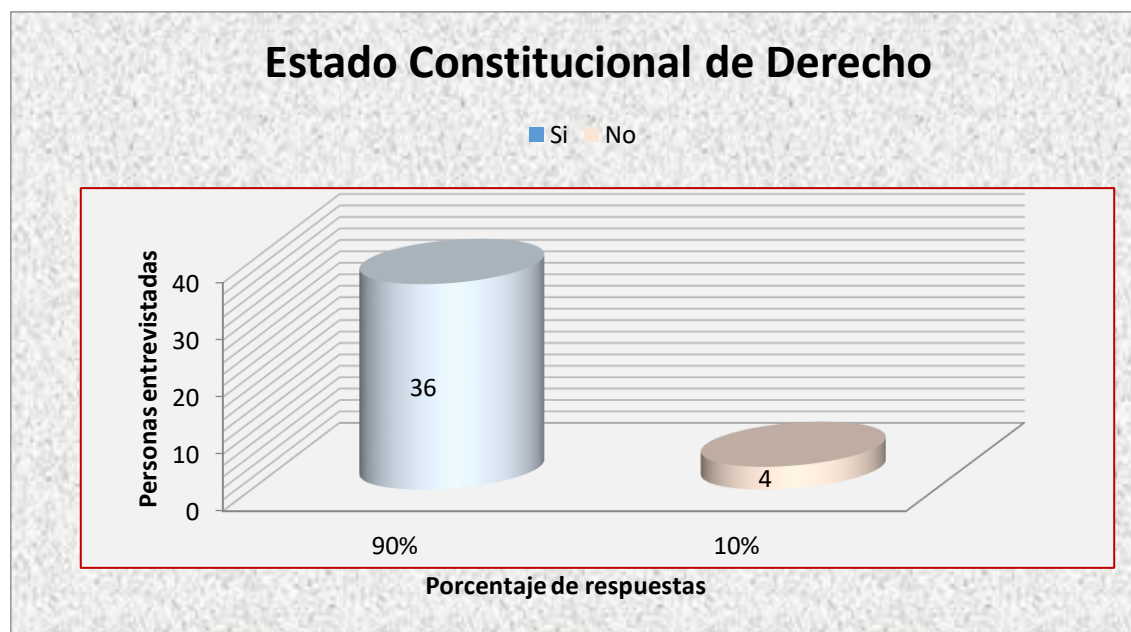
Pregunta N° 10

¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República lesionan los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Tabla N° 14

Estado Constitucional de Derecho	Frecuencia	Porcentaje
Si	36	90%
No	4	10%
Total	40	100,0

Gráfico N° 11



Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN: De todos los encuestados, el 90% (36) estima que el abuso de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas lesionan los cimientos del Estado Constitucional de Derecho. Por el contrario, el 10% considera que ésta prerrogativa no daña los cimientos del modelo democrático antes referido.

Tabla Nº 15
Organización de preguntas y respuestas

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS	TOTAL	
			Nº	%
1	¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria protege a los Congresistas de la República para que éstos no vayan a prisión por los delitos que cometen?	a) Si	38	95
		b) No	2	5
2	¿Considera Ud. que los Congresistas de la República han originado que la inmunidad parlamentaria se desnaturalice y pierda su verdadera finalidad para la cual fue creada?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
3	¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
4	¿Ud. cree que el Congreso de la República debería tomar las siguientes acciones para fortalecer sus Institucionalidad? - Eliminar la reelección inmediata de los padres de la patria. - Reformar la Constitución Política: Art.93 – Inmunidad Parlamentaria. - Efectuar cambios al Reglamento del Congreso. - Realizar ciertas modificaciones en la Comisión de Ética Parlamentaria. - No permitir que personas procesadas obtengan una curul.	a) Si	37	92.5
		b) No	3	7.5
5	¿Siente Ud. que la percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos (2001-2016) es desfavorable gracias a que el Congreso de la República envuelve con un manto de impunidad a los Congresistas?	a) Si	39	97.5
		b) No	1	2.5

6	¿Cree Ud. que el trámite del levantamiento de la inmunidad parlamentaria es demasiado lento y poco transparente porque encubre una voluntad de protección a sus miembros?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
7	¿Cree Ud. que el Congreso de la República es una de las entidades que permite que la corrupción y la impunidad vayan de la mano?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
8	¿Cree Ud. que se debería eliminar la inmunidad parlamentaria de nuestro ordenamiento jurídico?	a) Si	37	92.5
		b) No	3	7.5
9	<p>¿Cree Ud. que el abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho produce las siguientes consecuencias?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debilitamiento de la democracia - Presencia de la corrupción - Impunidad - Daño desmedido al sistema de justicia - Pérdida de legitimidad - Imagen del Congreso de la República seriamente afectada. 	a) Si	40	100
		b) No	0	0
10	¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República lesionan los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?	a) Si	36	90
		b) No	4	10

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 16
Resumen de respuestas

[illegible]

Fuente: Elaboración Propia

Análisis Normativo

▪ Código Penal – Artículo 84º

Objetivo general

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

El artículo 84º del Código penal menciona que si el inicio o la continuidad del proceso penal obedecen a cualquier asunto que deba solucionarse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel haya finalizado.

En virtud a ello, es imprescindible manifestar que esta norma es aplicable indiscutiblemente a los Congresistas, es decir mientras no se produzca un decisión en cuanto al levantamiento del fuero parlamentario o de ser así recaiga en la no autorización, el proceso penal deberá suspenderse temporalmente hasta que la prerrogativa de proceso haya finalizado, esto se da cuando termine el periodo legislativo para el cual fue elegido.

Cabe aclarar que el tiempo que haya podido pasar desde el momento en el que se solicitó el levantamiento del fuero parlamentario hasta la fecha en el que concluyó el periodo legislativo, no se contabiliza para el cómputo de plazo de la prescripción de un ilícito penal.

Objetivo específico 1:

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos.

Con el referido artículo que se encuentra establecido en el Código Penal, la ciudadanía en general debería de estar más sosegada, pues la inmunidad parlamentaria no se concibe más con el término de impunidad, porque una vez que el Congresista termina su mandato parlamentario el proceso penal que se encontraba suspendido inmediatamente retoma su curso.

En suma, el Congresista deberá de responder por los delitos que haya cometido cuando termine su mandato representativo.

Objetivo específico 2:

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

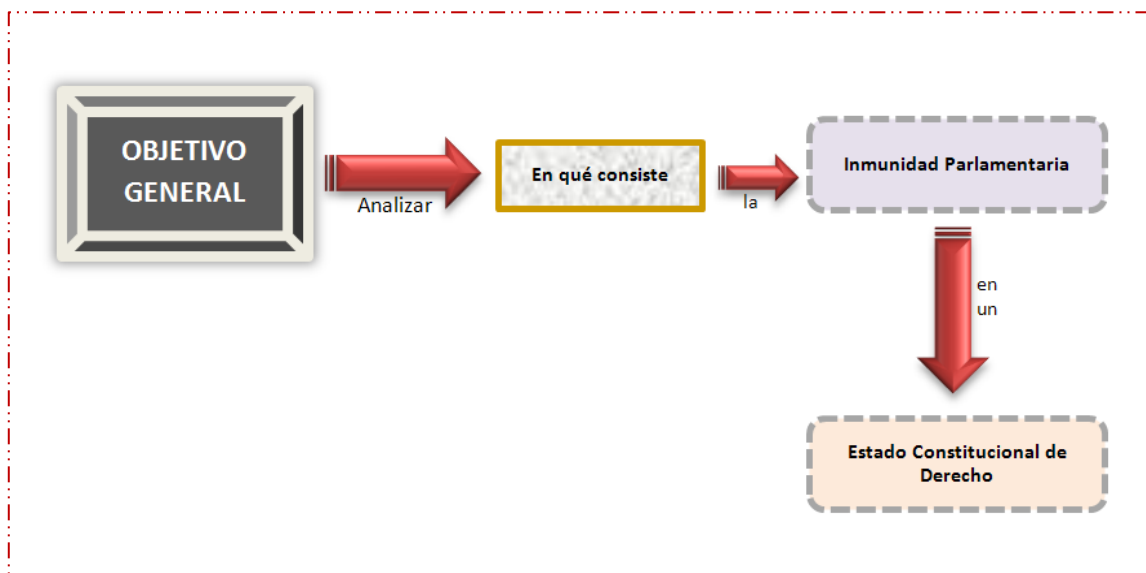
Si el Parlamentario es reelegido, se puede encausar una solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria al Congreso de la República, y este nuevo periodo legislativo conformado por otros representantes parlamentarios pueden autorizar el levantamiento o desestimarlos, dependiendo de la respuesta que la Cámara Legislativa le brinde a la Corte Suprema se podrá tomar las medidas necesarias; en el caso de que no se conceda la autorización, el proceso penal se suspende una vez más hasta que el representante popular termine su mandato para el cual fue electo

Finalmente, cabe expresar que gran parte de los doctrinarios consideran que si el parlamentario es reelegido una y otra vez se puede llegar a una impunidad absoluta.

IV. DISCUSIÓN

En este capítulo se comprobarán los objetivos y los supuestos del tema de investigación; esto se realizará a través de la contrastación entre los datos obtenidos, y los instrumentos con los antecedentes y el marco teórico, para ello se elaboran los siguientes cuadros y explicaciones.

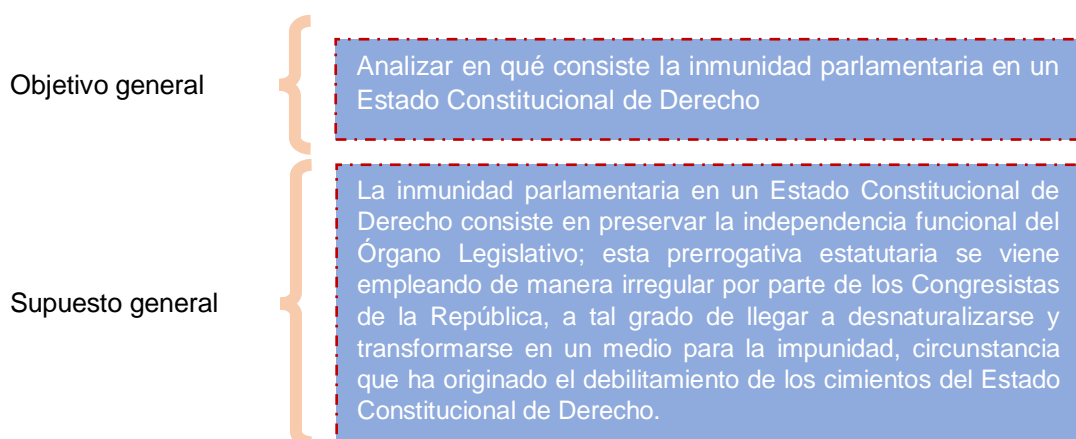
Gráfico N° 12 Objetivo general



Fuente: Elaboración Propia del Autor

En el grafico se observa el Objetivo General para luego ver si se llegó a cumplir cada objetivo y supuesto planteado en la presente investigación de tesis, a través de las entrevistas:

Gráfico N° 13 Objetivo general y Supuesto general



Fuente: Elaboración propia

Discusión

De los datos obtenidos en la presente investigación, se ha logrado comprobar el objetivo y el supuesto planteado; para mayor entendimiento se dividirá en tres partes las cuales se plasmarán de la siguiente manera.

En relacion a lo referente con la prerrogativa institucional de la inmunidad parlamentaria; el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, respecto a cómo surge la inmunidad parlamentaria, menciona que ***el origen de esta institución está relacionado con la preservación del carácter representativo de la democracia***, este carácter representativo se basa en el principio de que los ciudadanos no pueden ejercitar el poder por ellos mismos y necesitan representantes que lo hagan por él.

Por otra parte, respecto a qué es la inmunidad parlamentaria y en que se fundamenta, los especialistas de manera correlativa manifiestan lo siguiente:

Para el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, ***la inmunidad es una prerrogativa que tiene antecedentes medievales y que está destinada a salvaguardar la autonomía e independencia del poder legislativo*** de las acechanzas que pudieran presentarse de cualquier agente de carácter político o económico.

De modo semejante, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones, manifestó sin duda alguna que ***la inmunidad parlamentaria, es la protección constitucional que tiene el Congresista o Parlamentario para ejercer sus funciones de fiscalización y control político sobre los Organismos del Estado.***

Además, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, citó que ***la inmunidad parlamentaria es un privilegio que tienen los representantes del pueblo en una democracia***, a efectos de que puedan ejercer sus funciones constitucionales establecidas en la norma magna, funciones que son la de legislar, fiscalizar y

representar, sin interferencias, sin acosos de los poderes distintos al Poder Legislativo y de los poderes privados.

En cuanto a, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura, reveló que **la inmunidad es una suerte de privilegio, exención que tienen los miembros del Parlamento**, del Congreso. Históricamente la Inmunidad Parlamentaria tiene un punto de origen en el Parlamento Británico.

En este punto, cabe mencionar que discrepo con las palabras emitidas por (Landa) y (Eto) pues la inmunidad parlamentaria no es un privilegio, es un mecanismo constitucional que el Congreso de la República le otorga a sus representantes en razón al cargo representativo que ostentan con el unico fin de resguardar la independencia funcional del Parlamento, no debe ser considerado como un privilegio porque esta garantía institucional no le pertenece al Congresista sino a la Cámara Legislativa.

Por su parte, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, indicó que **la inmunidad parlamentaria se trata de la protección que un puesto representativo recibe a través del ordenamiento constitucional**. La inmunidad parlamentaria por el hecho de ser una prerrogativa no debe constituirse ni entenderse como un derecho subjetivo, es en todo caso si cupiese hablar de algún tipo de derecho sería un derecho funcional.

Asimismo, considera que el fundamento de la existencia de la inmunidad parlamentaria radica en la protección del bien constitucional que es la voluntad popular y por lo tanto es la necesidad de que se preserve la decisión popular dentro del sufragio, ese es el objetivo de la Inmunidad Parlamentaria.

Respecto a las encuestas que se realizaron en el Cercado de Lima a las 40 personas que transitaban por el destino referido, se observó que de todas la personas encuestadas, **el 95% (38) cree que la inmunidad parlamentaria consiste en proteger a los Congresistas de la República para que éstos no vayan a prisión por los delitos que cometen**. Solo el 5%(2) señala que este concepto no define a la inmunidad parlamentaria.

En relación a este punto, los ciudadanos que recibieron las encuestas manifestaron su sentir diciendo que no les parecía correcto que la Constitución Política avale este tipo de abusos hacia el pueblo, es como si el poder de los políticos no tuviera límites.

En relación con las afirmaciones anteriores, cabe manifestar que si bien las prerrogativas parlamentarias se encuentran plasmadas en el artículo 93º de la Constitución Política del Perú, éstas no deben ser entendidas ni concebidas como un amparo hacia el Congresista cuando este comete o está inmerso en actos ilícitos, pues la Carta Magna lo único que hace es regular las normas en virtud al entorno de un bienestar social y equilibrado entre el Estado y el ciudadano, más no generar normas individualistas que vayan destinadas a un cierto sector.

Por otra parte, respecto a qué se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable, los especialistas de manera correlativa exteriorizan lo siguiente:

Sumando a lo referido, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura mencionó que ***es un derecho que le otorga la Carta Magna por la condición que ostenta, por lo tanto es irrenunciable. De igual forma, la Corte Suprema no puede interponer un recurso ante la denegatoria del Congreso porque el Poder Judicial tiene que ser un respetuoso de la Constitución.***

Atendiendo a estas consideraciones, pienso que el dictamen que emite la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria casi en su mayoría veces guarda incongruencias. Digo esto porque la Comisión que se encarga de evaluar la validez formal de los documentos que es entregado por el Órgano Judicial, muchas veces es efectuada por Congresistas que no están inmersos en temas jurídicos y esto lógicamente acarrea que el pronunciamiento de la Cámara Legislativa no sea el adecuado, a tal grado de llegar a reflejar en la población una idea equivocada, pues gran parte de la ciudadanía cree que el Congreso de la República envuelve con un manto de impunidad a sus miembros, cuando esto no es así.

En definitiva, considero que el pronunciamiento de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria debería ser revisado por un ente de mayor jerarquía, aquel que inspeccione adecuadamente y al milímetro cada uno de los enunciados proferidos en el requerimiento del Poder Judicial.

En tal sentido, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, declara que ***en realidad lo que es irrenunciable es el cargo del Congresista porque el Reglamento del Congreso sí permite que un Congresista se allane al levantamiento de la inmunidad***, lo puede hacer y este se da una vez que existe un proceso del levantamiento ante la Comisión del levantamiento de la inmunidad, en base al allanamiento se elaborara un dictamen diciendo; dado el allanamiento, la comisión está de acuerdo y recomienda al pleno que se le levante la inmunidad.

Estoy de acuerdo con lo expresado anteriormente, pues el representante popular no puede renunciar a algo que no le pertenece; toda vez que esta garantía constitucional le corresponde al Congreso de la República del Perú.

Por otra parte, respecto al por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en los periodos de receso parlamentario y no solo en los periodos de sesiones, los especialistas de manera correlativa exteriorizan lo siguiente:

Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura expresa que es una solución de continuidad, el periodo es por cinco años, esto vendría hacer un argumento muy pedestre muy baladí; es decir en esta partecita (receso parlamentario) o en esta rendija no se protege la inmunidad parlamentaria, es algo absurdo. ***La prerrogativa se da o se ofrece por el quantum del quinquenio.***

De este modo, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, menciona que de acuerdo a nuestra Constitución se extiende hasta un mes después del ejercicio del periodo constitucional, es decir protege al Parlamentario desde que es elegido hasta un mes después de que haya cesado en el cargo. ***El representante es elegido por los 05 años, no es elegido solamente durante***

el periodo en el que funciona la legislatura, el receso parlamentario tampoco significa que los Congresistas dejan de desempeñar funciones representativas, si bien no hay actividades propiamente corporativas como son las sesiones de comisiones o del pleno, los Congresistas tienen que acudir a sus circunscripciones para contactar a la población que los eligió con el fin de acoger sus denuncias, sus demandas, sus propuestas, etcétera.

Por otra parte, respecto a lo que opinan del procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, los especialistas de modo sucesivo expresan lo siguiente:

Para el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, el principal obstáculo que hay en razón a la inmunidad en el Perú es que ***no existe en el Reglamento del Congreso un mecanismo expeditivo o rápido que permita un pronunciamiento por parte del Parlamento, el trámite se hace moroso, es poco transparente y finalmente ya en términos subjetivos encubre una voluntad de protección.***

Discrepo con lo antes referido, pues el actual procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria establecido en el artículo 16º del Reglamento del Congreso no es lento o demasiado largo, por el contrario es un mecanismo célere.

En ese orden de ideas, considero que en un sinfín de ocasiones se ha podido percibir la protección arbitraria que existe entre los grupos parlamentarios, más aún si estos forman parte la misma bancada.

Por su parte, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones expreso que ***debería de existir un procedimiento riguroso para el levantamiento de esta inmunidad***, razón por la cual, en el caso se compruebe que este Congresista ha faltado al Estatuto de Representación se le pueda excepcionalmente y por tiempo determinado levantar la inmunidad con la finalidad de que el sistema judicial pueda ventilar algún tipo de controversias o casos que tenga esta persona.

Esto en relación a los operadores legislativos que postergan el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para darle prioridad a otros asuntos de mayor trascendencia.

Aunado a ello, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos dijo que **en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, hay una sensación de protección entre ellos mismos**, sobre todo si son de la mayoría parlamentaria que tienen mayoría en las comisiones.

Por tanto, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura manifestó que simplemente hay todo un procedimiento, un protocolo. **La dinámica parlamentaria es distinta a la del Poder Judicial muchas veces se fija día y hora pero luego surge un tema prioritario y lo postergan**, y a lo mejor puede postergarse por mucho tiempo y eso puede generar una falsa impresión de que están apañando, de que están protegiendo pero a la larga tiene que terminar con el procedimiento.

Ahora bien, sabemos que la dinámica del Órgano Legislativo es distinta a la del Poder Judicial; sin embargo eso no significa que el Congreso deberá emitir el dictamen cuando a este se le plazca o cuando los medios de comunicación ejerzan presión sobre la Cámara Legislativa para que recién ahí emitan un pronunciamiento al respecto.

Sin lugar a dudas, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, expresó claramente que **el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria no es largo, es cortísimo es una de las cosas más sumarias que pueden haber**, entonces no es un problema de normas, es un problema de operadores.

En consideración a las encuestas que se realizaron en el Cercado de Lima a las 40 personas que transitaban por el destino referido, se observó que **el 100% (40) menciona que el trámite de levantamiento de la inmunidad parlamentaria es demasiado lento y poco transparente** porque encubre una voluntad de protección a sus miembros.

Como se puede inferir, los ciudadanos creen que el trámite del levantamiento del fuero constitucional es demasiado lento y poco o nada transparente porque lo que se busca con este procedimiento es crear argucias políticas para evadir responsabilidades penales. En algunos casos puede que sea cierto, en otros la inexperiencia de algunos parlamentarios puede ser que produzca el archivo de la solicitud del levantamiento del fuero.

Por otra parte, respecto a, si es apropiado o no que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de arresto y procesamiento del Congresista, los especialistas de manera continua revelan lo siguiente:

Para el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, ***el poder judicial no brinda ninguna seguridad de transparencia***, históricamente el poder judicial ha estado sometido o ha estado al servicio de los intereses políticamente más ocultos, entonces no es recomendable.

Algo semejante ocurre con el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones quien expresó que ***el poder judicial es débil, hay mucha influencia política y no es un poder autónomo*** como si existe en las democracias desarrolladas.

De manera diferente, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontifica Universidad Católica del Perú, nos dijo que ***el Poder Judicial en la medida que sea neutral tiene esa tarea mejor que el Parlamento***; sin embargo en la medida que no lo sea, no sería el competente.

A la par, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura manifestó que ***el Poder Judicial no puede ser quien dirima esa situación, porque la prerrogativa es consustancial al tema del Parlamento*** y no al órgano jurisdiccional.

Sin duda alguna, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, nos manifestó que lo que se trata es proteger la identidad de nuestro sistema parlamentario histórico. Si nosotros lo hemos tenido y por alguna razón no funciona ***lo que tenemos que hacer es que funcione mejor lo que nos da***

nuestra identidad histórica. Lo más importante es ver qué cosa es lo que funciona mal en el Perú y como corrijo lo que está mal en el Perú (...).

En síntesis, estoy de acuerdo con lo manifestado por los expertos, pues actualmente el Poder Judicial se ha convertido en una institución poca o nada confiable, tal vez si algún Congresista es denunciado por algún funcionario público de los otros dos poderes clásicos (ejecutivo y judicial) bajo argumentos de distinta índole al carácter penal podría seguirse una investigación injusta en contra del Parlamentario, y como este Órgano Judicial tendría el poder de procesar o detener si así lo estimara prudente al representante popular, éste último sin duda alguna estaría sujeto al mandato imperativo del Poder Judicial transgrediendo la división de poderes, la autonomía e independencia del Congreso, la democracia, la voluntad popular, entre otros.

Por ello, no es prudente que el Poder Judicial sea quien defina la autorización de procesamiento ni de arresto del Congresista, pues esto lógicamente vulneraría a gran magnitud las bases sobre las que se asienta el modelo garantista.

Por otra parte, respecto a, si el Perú debería eliminar de su ordenamiento jurídico la inmunidad parlamentaria, el experto refiere lo siguiente:

Para el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, ***no se debería de eliminar la inmunidad parlamentaria porque la causa está en los partidos políticos porque son ellos los que no filtran correctamente el menú de candidatos que tenemos, ahí está el problema, eso es lo que hay que corregir***, no eliminar la Inmunidad eso es una cosa totalmente periférica.

No se puede eliminar una garantía constitucional que protege la independencia y autonomía del Congreso de la República, no solo porque le brinda a sus miembros la total libertad para que estos ejerzan correctamente sus funciones sino porque además la voluntad popular se vería transgredida a tal grado de debilitar la democracia porque no todos los sujetos que se encuentran inmersos en la esfera del poder público utilizan esta garantía para sus fines personales, también existen buenos elementos en el Órgano Legislativo, aquellas personas

probas, honestas, incorruptibles e idóneas que velan por la protección y los intereses de la ciudadanía.

Para esos Congresistas que actúan de acuerdo a la ley y que solo están en el Parlamento para realizar sus labores a favor de la población, tal garantía no debería ser erradicada desde ningún punto de vista se podría concebir ello.

Por otra parte, respecto a, si la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada o no, los especialistas de manera continua revelan lo siguiente:

En particular, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, enunció que ***en efecto se desnaturalizado, la inmunidad que era una prerrogativa para salvaguardar la majestad del Congreso y el cabal cumplimiento de las funciones, ha terminado siendo y convirtiéndose en una suerte de valla de acceso a la justicia para alcanzar la verdad jurídica*** de algunos casos.

En similitud de palabras, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones, consideró que ***en muchos casos sí, se ha desnaturalizado la inmunidad parlamentaria; cuando se ha hecho aprovechamiento y abuso de esta condición.***

Del mismo modo, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontifica Universidad Católica del Perú, mencionó que ***la inmunidad parlamentaria si ha sido desnaturalizada porque han habido personas que habiendo infringido la ley o no cumpliendo los mandatos de la legislación para llegar al cargo representativo se encumbren en la inmunidad parlamentaria cuando tienen pendientes con la justicia.*** Entonces es un abuso el que se hace del derecho de los parlamentarios, utilizando esta figura de la inmunidad, creo que se ha desvirtuado totalmente.

Igualmente, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura, expresó que la institución esta como tal, que haya algunas personas que utilicen como una especie de blindaje es otra cosa pero ***el instituto como tal no está desnaturalizado.***

En efecto, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, expresó que se encuentra **desnaturalizada cuando los operadores no la utilizan correctamente**, sí existen distorsiones en el uso de la inmunidad parlamentaria pero la desnaturalización es nuevamente por los operadores no es por la institución en sí misma.

En razón a las encuestas que se realizaron en el Cercado de Lima a las 40 personas que transitaban por el destino referido, se observó que **todos los encuestados, 100%(40), señalan que los Congresistas de la República han originado que la inmunidad parlamentaria se desnaturalice y pierda su verdadera finalidad** para la cual fue creada.

Por otra parte, respecto a, si la inmunidad parlamentaria conlleva o no a la impunidad, los especialistas de manera correlativa manifiestan lo siguiente:

Para el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, **el mal uso de la inmunidad va asociada con la impunidad**, eso está claro.

Estoy parcialmente de acuerdo con lo manifestado por el referido Especialista, pues el mal uso que se le da a esta garantía procesal por parte de algunos Congresistas de la República conlleva a la impunidad, entendido desde un punto de vista temporal y esto puede deberse a que la Cámara Legislativa al no levantar el fuero parlamentario hace que el Poder Judicial solo opte por esperar a que el Congresista concluya con su mandato representativo para después retomar el proceso penal.

Sin embargo, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones, nos dijo que **la inmunidad parlamentaria no necesariamente conlleva a la impunidad** porque si hay un Congresista que fiscaliza, que controla, creo que es importante que exista inmunidad, porque de lo contrario el parlamentario sería querellado, enjuiciado, y se evitaría que el fiscalice.

Desde la perspectiva del autor, se puede decir que la inmunidad parlamentaria es otorgada a sus miembros en tanto cumplan sus funciones a cabalidad; es decir si

el Congresista cumple sus labores encomendadas y no está tratando de buscar argucias de distintas índoles para generar un beneficio propio o particular, esta inmunidad parlamentaria encaja correctamente en él, de lo contrario considero que esta prerrogativa no debería de otorgársele para el cumplimiento de otros fines ajenos a la función parlamentaria.

Asimismo, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mencionó que ***en algunos casos la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad porque en el momento que se apela a esta garantía no pueden ser objeto de procesamientos*** y tendrá que sobreseerse provisionalmente o de pronto continuar el proceso pero con figuras paralelas.

Es cierto que el Congresista al resguardarse en esta garantía de procedibilidad, lo que hace es dilatar la persecución penal pero no lo exime de responsabilidad alguna; sin embargo si el Parlamentario en todo este tiempo que no ha sido requerido por la justicia busca como erradicar esa persecución, lógicamente si estaríamos hablando de un tipo de impunidad acaecido gracias al resguardo que le dio esta institución constitucional al representante popular.

Análogamente, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura, considera preciso decir que ***la inmunidad no conlleva a la impunidad porque el propio derecho constitucional está lleno de valores y de principios que no permiten este tipo de acaecimientos***; la inmunidad es una prerrogativa que no desencadena la impunidad.

Si bien, el Derecho Constitucional tiene a su merced un amplia gama de principios y de valores, esto de nada sirve si el sujeto o funcionario público que ostenta un cargo representativo no tiene ni la más mínima idea de lo que es la ética y la moral, no podrá separar lo bueno de lo malo porque simplemente sus interés ocuparan toda su atención y hará que cometa ilícitos penales con la finalidad de saciar su propio beneficio sea de activos, propiedades, relaciones contractuales, etcétera.

Por su parte, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, nos manifestó que ***la inmunidad parlamentaria en sí misma, no conlleva a la impunidad, de ninguna manera.***

Lógicamente la inmunidad en sí misma no genera impunidad pero lamentablemente el empleo inadecuado puede desatar grandes injusticias.

En relación a las encuestas que se realizaron en el Cercado de Lima a las 40 personas que transitaban por el destino referido, se observó que ***el 100% (40) cree indefectiblemente que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad;*** es decir estas personas que fueron encuestadas sienten sin duda alguna que ésta garantía procesal esta enquistada a la impunidad.

No es novedad que los ciudadanos estén fastidiados y cansados de ver como los Parlamentarios utilizan ciertas artimañas para evadir la justicia, esto ante la vista y paciencia de todos puede resultar así, pero también hay que atribuirle parte de la culpa a los sujetos que votaron por ellos, a los medios de comunicación, a la clase política que seleccionan a cualquier personajillo que está de moda por así decirlo, estoy cansada de ver y presenciar como personas inadecuadas, sin ningún tipo de educación y fundada en valores éticos entran al Parlamento para hacer de él un circo, no es posible que en pleno siglo XXI aún existan políticos de tan bajo nivel haciendo que la talla y el status que algún día cultivaron Andrés Townsend, Mario Polar, Carlos Malpica, entre otros se vea reducida a nada.

En afinidad a lo relacionado con el Estado Constitucional de Derecho; el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura, manifiesta que ***la relacion que existe entre la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes reside en que el poder político en un Estado es uno solo;*** los tres poderes clásicos hoy se han expandido a partir de la Constitucionalización del poder y cuando se habla de división de poderes significa división de funciones que le atribuye la Constitución a cada órgano que se encuentra en nuestro territorio.

En relación a lo referido por el autor, podemos manifestar que hoy en día los tres poderes clásicos se hicieron a un lado para dar paso a un nuevo modelo garantista que integra a todos los Órganos del Estado.

También admitió, que ***el Estado Constitucional de Derecho es un Estado en donde la Constitución es practicada, es internalizada, es vivida, es cuando los gobernantes como los gobernados tienen apego, se identifican a ese credo filosófico, axiológico, valorativo que es la Constitución solo así podremos decir que hay un Estado Constitucional***, no puede haber un Estado Constitucional si simplemente hay poderes facticos en donde el bienestar es restringido para las grandes mayorías y simplemente una elite de empresarios gozan de los bienes y servicios.

En razón a todo lo afín a la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho; el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, respecto a la relación que guarda la Inmunidad Parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho manifiesta que ***se plantea la tesis de una comunidad política en donde el concepto tuitividad, protección y defensa de los derechos ciudadanos y del orden constitucional y legal, están muy marcados***; en esa perspectiva se entiende también que la inmunidad es un instrumento que sirve para garantizar la cabal actuación del parlamento como principio rector.

En relación a la tesis de la comunidad política puedo decir que este abarca a los sujetos que tienen el poder de representativo, en este caso son los Congresistas de la República aquellos que tienen que respetar y defender los derechos de los ciudadanos, así como la Constitución y las leyes que todo territorio presenta.

Aunado a lo referido, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones expresó sin duda alguna que ***el Estado Constitucional de Derecho nació con un Congreso potente basado en la inmunidad parlamentaria esa es la historia***, esa es la génesis del Derecho Constitucional y Parlamentario, lamentablemente en nuestro medio se ha ido desnaturalizando crecientemente hasta afectar la propia figura de la inmunidad.

Al respecto, pugnas y batallas entre la Monarquía y los Nobles en demasía hicieron que este último pudiera alcanzar el reconocimiento de sus privilegios, así como lo tenían en ese entonces la Corona y los Tribunales.

Por otro lado, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, admite que ***el Estado Constitucional de Derecho se ha fundado bajo dos principios, el principio de distribución y el principio de organización.*** Por el principio de distribución, la libertad de las personas es ilimitada en principio, porque la ley puede regular los límites como es obvio, pero de ahí se desprende un segundo principio, que es el principio de organización que el poder del Estado se organiza y se divide en competencias técnicas para garantizar esa libertad y dentro de esas formas de organización está el principio no solamente de división de poderes sino el de control y balances de poderes. Entonces el Parlamento dicho más claramente, es uno de los garantes de la libertad de las personas porque representa la voluntad del pueblo y establece las leyes con las cuales se organiza y se ordenan el ejercicio también de las libertades y los derechos para que no haya abusos.

Respecto a lo mencionado por el Especialista en Derecho Constitucional, resulta vital aclarar que significa cada uno de los principios referidos con anterioridad. Por el principio de distribución se entiende que este establece las libertades fundamentales o el reconocimiento de los derechos de las personas; mientras que el principio de organización plasma la limitación jurídica que el Estado le pone al ciudadano con la finalidad de que su accionar este sujeto a las leyes o normas que se encuentran en un territorio, sin transgredirlas.

Por su parte, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura exterioriza que ***ambos son consustanciales. No puede haber un Estado Constitucional de Derecho si no hay inmunidad parlamentaria, porque para eso existe el Parlamento.*** El parlamentario para que investigue tiene que tener cierto blindaje, ningún parlamentario se atrevería a denunciar absolutamente nada si no estuviera investido de esta prerrogativa. Asimismo, si eliminan esta garantía constitucional fruto de la presión mediática, los congresistas al no tener esta protección institucional, cualquier persona podría

tranquilamente denunciarlo, querellarlo, y lógicamente perdería el tiempo en asuntos irrelevantes en vez de estar viendo los grandes temas nacionales.

Concuero con lo expresado anteriormente, pues el Estado Constitucional de Derecho se concibe con el respeto de la Constitución como norma fundamental y suprema pero también con la existencia de la división de poderes; por ende si el Congreso tuviera que erradicar esta prerrogativa generaría un retraso en las funciones encomendadas para el servicio del pueblo. Lógicamente no se puede tener un modelo garantista instaurado en nuestro país sino se tiene al Poder Legislativo con todas sus facultades y libertades, pues la Cámara Legislativa es quien se encarga de proteger y representar a todos los ciudadanos del territorio peruano y si los operadores legislativos no presentaran más esta garantía protectora sus funciones se verían melladas, en especial el de la fiscalización.

De manera análoga, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, indica que la ***inmunidad parlamentaria y el Estado Constitucional de Derecho indiscerniblemente se encuentran unidos*** porque si el modelo garantista se basa en el principio de protección de la voluntad popular y la Constitución protege la relación entre el pueblo y el mandato representativo no hay manera de que esa voluntad popular y ese mandato representativo se cumplan si no se cuentan con las condiciones de protección suficientes para el puesto representativo.

El fin principal de esta garantía institucional antes aludida consiste en proteger la voluntad popular que es emanada de la Carta Magna.

Por otra parte, respecto a, si la inmunidad parlamentaria lesiona o no los cimientos del Estado Constitucional de Derecho, los especialistas de manera correlativa declaran lo siguiente:

Para el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, ***la inmunidad parlamentaria no vulnera las bases o fundamentos del Estado Constitucional de Derecho***, por el contrario esta prerrogativa parlamentaria lo que hace es garantizar la democracia representativa.

De manera similar, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones refiere que ***la inmunidad parlamentaria no lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho***, aquel que lo lesiona es la impunidad, si de 130 Congresistas, al menos hay 10 Congresistas que cumplen su labor fiscalizador entonces va la inmunidad para proteger a esos 10 Congresistas que cumplen eficientemente su labor.

Mientras que el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú nos dice que ***en principio no debería ser, porque el Parlamento debe tener esas garantías de inmunidad, desde el punto de vista orgánico***, es decir, la independencia, la autonomía se le da al órgano, ahora el órgano tiene miembros, esos miembros en tanto cumplan esas funciones deberían gozar de ello, pero aquí más bien se ha entendido que la inmunidad es un derecho subjetivo, un derecho individual.

Análogamente, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura expresa que por todo lo expuesto, considero que no, ***definitivamente no, la inmunidad parlamentaria no lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho***.

Asimismo, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República ***manifiesta que no para nada, no lo creo***.

En definitiva, opino lo mismo que los especialistas en la materia, toda vez que esta garantía parlamentaria como tal está correctamente instaurada en nuestro ordenamiento jurídico, el problema radica en los sujetos que tienen a su cargo esta prerrogativa, la cual no es utilizada adecuadamente. Volviendo al tema, esta institución parlamentaria garantiza considero yo, las bases sobre las que se asienta un verdadero Estado Constitucional de Derecho, pues la misma se encuentra establecida en nuestra Carta Fundamental y además forma parte del primer poder del Estado Peruano, aquel que se encarga de resguardar los intereses de la colectividad en una Nación.

Por otra parte, respecto a, si el abuso de la prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican o no los

cimientos del Estado Constitucional de Derecho, los especialistas de manera sucesiva exponen lo siguiente:

El Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, el Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones y el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional consideran de manera conjunta que los abusos de ésta prerrogativa por parte de los Congresistas de la República vulneran indefectiblemente las bases sobre las que se asienta el Estado Constitucional de Derecho.

De manera distinta, el Docente Principal de la Academia de la Magistratura nos dice que ***tendría que verse que Parlamentarios hacen ese abuso de la prerrogativa parlamentaria***, si algún miembro del Parlamento tiene algún delito que enfrentar se le levanta la inmunidad y este queda sujeto a los preceptos del órgano jurisdiccional. La ciudadanía tiene una forma distorsionada de ver las cosas gracias a los medios de comunicación que generan una falsa percepción y por ende una presunta corriente de opinión de medias verdades.

Con referencia a lo manifestado con anterioridad por el Dr. Eto, yo considero indudablemente que el Parlamentario al hacer un abuso de esta prerrogativa vulnera las características principales en las que se asienta el Estado Constitucional de Derecho, pues en gran parte los Congresistas se han resguardado en esta institución constitucional para evitar responsabilidades penales.

Atendiendo a estas consideraciones, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, menciona que ***ahí sí podría haber un problema porque ya no estamos hablando de la institución de la inmunidad parlamentaria sino de los usos que de la inmunidad hacen los operadores del sistema representativo***, si la usan mal, están contrariando la razón de ser de la prerrogativa, entonces nuevamente es un problema de operadores, es un problema de sujetos, no es un problema de instituciones.

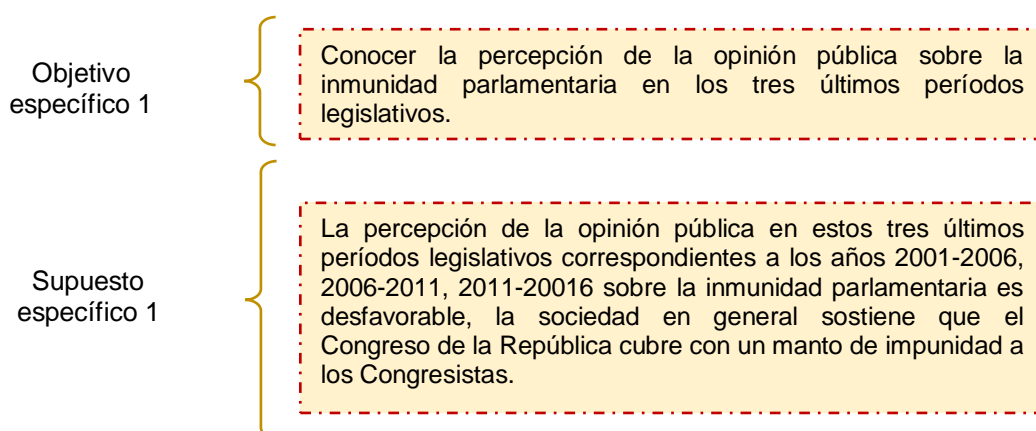
Respecto a las encuestas que se realizaron en el Cercado de Lima a las 40 personas que transitaban por el destino referido, se observa que de todos los

encuestados, ***el 90% (36) estima que el abuso de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas lesionan los cimientos del Estado Constitucional de Derecho.*** Por el contrario, el 10% considera que ésta prerrogativa no daña los cimientos del modelo democrático antes referido.

Lamentablemente, la ciudadanía está en contra de esta garantía parlamentaria porque consideran que el abuso de esta inmunidad vulnera el derecho de la igual ante la ley establecido en la Constitución Política del Perú, aquí cabe hacer un paréntesis porque si bien esta institución parlamentaria es utilizada de manera inadecuada por los Padres y Madres de la Patria, yo considero a través de las investigaciones que he estado realizando que al final del mandato parlamentario el proceso penal retoma su curso y es ahí donde el mal funcionario público deberá responder ante la justicia por los delitos que haya cometido. Existe la suspensión de la prescripción de los delitos, el mismo que podemos encontrarlo en artículo 84º del Código Penal, esta normativa se aplica en los casos en el que, la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria no haya autorizado el referido levantamiento del fuero parlamentario, lo cual genera de inmediato que la persecución del delito se suspenda hasta que el periodo legislativo para el cual fue elegido el Congresista haya concluido.

Gráfico N° 14

Objetivo específico 1 y Supuesto específico 1



Fuente: Elaboración propia

Discusión

De los datos obtenidos en la presente investigación, se ha logrado comprobar el objetivo y el supuesto planteado;

A través de la entrevista realizada al Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, se llegó a comprobar el objetivo y el supuesto proyectado, respecto a ***la percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos es desfavorable, si alguien dijera nuevamente disolver el Congreso no tengo ninguna duda que equivocadamente la ciudadanía accedería a ello***, lamentablemente esto forma parte del karma con el que tiene que cargar el Congreso.

De modo semejante, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones manifestó sin duda alguna que ***la percepción ciudadana es negativa en relación al sistema parlamentario y eso debilita lógicamente el sistema democrático, si vemos la correspondencia entre la legitimidad del Congreso con los electores, es baja***, empiezan en 40 % y rápidamente llegan a 20% o 10%.

Igualmente, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontifica Universidad Católica del Perú, concibe que ***la percepción de la ciudadanía es altamente negativa situación que se refleja cada cierto tiempo en las encuestas de opinión, el 80% no cree en el Parlamento.*** Asimismo, refiere que la inmunidad parlamentaria, está vinculada con la talla y el status que tiene el Parlamentario, esa talla de dirigentes ante la crisis de los partidos ya es escasa, o mínima o prácticamente inexistente, entonces la opinión pública ya no tiene esos representantes, esos señores que tenían intereses por el país desde su punto de vista pero que además tenían conocimiento, cultura, formación política,

Análogamente, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura manifiesta que ***la percepción de la ciudadanía es altamente negativa ante todo esto que nos plasma la prensa.*** Menciona que ***todo este tipo de bodrios y situaciones negativas, no ocurriría si se cumpliera con los mecanismos que establece la Constitución,*** la misma que maneja una serie de dinámicas que si se cumplieran no habría actos de corrupción, no habría situaciones de desgobierno, no habría latrocinios.

Por su parte, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, menciona que ***en general la percepción de la opinión pública es negativa, pues la prensa que no conoce lo suficiente de cómo funcionan las cosas y no saben cuál es la etiología del problema genera que todo el mundo crea que a partir de lo que te dicen los medios de comunicación esa es la naturaleza de las cosas*** y en muchos casos coinciden porque efectivamente pues hay malos usos en el ejercicio de la función parlamentaria.

No estoy de acuerdo con lo manifestado por el Dr. Eto y el Dr. Delgado, pues la prensa en ciertos casos ha logrado ser transparente y ha criticado con objetividad cuando las cosas no andan bien en el Parlamento, así como hay prensa amarillista, también hay medios de comunicación que cumplen con su labor a cabalidad, aunque sean pocos, no se le debe de incluir a todos en un mismo contexto.

Respecto a las encuestas que se realizaron en el Cercado de Lima a las 40 personas que transitaban por el destino referido, se observa que **el 97,5% (39) del total de las personas encuestadas estiman que la percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos (2001-2016) es desfavorable gracias a que el Congreso de la República envuelve con un manto de impunidad a los Congresistas**; mientras que el 2,5% (1) del resto de encuestados expresan que la percepción de la opinión pública del Congreso no resulta ser desfavorable porque éste no envuelve con un manto de impunidad a sus representantes.

De lo manifestado, **se puede apreciar también que el 92,5% (37), consideran necesario que la inmunidad parlamentaria se elimine por completo de nuestro ordenamiento jurídico**; sin embargo 7,5% (3) mencionan que la prerrogativa parlamentaria antes referida no debe eliminarse bajo ningún contexto.

Discrepo con la opinión de los encuestados que expresaron estar a favor de que se elimine la inmunidad parlamentaria, pues considero que el resto de poderes podría aprovecharse de esta cuestión y realizar actos contrarios y lesivos a la Cámara Legislativa, por ello de ninguna manera se debe eliminar dicha garantía parlamentaria.

A su vez, la población encuestada, **el 100% (40) siente que el Congreso de la República es una de las entidades que permite que la corrupción y la impunidad vayan de la mano.**

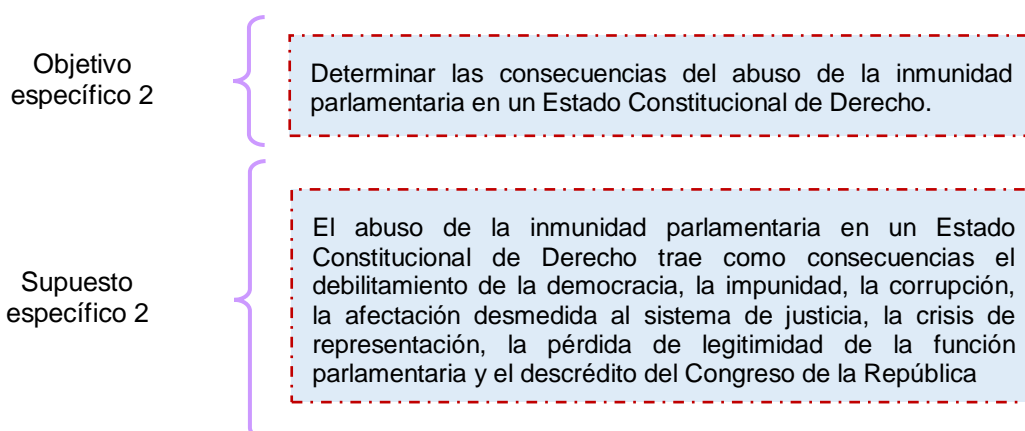
De todo lo referido, se puede indicar que la percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos correspondientes a los años 2001-2006, 2006-2011 y 2011-2016 sobre la inmunidad parlamentaria, es altamente negativa o desfavorable en relación al sistema parlamentario y esto es gracias a que la prensa en algunos casos no conoce cuál es la etiología del problema e informa de manera inadecuada generando una falsa percepción ante la población, a tal grado de quererse eliminar la garantía institucional por relacionarla con la impunidad. Hecho que ha generado que la opinión pública crea que el Congreso de la República protege a sus miembros con un manto de impunidad porque la

corrupción se encuentra enquistada en la Cámara Legislativa, por eso si alguien nuevamente dijera disolveremos el Congreso tenga la seguridad de que la población apoyaría esa medida antidemocrática.

Supuesto específico 1: La percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos correspondientes a los años 2001-2006, 2006-2011, 2011-20016 sobre la inmunidad parlamentaria es desfavorable, la sociedad en general sostiene que el Congreso de la República cubre con un manto de impunidad a los Congresistas.

Gráfico N° 15

Objetivo específico 2 y Supuesto específico 2



Fuente: Elaboración propia

Discusión

A través de la entrevista realizada al Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Abogado Constitucionalista del Buffet de Abogados Benites, Forno & Ugaz, se llegó a comprobar el objetivo y el supuesto planteado, respecto a ***las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho señala que en primer lugar se lesiona el sistema político, en segundo lugar fomenta la impunidad y en tercer lugar el Parlamento por lo general se ve entrampado o cubierto en este tipo de medidas y distrae su atención en otros temas.***

De modo similar, el Docente en Derecho Constitucional y hoy Miembro Titular del Jurado Nacional de Elecciones declaró lo siguiente respecto a ***las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho lleva inevitablemente a la pérdida de legitimidad de la función parlamentaria***, muchas de las críticas que existen en el Perú de la opinión pública es porque el sentido común achaca a que los excesos del Parlamento se basan en que no existe un control orgánico interno del Congreso para limitar los excesos que cometen muchos Congresistas,

Por otro lado, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, concibe lo siguiente respecto a ***las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho precisa que el abuso degrada la democracia representativa***, cada caso que hay en cada año hace que la ciudadanía pierda confianza en la representación y sobre todo en la democracia que es lo peor de todo.

Correlativamente, el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional y hoy Docente Principal de la Academia de la Magistratura manifiesta lo siguiente respecto a ***las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho muchas personas que son parlamentarios postulan bajo el pretexto de que cuando ya estén en una curul parlamentaria pueden hacer una dilación en algunos casos de procesos que estén siendo investigados.***

Por su parte, el Especialista en Derecho Parlamentario y hoy Jefe del Departamento de Relatoría, Agendas y Actas en el Congreso de la República, menciona lo siguiente respecto a ***las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho exterioriza el descrédito, o sea precisamente el mal uso de la inmunidad lleva a niveles de impunidad, lo que hace es ahondar la crisis de representación***, el problema no es que los abusos se produzcan porque existe la inmunidad, no, lo que pasa es que la inmunidad se utiliza como una herramienta para el abuso, entonces el problema no es la herramienta que es la inmunidad, el problema es los sujetos que abusan de la herramienta, es decir los sujetos que se apoderan del poder mediante un acto de corrupción para tener un goce privado de un bien público.

Respecto a las encuestas que se realizaron en el Cercado de Lima a las 40 personas que transitaban por el destino referido, se observa que el 100% (40) de los encuestados refieren que ***el abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho produce las siguientes consecuencias: Debilitamiento de la democracia, Presencia de la corrupción, Impunidad, Daño desmedido al sistema de justicia, Pérdida de legitimidad e Imagen del Congreso de la República seriamente afectada.***

De lo presentado, es preciso inferir que el abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho trae como consecuencias el descredito del Congreso de la República, lesiona el sistema político, fomenta la impunidad, debilitamiento de la democracia, pérdida legitimidad de la función parlamentaria, crisis de representación, y afectación desmedida al sistema de justicia; cabe indicar que el problema radica en los sujetos y no en la institución propiamente dicha.

Supuesto específico 2: El abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho trae como consecuencias el debilitamiento de la democracia, la persistencia de impunidad, la existencia innata de la corrupción, la afectación desmedida al sistema de justicia y el deterioro excesivo de la Institucionalidad del Congreso.

IV. CONCLUSIONES

Primera

La inmunidad parlamentaria es una garantía constitucional que fortaleció los cimientos del Estado Constitucional de Derecho, pues esta coadyuvó al cabal ejercicio de las labores funcionales de los Congresistas de la República produciendo así que esta garantía sea necesaria y útil para el correcto funcionamiento de la Cámara Legislativa; no obstante los actores legislativos que invocaron esta institución parlamentaria la distorsionaron y/o desnaturalizaron dándole un fin personal más no funcional causando una serie de factores negativos que tergiversaron la razón de ser de dicha institución parlamentaria

Segunda

La percepción de la opinión pública en cuanto a ésta prerrogativa constitucional fue altamente negativa, el mal empleo de esta garantía parlamentaria por parte de los legisladores generó que esta se vincule ineludiblemente con la impunidad más aún si los medios de comunicación en su afán sensacionalista brindaron información inexacta producto de su escaso o nulo conocimiento de la parte técnica del desarrollo legislativo específicamente en los procedimientos a seguir; ambas premisas provocaron el descrédito a la institucionalidad del Congreso.

Tercera

Los partidos políticos jugaron un rol preponderante en la imagen de ésta institución parlamentaria ya que estos son los encargados de controlar, filtrar y seleccionar adecuadamente a sus representantes con el fin de evitar que un futuro se encuentren inmersos en temas de impunidad; sin embargo hoy en día los grupos políticos presentan deficiencias en el sistema de intermediación partidaria en ese sentido los partidos políticos no están cumpliendo con su verdadera misión lo que trae como consecuencias el deterioro del sistema político y jurídico, daña la democracia, fomenta la impunidad y la corrupción, produce crisis de representación, y ocasiona la pérdida de legitimidad de la función parlamentaria.

VI. RECOMENDACIONES

Primera

Se recomienda se incorpore al Reglamento del Congreso el silencio positivo, el mismo que concede el levantamiento de la inmunidad parlamentaria una vez que haya finalizado el plazo de 30 días hábiles que se le otorga al Congreso de la República o la Comisión Permanente para que se pronuncie sobre la solicitud del levantamiento del fuero parlamentario que le emplaza la Corte Suprema; la mencionada sugerencia permite al Congreso de la República fortalecer su institucionalidad y gozar de una mayor credibilidad ante la ciudadanía, este mecanismo es idóneo para controlar los excesos de los Congresistas y afirmar la vigencia efectiva de la Constitución Política y de los derechos fundamentales, pues todos los poderes se encuentran subordinados al mandato de la Ley Suprema.

Segunda

Es fundamental que el Reglamento del Congreso de la República regule la condición profesional del legislador –Abogado(a) – que integra la Comisión del Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria y que se dote de publicidad a este procedimiento con la finalidad de mitigar la apreciación negativa que se tiene del fuero constitucional desde la perspectiva de la opinión pública.

Tercera

Los partidos políticos deben cumplir con la función de intermediación que les corresponde de manera que se preocupen en reclutar, entrenar y capacitar a los candidatos en relación a los puestos que posiblemente posean debiéndose realizar esta formación en cada proceso electoral con el único objetivo de reducir la brecha entre las incompetencias con las que llegan algunos congresistas al parlamento y las necesidades de gestión y de representación que tiene la institución parlamentaria de tal forma que cumpla con la función política y constitucional que le corresponden.

VII. REFERENCIAS

Fuentes Primarias

Entrevistas

Entrevista a Víctor García Toma (Lima, 04 de mayo de 2017)

Entrevista a Raúl Chanamé Orbe (Lima, 11 de mayo de 2017)

Entrevista a César Landa Arroyo (Lima, 16 de mayo de 2017)

Entrevista a César Delgado Guembes (Lima, 01 de junio de 2017)

Entrevista a Gerardo Eto Cruz (Lima, 11 de junio de 2017)

Fuentes Secundarias

Bibliografía Metodológica

Alfaro R., C. (2012). Metodología de la investigación científica aplicado a la ingeniería. *Niveles de investigación científica*. Recuperado de http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/IF_ABRIL_2012/IF_ALFARO%20RODRIGUEZ_FIEE.pdf

Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas: Editorial Episteme, C.A.

Bavaresco, A. (2006). *Proceso metodológico en la investigación. Como hacer un diseño de una investigación*. (5.^a ed.). Maracaibo: Universidad del Zulia.

Behar, D. (2008). *Metodología de la Investigación*. Bogotá: Grupo Editorial Shalom SAS.

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. (3.^a ed.). Bogotá: Pearson.

Cauas, D (2006). Elementos para la elaboración y ejecución de um proyecto de investigación. Investigación em Ciencias Sociales. Recuperado de http://webjam-upload.s3.amazonaws.com/apuntesinvest_cauas_1539_.pdf

- Cerda, H. (1991). *Los elementos de la investigación*. Bogotá: El Búho.
- Cuñat, R. (2006). *Aplicación de la teoría fundamentada (grounded theory) al estudio del proceso de creación de empresas*. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2499458>
- Gómez, B. (2012). *Metodología de la Investigación*. México: Red Tercer Milenio S.C.
- Hernández R. Fernandez, C. y Baptista, M. (2006). *Metodología de la investigación*. México D.F.: Editorial Mc Graw Hill.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5.^a ed.).México D.F.: Mc Graw Hill/ Interamericana Editores S.A.
- Monje, C. (2011). *Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa*. Neiva: Universidad Surcolombiana.
- Muñoz, C. (1998). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A.
- Palella, S. y Martins, F. (2006). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. (2.^a ed.). Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Libertador (FEDEUPEL).
- Pérez, A. (2009). *Guía metodológica para anteproyectos de investigación*. (3.^a ed.). Caracas: Fedupel.
- Quintana, A. (2006). *Metodología de investigación científica cualitativa*. En A. Quintana y W. Montgomery. Autores (eds.). *Psicología: Tópicos de actualidad* (pp.47-84). Lima: UNMSM.
- Quintana, A. (septiembre, 2008). Planteamiento del problema de investigación: Errores de la lectura superficial de libros de texto de metodología. *Revista IIPS*, 11(241) ,239-253.
- Ramos y Rousseau (2011). *Guía para la elaboración del protocolo de tesis*. Recuperado de

http://www.ecro.edu.mx/pdf/comite%20titulacion/guia_para_la_elaboracion_d el_protocolo_de_tesis.pdf

Romero, L. (2006). *Metodología de la investigación en Ciencias Sociales*. México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Sánchez, M. (Octubre/Noviembre, 2011). La metodología en la investigación jurídica: Características peculiares y pautas generales para investigar en el Derecho. *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, (14), 317-358.

Tamayo, M. (2004). *El proceso de la investigación científica*. (4.^a ed.). México: Limusa.

Bibliografía Temática

Abad, S. (14 de octubre de 2011). Inmunidad Parlamentaria Restringida [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://blogcristalroto.wordpress.com/2011/10/14/inmunidad-parlamentaria-restringida/>

Abellán, A. (1992). *El Estatuto de los Parlamentarios y los Derechos Fundamentales*. Madrid: Tecnos.

Albán, W. (23 de noviembre de 2016). ¿Inmunidad o Impunidad? *El Comercio*. Recuperado de <http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/inmunidad-impunidad-walter-alban-149748>

Alexy, R. (2008). *Teoría de los derechos fundamentales*, Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Alonso de Antonio, J. y Alonso de Antonio, Á. (2000). *Derecho Parlamentario*. Barcelona: Editor J.M. Bosch

Barrios G., B. (2002). Las Garantías Parlamentarias. Recuperado de <https://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/08/las-garantc3adas-parlamentarias.pdf>

Bernales, E. (12 de octubre de 2011). Inmunidad convierte a algunos en intocables. [Mensaje en un blog].

Recuperado de <http://faustorodriguezsotelo.blogspot.pe/2011/10/enrique-bernales-inmunidad-convierte.html>

Bermúdez, L. (marzo, 2012). El procedimiento parlamentario de levantamiento de la inmunidad parlamentaria en el Congreso de la República. *Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia*, (45), 9-13.

Chanamé, R. (julio, 2013). Retos de la inmunidad parlamentaria. *Revista Cuadernos Parlamentarios*, (2), 11-24.

Cabanellas, G. (Ed.). (1993). *Diccionario jurídico elemental*. Buenos Aires: Heliasta S.R.L.

Cabrera, D. (23 de octubre de 2009). *El Estado Constitucional de Derecho*. [Mensaje en un blog].

Recuperado de

<https://fderecho.wordpress.com/2009/10/23/el-estdo-constitucional-de-derecho-y-la-vigencia-de-los-valores-en-el-ordenamiento-juridico/>

Carrillo, Y. (2008). *Problemas y paradigmas de las ciencias sociales y la ciencia jurídica: crítica a científicidad de la dogmática jurídica*. Colombia: Universidad Libre.

Castel, R. (1997). *Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado*. Buenos Aires: Paídos

Carro, A. (1981). La Inmunidad Parlamentaria. *Revista de Derecho Político*, (9), 87-109.

Centro de capacitación y estudios parlamentarios. (enero, 2013). *Congreso de la República*.

Recuperado de http://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/CCEP/files/3-receso_parlamentario-001.pdf

Código Penal (1991). *Artículo 84º*. Recuperado de https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf

Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tendrá 15 integrantes. (20 de agosto de 2016). *Andina*, p. 1. Recuperado de

<http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-comision-levantamiento-inmunidad-parlamentaria-tendra-15-integrantes-627185.aspx>

Constitución Política del Perú (1993). Lima: Jurista Editores E.I.RL.

Constitución de la República del Ecuador (2008). Recuperado de http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf

Congreso de la República del Perú. (2005). Recuperado de http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/064C2C7F4D6291CD05257A400065B41E/%24FILE/derparlamentario.pdf

Congreso de la República. *Proyecto de Ley Nº 3490/2009-CR*. Javier Valle Riestra González Olaechea. 03 de octubre de 2008. Recuperado de <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/03490.pdf>

Congresista de Gana Perú roba y vende señales de cable en Ica. (13 de octubre de 2011). *Los Andes*, párr.2. Recuperado de <http://www.losandes.com.pe/Nacional/20111013/56665.html>

Congreso desaforó a congresista González. (17 de diciembre de 2014). *La República*. Recuperado de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWw9Yu3F_gQJ:larepublica.pe/17-12-2004/congreso-desaforo-congresista-gonzalez+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe

Congreso declara vacancia del parlamentario Alejandro Yovera. (17 de junio de 2015). *Los Andes*. Recuperado de <http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-congresista-declara-vacancia-del-parlamentario-alejandro-yovera-561190.aspx>

Córdova, F. (12 de diciembre de 2009). *Inmunidad (¿o impunidad?) parlamentaria*. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechogerenciaydesarrollo/2009/12/12/inmunidad-o-impunidad-parlamentaria/>

- Cordero, A. (2010). *La detención y el delito flagrante, dentro de la Legislación Penal Ecuatoriana vigente* (Tesina de Diplomado Superior). Recuperada de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2928/1/td4305.pdf>
- Crabtree, J. (2006). *Partidos Políticos e Intermediación en el Perú*. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
- Dammert, A. (1995). *Desborde Territorial Descentralista. Replanteando la Reforma Descentralista Peruana: Territorios Sociales, Estado con Regiones y Municipios, Impulso Autonómico*. Lima: Asociación Gráfica Educativa.
- Delgado, C. (2008). *Estatuto y prerrogativas parlamentarias en el Perú* [Diapositivas]. Lima: PUCP.
- Delgado, C. (2011). *Prerrogativas del Estatuto Parlamentario*. En C. Delgado. Autor (ed.), *Para la Representación de la República: Apuntes sobre la constitución del congreso y el estatuto de los parlamentarios* (344-376). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Downs, A. (1997). *An Economic Theory of Democracy*. Nueva York: Harper & Brothers.
- Dworak, F. (2010). *Al filo de la impunidad. La inmunidad parlamentaria y el mito del Fuero constitucional*. Revista de Acta Republicana Política y Sociedad, (9), 3-14.
- Doxrud, J. (12 de diciembre de 2016). El Estado: George Jellinek y el Concepto de Estado. [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/12/12/el-estado-3-georg-jellinek-y-el-concepto-de-estado#_ftnref=
- Espigado, D. (mayo, 2013). Los Privilegios Parlamentarios en cuestión: Una revisión de la Inmunidad y el aforamiento en el Derecho Español. *Revista Online de Estudiantes de Derecho*, (3), 1-37.
- Escriche, J. (1986). *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*. Quito: Fondo de Cultura Ecuatoriana.

- Eguiguren, F. (marzo, 2007). La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inmunidad parlamentaria. *Revista mensual de jurisprudencia: Palestra del Tribunal Constitucional*, (03), 709-720.
- Exp. N° 00026-2006-AI/TC: Javier Valle-Riestra González Olaechea, en representación de más del 25% del número legal de miembros del Congreso de la República. (marzo, 2007). *Tribunal Constitucional*. Recuperado de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00026-2006-AI.html>
- Exp. N° 1011-2000-HC/TC: Francisco Javier Errázuriz Talavera (enero, 2001). *Tribunal Constitucional*. Recuperado de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01011-2000-HC.html>
- Ferrajoli, L. (1998). *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Madrid. Trotta.
- Ferrajoli, L. (2004). *Derecho y razón*. (6.^a ed.). Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2007). *Teoría del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos*. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2011). *Principia Iuris: Teoría del derecho y de la democracia*. Madrid:Trotta.
- Ferrero, R. (07 de marzo de 2016). ¿Inmunidad o impunidad parlamentaria? *El Comercio*. Recuperado de <http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/inmunidad-impunidad-parlamentaria-raul-ferrero-noticia-1884371>
- Fernández R., Llatas, S. y Benza, M. (2001). *El Parlamento*. La Paz: Fondo Editorial de los Diputados.
- Fernández, F. (2011). La doctrina constitucional sobre las prerrogativas parlamentarias en España. *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época*, (14), 13-72.
- Figueruelo, A. (1992). El grado de suficiencia en la motivación del suplicatorio y la doctrina del Tribunal Constitucional. *Revista de las Cortes Generales*, (27), 33-66.

- García, E. (1989). La Inmunidad Parlamentaria y Constitución Democrática. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, (15), 439-468.
- García, E. (1989). *La inmunidad parlamentaria y el estado de partidos*. Madrid: Tecnos.
- García, D. (1992). *Prerrogativas parlamentarias*. En D. García. Autor (ed.), *Teoría y práctica de la Constitución Peruana* (pp.230-232). Lima: Ediciones Justo Valenzuela V. E.I.R.L.
- García A. (1998). *Principios y positivismo jurídico: el no positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- García, V. (noviembre, 2009). La inmunidad no debe ser un privilegio personal. *Revista del Instituto de Defensa Legal*, (195) ,1-4.
- Gómez, J. (1985). *La Inmunidad Parlamentaria en Colombia*. Bogotá: Editorial PUJ.
- Gómez, F. (noviembre, 2011). El fenómeno de la impunidad: luces y sombras en América Latina. *Revista de Derechos Humanos*, (11), 42-48.
- Gutiérrez, G. (08 de septiembre de 2010). *La Inmunidad Parlamentaria en el Estado Democrático Constitucional*. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/reformajudicial/2010/09/08/la-inmunidad-parlamentaria-en-el-estado-democratico-constitucional/>
- Gutiérrez Ticse, G. (2016). *La inmunidad parlamentaria en el Estado Democrático Constitucional: un estudio a partir del caso peruano*. (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú). Acceso el 23 de enero de 2017).
- Informe de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria a Miro Ruiz Delgado. (julio, 2009). *Poder Judicial*. Recuperado de http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/INFORME_MIRO_RUIZ_300709.pdf

- Latorre, D. (2008). Inmunidad Parlamentaria. *Revista Derecho y Sociedad*, (31), 163-176.
- Machicado, J. (julio, 2013). ¿Qué es una garantía? [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://jorgemachicado.blogspot.pe/2013/07/>
- Malca, O. (2005). *Responsabilidad social: fundamentos para la competitividad empresarial y desarrollo sostenible*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Martínez, J., Carbonell, M. y Agüero, A. (2006). *Los stakeholders y la acción social de la empresa*. Madrid: Fundación Rafael del Pino - Marcial Pons - Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Martín, M. (2008). *La inmunidad parlamentaria; origen histórico y regulación en las Constituciones iberoamericanas*. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Parlamentos, (2), 20-27.
- Meléndez, J. (febrero, 2016). *La inmunidad parlamentaria: notas características de su real significado*. Ugaz Zegarra & Abogados Asociados. Recuperado de <http://www.fuzfirma.com/pubpdf/be2b5738940aa775fadfd62c1c83a603.pdf>
- Miranda, A. (1984). *Del intento de ampliar el ámbito material de la inmunidad parlamentaria a determinados procedimientos civiles*. Revista española de derecho constitucional, (12), 9-21.
- Montoya, Y., Chanjan, R., Novoa, I., Rodríguez, J. y Quispe, F. (2013). Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública. Lima: IDEHPUCP.
- Moreso, J. (2009). *Constitución: un modelo para armar*. Madrid: Marcial Pons.
- Nogueira, H. (2003). *Teoría y Dogmática de los derechos fundamentales*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Neciosup, S., V. (2008). Inmunidad Parlamentaria: Legislación Comparada. Recuperado de

[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/99FF7E991AE1A3E3052575B6007F8450/\\$FILE/CIAE_Inmunidad_Parlamentaria_Leg_Comparada.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/99FF7E991AE1A3E3052575B6007F8450/$FILE/CIAE_Inmunidad_Parlamentaria_Leg_Comparada.pdf)

Nugent, G. (2010). *El orden tutelar. Sobre las formas de autoridad en América Latina*. Lima: CLACSO-DESCO.

Ossorio, M. (Ed). (2006). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. Buenos Aires: Heliasta.

Paz, J. (1979). *Derecho Constitucional*. Lima: Ediciones Jurídicas.

Pedido para levantar inmunidad a Galarreta y Acuña fue devuelto. (08 de marzo de 2016). *El Comercio*.

Recuperado de <http://elcomercio.pe/politica/congreso/pedido-levantar-inmunidad-galarreta-acuna-devuelto-167289>

Pilares, Á. (16 de junio de 2015). Alejandro Yovera y otros Congresistas desaforados. *El Comercio*.

Recuperado de <http://elcomercio.pe/politica/congreso/alejandro-yovera-otros-congresistas-desaforados-372410>

Pozzolo, S. (1998). Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional. *Revista Doxa*, (21), 339-353.

Punset, R. (2001). *Estudios Parlamentarios*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Pleno rechazó levantamiento de la inmunidad de Benítez y Crisólogo. (03 de diciembre de 2015). *El Comercio*. Recuperado de <http://elcomercio.pe/politica/congreso/pleno-rechazo-levantamiento-inmunidad-benitez-crisologo-249570>

Prialé Valle, A. (2003). *Inmunidad Parlamentaria: vigencia o eliminación en el Sistema Constitucional Peruano*. (Tesis de Grado, Universidad de Lima).

Quispe, C. (1998). *Apuntes sobre la Constitución y el Estado*. Lima: Gráfica Horizonte.

- Ramos, E. (16 de julio de 2013). *Inmunidad Parlamentaria. Alerta Informativa*. Recuperado de <http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=contenido&com=contenido&id=12183>
- Real Academia Española. (2014). *Inmunidad Parlamentaria*. En Diccionario de la lengua española (23.^a ed.). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Lg4DGUB>
- Reglamento del Congreso (2005). *Artículo 16º*. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República.
- Reglamento del Congreso (2014). *Artículo 2º*. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República.
- Reglamento del Congreso (2016). *Artículo 16º*. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República.
- Resolución N° 009-2004-SP-CS. (diciembre, 2004). *Poder Judicial*. Recuperado de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/BDA1B5D18EAC2E4505257906007907F0/\\$FILE/Resol.Ad._009-2004-SP-CS.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/BDA1B5D18EAC2E4505257906007907F0/$FILE/Resol.Ad._009-2004-SP-CS.pdf)
- Reynaga, Y. (2016). *Estatuto Parlamentario: Restricciones y Prerrogativas*. En G. Forno, H. Pantigoso, Y. Pérez, R. Tarazona y Y. Reynaga, Autores (eds.), *Derecho Parlamentario* (235-280). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Rezkalah, E. (marzo, 2012). La Inmunidad Parlamentaria: ¿Una prerrogativa suficiente o necesaria? *Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia*, (45), 23-29.
- Rubio, M. (2006). *El estado peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Sanchís, L. (1998). *Ley, principios, derechos*. Madrid: Dikynson.
- Sanchís, L. (2003). *Justicia constitucional y derechos fundamentales*. Madrid: Trotta.

- Santaolalla, F. (1983). *Derecho Parlamentario Español*. Madrid: Editora Nacional, Cultura y Sociedad.
- Santaolalla, F. (2004). *Derecho Constitucional*. Madrid: Dykinson.
- Santaolalla, F. (2013). *Derecho Parlamentario Español*. Madrid: Editorial Dykinson.
- San Martín, C. (1999). *Derecho Procesal Penal*. Lima: Grijley
- Sarmiento, J. (06 de mayo de 2015). *Sobre las cuestiones políticas no justiciables*. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/05/Doctrina1242.pdf>
- Sartori, G. (1999). *Parties and Party Systems. A Framework for Analysis*. Cambridge: University Press.
- Schmitt, C. (1992). *Teoría de la Constitución*. Madrid: Alianza Editorial.
- Soriano, R. (marzo, 2012). La Inmunidad de los Parlamentarios: más privilegios que garantías. *Revista de Jueces para la Democracia*, (43), 28-32.
- Rodríguez, M. (2008). Medios y democracia: La teoría de la responsabilidad social. *Revista de Comunicación*, (7), 154-166.
- Rubio, M. (2006). *El estado peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Tirado, J. (1996). Inmunidad parlamentaria y derechos fundamentales: apuntes en torno al caso del congresista Javier Noriega. *Revista Ius Et Veritas*, (12), 89-95.
- Venezuela: Tribunal Supremo quita inmunidad a Parlamentarios (28 de marzo de 2017). *El Comercio*.
Recuperado de <http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-tribunal-supremo-quita-inmunidad-parlamentarios-411157>
- Vergottini, G. (1983). *Derecho Constitucional Comparado*. Madrid: ESPASA-CALPE.

Wieland, H. (octubre, 2010). *Doctrina Constitucional. Representación, Mandato Imperativo e Inmunidad Parlamentaria*. Revista de Gaceta Constitucional (40), 279- 292.

Zagrebelsky, G. (2008). *El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia*. Madrid: Trotta.

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Autora: Alvarado Miñano Dina Esthefany

Facultad/Escuela: Derecho

Línea de investigación: Derecho Constitucional

Título del Trabajo de Investigación	Tema La Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho
Problema General	¿En qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?
Problemas Específicos	<p>Específico 1 ¿Cuál es la percepción de la opinión pública sobre la inmunidad parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos?</p> <p>Específico 2 ¿Cuáles son las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?</p>
Objetivo General	Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.
Objetivos Específicos	<p>Específico 1 Conocer la percepción de la opinión pública sobre la inmunidad parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos.</p> <p>Específico 2 Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.</p>
Supuesto General	La inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho consiste en preservar la independencia funcional del Órgano Legislativo; esta prerrogativa estatutaria se viene empleando de manera irregular por parte de los Congresistas de la República, a tal grado de llegar a desnaturalizarse y transformarse en un medio para la impunidad, circunstancia que ha originado el debilitamiento de los cimientos del Estado Constitucional de Derecho.

<p>Supuestos Específicos</p>	<p>Específico 1 La percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos correspondientes a los años 2001-2006, 2006-2011, 2011-20016 sobre la inmunidad parlamentaria es desfavorable, la sociedad en general sostiene que el Congreso de la República cubre con un manto de impunidad a los Congresistas.</p> <p>Específico 2 El abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho trae como consecuencias el debilitamiento de la democracia, la impunidad, la corrupción, la afectación desmedida al sistema de justicia, la crisis de representación, la pérdida de legitimidad de la función parlamentaria y el descrédito del Congreso de la República.</p>
<p>Método</p>	<p>Tipo de Investigación Tipo: Básica Enfoque: Cualitativo Alcance: Descriptivo Diseño: Teoría Fundamentada</p> <p>Escenario de estudio Congreso de la República del Perú</p> <p>Caracterización de sujetos Especialistas en Derecho Constitucional Especialista en Derecho Parlamentario</p> <p>Técnicas Análisis Documental Entrevista Encuesta</p> <p>Instrumentos Guía de Análisis de Documentario Guía de entrevista Cuestionario</p>
<p>Población y Muestra</p>	<p>No corresponde</p>
<p>Unidad Temática, Categorías y</p>	<p>Unidad Temática UT: Inmunidad Parlamentaria Categoría: Inmunidad Subcategorías: Inmunidad de Arresto e Inmunidad de Procesamiento.</p>

Subcategorías	Unidad Temática UT: Estado Constitucional de Derecho Categoría: Estado Subcategorías:
Métodos de Análisis de Datos	Método Analítico Método Comparativo Método Hermenéutico Método Sintético
Resultados	Capítulo III
Discusión	Capítulo IV
Conclusiones	Capítulo V
Recomendaciones	Capítulo VI
Referencias	Capítulo VII

ANEXO 2

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres:.....
- 1.2. Cargo e institución donde labora:.....
- 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:.....
- 1.4. Autor(A) de Instrumento:.....

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.													
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos y categorización.													
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.													
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

	%
--	---

Lima,..... del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No..... Telf:.....

ANEXO 2-A

VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: CHÁVEZ RODRÍGUEZ, ELÍAS GILBERTO.
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE - UCV.
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA.
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ALVARADO MORAÑO, DINA ESTHEFANY.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos y categorización.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 25- ABRIL del 2017

[Firma]

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 43304596 Telf.:

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ FIGUEROA, José Jorge.
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ALVARADO PIÑANO, DINA ESTHEFANY.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos y categorización.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 de Abril del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI N° 10125462 Telf: _____

 DR RODRIGUEZ FIGUEROA JORGE
 ABOGADO CALN N° 1048
 ADMINISTRADOR CLAP 3363

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: MARULLA FRAGA DE MEXQUITA, FABRICIO.
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE, UCV.
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA.
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ALVARADO MORAÑO, DINA ESTHEFANY.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos y categorización.											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 28 DE ABRIL del 2017


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 000790573 Telf: C.E.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: MARQUEZ MORENO JIMMY ROMULO
 1.2. Cargo e institución donde labora: DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ALVARADO MIÑANO, DINA ESTHEFANY

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													X
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													X
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos y categorización.													X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

98 %

Lima, 02 DE MAYO del 2017


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 08168218 Telf. 99 870 4502

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: CASTRO RODRIGUEZ ULPAM LESLY
- 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE - UCV
- 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE ENTREVISTA
- 1.4. Autor(A) de Instrumento: ALVARADO MIRANO, DYNA ESTHEFANY.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													X
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													X
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.													X
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													X
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos y categorización.													X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.													X
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

S1

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

98 %

Lima, 02 DE Mayo del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No 42977466 Telf: 58071252

ANEXO 2-B

VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Chávez Rodríguez, Elías Gilberto
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Alvarado Huamani, Diana Rotheffany

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos y categorización.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

51

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 25 - ABRIL del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 43304596 Telf.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: RODRÍGUEZ FIGUEROA, JOSÉ JORGE.
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: CUESTIONARIO
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ALVARADO MIÑANO, DINA ESTHEFANY.

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos y categorización.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 de Abril del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 1022402 Cel. 952285638

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: CASTRO RODRIGUEZ, LILIAM LESLY
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: CUESTIONARIO
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ALVARADO MIÑANO, DINA ESTHEFANY

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													X
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													X
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar el desarrollo teórico de la investigación.													X
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													X
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, supuestos jurídicos y categorización.													X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar los supuestos.													X
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

99 %

Lima, 02 DE MAYO del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 212977746 Telf.: 980717574

ANEXO 3

INSTRUMENTOS

ANEXO 3-A GUÍA DE ENTREVISTA

Entrevistadora: _____

Entrevistado(a): _____

Centro de labores: _____

Cargo que desempeña: _____

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 25 minutos.

PREGUNTAS

01. ¿Cómo surge la inmunidad parlamentaria?

02. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en que se fundamenta?

03. ¿Podría decirme Ud. a que se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?

04. ¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en los períodos de receso parlamentario y no solo en los períodos de sesiones?

05. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

06. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

07. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?
08. ¿Cree Ud. que si el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se deniega, éste se convertiría en una causa de exclusión de la pena?
09. ¿Cree Ud. que el principal obstáculo del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se debe a la carencia de mecanismos céleres?
10. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político?
11. ¿Cree Ud. que el Perú debería eliminar de su ordenamiento jurídico la inmunidad parlamentaria?
12. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?
13. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?
14. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?
15. ¿Qué relación existe entre la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes?
16. ¿Cómo surge el Estado Constitucional de Derecho?
17. ¿Qué es el Estado Constitucional de Derecho?
18. ¿Podría decir Ud. que tipo o modelo de Estado venimos presenciado actualmente?
19. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?
20. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?
21. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos períodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?
22. ¿Cree Ud. que existe una sensación de protección entre sus miembros parlamentarios en el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

23. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

24. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

ANEXO 3-A.1

GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL (1)

Entrevistadora: _____

Entrevistado(a): _____

Centro de labores: _____

Cargo que desempeña: _____

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 25 minutos.

PREGUNTAS

Objetivo general

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

01. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?

Respuesta.-

02. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Respuesta.-

03. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

Respuesta.-

04. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

Respuesta.-

05. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

Respuesta.-

06. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

Respuesta.-

07. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

Respuesta.-

08. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

Respuesta.-

09. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Respuesta.-

Objetivo específico 1

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos

10. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos periodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Respuesta.-

Objetivo específico 2

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

11. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

Respuesta.-

12. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Respuesta.-

ANEXO 3-A.1.1

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS

VÍCTOR ÓSCAR SHIYIN GARCÍA TOMA

Entrevistadora: Alvarado Miñano, Dina Esthefany.

Entrevistado(a): **DR. VÍCTOR ÓSCAR SHIYIN GARCÍA TOMA.**

Centro de labores: Bufet de abogados: Benites, Forno & Ugaz.

Cargo que desempeña: Abogado Constitucionalista.

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 10 minutos.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

01. Para Ud. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?

La inmunidad es una prerrogativa que tiene antecedentes medievales y que está destinada a salvaguardar la autonomía e independencia del poder legislativo de las acechanzas que pudieran presentarse de cualquier agente de carácter político o económico (...).

02. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

El principal obstáculo que hay en razón a la inmunidad en el Perú es el de que no existe en el Reglamento del Congreso un mecanismo expeditivo o rápido que permita un

pronunciamiento por parte del Parlamento, que por lo general de manera deliberada el trámite se hace moroso, es poco transparente y finalmente ya en términos subjetivos encubre una voluntad de protección, protección digamos viciosa protectora que se encubre bajo el concepto de otorongo no come otorongo.

03. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

No, porque el poder judicial no brinda ninguna seguridad de transparencia, históricamente el poder judicial ha estado sometido o ha estado al servicio de los intereses políticamente más ocultos, entonces no es recomendable.

04. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

(...) No tomaría como receta a ningún país en particular, si señalaría que estamos en actitud ya después de un tiempo bastante prudente para establecer algunas enmiendas al Reglamento y obtener de un lado la medida de salvaguarda que todo Parlamentario tiene y merece (...)

05. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

Sí, no debería eliminarse deberían de establecerse límites y esos límites deberían de estar fijados en el Reglamento del Congreso. Lo primero es que tendría que haber un procedimiento rápido, expeditivo, célere; lo segundo es que ninguna causa que hubiese tenido como hecho o incluso con denuncia anterior al acceso al cargo, debería ser objeto de intervención parlamentaria, es decir eso debería quedar en manos enteramente del poder judicial.

06. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

Sí, el mal uso de la inmunidad va asociada con la impunidad, eso está claro

07. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

Sí en efecto, la inmunidad que era una prerrogativa para salvaguardar la majestad del Congreso del cabal cumplimiento de las funciones, ha terminado siendo y convirtiéndose en una suerte de valla de acceso a la justicia para alcanzar la verdad jurídica de algunos casos.

08. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

El Constitucional de Derecho plantea la tesis de una comunidad política en donde el concepto tuitividad, protección, defensa están muy marcado; defensa de los derechos ciudadanos, defensa del orden constitucional y legal, y en esa perspectiva se entiende también que la inmunidad y la inviolabilidad son instrumentos para garantizar la cabal actuación del parlamento como principio rector (...).

09. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

La Inmunidad Parlamentaria no vulnera de ninguna manera las bases o fundamentos del Estado Constitucional de Derecho, por el contrario esta prerrogativa parlamentaria lo que hace es garantizar la democracia representativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos períodos legislativos.

10. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos períodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Forma parte del karma con el que tiene que cargar el Congreso, el Congreso se ha visto afectado primero por la presencia masiva de los medios de comunicación que hoy en día ocupan los debates y asuntos de interés público, lo segundo la vorágine normativa del Poder Ejecutivo, tres la presencia de los gobiernos descentralizados particularmente los gobiernos regionales que le han quitado cierta presencia política a los Congresistas, en cuarto lugar el tema de la inmunidad que es un baldón. La percepción de la opinión pública es desfavorable, si alguien dijera nuevamente disolver, disolver no tengo ninguna duda que equivocadamente la ciudadanía accedería a ello.

11. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

Se lesiona el sistema político porque la ciudadanía toma distancia de una institución parlamentaria que empieza a albergar a tirios y troyanos (*alguien es aceptado por dos bandos enfrentados*) que a gente honesta y aquella sobre la cual se presume que podría no serlo en consecuencia eso daña la democracia, en segundo lugar fomenta la

impunidad y en tercer lugar el parlamento por lo general se ve entrampado o cubierto en este tipo de medidas y distrae su atención en otros temas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

12. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Por todo lo dicho, claramente se puede ver que el abuso de esta garantía parlamentaria por parte de los Congresistas lesiona seriamente las bases sobre las cuales se asienta el Estado Constitucional de Derecho.

RAÚL ROOSEVELT CHANAMÉ ORBE

Entrevistadora: Alvarado Miñano, Dina Esthefany.

Entrevistado(a): **DR. RAÚL ROOSEVELT CHANAMÉ ORBE.**

Centro de labores: Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cargo que desempeña: Miembro del JNE y Catedrático en la UPG UNMSM.

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 10 minutos.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

01. Para Ud. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?

Es la protección constitucional que tiene el Congresista o Parlamentario para ejercer sus funciones de fiscalización y control político sobre los Organismos del Estado, la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en su labor funcional le da una sobre protección en cuanto al control y fiscalización (...).

02. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

De igual manera como existe un procedimiento de investidura que recorre el tema de la elección, proclamación de alguien que se le entrega la inmunidad parlamentaria, también debe existir un procedimiento riguroso para el levantamiento de esta inmunidad, razón por la cual se ha establecido a través del Reglamento del Congreso criterios para que en

el caso se compruebe que este Congresista ha faltado al Estatuto de Representación se le pueda excepcionalmente y por tiempo determinado levantar la inmunidad para que el sistema judicial pueda ventilar algún tipo de controversias o casos que tenga esta persona (...).

03. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

No en nuestro país donde el poder judicial es débil, hay mucha influencia política y no es pues un poder autónomo como si existe en las democracias desarrolladas, en nuestro caso esto es darle es darle una competencia a un poder que históricamente ha demostrado mucha debilidad ante la autoridad, entonces eso creo que no sería una garantía para el Congresista sino podría eventualmente usarse contra esta impunidad.

04. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

Yo, idealmente me inclinaría por la legislación Holandesa pero eso es lo ideal, hasta que lleguemos a un nivel de desarrollo de un Estado de Derecho sólido creo que todavía nos va a tomar tiempo razón por la cual yo me mantendría con la legislación que tenemos en este momento a condición de que no se cumpla pues ese adagio popular de la ley del otorongo donde jamás ante hechos evidentes se sanciona de manera imparcial aquel que sea de la mayoría o la minoría que ha transgredido el Reglamento del Congreso yo creo que no es un problema de normas, es un problema de aplicación (...).

05. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

El Reglamento y Estatuto ético han planteado los límites, desde mi punto de vista no es un tema normativo es un tema de aplicación, lamentablemente el sistema parlamentario se basa en mayorías matemáticas e históricamente en el Perú se han basado en mayorías precarias entonces un voto, dos votos tienen trascendencia en el Perú, a veces ese voto que es trascendente es del Congresista come pollo, del Congresista mata perro y ese voto es necesario para mantener una mayoría, en función de eso se consiente deliberadamente éstas inconductas y allí prácticamente entra en crisis nuestro sistema, el problema no es de normas, el problema es de cómo nuestra clase política puede ver que eso es casi suicidarse, estar convalidando este tipo de inconductas de sus miembros.

06. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

No necesariamente, si hay un Congresista que fiscaliza, que controla, el tema por ejemplo la corrupción, creo que es importante que exista inmunidad, porque de lo contrario el parlamentario sería querellado, enjuiciado, y se evitaría que el fiscalice, yo creo que debe existir la inmunidad parlamentaria para ese tipo de casos y actividades Congresales pero de ninguna manera esto debe convertirse en un Estatuto de privilegios personales para liberarse de procesos civiles, de alimentos o procesos penales que han surgido antes de su ejercicio Congresal.

07. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

Sí, en muchos casos sí, cuando se ha hecho aprovechamiento, abuso de esta condición, han habido reportajes recientes sobre un Congresista que usó la berma a su favor y lo trató de justificar en actos de fiscalización me parece pues que esos abusos parlamentarios desnaturalizan la función Congresal y le restan toda legitimidad a los parlamentarios.

08. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

Es un elemento esencial, el Estado Constitucional de Derecho nació con un Congreso potente basado en la Inmunidad Parlamentaria esa es la historia, esa es la génesis del Derecho Constitucional y Parlamentario, lamentablemente en nuestro medio se ha ido desnaturalizando crecientemente hasta afectar la propia figura de la inmunidad, por eso hay encuestas de opinión que señalan mayoritariamente que debería desaparecer ésta institución y eso se debe a que los electores han visto mal representados a sus Congresistas que han hecho abuso de la Inmunidad Parlamentaria.

09. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

No, la Inmunidad Parlamentaria no, la impunidad sí pero la inmunidad no, por eso digo si de 130 Congresistas, al menos hay 10 Congresistas que cumplen su labor fiscalizador entonces va la Inmunidad para proteger a esos 10 Congresistas que cumplen eficientemente su labor.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos.

10. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos periodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Es negativa, si vemos la correspondencia entre legitimidad el Congreso con los electores, es baja, empiezan en 40 % y rápidamente llegan a 20% o 10%, hoy día estamos en 30% pero estamos al inicio de la legislatura, entonces me temo que pueda ir descendiendo, creo yo que es un tema de percepción ciudadana negativa en relación al sistema parlamentario y eso debilita el sistema democrático.

11. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

El abuso lleva inevitablemente a la pérdida de legitimidad de la función parlamentaria, muchas de las críticas que existen en el Perú de la opinión pública es porque el sentido común achaca a que los excesos del Parlamento se basan en que no existen un control orgánico, interno del Congreso para limitar los excesos que cometen muchos Congresistas, esa es la razón por la cual se sostiene una crítica y cerca del 70% de los peruanos no se sienten solidario con el Congreso esa es una mala señal, lo contrario es que el Congreso tenga legitimidad a la actuación.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

12. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

El abuso de ésta prerrogativa perjudica seriamente los cimientos del Estado Constitucional de Derecho porque no solo se daña la Institucionalidad del Parlamento sino la democracia en todo su esplendor.

Nota: Las entrevistas realizadas a los especialistas se encuentran en el anexo 14.

CÉSAR LANDA ARROYO

Entrevistadora: ALVARADO MIÑANO, ESTHEFANY.

Entrevistado(a): **DR. CÉSAR LANDA ARROYO.**

Centro de labores: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Cargo que desempeña: Catedrático principal de la PUCP

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 10 minutos.

OBJETIVO GENERAL:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

01. Para Ud. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?

La Inmunidad Parlamentaria es un privilegio que tiene los representantes del Congreso que tiene los representantes del pueblo en una democracia a efectos de que puedan ejercer sus funciones constitucionales establecidas en la norma magna de representación, de fiscalización y de legislación sin interferencias, sin acosos de los poderes distintos al Poder Legislativo y de los poderes privados.

02. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Como toda actividad humana la labor de representación también puede tener algún tipo de vicios o deficiencias, o infracciones inclusive que puedan estar sancionadas, podrán ser de carácter meramente de gestión política, o sea de infracciones constitucionales o también podrían ser hechos al margen de la ley que puedan ser ilícitos con lo cual, si bien

los representantes tienen esta inmunidad, ellos solamente pueden, digamos, dejar de tener esta inmunidad, uno, cuando hay hechos ilícitos de carácter flagrante en los cuales pueden levantarse la inmunidad a efectos de ser investigados y procesados por el órgano judicial correspondiente, pero no es lo frecuente que cometan hechos ilícitos, digamos, de forma flagrante pero sí, que haya denuncias entorno a una serie de infracciones a la ley que hayan cometido, a veces durante su mandato pero también sobretodo en la etapa previa y que muchas veces, si bien no eran representantes al momento de postular tienen que llenar una ficha, por ejemplo de sus antecedentes, omiten esas informaciones que tienen sentencias judiciales de condena por ejemplo no pago de alimentos u otros que de pronto han falsificados datos, porque no han acabado la secundaria o no han estudiado o culminado una carrera que dicen entonces creo que las dificultades se presentan porque argumentan que son hechos pasados pero ellos han obviado esos hechos pasados precisamente para poder acceder al cargo de Congresistas y luego que han sido descubiertos se protegen de inmunidad, entonces yo creo que hay que corregir eso, porque el representante es como un padre de la patria para todos los peruanos y no podría estar encubriendo o soslayando los engaños que han hecho para llegar al cargo de Congresista, entonces la inmunidad debería también levantarse para los casos anteriores, ya sea por cuanto sea investigado por el Ministerio Público o también que se cree una Comisión Investigadora o la Comisión de Ética también que puede suspenderlos por este tipo de infracciones. En el procedimiento de levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, hay una sensación de protección entre ellos mismos, sobre todo si son de la mayoría parlamentaria que tienen mayoría en las comisiones porque por ejemplo cuando el Poder Judicial ha recibido del Ministerio Público denuncias y han abierto investigación judicial contra miembros del Parlamento, cuando son requeridos por el Poder Judicial al Congreso para que levanten el fuero para que puedan ser procesados, el Congreso demora, dilata y a veces ni siquiera responde o simplemente puede hasta rechazar porque consideran que puede ser una persecución, entonces a veces hay un mal entendimiento de la mayoría parlamentaria de que ninguno de sus miembros puede ser juzgado, por eso a veces son renuentes a ir al poder judicial, inclusive una Congresista nunca se apersonaba al proceso penal que estaba involucrada por los delitos vinculados a su padre, un general, que fue procesado, Chacón, ella Congresista, entonces claro, finalmente el proceso continuó sin su presencia, de modo tal de que ese tipo de falta de respeto al Poder Judicial de los padres o madres de la patria dejó en evidencia que la Inmunidad Parlamentaria tal como está, no debe existir porque hacen uso y abuso, entonces en muchos países de la región, la Inmunidad Parlamentaria no existe porque se genera este tipo de abusos, en Colombia por eso hay como 40

representantes que están procesados o presos porque lamentablemente ahí también el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos ha penetrado en los Órganos estatales y representantes, y es una forma de ya no poder ser juzgados y aquí parece que algo está sucediendo también.

03. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

Yo creo que si el poder judicial claro tiene un carácter independiente y neutral y de acuerdo a ley, es preferible, dado que el Congreso, claro es un Órgano político y hay mayorías y minorías, y las minorías podrían ser acusadas de terrorismo, entonces levantarles la inmunidad y ordenar su procesamiento más como una vendetta política que por una actuación digamos neutral, entonces es cierto que en la técnica parlamentaria siempre se ha dicho que hay un principio interna corporis acta, es decir, el Parlamento tradicionalmente como un poder político, independiente y democrático ha tenido reglas para resolver sus problemas internos sin interferencia de otros poderes pero ese concepto incluso ya en Europa que es un régimen parlamentario por excelencia ante todos los países, ya ido debilitándose al punto que se permite que el Poder Judicial pueda participar pero sin que el Poder Judicial se convierta en el órgano supervisor de todas las actuaciones Parlamentarias porque de lo contrario ocurre como ha ocurrido hace dos años cuando una comisión investiga al Ex presidente García y como el ex presidente tiene parece en el Ministerio Público y Poder Judicial mucha influencia, el Poder Judicial sacaba Hábeas Corpus, en los cuales se decía que no se le había citado muy bien que no se sabía para que estaba yendo en realidad, entonces el Poder Judicial en la medida que sea neutral tiene esa tarea mejor que el Parlamento pero en la medida que no sea neutral, como a veces ha ocurrido en algunos casos no sería el competente, en todo caso yo entendería que es mucho mejor que sea el Tribunal Constitucional porque es un Tribunal que interpreta la Constitución y los derechos y tiene Jurisprudencia para que sepa, es un Tribunal independiente, y pueda determinar en última instancia el levantamiento de las inmunidades.

04. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

Yo diría en Colombia, por ejemplo. La mejor legislación es la que no existe, para el tema de la inmunidad. El tema de fondo es que hay una crisis de representatividad, porque tenemos si bien elecciones con filtros y mecanismos pero se burlan, entonces la ciudadanía termina eligiendo representantes de los cuales después los detesta, los

rechaza y la credibilidad del Parlamento en la cual las encuestas de opinión que se hacen cada cierto tiempo solamente creo que un 18% a los más cree en el Parlamento, la Presidenta del Congreso es la que tiene más baja popularidad, el Primer Ministro y el Presidente tienen mucho más nivel de aceptación y nunca ha sido así, en ese sentido yo creo que el Parlamento con la crisis de representación que existe en nuestra democracia que se debe también a la crisis de los partidos de caudillos, no de líderes, de descendientes, no de ideas, entonces hace que los representantes encuentren el Parlamento como un escenario, unos para a guarecerse de las investigaciones que tienen pendientes con la justicia u otras cosas, u otros ya directamente para entrar a beneficiarse o a corromper, porque ya hay grupos también organizados que ya saben que pueden tomar alcaldías, en algunos casos, ahí está el Gobierno Regional de Ancash que ha estado con un Presidente que está preso ahora, o el de Tumbes, en la Libertad no sé qué ha pasado pero en otras regiones o alcaldías; el alcalde de Chiclayo hace unos años sacó también dinero con una joven que era su pareja, entonces claro, que sucede, los cargos públicos para las mafias y organizaciones delictivas o gente corrupta que está en los partidos o fuera, es un escenario fabuloso para poder hacer negocios y robar dinero, ahí está Odebrecht que contrata al alcalde del Callao y saca dinero, entonces a nivel Parlamentario sucede ya lo mismo. Entonces, el narcotráfico, la corrupción, los que tienen deudas con la ley, entonces para eso no vale pena tener inmunidad parlamentaria, no todos son iguales obviamente, pero hacen uso y abuso y dejan mal la institución parlamentaria y la propia inmunidad, por eso la mejor legislación sobre inmunidad a nivel comparada, es la que no existe.

05. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

Bueno partiendo de que no debe existir. Límites en todo caso deberían de haber y muchos o sea por ejemplo, la inmunidad parlamentaria para temas de orden estrictamente político no judiciales, es decir la inmunidad parlamentaria habría que reducirla a los ámbitos de las funciones que ellos realizan, es inmune en la medida que en el debate político parlamentario hace una propuesta de ley o hay un debate (...) pueden llevar a cabo tareas de fiscalización y que haya inmunidad parlamentaria para citar a una persona, para plantear un pliego interrogatorio, en la tarea de representación, pues no solamente legisla, fiscaliza si no también representa, es un poco más abierto, más subjetivo pero ellos son también parte de la voluntad popular, entonces las manifestaciones o expresiones de representar intereses siempre que sean colectivos no individuales, entonces yo creo que ahí tiene que haber inmunidad y no puede ser

acusado de estar haciendo tratos de intereses personales o beneficios, en ese sentido yo diría que la inmunidad tendría sentido porque ellos son representantes políticos no son representantes de intereses judiciales.

No debería existir la inmunidad parlamentaria y si existe debe haber límites muy estrictos que solamente la inmunidad exista para sus tareas en estricto, de legislar, de fiscalizar y de representar.

06. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

Bueno, en algunos casos sí porque en el momento que se apela a la inmunidad no pueden ser objeto de procesamientos y tendrá que sobreseerse provisionalmente o de pronto continuar el proceso con figuras paralelas (...).

07. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

Por todo lo señalado, Sí. Ha sido desnaturalizada porque ha habido personas que habiendo infringido la ley o no cumpliendo los mandatos de la legislación para llegar al cargo de representantes se encumbren en la inmunidad parlamentaria (...) parecen que han encontrado de manera no sé si individual u organizada en el Parlamento, la forma de evadir sus obligaciones, entonces, o apelar que como son parlamentarios, dirían soy un perseguido político, entonces es un abuso el que se hace del derecho de los parlamentarios, utilizando esta figura de la inmunidad, yo creo que se ha desvirtuado totalmente.

08. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

El Estado Constitucional de Derecho se ha fundado bajo dos principios, el principio de distribución y el principio de organización, por el principio de distribución, la libertad de las personas es ilimitada en principio, porque la ley puede regular los límites como es obvio, pero de ahí se desprende un segundo principio, que es el principio de organización que el poder del Estado se organiza y se divide en competencias técnicas para garantizar esa libertad y dentro de esas formas de organización está el principio no solamente de división de poderes sino el de control y balances de poderes y está el Parlamento, entonces el Parlamento dicho más claramente, es uno de los garantes de la libertad de las personas porque representa la voluntad del pueblo y establece las leyes con las cuales se organiza y se ordenan el ejercicio también de las libertades y los derechos para que no haya abusos, de modo tal que un mal ejercicio parlamentario por la falta de respeto a las funciones o el abuso de la inmunidad parlamentaria que devalúa, en el

fondo lo que está afectando también es la libertad de las personas de manera potencial o real porque si no se somete a la Ley un parlamentario a un proceso judicial, el ciudadano también dirá a bueno yo también cometo un delito y ya veré la forma como no voy a justicia, entonces promueve la corrupción, diría yo, la inmunidad parlamentaria porque lo que está generando entonces es una imagen de impunidad, entonces la gente presuntamente que estaba enjuiciada que puede ser por corrupción no es llevada a jueces, no es sancionada. Entonces en la sociedad hay ese reflejo de que, si el grande lo puede hacer el chico porque no.

09. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Yo creo que en principio no debería ser, porque el Parlamento debe tener esas garantías de inmunidad, desde el punto de vista orgánico, es decir, la independencia, la autonomía se le da al órgano, ahora el órgano tiene miembros, esos miembros en tanto cumplan esas funciones deberían gozar de ello, pero aquí más bien se ha entendido que la inmunidad es un derecho subjetivo, un derecho individual en la medida que llega al Parlamento, lo importante es llegar al Parlamento y después ya no respeto, entonces hay que atar nuevamente esa inmunidad desde un punto de vista objetivo, es decir que esa inmunidad esta otorgada al Congreso y el Congreso la reconocerá en tanto sus miembros cumplan sus funciones (...).

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 01

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos.

10. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos periodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Yo creo que la inmunidad parlamentaria está vinculada también con la talla y el status que tiene el Parlamentario, la talla personal quiero decir si hay altos dirigentes de la nación que están en el Senado, por ejemplo el último Senado fue el año 1990-1992, donde estaban representantes de las distintas fuerzas políticas, como los antiguos Senados de los años 80, altos dirigentes con pluralidad de opiniones discrepantes pero respetables de todos los partidos, estaban los partidos del Apra (Andrés Townsend Ezcurra), Ppc (Mario Polar Ugarteche), De izquierda (Carlos Malpica Silva Santisteban) pero como quiera, esa talla de dirigentes ante la crisis de los partidos ya es escasa, o

mínima o prácticamente inexistente, entonces la opinión pública ya no tiene esos representantes, esos señores que tenían intereses por el país desde su punto de vista pero que además tenían conocimiento, cultura, formación política, entonces hay una falta de credibilidad del representante al punto que ya los propios Parlamentarios tienen que pasar por los programas éstos de bromas, de chistes porque finalmente están a ese nivel, el nivel que ellos pueden vender al ciudadano de credibilidad es asimilándose a payasos o a payasas, o sea ese es el nivel que han llegado, el hecho de que ellos puedan tener popularidad, igualándose para abajo, entonces parece pues, que el desconocimiento o la ignorancia también ya ahora es un valor (...).

Es una percepción, altamente negativa que en las encuestas de opinión se reflejan cada cierto tiempo, porque más del 80% no cree en el Parlamento.

11. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

Yo creo que el abuso degrada la democracia entendida como una democracia representativa porque los ciudadanos pierden credibilidad cuando ven que una Congresista que no asiste al Poder Judicial cuando la requieren (...) cada caso que hay en cada año hace que la ciudadanía pierda confianza en la representación y sobre todo en la democracia que es lo peor de todo, finalmente se cambian los Congresistas pero al final dicen el sistema no es el mejor de pronto se alienta que haya una dictadura o cualquier medida contra democrática pero yo creo que hay que reformar dentro del sistema, para que se eviten ese tipo de arbitrariedades y abusos.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 02

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

12. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Yo creo que lo que estaría vulnerando los cimientos del Estado Constitucional de Derecho sería el abuso por parte de ciertos Congresistas, por eso es importante identificar a esos Congresistas, porque no es la Institución, yo creo que el Parlamento debe existir y debe haber esa pluralidad de representantes y además garantizarles la inmunidad necesaria para su función (...).

El Reglamento del Congreso podría precisar a mayor detalle los ámbitos del ejercicio de las potestades de los representantes y también señalar cuando hay violaciones a la inmunidad parlamentaria del propio parlamentario, porque no solo tiene un derecho si no también tiene un deber, respetar la inmunidad parlamentaria y uno puede gozar de derechos y privilegios en este caso de inmunidad pero también puede abusar de ellos, entonces sería mejor aunque pueda ser muy subjetivo por lo menos exista reglas de principios donde se establezcan los límites de esa inmunidad parlamentaria de pronto puedes dar un proyecto de ley, por ejemplo si eres agricultor, doy una ley a favor de los agricultores ha ocurrido hace poco que un Parlamentario ha promovido una ley que el Congreso ha aprobado con lo cual unas deudas que tenía ya no va a pagarlas porque se encuentra dentro de las condonaciones de deudas de un sector del cual es muy interesado.

Nota: Las entrevistas realizadas a los especialistas se encuentran en el anexo 14.

ANEXO 3-A.2

GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL (2)

Entrevistadora: _____

Entrevistado(a): _____

Centro de labores: _____

Cargo que desempeña: _____

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 25 minutos.

Objetivo general:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

01. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?
02. ¿Podría decirme Ud. a que se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?
03. ¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en los períodos de receso parlamentario y no solo en los períodos de sesiones?
04. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?
05. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

06. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?
07. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?
08. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?
09. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?
10. ¿Qué relación existe entre la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes?
11. ¿Cómo surge el Estado Constitucional de Derecho?
12. ¿Qué es el Estado Constitucional de Derecho?
13. ¿Podría decir Ud. que tipo o modelo de Estado venimos presenciado actualmente?
14. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?
15. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Objetivo específico 1

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos

16. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos periodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Objetivo específico 2

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

17. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?
18. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

ANEXO 3-A.2.1

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA

GERARDO ETO CRUZ

Entrevistadora: Dina Esthefany Alvarado Miñano

Entrevistado(a): Gerardo Eto Cruz

Centro de labores: Academia de la Magistratura

Cargo que desempeña: Docente Principal de la AMAG y USMP

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 25 minutos.

Objetivo general:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

01. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria y en qué se fundamenta?

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa, una suerte de privilegio, exención que tienen los miembros del Parlamento, del Congreso. Históricamente la Inmunidad Parlamentaria tiene un punto de origen en el Parlamento Británico en la medida en que los Parlamentarios tienen dos roles, históricamente siempre ha sido así, el de Legislar y el de Fiscalizar, justo en el ámbito de la fiscalización esas competencias les genera una serie de conflictos y potencialmente las personas involucradas en las investigaciones iniciaban sendos procesos penales de denuncias, de querellas y entonces la actividad libre del parlamentario se veía menoscaba por estos procesos penales, entonces surge

históricamente esa inmunidad como una prerrogativa, o sea prerrogativa en el sentido de que es una suerte de privilegio por su condición en que él va estar investigando y los investigadores no se van a quedar con los brazos cruzados es por eso que tiene un fundamento político. Ahora esos escenarios constituyen orígenes que no necesariamente fueron en la época republicana sino antes en las viejas monarquías constitucionales ya existía esa prerrogativa y se mantiene en el tiempo sobre eso es un poco el fundamento. Ahora los escenarios de la postmodernidad vienen replanteando si esa presunta prerrogativa no será acaso una suerte de inmunidad que tendrían personas que están involucradas en situaciones delictivas. Pienso que no, porque si es que una persona está sometida a un proceso y luego postula eso no exonera de que siga siendo procesado antes de su condición de Parlamentario y luego si es que hay una actitud delictiva dentro de su condición de Parlamentario para eso existe los procedimientos y los protocolos, se le levanta la Inmunidad y deviene en un status de ciudadano común y corriente y se le procesa de manera tal que la inmunidad es algo consustancial con una suerte de garantía institucional que tienen los Parlamentarios.

El Congreso es una institución política por excelencia que representa la democracia a través de sus representantes pero que ocurre, los representantes deben tener ciertas condiciones para su ejercicio y su funcionamiento, entonces la garantía de la inmunidad es una garantía institucional, concepto que fue acuñado en algún momento por Carl Schmitt, Carl Schmitt fue uno de los grandes teóricos de los cuatro gigantes de Weimar, los cuatro grandes teóricos del Derecho Público Europeo Hans Kelsen, Carl Schmitt Hermann Heller y Rudolf Smend. Carl Schmitt tuvo una célebre polémica con Hans Kelsen acuño en un libro que se llama Teoría Constitucional, el concepto de garantía institucional que viene hacer una suerte de Derechos Fundamentales de las personas jurídicas del Estado, entonces si se le quita esa garantía institucional, el Parlamento se vuelve endeble. Por ejemplo Garantía Institucional es la Autonomía Universitaria, si Ud. le quita esa autonomía a las Instituciones Universitarias no existiría la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento en esas aulas, si Ud. le quitase a la prensa su libertad de expresión, como garantía institucional de las libertades preferidas que consiste en las libertades que tienen los medios de difusión de generar corrientes de opinión se castra esa libertad de expresión de los medios de comunicación, lo propio ocurre con el tema de los Parlamentos que deben tener esas prerrogativas, es cierto que mediáticamente la prensa cuestiona porque no falta algunos Parlamentarios que están involucrados en situaciones delictivas y luego trepan al Parlamento presuntamente para estar exentos o neutralizar, eso es otra cosa entonces las instituciones como tal se mantienen y otra cosa

muy diferente es que se pretenda instrumentalizar esa inmunidad para generar impunidad que ya es otro concepto que habría que hacer el deslinde porque ya la persona que ha cometido alguna actitud delictiva simple llanamente se le someterá a un proceso ordinario y si está como Parlamentario hay un punto de quiebre antes o después, si es antes simplemente se le somete como proceso penal, ya ve Ud. el caso de Ollanta Humala presuntamente hay situaciones antes de ser Presidente, entonces se le investiga como cualquier ciudadano, posterior a su condición ahí si tiene ciertas prerrogativas, eso es un poco el escenario contemporáneo.

02. ¿Podría decirme Ud. a que se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?

En razón a lo que estuve informando. La persona que está involucrada en un proceso, es un derecho fundamental que tienen en su condición de cargo por eso es que yo hace mucho tiempo hice un deslinde entre derechos fundamentales y derechos constitucionales. Hay algunos derechos constitucionales como son en este caso la condición de Parlamentario, por lo tanto en su prerrogativa de Parlamentario le asiste ese derecho, como derecho constitucional. Entonces, hay algunos derechos constitucionales que solamente lo tienen determinados funcionarios pero que no se identifican como derechos fundamentales, derechos fundamentales lo tiene Ud. lo tengo yo como es libertad de tránsito, libertad de pensamiento, un parlamentario tiene lo mismo pero nosotros que no somos parlamentarios no tenemos un derecho de “derecho constitucional” que es ese derecho que le otorga la Constitución por la condición que ostenta, por lo tanto es irrenunciable ese cargo.

Ahora, no se ha presentado jurisprudencialmente la posibilidad de que si uno es Parlamentario, si tiene un derecho ese derecho también puede ser renunciable podría una persona siendo parlamentario. Un parlamentario simplemente puede decir no necesito de mi condición de inmunidad parlamentaria y me someto a la investigación que está haciendo la fiscalía, no se descarta y podría dejarse sin efecto eso. Pero tendría el Parlamento que formalmente dejar constancia de eso porque si él va de frente de buenas a primera, ese proceso es nulo, esa investigación judicial ordinaria.

La Corte Suprema no puede interponer un recurso ante la denegatoria del Congreso porque el Poder Judicial tiene que ser un respetuoso de la Constitución y por lo tanto es una prerrogativa que tiene el Congreso, el Congreso tiene que cuidar a sus miembros, lo propio ocurrió también con el Poder Judicial, el Congreso sometió a un juicio político a Villa Stein y otros magistrados para que den explicaciones me parece de algo, no fue. La

Corte Suprema hizo, Sala Plena, y no le dio facultades al Congreso entonces en la dinámica política hay veces que se presenta lo que se llama choque de trenes y normalmente el choque de trenes ha sido entre yo que ha sido Magistrado, entre el Tribunal Constitucional contra el Parlamento, contra el Ejecutivo, contra el Consejo Nacional de la Magistratura que ha sido un conflicto muy fuerte que tuvimos, entonces en ese escenario hay veces que se presenta conflicto de competencias y atribuciones, en estos momentos puede generarse un conflicto entre el Parlamento en sus potestades de fiscalización y el Ministerio Público en sus potestades de investigación preliminar que está siendo respecto a que, al célebre caso Odebrecht, el Parlamento le está diciendo informe sobre esto y el Ministerio Público dice no porque esto es reservado. Entonces lo que quiero señalar es que la Constitución otorga competencias y delimita atribuciones a los órganos y hay veces que se pueden exceder y se presentan estos conflictos, ¿Quién lo dirime? El Tribunal Constitucional.

03. ¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista en los períodos de receso parlamentario y no solo en los períodos de sesiones?

Es una solución de continuidad, el periodo es por cinco años, es un argumento muy pedestre muy baladí. Entonces en esta partecita (receso parlamentario), en esta rendija no, es algo absurdo. La prerrogativa se da o se ofrece por el quantum del quinquenio.

04. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Simplemente hay todo un procedimiento, un protocolo. Cometió una conducta que puede ser una infracción o un delito, un Parlamentario, entonces se cumple con los requisitos que establece el Reglamento interno del Congreso pasa a una comisión, luego pasa a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, hay una subcomisión y el Parlamentario tiene que defenderse allí o a lo mejor él dice no tengo ningún problema levántenme (allanarse) y se le levanta, luego ya, llegado a ese status simple llanamente se somete la persona al proceso penal que está ciente de iniciarse, así ha habido casos, el caso de Tula Benites, el caso de otra Congresista, son pocos pero si habido casos de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

Respecto si es célere, rápido o expeditivo el procedimiento parlamentario.

La dinámica Parlamentaria es distinta a la del Poder Judicial muchas veces se fija día y hora pero luego surge un tema prioritario y lo postergan, y a lo mejor puede postergarse por mucho tiempo y eso puede generar una falsa impresión de que están apañando, de

que están protegiendo pero a la larga tiene que terminar con el procedimiento y ya la persona sometida a una investigación judicial, que se someta, pero eso no podemos calificar ni descalificar.

Si alguien ha calificado que es por dilación yo diría que eso es relativo porque eso está en función a la dinámica parlamentaria.

05. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

No, porque la prerrogativa es consustancial al tema del Parlamento. Yo que sepa no existe esa situación del que el Poder Judicial es el que dirima, no es así, lo que existe es que el Poder Judicial define la prisión levantada la inmunidad parlamentaria, y ojo si puede haber prisión por el propio Parlamento, si el Parlamento observa que un Parlamentario se arrebató contra otro Parlamentario y lo descerraja a balazos, estoy hablando en teoría, allí hay un delito prácticamente de flagrancia delictiva, esa orden quien la da, el Congreso, no la da el Poder Judicial, no la da la Corte Suprema, lo dispone la Presidencia del Congreso que se someta a arresto hasta que empiece hacer el proceso de levantamiento, así es el escenario.

06. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

La naturaleza de la garantía institucional de la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad está expresa en las Constituciones Europeas y Latinoamericanas. Todas las Constituciones le otorgan esa inmunidad a los Parlamentarios.

07. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

Haber lo que es lo que está ocurriendo en el Perú y en América Latina, hay un fenómeno que es muy delicado y que sería bueno que lo ponga en evidencia, lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es que se está generando una política criminal de híper penalizar, híper criminalizar cualquier presunto bien jurídico tutelado, eso en doctrina se denomina populismo penal mediático, que es prácticamente un enfoque sociológico del derecho penal en mérito del cual los legisladores precisamente piensan que el derecho penal es una suerte de panacea que va a solucionar todos los problemas criminalizando todo, cuando realmente la situación es que hay que atacar la etiología, las causas. Hoy existe más bien lo que se llama derecho placebo, el derecho penal lo han convertido en un

derecho placebo, es decir placebo es una especie de lexotan que te dan para que te tranquilices como si estaría solucionando tu enfermedad, no. Entonces, el populismo penal mediático es una reacción exagerado de híper criminalizar sumado al factor mediático de la prensa que empieza hacer el rol del juez, la prensa está jugando a este rol negativo, si la prensa empieza a estigmatizar un caso mediático, el juez que no tiene suficientemente el carácter y el conocimiento va ser endeble ante la prensa entonces si a eso sumamos otro factor que se llama los procesos paralelos en donde hay un funcionario siendo investigado pero en lugar de estar defendiéndose en la judicatura, en el Ministerio Público, tiene que estar saliendo a la prensa a explicar todo eso. Ahí tenemos todo un marco completo de lo que es populismo penal mediático, entonces lo que genera la prensa es una falsa percepción, la prensa está jugando un rol negativo de jugar hacer juez, que informe sí, que desnude algún hecho de corrupción eso está bien pero no puede ponerse a expresar una situación mediática de que esto está bien o esto está mal, porque eso ya depende del órgano que emite sino realmente se está generando un sobre poder factico hasta es sintomático que haya un medio de comunicación que se llame cuarto poder porque está jugando a ser un poder que no puede ser, nadie le ha cuestionado y nadie le ha puesto en evidencia a la prensa que está generando muchos problemas en interferir con la justicia.

08. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

No, no, definitivamente no porque no puede ser que el propio derecho constitucional que está lleno de valores, de principios, si la Inmunidad es una prerrogativa eso no va a desencadenar impunidad porque si alguien realmente goza de inmunidad y luego comete un latrocinio que colindan con el delito el Parlamento le levanta y se somete esa persona a un proceso penal de manera que no puede haber, esa es otra falsa percepción que se ha venido generando.

09. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

No, pienso que la institución esta como tal que haya algunas personas que utilicen como una especie de blindaje es otra cosa pero el instituto como tal no está desnaturalizado. Yo quisiera que Ud. me probara empíricamente que Parlamentario está utilizando la inmunidad para poder beneficiarse, si Ud. me demuestra algún caso pero pueden haber seguramente pero como repito hay que hacer ese deslinde, ya con la explicación que le he hecho no habría manipulación si una persona que tiene un pasado negativo está sometido a un proceso normal ahí no hay inmunidad parlamentaria posterior a su

condición de Parlamentario ahí sí puede generarse esa prerrogativa en función alguna eventual inconducta funcional que haga.

10. ¿Qué relación existe entre la inmunidad parlamentaria y la separación de poderes?

La separación de poderes es toda una teoría que fue definida en su momento por John Locke en su célebre Segundo Tratado de gobierno civil, Montesquieu también lo pergeñó en El espíritu de la leyes, Rousseau en el Contrato Social, es decir el pensamiento que generó en su momento el desencadenamiento de la Revolución Francesa, posterior a ello y antes de ello con los enciclopedistas se cuestionaba el poder omnímodo de la monarquía generada la República se empezó a tratar de racionalizar el ejercicio del poder político, me explico. El poder político en un Estado es uno solo, en Estado hay un solo poder político lo que pasa es que ese poder político tiene diversos órganos, se dice que existen solamente tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, hoy la ciencia política dice que no, eso eran los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial) hoy se ha expandido a partir de la Constitucionalización del poder, a partir del CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, JNE, ONPE, RENIEC, en fin.

11. ¿Cómo surge el Estado Constitucional de Derecho?

Para empezar, lo que existió posterior a la Revolución Francesa fue el Estado de Derecho que es el Estado Clásico, decimonónico, dieciochesco que fue acuñado por un politólogo Robert Von Mohl pero luego en el tránsito de la posmodernidad, posterior a la Segunda Guerra Mundial para ser más específico hay un cambio radicalmente Copernicano, el Estado de Derecho que había sido el Estado Gendarme dejar de hacer dejar pasar y que imperaba el principio de legalidad y que la boca de la ley eran los jueces, los jueces no eran creadores del derecho sino simplemente sintonizaba con lo que había dicho el legislador, el Estado de Derecho, el señor del derecho era la ley, todo eso radicalmente cambia a partir de la Segunda Guerra Mundial.

La ley fundamental del boom o sea la Constitución Alemana de 1949 genera un nuevo cambio a partir del boom del Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional Alemán quien empieza a desarrollar nuevas fronteras de control constitucional y nuevas tutelas a los derechos fundamentales, entonces hoy los Tribunales Constitucionales, del cual me cupo el honor de haber sido miembro, ha generado en las últimas décadas la

presencia de un Estado Social y Constitucional de Derecho, lo de Social es porque era el Estado de Bienestar en donde se cumplían los derechos fundamentales de la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales pero hoy en términos categóricos se habla de un Estado Constitucional de Derecho que es una especie de Estado idealizado y que se debe de concretar porque hay frenos y contrapesos a través de la división de los poderes, hay un órgano que controla los excesos del poder que es el Tribunal Constitucional, hay instrumentos procesales que garantizan la tutela de los derechos fundamentales, hay un fenómeno que se llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico que ha sido desarrollado por el neoconstitucionalismo en buena cuenta la presencia de una democracia real y actuante pasa no solamente porque haya elecciones formales y cronológicas cada cierto tiempo sino que haya una democracia real en donde haya también presencia de los mecanismos que yo le decía de la democracia semidirecta, en donde el pueblo participe todo eso envuelve prácticamente un Estado Social y Constitucional de Derecho que forma parte del cosmopolitismo constitucional contemporáneo.

Hace poquito acaba de cumplir y está de aniversario México con el Centenario de la Constitución de Querétaro de 1917 y dentro de 3 años se cumple el Centenario de la Constitución de Weimar de 1920, entonces estos son años admirabilis como dice Peter Häberle, él replantea los escenarios pues de que el Estado Constitucional prácticamente es un Estado en donde la Constitución es practicada, es internalizada, es vivida, es lo que Pablo Lucas Verdú hablaba también del sentimiento constitucional junto con otro profesor que se llama Karl Loewenstein, sentimiento constitucional significa que tanto los gobernantes como los gobernados tienen apego, se identifican a ese credo filosófico, axiológico, valorativo que es la Constitución solo así podremos decir que hay un Estado Constitucional, no puede haber un Estado Constitucional si simplemente hay poderes facticos en donde el bienestar es restringido para las grandes mayorías y simplemente una elite de empresarios gozan de los bienes y servicios y el resto de la gente aunque viva de los derechos de la primera generación, ejemplo: si desean pasear a Miami como podrán ir si no tienen trabajo.

Entonces, un verdadero Estado Social y Constitucional de Derecho significa que se practique los derechos de la segunda generación que los niños tengan alimentación, que haya cultura, que haya educación, vivienda, salubridad todo eso son parte de los derechos que progresivamente deben fortalecerse en un país si no hay eso realmente se vive un Estado de Derecho nada más pero el ideal es que haya prácticamente la

consolidación de que, y eso reivindico a Karl Max, la plusvalía sea repartida en términos equitativos, la riqueza sea distribuida conforme corresponda también.

Lo que estaríamos presenciando en la actualidad sería el Estado de Derecho visto desde una perspectiva desde la Constitución Económica porque la Constitución Económica establece que haya un Estado de una economía social de mercado, y la economía social de mercado significa también que haya cierta injerencia del Estado no en controlar precios, porque eso es populismo, pero si en dotarle de garantías al trabajador para que tenga diversos derechos que han sido fruto de las luchas históricas. Muchos derechos de la segunda generación, los derechos de los trabajadores no han sido conseguidos como maná del cielo, han caído porque se han derramado sangre, sudor y lágrima y por lo tanto esos derechos no pueden ser retrocedidos por eso es que quiero que quede claro que deberíamos vivir un Estado Social y Constitucional de Derecho pero que es lo que ocurre que, la evolución de los derechos humanos hay lo que Giambattista Vico, un filósofo de hace 400 años tuvo una suerte de bolita de cristal y atalayó el mundo actual, él decía de los corsi e ricorsi o sea los ciclos históricos en la evolución de los derechos humanos son de marchas y contramarchas, o sea por ejemplo puede haber marchas a favor de los derechos humanos en este tiempo pero de repente por otras circunstancias se retrocede, no es una evolución lineal por eso que para explicar el Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho hay un análisis diacrónico y sincrónico, el análisis sincrónico es la evolución natural cronológica de la vida pero esa no es la evolución que ocurre en el tema de la democracia, de los derechos humanos porque realmente también hay una evolución diacrónica que a veces salta y hay derechos extraordinarios que corresponden a un tiempo que no correspondían y de repente en estos momentos que son los tiempos contemporáneos hay muchos derechos que van a empezar hacer retrocedidos, por ejemplo en estos momentos mire Ud. lo que está ocurriendo en Europa han entrado cerca de dos millones de Sirios y de esos dos millones Sirios hay mucha gente que son fundamentalistas que se han metido en contrabando y forman parte del Estado Islámico y entonces ellos que están haciendo están expresando intolerancia con la religión católica-cristiana, entonces ahí se genera una reacción del Estado porque frente a la libertad de religión ellos van a tener mucho cuidado de ver la conducta de otras personas que expresan un fundamentalismo intolerante. Entonces es la vida la que va dando los escenarios, no las normas, las normas están ahí pero la evolución de las circunstancias, de las contingencias son las que llevan al Estado a que se establezca tales políticas de restricciones porque las circunstancias lo obligan o a mantenerse generosa si es que hay una democracia sin enemigos.

12. ¿Qué es el Estado Constitucional de Derecho?

El Estado Constitucional de Derecho es un Estado donde se afirma la división de poderes, donde hay la vigencia de los derechos fundamentales, donde existe los mecanismos de control al poder sea vertical u horizontal, donde exista prácticamente una inclusión, donde exista políticas de servicio a las mayorías que son las políticas públicas, donde haya un multiculturalismo que consiste en incluir a los desiguales, a los marginales, que haya consultas previas, que haya igual de opciones de identidad sexual en buena cuenta que haya una democracia en donde todos participen del bienestar que da un territorio llamado Estado en donde haya libertad de pensamiento, de expresión, de ideas todo eso envuelve un Estado Constitucional, pluralismo, tolerancia, afirmación del principio Kantiano de la dignidad, yo como profesor le puedo dar una conceptualización. El Estado Constitucional es aquel Estado en donde se afirma la vigencia efectiva de la Constitución y de los derechos fundamentales, prefiero mejor enunciarle descripciones para que Ud. pueda tener un ajedrez geopolítico y le sea interesante la entrevista.

Eso es en buena cuenta un Estado Constitucional de Derecho, termino con lo que diría Norberto Bobbio, quien fue uno de los grandes filósofos políticos, la democracia es la utopía realizable porque Tomás Moro escribió la Utopía que es prácticamente una cosa que nunca se practicará porque era demasiado idealizable pero en cambio la democracia y la democracia constitucional o el Estado Constitucional es digamos el sistema menos malo de todos los sistemas y por lo tanto es una utopía realizable pero ya depende más que de las instituciones de las personas. Al fin y al cabo, en la humanidad el único ser más complejo, más misterioso y más difícil es el ser humano.

13. ¿Podría decir Ud. que tipo o modelo de Estado venimos presenciado actualmente?

El Estado Constitucional de Derecho es un Estado donde se afirma la división de poderes, donde hay la vigencia de los derechos fundamentales, donde existe los mecanismos de control al poder sea vertical u horizontal, donde exista prácticamente una inclusión, donde exista políticas de servicio a las mayorías que son las políticas públicas, donde haya un multiculturalismo que consiste en incluir a los desiguales, a los marginales, que haya consultas previas, que haya igual de opciones de identidad sexual en buena cuenta que haya una democracia en donde todos participen del bienestar que da un territorio llamado Estado en donde haya libertad de pensamiento, de expresión, de ideas todo eso envuelve un Estado Constitucional, pluralismo, tolerancia, afirmación del principio Kantiano de la dignidad, yo como profesor le puedo dar una conceptualización.

El Estado Constitucional es aquel Estado en donde se afirma la vigencia efectiva de la Constitución y de los derechos fundamentales, prefiero mejor enunciarle descripciones para que Ud. pueda tener un ajedrez geopolítico y le sea interesante la entrevista (...).

14. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

Ambos son consustanciales. No puede haber un Estado Constitucional de Derecho si no hay Inmunidad Parlamentaria porque para eso existe el Parlamento, porque el parlamentario para que investigue tiene que tener también cierto blindaje si le quita Ud. esa prerrogativa nadie se va atrever a denunciar nada.

Hay un sector de personas que tienen esa idea de que la inmunidad parlamentaria no debería de existir pero imagínese Ud. que le quitan la Inmunidad Parlamentaria fruto de la presión mediática todos los parlamentarios no van a tener inmunidad parlamentaria cualquier persona le va a llevar miles de procesos a los Parlamentarios, querellas y más va a estar perdiendo tiempo en ese tipo de situaciones en vez de estar viendo los grandes temas nacionales.

15. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Definitivamente no.

Objetivo específico 1

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos

16. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos periodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

Bueno también aquí yo tendría que hacer algunos reparos desde el punto de vista de investigador aparte de ser Abogado, yo le recomiendo a Ud. señorita que lea un libro clásico de una politóloga Alemana que se llama la Espiral del silencio lo que plantea esta dama es que la prensa al generar corriente de opinión diera la impresión que toda la gente está de acuerdo con esa corriente de opinión pero de repente a Ud. una periodista le hace una entrevista y Ud. por temor dice sí, sí estoy de acuerdo con esta situación, en el fondo no está de acuerdo a eso va el pensamiento de ésta politóloga en su obra que es

recomendable que todos los políticos lean, La Espiral del Silencio, que consiste en que para no estar estigmatizados, para no estar marginados uno se aúna a esa presunta corriente de opinión con este marco preliminar ahora si te puedo explicar con holgura.

La Constitución maneja una serie de dinámicas que si se cumplieran no habría actos de corrupción, no habría situaciones de desgobierno, no habría latrocinios. Por ejemplo le pongo casos, en estos últimos tiempos habido inconductas funcionales de Alcaldes, de Gobernadores que están terminando en la cárcel pero si hay mecanismos para solucionar y prevenir eso, Ud. sabe que existe en la Constitución mecanismos de democracia semidirecta como la rendición de cuentas, que pueblo, que distrito, que provincia le ha planteado a su gobernante o a su alcalde rendición de cuentas de tal obra, la remoción, la revocación, la iniciativa popular en la formación de las leyes, el referéndum esos mecanismos no son utilizados porque los mismos partidos políticos o los movimientos políticos no generan ese sentimiento constitucional porque no les conviene, porque si hubiera esos mecanismos alternos a lo que establece la democracia formal hace rato que sería un país pujante y no habría este tipo de situaciones dramáticas.

Entonces, es necesario generar un verdadero sentimiento constitucional en la población a partir de la prensa que debe divulgar eso pero tampoco a la prensa le importa un comino eso, a los políticos no les conviene porque se les estaría quitando su trabajo y surgirían nuevas corrientes de elite política de jóvenes que no tienen pasado negativo, entonces ese es el escenario.

Todo este tipo de bodrios y situaciones negativas, discúlpeme que estoy siendo más bien muy fuerte, no ocurriría si se cumpliera con los mecanismos que establece la Constitución.

La percepción de la ciudadanía es altamente negativa ante todo esto que nos plasma la prensa.

Lo que yo digo es que la prensa genera una falsa percepción porque todo lo que hoy sale en la prensa es lo que ocurre en la realidad pero la realidad desborda la fantasía de un simple titular, la realidad es más rica, más compleja que lo que sale en una portada de tal o cual medio de difusión, lo que pasa es que los medios actuales forman parte de un escenario más complejo que es la híper modernidad que habla un profesor francés que se llama Giles Lipovetsky, Giles Lipovetsky está analizando los tiempos actuales, y los tiempos actuales son prácticamente de una cultura pop, de una política pop, por ejemplo los gobernantes más que gobernar la res pública, la cosa pública lo que generan son imágenes porque la imagen genera sensualidad, credibilidad y todo lo que sale en

la más media, en la prensa, en la televisión es lo que realmente existe, entonces esta es una forma muy sutil de lo que en estos momentos es la política pop que lo escribió en 1974 otro profesor francés, disculpe que le esté citando libros pero es que son los escenarios de lecturas profundas para poder entender la compleja realidad en sus laberintos ontológicos de estos momentos.

Objetivo específico 2

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

17. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

Más que abuso, lo que puede ocurrir es que muchos parlamentarios o mejor muchas personas que son parlamentarios postulan bajo el pretexto de que cuando ya estén en una curul parlamentaria pueden hacer una dilación en algunos casos de procesos que estén siendo investigados. Lo repito, hay que hacer una distinción, si una persona es parlamentaria antes de su condición de parlamentario tiene investigaciones, esas investigaciones siguen su secuencia normal como cualquier hijo de vecino, como cualquier ciudadano de a pie, sigue normal y a lo mejor siendo parlamentario se descubre un tema muy delicado, por ejemplo un crimen de sangre y se verifica, ahí ya se le condena pero posterior a su condición parlamentaria ahí sí el tema se relativiza pero es bien difícil que alguien diga yo voy hacer parlamentario para que a partir de acá cometa pillerías y pueda tener la inmunidad, siempre se hace en función a lo que se tiene atrás, no adelante, porque lo de adelante es ignoto, no se sabe, nadie sabe nada de la vida futura.

18. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Insisto en que habría que ver que Parlamentarios hacen ese abuso de la prerrogativa parlamentaria porque por ejemplo la Señora Chacón ella está siendo investigada ex antes, o sea anterior a su condición de parlamentaria, incluso su papá ha sido absuelto. La pregunta parte de un presupuesto equivoco, esa pregunta acusa una falacia porque está dando por un supuesto, cierto, algo que es falso.

La falacia consiste en que ningún parlamentario abusa de su inmunidad porque nadie puede abusar de algo que realmente está establecido y si hay alguien que tiene un delito que enfrentar se le levanta la Inmunidad por eso es que la falacia está en que si él tiene con anterioridad no tiene inmunidad.

Se realizó la aclaración del porqué de esa pregunta.

A eso entonces le repito, la gente tiene una forma distorsionada de ver las cosas producto de lo que es la prensa, entonces la prensa genera falsa percepción porque teledirige y forma una presunta corriente de opinión.

En las investigaciones ya Ud. va a contrastar y terminado diciendo que no siempre Vox Populi Vox Dei, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, la voz del pueblo es la voz ventral, la voz intuitiva de repente soy muy rudo con el mismo país pero lo que pasa es que la gente no tiene una cultura constitucional simplemente tiene una reacción intuitiva y nada más para eso Ud. como investigadora para que ponga todo en su justo medio.

Nota: Las entrevistas realizadas a los especialistas se encuentran en el anexo 14.

ANEXO 3-A.3

GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN DERECHO PARLAMENTARIO

Entrevistadora: _____

Entrevistado(a): _____

Centro de labores: _____

Cargo que desempeña: _____

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 25 minutos.

Objetivo general:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

01. ¿Cómo surge la inmunidad parlamentaria?

02. ¿Qué es la inmunidad y en qué se fundamenta?

03. ¿Podría decirme Ud. a qué se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?

04. ¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista también en los períodos de receso parlamentario y no solo en los períodos de sesiones?

05. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

06. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?
07. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?
08. ¿Cree Ud. que si el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se deniega, éste se convertiría en una causa de exclusión de la pena?
09. ¿Cree Ud. que el principal obstáculo del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se debe a la carencia de mecanismos céleres?
10. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político?
11. ¿Cree Ud. que el Perú debería eliminar de su ordenamiento jurídico la inmunidad parlamentaria?
12. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?
13. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?
14. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?
15. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?
16. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Objetivo específico 1:

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos.

17. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos periodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?
18. ¿Cree Ud. que existe una sensación de protección entre sus miembros parlamentarios en el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Objetivo específico 2:

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

19. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

20. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

ANEXO 3-A.3.1

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA

CÉSAR DELGADO GUEMBES

Entrevistadora: Dina Esthefany Alvarado Miñano

Entrevistado(a): César Delgado Guembes

Centro de labores: Congreso de la República del Perú

Cargo que desempeña: Jefe del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.

El presente instrumento tiene como finalidad responder a la interrogante siguiente: ¿En qué consiste la Prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho? Vuestra colaboración es de vital trascendencia para el desarrollo de la presente investigación. Gracias por su valioso aporte.

Característica de la entrevista:

- Confidencial.
- Duración aproximada de 25 minutos.

Objetivo general:

Analizar en qué consiste la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho

01. ¿Cómo surge la inmunidad parlamentaria?

El origen de la Inmunidad Parlamentaria está relacionado con la preservación del carácter representativo de la democracia, este carácter representativo se basa en el principio de que los ciudadanos no pueden ejercitar el poder por ellos mismos y necesitan representantes que lo hagan por él, por lo tanto deben de elegir en un proceso a de entre ellos quienes van a representarlo para que se ejercite el poder en el Estado, entonces lo que la ciudadanía necesita es que el cuerpo de representantes al que se le entrega el mandato para que ejerza el poder en nombre y por cuenta de la ciudadanía tenga protegido el rol de representantes frente a cualquier tipo de perturbación de la elección que realizan los ciudadanos, entonces el bien constitucionalmente protegido es la

voluntad popular de acuerdo a nuestra Constitución y a todas las Constituciones democráticas del mundo. El poder del Estado se ejerce a través de la voluntad popular, la voluntad popular es la soberana pero una voluntad que no se ejercita de manera directa si no a través del voto mediante el cual los electores definen quienes van a representarlo en el ejercicio de poder ante el Estado, eso es en cuanto al origen.

El origen histórico data de los orígenes parlamentarios lo que se protege es la voluntad popular pero la voluntad popular no en su estado puro sino la transformación que la voluntad popular tiene a través del proceso electoral, este proceso permite que la voluntad popular se transforme en el cuerpo de representantes que van a decir la voluntad popular como si fuera la voluntad directa de todos los ciudadanos en la Nación a través de la voz de los representantes, lo que se tiene que proteger es el ejercicio de la voluntad popular en puestos representativos, lo que la Inmunidad Parlamentaria protege son los puestos representativos, no a las personas sino a los puestos desde los cuales la voluntad popular se expresa mediante el posicionamiento que realiza la elección sobre quiénes son los que postulan a los cargos representativos.

02. ¿Qué es la inmunidad y en qué se fundamenta?

La Inmunidad Parlamentaria es una prerrogativa, no es un privilegio se entendería que es un privilegio si se concretara en la individualidad del sujeto que ocupa el cargo representativo, no se trata de un privilegio, se trata de la protección que un puesto representativo recibe a través del ordenamiento constitucional. La Inmunidad Parlamentaria por el hecho de ser una prerrogativa no debe constituirse ni entenderse como un derecho subjetivo, no hay derechos subjetivos es en todo caso si cupiese hablar de algún tipo de derecho sería un derecho funcional, es un derecho que está relacionado con el ejercicio de una función en el Estado, es la protección que recibe el ejercicio de una función estatal para que la función no quede desprotegida, el concepto radica en que es una prerrogativa porque protege el ejercicio de la función, no el derecho subjetivo por ningún individuo en particular.

El fundamento de la existencia de la Inmunidad Parlamentaria radica en la protección del bien constitucional que es la voluntad popular y por lo tanto es la necesidad de que se preserve la decisión popular dentro del sufragio +, ese es el objetivo de la Inmunidad Parlamentaria, no la protección de las personas sean buenas o sean malas, el Congreso necesita o la Asamblea necesita que esos puestos sean protegidos que se preserve la identidad que ha realizado el ciudadano en el proceso electoral al señalar de todos los

electores quienes son los que van ocupar esos puestos esa decisión es la que necesita protección.

03. ¿Podría decirme Ud. a qué se debe que la inmunidad parlamentaria sea de carácter irrenunciable e irrevisable?

En realidad lo que es irrenunciable es el cargo del Congresista porque el Reglamento del Congreso sí permite que tú te allanes al levantamiento de tu inmunidad existe un momento en el que lo puedes hacer, no lo puedes hacer antes de que se inicie el proceso como ocurre en algunos casos que por razones mediáticas el Congresista dice yo me allano al levantamiento de mi inmunidad, ese es un gesto que no tiene nada que ver con el sistema normativo, el Reglamento no prevé que tú puedas allanarte, te puedes allanar una vez que existe un proceso del levantamiento ante la Comisión del levantamiento de la inmunidad parlamentaria una vez que existe, tú dices bueno yo me allano y la comisión en base a tu allanamiento elaborara un dictamen diciendo dado el allanamiento, la comisión está de acuerdo y recomienda al pleno que se le levante la inmunidad y se acabó o sea no es irrenunciable, no es irrenunciable cabe que tú te allanes y el allanamiento equivale a una suerte de renuncia de la protección del puesto.

04. ¿Por qué la inmunidad parlamentaria protege al Congresista también en los períodos de receso parlamentario y no solo en los períodos de sesiones?

De acuerdo a nuestra Constitución se extiende hasta un mes después del ejercicio del periodo constitucional, es decir te protege desde que eres elegido hasta un mes después de que haya cesado en el cargo.

¿Por qué la I.P. protege al Congresista también en el Receso Parlamentario?

El representante es elegido por los 05 años, no es elegido solamente durante el periodo en el que funciona la legislatura, el receso parlamentario tampoco significa que los Congresistas dejan de desempeñar funciones representativas, por ejemplo durante el periodo activo, que es la legislatura ordinaria, también existe la semana de representación donde no hay actividades propiamente corporativas como son las sesiones de comisiones o del pleno y los Congresistas tienen que acudir a sus circunscripciones para contactar a la población que los ha elegido para acoger sus denuncias, sus demandas, sus propuestas, etc. La inmunidad no se corta, no se interrumpe, durante ese proceso, porque tampoco se interrumpe ejercicio de las funciones representativas, tanto que a los Congresistas no se les deja de pagar durante esos meses porque siguen cumpliendo la función.

05. ¿Cuál es su opinión respecto al procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

El procedimiento es bastante complejo de explicarlo. En principio, lo primero que hay que preguntarse respecto del procedimiento es a partir de cuándo se entiende que existe la prerrogativa a favor de los Congresistas, la Constitución dice que es a partir de que son elegidos pero el Reglamento del Congreso hace una primera distinción dice que no alcanza respecto de los delitos cometidos antes del ejercicio de la función, es decir yo cometo un delito antes de ser elegido y se me pretende procesar por un delito cometido antes que yo hubiera sido elegido mientras que ejerzo la función, entonces el Reglamento te dice y eso ya ha sido corroborado como constitucional por el Tribunal Constitucional, el Reglamento te dice que la prerrogativa de la Inmunidad Parlamentaria no comprende la protección a los Congresistas por delitos que hayan sido cometidos antes del ejercicio de la función, en general el Reglamento del Congreso hace una precisión, habla de que los procesos hayan sido iniciados antes de, pero además de ser procesados antes de, existe ahora propuestas para que se incluyan no solamente los casos de los procesos iniciados antes de la elección sino también por delitos cometidos antes del ejercicio de la función que son cosas distintas.

Entonces se puede iniciar un proceso de levantamiento de la inmunidad de proceso únicamente respecto de los delitos cometidos a partir del inicio de la función es decir desde que son elegidos, si son elegidos el día 09 de abril cualquier delito cometido a partir del día 09 de abril de ese periodo constitucional está protegido por la prerrogativa, entonces date cuenta que la prerrogativa así como termina un mes después de vencido el mandato también te alcanza unos meses antes del inicio del mandato porque comprende la elección y entre la elección y el inicio del ejercicio de la función pasan algunos meses que si las elecciones son en abril te alcanzan a mayo, junio y julio, tres meses y medio antes de y un mes después de (...).

En suma, el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria no es largo, es demasiado corto, es una de las cosas más sumarias que pueden haber, entonces no es un problema de normas, es un problema de operadores (...).

06. ¿Considera Ud. apropiado que el Poder Judicial sea quien determine la autorización de la inmunidad de arresto y procesamiento del Congresista?

Yo trato de proteger la identidad de nuestro sistema parlamentario histórico. Si nosotros lo hemos tenido y por alguna razón no funciona lo que tenemos que hacer es que

funcione mejor lo que nos da nuestra identidad histórica probablemente en España, en Europa o donde sea la regulación sea diferente, la verdad yo no puedo legislar en mi país a partir de lo que hagan en otros países, yo primero tengo que ver qué cosa es lo que yo busco como país, que cosa es lo que me ha servido, que cosa es lo que yo quiero, si bien es cierto la interacción entre los países es muy grande y los niveles de emparentamiento jurídico, normativo, estructural, institucional existe y es innegable, es perfectamente válido pero primero hay que ver cuál es la causa de los problemas, no porque esté funcionando mal nuestro sistema yo voy a decir bueno como funciona mal entonces cambiémoslo por otro porque funciona bien en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda o en el Congo, no me interesa para mí lo más importante es ver qué cosa es lo que funciona mal en el Perú y como corrijo lo que está mal en el Perú pero no por el prurito que se haga de manera diferente en otro sitio y donde no exista la inmunidad o se haya recortado o se haya judicializado los procesos debe eso significar que yo tengo que cambiar mi propia identidad en función de mis instituciones.

07. ¿Qué legislación le parece más acertada respecto a la inmunidad parlamentaria?

A mí me parece que el Derecho Comparado puede ser muy interesante pero en realidad más me preocupa saber cómo debe funcionar el Perú, yo debo tratar de ver, primero necesito datos, lo primero que yo necesito antes de emitir juicios a partir de una evaluación periférica o superficial de un problema a partir del impacto mediático que me genera o de los escándalos que se generan a nivel farandulezco más allá de eso yo tengo que ver cuáles son los datos y a partir de esos datos que se hagan las correcciones dentro de lo que está funcionando mal, yo soy partidario de que primero investiguemos como funciona las cosas y determinemos las causas sin tener que fijarse del costado a ver si Chile lo hace, si Argentina lo hace, si lo hacen en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Brasil, en Venezuela no me interesa, lo más importante es conocer el problema de acuerdo a su aplicación social y política en una circunstancia concreta si tiene un problema de funcionamiento hay que pensar como lo corrijo, cuál es la causa del problema para eliminar la causa y no concentrarme en el síntoma, nos hemos pasado toda nuestra historia copiando Constituciones, copiando Códigos sin conocer que antes de saber qué cosa es lo que debemos importar de otros país, tenemos que ver porque el país o las normas que tiene no funcionan correctamente nuestro problema no se solucionan porque veamos cómo funciona la norma en otro país, en muchos casos puede funcionar en otro país muy bien porque la gente ha llegado a esa norma como consecuencia del mejor conocimiento que tienen de sí mismos, nosotros no

nos conocemos lo suficiente nosotros mismos y estamos pensando haber como lo hace el otro para copiarnos, esa es una de las alienaciones más grande que tiene nuestro país.

08. ¿Cree Ud. que si el pedido del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se deniega, éste se convertiría en una causa de exclusión de la pena?

Es que puede ser, pero no hay que fijarse solo si es que es una causa de la exclusión de la pena porque yo debo penar solamente a quien le corresponde que se lo sancione pero si el Congreso detecta que un bien constitucional como es la voluntad popular está siendo afectado por una distorsión que introduce una persona y la Comisión del Levantamiento de la Inmunidad llega a la conclusión de que no existe motivo legal puro sino que hay una voluntad de distorsionar el mandato popular, el Congreso es quien tiene que tomar esa decisión, cuando se está dejando de proteger el bien que es la voluntad popular en nombre de la supuesta comisión de un delito, entonces antes de hablar de la exclusión de la pena hay que ver si es que cabría la pena a quien en realidad se le está preparando un terreno para que deje de ser Congresista, entonces esta es una protección del sistema político que por otro lado siempre cabe que si no ha prescrito la acción penal ni el delito cabe que se le puede iniciar el proceso una vez que ha concluido el mandato por eso es que hay que determinar también si es que dentro de nuestro sistema durante el ejercicio del mandato parlamentario existe una suerte de interrupción de la prescripción respecto de la acción penal o del delito, si se incluye dentro de nuestra legislación penal la prescripción de la acción penal o del delito mientras que se desempeña el cargo parlamentario no hay ninguna afección en absoluto al proceso jurisdiccional penal.

09. ¿Cree Ud. que el principal obstáculo del levantamiento de la inmunidad parlamentaria se debe a la carencia de mecanismos céleres?

No, no, no a mí no me parece que los problemas de inmunidad o de impunidad tengan que ver con el Reglamento del Congreso. Si los sujetos son competentes los sujetos van a responder de acuerdo a la urgencia de los problemas que enfrentan, es más el proceso parlamentario tal como está en el Reglamento es bastante expeditivo porque los plazos son bastante corto, el problema no es que las normas no prevean un proceso corto, el proceso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria no es largo, es cortísimo es una de las cosas más sumarias que pueden haber, entonces no es un problema de normas, es un problema de que quienes tienen que aplicar y ejecutar las normas no lo están haciendo, entonces como haces que el operador de la norma cumpla con la norma le creas otra norma que le dices que cumpla con la norma, o sea es absurdo no es un

problema normativo es un problema de operadores, es un problema de cómo llegan al puesto representativo quienes asumen el mandato que el pueblo les da, ese es un problema diferente, ese no tiene nada que ver con la institución de la inmunidad parlamentaria ese es un problema que tiene que ver con el rol que tienen los partidos políticos en el proceso de selección de los candidatos que nos proponen a los electores, nos están proponiendo a gente que es inepta, es incompetente, es incorrecta o es inmoral para el desempeño del mandato parlamentario, entonces cuando ese problema se presenta a nivel de los partidos políticos porque no cuentan con las herramientas, porque no cuentan con el interés de hacerlo lo que sea, no puedo responsabilizar yo a las instituciones constitucionales o parlamentarias porque los partidos políticos no nos proponen un mejor menú que filtre mejor a los representantes tampoco tiene nada que ver con lo que dice la Constitución porque si tenemos un sistema democrático que permite que cualquiera pueda acceder a un puesto representativo, siempre que tengan 25 años, que seas peruano y no estés interdicto penalmente, si esa es la base de un sistema democrático que se mantenga pero existen filtros y ese filtro está en los niveles de intermediación que les corresponde a los partidos políticos, si los partidos políticos no lo pueden hacer o no lo quieren hacer y nos proponen un menú de candidatos que no nos sirve porque no cumple con los perfiles de gestión del puesto representativo, no veamos problemas donde no está la causa, la causa del problema es otra, tenemos que atacar las causas del problema donde está la causa no en el lugar equivocado, el mal uso de la inmunidad parlamentaria es un síntoma de que hay un problema más grande, ese síntoma nos está hablando de que los partidos políticos no están cumpliendo su misión ahí es donde hay que corregir el problema, no hay que eliminar la inmunidad o disminuir los niveles de intensidad de la inmunidad parlamentaria porque eso no va a solucionar el problema si tenemos los mismos operadores y si subsiste la misma lógica en los partidos políticos para no darle un valor agregado a los candidatos a los que nunca entrenan, a los que nunca capacitan y a los que nos lo mandan como si fueran un commodity, no hay ningún tipo de agregación de valor público en los candidatos que llegan a los partidos, les ofrecen dinero en la campaña o les ofrecen cuotas de popularidad porque soy una persona famosa o lo que sea y puedo arrastrar votos eso no se soluciona, mejor dicho eso es lo que hay que solucionar no eliminar ni recortar la inmunidad parlamentaria que tiene una finalidad política y constitucional.

10. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político?

Son cosas totalmente diferentes. La Inmunidad Parlamentaria es una protección del puesto representativo en relación con los presuntos delitos comunes que pudieran

cometer los representantes; el antejuicio es una de las modalidades en las que se concreta la otra prerrogativa parlamentaria que es la acusación constitucional que comprende tanto el antejuicio político como el juicio político. El antejuicio es por la comisión de delitos en el ejercicio de la función y el juicio político es respecto de las infracciones constitucionales que pudieran haber realizado no solamente los Congresistas sino cualquiera de los otros altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución, y ahí tienes otra diferencia mientras que la Inmunidad Parlamentaria afecta a sujetos singulares de nuestro sistema estatal como son los Congresistas, el Defensor del Pueblo o los Magistrados del Tribunal Constitucional; el antejuicio político tiene una cobertura un poco más amplia porque también le corresponde al Presidente de la República, le corresponde a los Ministros, al Superintendente de Banca y Seguros, entonces la Inmunidad no le alcanza al Presidente de la República, la inmunidad no le alcanza a los Ministros de Estado ni al Superintendente entonces ahí tienes una diferencia en razón de los sujetos y tienes una diferencia en razón de la materia respecto de la cual cubre, delitos comunes o delitos cometidos en el ejercicio de la función.

11. ¿Cree Ud. que el Perú debería eliminar de su ordenamiento jurídico la inmunidad parlamentaria?

No, simplemente te respondo que no porque yo no me fijo en lo que están haciendo al costado, yo me fijo en lo que está ocurriendo en el Perú y como mantener nuestras raíces y nuestro arraigo histórico de nuestras instituciones. Si tú me dices que eso está mal, veamos cuál es la causa. La causa está en que los partidos políticos no filtran correctamente el menú de candidatos que tenemos, ahí está el problema, eso es lo que hay que corregir, no eliminar la Inmunidad eso es una cosa totalmente periférica.

12. ¿Considera Ud. que deberían de establecerse límites a la inmunidad parlamentaria?

Bueno ya hay algunos, como que la inmunidad no protege respecto de la comisión de delitos cometidos antes de la elección por la protección respecto de procesos iniciados antes de la elección, eso ya es una limitación y eso ha sido avalado por el Tribunal Constitucional pero nuevamente esos son paliativos respecto del problema central, cómo han llegado esos personajes que han cometido delitos a hacer candidatos, quién permitió que eso ocurriera han sido los partidos, entonces el problema es cómo fortalecer los partidos para que ellos filtren mejor a ese tipo de candidatos que no mientan en su hoja de vida, que no te digan que son abogados y no han terminado primaria ese tipo de cosas, el problema está ahí, no está en que se establezcan mayores o menores

limitaciones respecto de la inmunidad por más limitaciones que tú le pongas a la inmunidad sí la causa del problema subsiste, esas limitaciones no van a impedir que siga utilizándose mal la prerrogativa de la inmunidad.

13. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

En sí misma no, de ninguna manera. Es como si dijéramos que la legislación a favor de las mujeres lleva a la impunidad, no lo sé, puede ser que el abuso de la mujer que está más protegida con la legislación contra el feminicidio lleve al abuso de la mujer contra el hombre también, entonces debiera eliminarse la legislación contra el feminicidio, debieran eliminarse las reglas que impiden la discriminación, debiera eliminarse las reglas relativas a las cuotas para ocupar puestos públicos porque lleva al abuso, no creo.

14. ¿Considera Ud. que la inmunidad parlamentaria ha sido desnaturalizada?

Desnaturalizada cuando los operadores no la utilizan correctamente sí, existen distorsiones en el uso de la inmunidad parlamentaria pero la desnaturalización es nuevamente por los operadores no es por la institución en sí misma, entonces volvemos a lo mismo si se ha desnaturalizado esto es porque los operadores lo están haciendo mal, ¿por qué los operadores lo están utilizando mal?, porque no son los operadores aptos, idóneos ni competentes para el puesto, no tienen habilidades suficientes para ocupar un puesto representativo le hacen un daño al pueblo cuando se postula un menú de candidatos que no reúnen las condiciones para emprender el puesto representativo.

15. ¿Qué relación guarda la inmunidad parlamentaria con el Estado Constitucional de Derecho?

Constitucional de Derecho se basa en el principio de protección de la voluntad popular y la conclusión protege la relación entre el pueblo y el mandato representativo no hay manera de que esa voluntad popular y ese mandato representativo se cumplan si no se cuentan con las condiciones de protección suficientes para el puesto representativo.

16. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria lesiona los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

No para nada, no lo creo.

Objetivo específico 1:

Conocer la percepción de la opinión pública sobre la Inmunidad Parlamentaria en los tres últimos periodos legislativos.

17. ¿Cuál cree Ud. que es la percepción de la opinión pública respecto a la inmunidad parlamentaria en estos tres últimos períodos legislativos que oscilan entre el año 2001 hasta el año 2016?

En general la percepción más allá de lo que yo crea o lo que no crea es obvia. Los medios de comunicación que no conocen lo suficiente de cómo funcionan las cosas y no saben cuál es la etiología del problema nos llevan de las narices a todo el mundo, y todo el mundo cree que a partir de lo que te dicen los medios de comunicación esa es la naturaleza de las cosas y en muchos casos coinciden porque efectivamente pues hay malos usos en el ejercicio de la función parlamentaria y tiene que dársele la razón a los medios cuando así lo denuncian pero en lo que no se le debe dar la razón es en que tiene que eliminarse la inmunidad parlamentaria por el mal uso, el mal uso es un síntoma de un problema anterior y mucho más grave que está en la raíz del sistema político que son las deficiencias en el sistema de intermediación a través de los partidos políticos.

18. ¿Cree Ud. que existe una sensación de protección entre sus miembros parlamentarios en el procedimiento del levantamiento de la inmunidad parlamentaria?

Eso perfectamente posible, nuestro sistema político funciona a partir del grupo parlamentario, los sujetos procesales básicos de los procesos parlamentarios son los grupos parlamentarios y entre ellos existen vínculos importantes que inhiben el ejercicio absoluto de la imparcialidad, es muy difícil que alguien que es miembro de un grupo parlamentario tú lo veas como si no fuera de tu propio grupo, es una afección que también se puede tomar de las familias, es muy difícil que tu siendo hijo, siendo padre o siendo marido o siendo mujer no desplaces la imparcialidad absoluta en nombre del afecto que tienes por alguien que es parte de tu propio grupo, es miembro de tu propia familia es posible que eso ocurra y es más eso ocurre muy a menudo pero frente a ese mal ejercicio de las atribuciones políticas y constitucionales también existe la obligación de dejar libertad para que los actos morales se realicen sin ningún tipo de restricción, yo no puedo dejar de reconocer una prerrogativa que protege el sistema político, que protege las bases del sistema democrático en nombre del mal ejercicio que realizan las personas que protegen indebidamente y parcializadamente a quien no merece que se le proteja, entonces lo que hay que hacer es corregir a los sujetos que desempeñan mal su función, ese es un problema de los operadores no es un problema de los principios a partir de los cuales se organiza el sistema político; si yo en nombre del mal ejercicio que realizan las personas comenzara a dejar sin efecto las instituciones, yo también debería dejar sin efecto por ejemplo la institución del matrimonio porque hay muchos maridos que

le sacan la vuelta a sus mujeres, y muchas mujeres que le sacan la vuelta a sus maridos, entonces tu dirías la mujer es una sinvergüenza, el hombre es un sinvergüenza como son sinvergüenzas entonces para qué existe el matrimonio, deshagamos el matrimonio, las instituciones existen porque hay bienes colectivos que son superiores al mal ejercicio del derecho, yo tenía un profesor de derecho, el Dr. Manuel de la Puente y Lavalle que decía no por temor al abuso del derecho debe dejar de reconocerse el derecho, yo creo que este sería el principio por el cual debiéramos examinar prudentemente la razón de ser de la inmunidad parlamentaria.

Objetivo específico 2:

Determinar las consecuencias del abuso de la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

19. ¿Cuáles serían las consecuencias del abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho?

El descrédito, o sea precisamente el mal uso de la inmunidad llegara a niveles de impunidad lo que hace es ahondar la crisis de representación pero nuevamente eso es un síntoma de que algo está mal, el problema no es que los abusos se produzcan porque existe la inmunidad, no, lo que pasa es que la inmunidad se utiliza como una herramienta para el abuso, entonces el problema no es la herramienta que es la inmunidad, el problema es los sujetos que abusan de la herramienta, es decir los sujetos que se apoderan del poder mediante un acto de corrupción para tener un goce privado de un bien público.

20. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República perjudican los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

Ahí sí podría haber un problema porque ya no estamos hablando de la institución de la inmunidad parlamentaria sino de los usos que de la inmunidad hacen los operadores del sistema representativo, si la usan mal, están contrariando la razón de ser de la prerrogativa, entonces nuevamente es un problema de operadores, es un problema de sujetos, no es un problema de instituciones.

Nota: Las entrevistas realizadas a los especialistas se encuentran en el anexo 14.

ANEXO 3-B

CUESTIONARIO

ENCUESTA N° 0..... - 2017

INSTRUCCIONES

Esta encuesta es totalmente anónima y personal. Constituye una aproximación a la investigación jurídica que se viene realizando respecto a la Inmunidad Parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho.

Para ello deberá tener presente los siguientes textos:

- *Constitución Política del Perú (párrafo tercero)*

Artículo 93º.- Los Congresistas (...) No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

- *Reglamento del Congreso de la República del Perú (párrafo segundo)*

Artículo 16º.- La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden.

Conteste con entera sinceridad marcando una (X) en la opción seleccionado.

En caso no entendiera la interrogante o requiriera más precisión de esta, no dude en preguntar a la persona quien le brindó la encuesta.

De antemano muchas gracias por su tiempo ...

1. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria protege a los Congresistas de la República para que éstos no vayan a prisión por los delitos que cometen?

a) Si

b) No

2. ¿Cree Ud. que el trámite del levantamiento de la inmunidad parlamentaria es demasiado lento y poco transparente porque encubre una voluntad de protección a sus miembros?

a) Si

b) No

3. ¿Considera Ud. que los Congresistas de la República han originado que la inmunidad parlamentaria se desnaturalice y pierda su verdadera finalidad para la cual fue creada?

a) Si

b) No

4. ¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?

a) Si

b) No

5. ¿Ud. cree que el Congreso de la República debería tomar las siguientes acciones para fortalecer sus Institucionalidad?

- Eliminar la reelección inmediata de los padres de la patria.
- Reformar la Constitución Política: Art.93 – Inmunidad Parlamentaria.
- Efectuar cambios al Reglamento del Congreso.
- Realizar ciertas modificaciones en la Comisión de Ética Parlamentaria
- No permitir que personas procesadas obtengan una curul.

a) Si

b) No

6. ¿Siente Ud. que la percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos (2001-2016) es desfavorable gracias a que el Congreso de la República envuelve con un manto de impunidad a los Congresistas?

a) Si

b) No

7. ¿Cree Ud. que el Congreso de la República es una de las entidades que permite que la corrupción y la impunidad vayan de la mano?

a) Si

b) No

8. ¿Cree Ud. que se debería eliminar la inmunidad parlamentaria de nuestro ordenamiento jurídico?

a) Si

b) No

9. ¿Cree Ud. que el abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho produce las siguientes consecuencias?

- Debilitamiento de la democracia
- Presencia de la corrupción
- Impunidad
- Daño desmedido al sistema de justicia,
- Pérdida de legitimidad
- Imagen del Congreso de la República seriamente afectada

a) Si

b) No

10. ¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República lesionan los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?

a) Si

b) No

Nota: Las encuestas realizadas a los 40 ciudadanos se encuentran en el anexo 14.

ANEXO 3-B.1

RESUMEN DE LAS ENCUESTAS

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS	TOTAL	
			Nº	%
1	¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria protege a los Congresistas de la República para que éstos no vayan a prisión por los delitos que cometen?	a) Si	38	95
		b) No	2	5
2	¿Considera Ud. que los Congresistas de la República han originado que la inmunidad parlamentaria se desnaturalice y pierda su verdadera finalidad para la cual fue creada?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
3	¿Cree Ud. que la inmunidad parlamentaria conlleva a la impunidad?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
4	¿Ud. cree que el Congreso de la República debería tomar las siguientes acciones para fortalecer sus Institucionalidad? - Eliminar la reelección inmediata de los padres de la patria. - Reformar la Constitución Política: Art.93 – Inmunidad Parlamentaria. - Efectuar cambios al Reglamento del Congreso. - Realizar ciertas modificaciones en la Comisión de Ética Parlamentaria. - No permitir que personas procesadas obtengan una curul.	a) Si	37	92.5
		b) No	3	7.5
5	¿Siente Ud. que la percepción de la opinión pública en estos tres últimos períodos legislativos (2001-2016) es desfavorable gracias a que el Congreso de la República envuelve con un manto de impunidad a los Congresistas?	a) Si	39	97.5
		b) No	1	2.5

6	¿Cree Ud. que el trámite del levantamiento de la inmunidad parlamentaria es demasiado lento y poco transparente porque encubre una voluntad de protección a sus miembros?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
7	¿Cree Ud. que el Congreso de la República es una de las entidades que permite que la corrupción y la impunidad vayan de la mano?	a) Si	40	100
		b) No	0	0
8	¿Cree Ud. que se debería eliminar la inmunidad parlamentaria de nuestro ordenamiento jurídico?	a) Si	37	92.5
		b) No	3	7.5
9	<p>¿.Cree Ud. que el abuso de la inmunidad parlamentaria en un Estado Constitucional de Derecho produce las siguientes consecuencias?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debilitamiento de la democracia - Presencia de la corrupción - Impunidad - Daño desmedido al sistema de justicia - Pérdida de legitimidad - Imagen del Congreso de la República seriamente afectada. 	a) Si	40	100
		b) No	0	0
10	¿Considera Ud. que el abuso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria por parte de los Congresistas de la República lesionan los cimientos del Estado Constitucional de Derecho?	a) Si	36	90
		b) No	4	10

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 4

FRAGMENTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

PREÁMBULO

El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución:

TÍTULO IV

DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO I

PODER LEGISLATIVO

Artículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única. El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso. Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.

Artículo 91°.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.
3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y
5. Los demás casos que la Constitución prevé.

Artículo 92°.- La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es

incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Artículo 93°.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Artículo 94°.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.

Artículo 95°.- El mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.

ANEXO 5

FRAGMENTO DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CAPÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones Generales

Fuerza normativa y materias de regulación del Reglamento

Artículo 1º. El presente Reglamento tiene fuerza de ley. Precisa las funciones del Congreso y de la Comisión Permanente, define su organización y funcionamiento, establece los derechos y deberes de los Congresistas y regula los procedimientos parlamentarios.

Definición, funciones generales, estructura, composición y denominación

Artículo 2º. El Congreso de la República es el órgano representativo de la Nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por ciento treinta Congresistas elegidos en forma directa, de acuerdo a ley. En los documentos oficiales, el Congreso será denominado Congreso de la República.

Soberanía y Autonomía

Artículo 3º. El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política.

Función Legislativa Artículo

Artículo 4º. La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el presente Reglamento. Comprende, asimismo, el debate y aprobación de las modificaciones a este Reglamento.

Función del Control Político

Artículo 5º. La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la **delegación de facultades** legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

Funciones Especiales

Artículo 6º. Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución.

CAPÍTULO II

Estatuto de los Congresistas

Denominación de los miembros del Congreso

Artículo 13º. Los representantes al Congreso se denominan Congresistas. En los documentos oficiales pueden utilizar, debajo de su nombre, la denominación Congresista de la República.

Mandato Representativo

Artículo 14º. Los Congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo.

Irrenunciabilidad al cargo y vacancia

Artículo 15º. El cargo de Congresista es irrenunciable. Sólo vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente que impida ejercer la función y por inhabilitación superior al período parlamentario o destitución en aplicación de lo que establece el artículo 100º de la Constitución Política.

Inmunidades de arresto y proceso

Artículo 16º. Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente a más tardar dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. (Párrafo modificado. Resolución Legislativa del Congreso 015-2005-CR, publicada el 3 de mayo de 2006)

La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un proceso penal en contra de un Congresista, a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93º de la Constitución Política del Perú, será formulada por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Dicha Comisión evalúa que la solicitud de levantamiento de fuero que se presenta al Congreso de la República esté acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos delitos en los que estaría involucrado el Congresista. Dicho informe será presentado por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, al Congreso de la República.

El procedimiento parlamentario es el siguiente:

1. Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria compuesta por cinco (5) Congresistas elegidos por el Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número legal.

2. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sin referirse al fondo del asunto, tiene un plazo de cuatro (4) días útiles para admitir la solicitud de levantamiento de inmunidad, o según sea el caso, pedir a la Corte Suprema de Justicia que se subsanen los defectos o vicios procesales de dicha solicitud y sus anexos.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria.

Los pedidos que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el presente artículo serán rechazados de plano y devueltos a la Corte Suprema de Justicia.

3. Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria convoca a sesión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes y cita al Congresista para que ejerza personalmente su derecho de defensa, pudiendo ser asistido por letrado. Se señalarán dos (2) fechas con intervalo de un (1) día para el ejercicio del derecho de defensa del parlamentario. La inasistencia del parlamentario no suspende el procedimiento.

En el supuesto que el Congresista se allane por escrito, con firma legalizada o fedateada, al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictaminará, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes al allanamiento, aprobándolo o rechazándolo. (Párrafo adicionado. Resolución Legislativa del Congreso 008-2007-CR, publicada el 17 de octubre de 2007)

NOTA: En la Resolución Legislativa del Congreso 008-2007-CR, publicada el 17 de octubre de 2007, que adiciona este párrafo, se incluye la siguiente Disposición Complementaria: "Única. Las presentes modificaciones al Reglamento del Congreso de la República no resultan de aplicación a los hechos, situaciones jurídicas o procesos relativos al Estatuto de los Congresistas, o al procedimiento de acusación constitucional, previos a su entrada en vigencia".

4. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictamina en un plazo máximo de quince (15) días útiles, contados a partir del día siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al Congresista denunciado para su defensa.

5. Dentro de los dos (2) días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del Congreso lo consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la fecha de su recepción a fin de someterlo al debate y votación correspondiente, la cual podrá realizarse en la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, a criterio del Presidente del Congreso.

El Congresista aludido en la solicitud de levantamiento de fuero tiene derecho a usar hasta 60 minutos en su defensa, en cualquiera de las instancias, recibir oportunamente el dictamen respectivo, la transcripción de las intervenciones que realice, así como ser asistido por letrado.

El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de Congresistas.

Lo resuelto por el Pleno es comunicado a la Corte Suprema de Justicia.

(Artículo modificado. Resolución Legislativa del Congreso 008-2007-CR, publicada el 17 de octubre de 2007)

(...)

Prohibiciones

Artículo 20. Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas están prohibidos:

a) De desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

b) De adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones en las empresas señaladas en los incisos b) y c) del artículo 19 precedente.

c) De intervenir en favor de terceros en causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial.

d) De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen en ejercicio de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales dolosos en los cuales la Corte Suprema de Justicia de la República ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

En dicho supuesto, el Parlamentario presenta su inhibición ante la Comisión correspondiente.

En el caso de las Comisiones Ordinarias, distintas a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la ausencia por inhibición de los Congresistas titulares será considerada como licencia para efecto de la referida investigación o fiscalización, la misma que no se hará extensiva para otros temas o asuntos a cargo de dicha Comisión Ordinaria, casos en los que seguirá participando como miembro titular.

(Inciso adicionado. Resolución Legislativa del Congreso 025-2005-CR, publicada el 21 de julio de 2006)

ANEXO 6

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: FRANCISCO ERRÁZURIZ

EXP. N.º 1011-2000-HC/TC
LIMA
FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ TALAVERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil uno, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Julio César Espinoza Goyena a favor de don Francisco Javier Errázuriz Talavera, contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veintiocho, su fecha veinticuatro de agosto de dos mil, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

El accionante interpone acción de hábeas corpus a favor de don Francisco Javier Errázuriz Talavera, contra doña Nilda Egocheaga Ferrel, Jueza del Trigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, ante la amenaza de la libertad individual al haber dictado un Auto de Apertura de Instrucción contra el beneficiario, no obstante asistirle la prerrogativa de inmunidad parlamentaria como Senador de la República de Chile. Afirma que dicha prerrogativa configura un impedimento procesal para la apertura de instrucción penal y que su inobservancia conculca los principios del debido proceso jurisdiccional y el que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto a los previamente preestablecidos por ley, así como el derecho de defensa.

La emplazada manifiesta que sólo los Jefes de Estado y Agentes Diplomáticos están exentos de las leyes peruanas, conforme a los artículos 297º y 298º del Código de Bustamante, y que su inmunidad es diferente a la inmunidad parlamentaria; que el antejuicio "únicamente es aplicable a los congresistas peruanos"; que el artículo 343º del citado código es una excepción, y, que, según el artículo 10º del Código Penal, las prerrogativas de ciertas personas por su función o cargo, deben de estar taxativamente previstas.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, a fojas cuarenta, con fecha veinticinco de abril de dos mil, declaró improcedente la acción de hábeas corpus, por considerar que sólo los Jefes de Estado y los Agentes Diplomáticos están exentos de las leyes peruanas por motivos de función, y que la inmunidad de éstos es diferente a la inmunidad parlamentaria; que el antejuicio es sólo aplicable a congresistas peruanos; que el artículo 10º del Código Penal establece que las prerrogativas deben estar taxativamente previstas en las leyes o los tratados internacionales, no existiendo ninguno aplicable al beneficiario, y, que, tratándose de un proceso penal en curso, las anomalías deben resolverse dentro del mismo proceso. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. Que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de los miembros del Poder Legislativo, consistente en la imposibilidad de que sean procesados o detenidos salvo flagrante delito previo levantamiento de la inmunidad por parte del correspondiente

Poder Legislativo. De este modo, se configura como un impedimento procesal para la apertura de la instrucción penal, cuya estricta observancia constituye un elemento de especial importancia del procedimiento preestablecido por la ley y, desde tal perspectiva, como atributo integrante del derecho al debido proceso.

2. Que, de conformidad con el artículo 343º del Tratado de La Habana o Código de Bustamante, "No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los Estados contratantes, las personas y los delitos y faltas a que no alcanza la ley penal del respectivo Estado". La excepción a la competencia judicial está referida precisamente al caso de aquella persona que en el país "del respectivo Estado", esto es, del Estado del que procede la persona extranjera, no le alcanza la ley penal. En el presente caso, al demandante, por su condición de Senador de la República de Chile, no le alcanza la ley penal chilena, sino previo levantamiento de la inmunidad parlamentaria que le reconoce el artículo 57º de la Constitución de la República de Chile; por lo tanto, su caso se halla comprendido dentro de la excepción prevista por el citado artículo 343º del Tratado de La Habana. Lo antedicho no se contrapone a lo establecido por el artículo 10º del Código Penal, ya que la prerrogativa está comprendida, en este caso, por un tratado internacional ratificado tanto por la República del Perú como por la de Chile.
3. Que, de conformidad con lo anterior, el hecho de que la emplazada haya iniciado un proceso penal a través del auto apertorio de instrucción contra el beneficiario del presente proceso de hábeas corpus, sin considerar la inmunidad parlamentaria de la que se hallaba investido, y sin observar el trámite previo que dicha condición exige ante el Senado de la República de Chile, ha vulnerado el derecho al procedimiento preestablecido por Tratado de La Habana, y de la misma manera, el derecho de toda persona al debido proceso pues la observancia del procedimiento de ley, es un atributo que conforma el derecho al debido proceso. Asimismo, en la medida en que el auto apertorio de instrucción y el mandato de comparencia provienen de un proceso penal irregular por las razones antes señaladas, el acto reclamado también constituye una amenaza cierta e inminente al derecho a la libertad del beneficiario.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, y, reformándola, declara **FUNDADA** la acción de hábeas corpus; en consecuencia, dispone se deje sin efecto el auto apertorio de instrucción en el extremo que comprende a don Francisco Javier Errázuriz Talavera, Senador de la República de Chile, como presunto responsable penal en el proceso signado con el Expediente N.º 724-99, seguido ante el Trigésimo Cuarto Juzgado Especializado Penal de Lima; ordena así mismo, se deje sin efecto toda medida restrictiva de su libertad que dentro del proceso mencionado se haya dictado en su contra, no siendo de aplicación el artículo 11º de la Ley N.º 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial *El Peruano* y la devolución de los actuados.

SS

**REY TERRY
NUGENT
DÍAZ VALVERDE
ACOSTA SÁNCHEZ
REVOREDO MARSANO
GARCÍA MARCELO**

ANEXO 7

LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Recopilación de los de diversos textos constitucionales que contienen a la garantía de la inmunidad parlamentaria.

- Constituciones de Países de América del Sur

PAÍSES	CONSTITUCIONES POLÍTICAS
Argentina	Constitución de la Nación Argentina (1994)
	Artículo 69º.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
Bolivia	Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)
	Artículo 152º.- Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante.
Chile	Constitución Política de la República de Chile (1980)
	<p>Artículo 61º.- Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.</p> <p>Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.</p> <p>En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente.</p> <p>El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.</p> <p>Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador acusado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.</p>
Colombia	Constitución Política de Colombia (1991)
	Artículo 186º.- De los delitos que cometan los congresistas conocerán como investigador y acusador la Fiscalía General de la Nación previa petición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con la ley, a través del señor Fiscal General o su delegado ante la Corte, y como juzgador en primera instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Ecuador	Constitución de la República del Ecuador (2008)
	<p>Artículo 128º.- Art. 128.- Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.</p> <p>Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. Durante los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.</p> <p>Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza o juez que avocó el conocimiento de la causa.</p>
Paraguay	Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992)
	<p>Artículo 191º.- (...)</p> <p>Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad.</p> <p>Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros.</p>
Venezuela	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
	<p>Artículo 200º.- Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.</p> <p>Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.</p>

▪ Constituciones de Países Centroamericanos

PAÍSES	CONSTITUCIONES POLÍTICAS
Costa Rica	Constitución Política de Costa Rica (1949)
	<p>Artículo 110º.- El diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta.</p> <p>Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el diputado la renuncia. Sin embargo, el diputado que haya sido detenido por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare.</p>
El Salvador	Constitución de la República de el Salvador (1983)
	<p>Artículo 238º.- Los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa, conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior.</p> <p>Por los delitos menos graves y faltas que cometan durante el mismo período no podrán ser detenidos o presos, ni llamados a declarar sino después de concluido el período de su elección.</p> <p>Si el Presidente, Vicepresidente de la República o un diputado fuere sorprendido en flagrante delito, desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueron elegidos podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea.</p>
Honduras	Constitución Política de Honduras (1982)
	El Texto Constitucional no reconoce a la inmunidad parlamentaria.
Panamá	Constitución Política de la República Panamá (1972)
	<p>Artículo 155º.- Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>El Diputado Principal o Suplente podrá ser demandado civilmente, pero no podrá decretarse secuestro u otra medida cautelar sobre su patrimonio, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de obligaciones por Derecho de Familia y Derecho Laboral.</p>
	Constitución Recuperado de la República Dominicana (2010)
	<p>Artículo 86º.- Protección de la función legislativa.</p> <p>Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.</p>

República Dominicana	<p>Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública.</p> <p>Artículo 87º.- Alcance y límites de la inmunidad.</p> <p>La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresal puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento.</p>
----------------------	--

▪ Constituciones de Países de Norteamérica

PAÍSES	CONSTITUCIONES POLÍTICAS
México	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917)
	El Texto Constitucional reconoce a la inviolabilidad parlamentaria pero no a la inmunidad.
Estados Unidos	Constitución de los Estados Unidos de América (1787)
	<p>Sexta Sección:</p> <p>Artículo 1º.-</p> <p>1. Los senadores y representantes recibirán por sus servicios una remuneración que será fijada por la ley y pagada por el tesoro de los EE.UU.</p> <p>En todos los casos, exceptuando los de traición, delito grave y perturbación del orden público, gozarán del privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de las respectivas Cámaras, así como al ir a ellas o regresar de las mismas, y no podrán ser objeto en ningún otro sitio de inquisición alguna con motivo de cualquier discusión o debate en una de las Cámaras.</p>

▪ Constituciones de Países Europeos

PAÍSES	CONSTITUCIONES POLÍTICAS
Alemania	Constitución de Alemania: Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949)
	<p>Artículo 46º.-</p> <p>(1) Los diputados no podrán en ningún momento ser sometidos a un procedimiento judicial o disciplinario ni responsabilizados de otra forma fuera del Bundestag a causa de su voto o de una declaración que hicieran en el Bundestag o en una de sus comisiones. Esto no rige para las ofensas calumniosas.</p> <p>(2) A causa de actos sujetos a sanción penal, un diputado puede ser responsabilizado o detenido sólo con la autorización del Bundestag, a no ser que sea detenido en delito flagrante o durante el día siguiente de haber cometido el acto.</p> <p>(3) La autorización del Bundestag es necesaria igualmente para toda otra restricción de la libertad personal de un diputado o para iniciar contra un diputado el procedimiento previsto en el artículo 18.</p> <p>(4) Todo proceso penal y todo procedimiento según el artículo 18 iniciado contra un diputado, toda detención y toda otra limitación de la libertad personal, deberán ser suspendidos a solicitud del Bundestag.</p>
España	Constitución Española (1978)
	<p>Artículo 71º.- Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria</p> <p>2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.</p> <p>3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.</p>
Grecia	Constitución de Grecia (1975)
	<p>Artículo 62º.- Durante la legislatura ningún diputado será perseguido, detenido, encarcelado o sometido a otras coacciones sin la autorización de la Cámara de los Diputados. Asimismo, ningún miembro de la Cámara disuelta será perseguido por delitos políticos entre la disolución de la Cámara y la proclamación de la nueva.</p> <p>La autorización se considera denegada, si la Cámara de los Diputados no se pronuncia en tres meses a contar desde que el fiscal diera traslado de la demanda de detención al Presidente de la Cámara.</p> <p>El plazo de tres meses se suspende durante las vacaciones parlamentarias.</p> <p>No se requiere autorización alguna en caso de flagrante delito.</p>

ANEXO 8

VENEZUELA: TRIBUNAL SUPREMO QUITA INMUNIDAD A PARLAMENTARIOS



Los parlamentarios venezolanos -mayoritariamente opositores- quedaron sin inmunidad por un fallo del máximo tribunal que autoriza al presidente **Nicolás Maduro** a buscar su enjuiciamiento, incluso por delitos militares y terrorismo.

[Seguir a @Mundo_ECpe](#)

El detonante de la sentencia fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.

Justamente, esa instancia se reunirá este martes en Washington a solicitud de un grupo de países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México- para discutir sobre la profunda crisis política y económica venezolana.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó este martes que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según un fallo que anuló el acuerdo legislativo por petición de la bancada chavista.

"La inmunidad parlamentaria solo ampara (...) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)", indica la sentencia.

A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato a la Asamblea por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.

► Nicolás Maduro activará una nueva tasa de cambio en Venezuela

- Justicia militar -

Con esa declaratoria, el TSJ -señalado por la oposición de servir al gobierno de Maduro- ha anulado todas las decisiones de la cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores y que en realidad el propósito es desconocerla.

"El gobierno quiere meterle miedo a los diputados con que nos va a meter presos. Irá a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie, que quieren votar", dijo Stalin González, jefe de la fracción opositora.

El tribunal fue más lejos al ordenar a Maduro tomar "las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción", a propósito del acuerdo legislativo.

Y en el marco del estado de excepción vigente desde 2016, y debido al desacato, habilitó al mandatario para que garantice la "estabilidad democrática" apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el "código de justicia militar".

"El TSJ le está dando al presidente un pase para que tome medidas contra diputados. La más grave sería abrirles un juicio, que podría ser militar", dijo a la AFP el abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.

La corte se alineó con el gobierno al considerar que el pedido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de sancionar a Venezuela, va "en detrimento de los principios democráticos y de igualdad" del organismo.

► Bolivia acusa a jefe de OEA de intentar "derrocar" a Maduro

- Por encima de la ley -

En un demoledor informe sobre la situación del país, Almagro planteó

planteó al Consejo Permanente suspenderlo de la OEA si no realiza elecciones generales en breve, como reclama la oposición.

Según el diplomático, el gobierno venezolano "viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos sólo por el hecho de disenter, tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir".

"A mí no me quita el sueño ni me perturban un segundo las estupideces de Almagro (...) para mí es un payaso, una basura sideral", afirma Maduro, quien este martes encabezará una "marcha anti-intervencionista" en Caracas, a la que se esperan cientos de partidarios.

Se prevé que la movilización llegue a las inmediaciones de la Asamblea, donde la oposición tiene previsto sesionar.

Para Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, el TSJ "se ha puesto por encima de la Constitución", pues el fuero parlamentario solo puede ser removido por el propio Legislativo, tras solicitud de la corte.

"Le está ordenando al Sebin (servicio de inteligencia) que detenga a los disputados con un efecto selectivo o masivo. Con sus decisiones, el TSJ ha logrado su objetivo de paralizar la Asamblea, generando una ruptura del orden constitucional", declaró a la AFP.

Maduro descarta de plano un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para diciembre de 2018, mientras las regionales siguen en el limbo pues debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 sin que aún tenga fecha establecida.

ANEXO 9

INMUNIDAD PARLAMENTARIA EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL

Constituciones Políticas del Perú	Regulación por artículos
1823	<p>Artículo 57º.- Los diputados son inviolables por sus opiniones, y jamás podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado en el tiempo del desempeño de su comisión.</p> <p>Artículo 59º.- En las acusaciones criminales contra los diputados no entenderá otro juzgado ni tribunal que el del Congreso, conforme a su reglamento interior; y mientras permanezcan las sesiones del Congreso, no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.</p>
1826	<p>Artículo 32º.- Ningún individuo del cuerpo legislativo podrá ser preso durante su diputación, sino por orden de su respectiva Cámara, a menos que sea sorprendido infraganti en delito que merezca pena capital.</p>
1828	<p>Artículo 43º. Mientras duren las sesiones del Congreso, no podrán los Diputados y Senadores ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. En las acusaciones criminales contra algún miembro de las Cámaras, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cesado su cargo, no podrán procederse sino conforme al artículo 31º.</p> <p>Artículo 44º. Los poderes de los diputados y senadores no se pueden revocar durante el tiempo de su comisión, sino por delito juzgado y sentenciado según los artículos 31º y 32º.</p>
1834	<p>Artículo 46º. Los Diputados y Senadores, mientras duren las sesiones, no pueden ser demandados civilmente ni ejecutado por deudas. En las acusaciones criminales contra algún miembro de las Cámaras, desde el día de su elección hasta el día en que es reemplazado, no puede procederse sino conforme a los artículos 23º y 32º; y en receso del Congreso, conforme a los artículos 33º, 34º, y 101º, atribución 5º.</p>
1839	<p>Artículo 18º. Los Diputados y Senadores, no pueden ser acusados o presos desde el día de su elección, hasta tres meses después de concluidas las sesiones, sin previa autorización del Congreso, con conocimiento de causa, y en receso del Consejo de Estado, a no ser en caso de delito in fraganti, en el que será puesto inmediatamente a disposición de su Cámara respectiva, o del Consejo de Estado.</p> <p>Artículo 20º. Ningún individuo del Cuerpo Legislativo podrá ser demandado civilmente, ni ejecutado por deudas, desde su elección, hasta tres meses después de concluidas las elecciones.</p>
1856	<p>Artículo 51º Los Representantes no pueden ser arrestados ni acusados durante las sesiones sin previa autorización del Congreso. Sólo en el caso de delito “infraganti”, podrán ser arrestados y se les pondrá Inmediatamente a disposición del Congreso.</p>
	<p>Artículo 55º. Los Senadores y los Diputados no pueden ser</p>

1860	acusados ni presos, sin previa autorización del Congreso, y en su receso, de la Comisión Permanente, desde un mes antes de abrirse las sesiones hasta un mes después de cerradas; excepto infraganti delito, en cuyo caso serán puestos inmediatamente a disposición de su respectiva Cámara, o de la Comisión Permanente, en receso del Congreso.
1867	<p>Artículo 54º. Los Representante no pueden ser acusados ni detenidos durante las sesiones, sin previa autorización del Congreso, salvo el caso de flagrante delito, en el cual serán puestos inmediatamente a disposición del Cuerpo Legislativo.</p> <p>Artículo 55º. Tampoco pueden ser acusados ni detenido, un mes antes ni un mes después de las sesiones, sin previo acuerdo del Tribunal Supremo de Justicia; salvo el caso de flagrante delito, en el cual serán puestos a disposición de la Corte Suprema para su juzgamiento conforme a la ley.</p>
1920	Artículo 80º. Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones y no pueden ser acusados ni presos sin previa autorización de las Cámaras a que pertenezcan desde un mes antes de abrirse las sesiones hasta un mes después de cerradas; excepto infraganti delito, en cuyo caso serán puestos inmediatamente a disposición de su respectiva Cámara.
1933	Artículo 105º. Los senadores y los diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones, y no pueden ser acusados ni presos in previa autorización de la Cámara a que pertenecen, desde un mes antes de abrirse la legislatura hasta un mes después de cerrada, excepto en flagrante delito, en cuyo caso serán puestos dentro de las 24 horas a disposición de su respectiva Cámara.
1979	Artículo 176º. Los Senadores y Diputados representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo. No son responsables ante autoridad ni tribunal alguno por los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni presos, sin previa autorización de la cámara a que pertenecen o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante caso en el cual son puestos a disposición de su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autoricen o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.
1993	Artículo 93º. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

ANEXO 10

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA REQUERIR EL LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Aprueban Reglamento que regula el Procedimiento Judicial para requerir el Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA N° 009-2004-SP-CS

Artículo 1.- Ámbito y marco normativo del procedimiento.

1. El presente Reglamento regula el procedimiento judicial para requerir al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de un Congresista incurso en lo dispuesto en el artículo 93, último párrafo, de la Constitución Política del Perú.
2. El marco normativo de la institución lo estatuye el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, el artículo 16 del Reglamento del Congreso, modificado por la Resolución Legislativa número 011-2004-CR, publicada el 23 de octubre de 2004, y la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 006-2003/AI, del 1 de diciembre de 2003.

Artículo 2.- Presupuestos para la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

1. El órgano jurisdiccional, luego de la interposición de la denuncia formalizada del representante del Ministerio Público o de la querella por un delito de ejercicio privado de la acción penal contra un Congresista por la comisión de un delito, decidirá de oficio o a instancia del Fiscal, o del denunciante o, en su caso, del querellante mediante auto debidamente motivado si corresponde elevar a la Corte Suprema la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
2. Sólo se elevará a la Corte Suprema la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria siempre que se hayan cumplido los siguientes presupuestos materiales:
 - a) Que el denunciado, cuando se promueva la acción penal en su contra, tenga la condición de Congresista de la República -desde la fecha de su elección-, y hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, y que se le atribuya la comisión de un delito no vinculado al ejercicio de sus funciones parlamentarias, esto es, que se trate de un delito común y no funcional.
 - b) Que de la denuncia formalizada del Fiscal o de la querella, y de sus recaudos, aparezca que el hecho denunciado constituya delito, que existan indicios suficientes o elementos de juicio que hagan presumir su comisión y de la presunta vinculación del imputado como autor o partícipe, quien debe estar debidamente individualizado, y que la acción penal no haya prescrito y no concurra una causa de extinción de la acción penal.
3. Son exigibles como presupuestos formales los siguientes:
 - a) Que la resolución detalle con toda precisión los hechos penalmente relevantes y las circunstancias de su presunta comisión.
 - b) Que la resolución describa y valore los actos de prueba o de investigación que fundan la imputación; y,

c) Que la resolución fundamente la concurrencia de los requisitos materiales necesarios para solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Artículo 3.- Elevación de la resolución que contiene la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

1. Emitida la resolución correspondiente, el órgano jurisdiccional, previa notificación a los interesados y, en su caso, a las partes, elevará inmediatamente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República copia certificada íntegra de todos los actuados pertinentes que justifiquen el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 2.

2. El Juez cuidará que una copia certificada, legible y completa, de los actuados, que deberá incluir de manera especial los actos de investigación o de prueba, sea insertada en el cuaderno formado al efecto. Si se trata de audios o videos, sin perjuicio de adjuntar copia del soporte material correspondiente, se incorporará copia certificada del acta preliminar de transcripción de los mismos.

Artículo 4.- Formación de la Comisión de Vocales Supremos.

1. El cuaderno elevado por el órgano jurisdiccional será derivado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Vocales Supremos designados para el efecto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

2. La Comisión estará integrada por tres Vocales Supremos Titulares, cuya designación por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia será anual. En ese mismo acto se elegirán dos Vocales Supremos Titulares Alternos, que intervendrán, por su orden, en los casos de impedimento, licencia, vacaciones o cese de los primeros.

Artículo 5.- Atribuciones de la Comisión de Vocales Supremos.

1. Corresponde a la Comisión de Vocales Supremos:

a) Evaluar la concurrencia de los presupuestos materiales y formales de la resolución judicial que resuelve solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, así como si el cuaderno correspondiente está completo. El pronunciamiento sobre el fondo del asunto para el levantamiento o no de la inmunidad se concretará a través de un Informe debidamente motivado.

b) Devolver el cuaderno al órgano jurisdiccional de origen para que, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, subsane alguna omisión o defecto en la resolución o en el cuaderno formado al efecto.

c) Devolver la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria si no se cumplen los presupuestos materiales establecidos en el numeral 2) del artículo 2. En este caso no procederá que se requiera al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

d) Formular al Congreso de la República el requerimiento para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice la tramitación de un proceso penal contra el Congresista a que se refiere la resolución del órgano jurisdiccional de origen, siempre que se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en los artículos 2 y 3.

2. El Informe de la Comisión de Vocales Supremos se emitirá en el plazo de cinco días hábiles, será fundamentado y presentado por unanimidad o mayoría.

3. Las partes o los interesados podrán presentar informes escritos ante la Comisión de Vocales Supremos. No procede informe oral.

4. Contra el Informe de la Comisión de Vocales Supremos no procede recurso alguno.

Artículo 6.- Requisitos del Informe Judicial requiriendo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

1. El informe de la Comisión de Vocales Supremos, en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 5, se dirigirá al Congreso de la República. Dicho informe contendrá:

a) Una parte expositiva, que detallará los hechos objeto de imputación y describirá el procedimiento seguido ante el órgano jurisdiccional que determinó la emisión de la resolución de solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria; y,

b) Una parte considerativa, que analizará la procedencia y legalidad del levantamiento de fuero y consecuente autorización para tramitar el proceso penal contra el Congresista denunciado.

El informe concluirá requiriendo el levantamiento del fuero del Congresista involucrado.

2. El informe se agregará al cuaderno de levantamiento de inmunidad parlamentaria formado por el órgano jurisdiccional solicitante. Se remitirá al Congreso por intermedio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia inmediatamente después de recibido.

ANEXO 11

COMISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA TENDRÁ 15 INTEGRANTES



07:34. Lima, ago. 20. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, aumentará el número de integrantes de 5 a 15, con la finalidad de garantizar la representatividad y pluralidad en este grupo de trabajo, encargado de calificar algún tipo de denuncia contra algún integrante de este Poder del Estado.

A través de la resolución legislativa 004-2016-2017-CR, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, modifica el numeral 1) del artículo 16 del Reglamento del Congreso.

De esta manera aumenta el número de integrantes de cinco (5) a quince (15) miembros, los mismos que serán elegidos por el Pleno del Congreso, “a fin de tutelar el principio constitucional de democracia representativa y plural”.

Asimismo, modifica el numeral 1) del artículo 16 del Reglamento del Congreso, respecto a las inmunidades y el proceso.

En tal sentido, refiere que los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Parlamento o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.

“Excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente a más tardar dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”, añade.

Además, establece que el procedimiento parlamentario señala que, recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las 24 horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria compuesta por 15 congresistas elegidos por el Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número legal.

ANEXO 12

ALEJANDRO YOVERA Y OTROS CONGRESISTAS QUE FUERON DESAFORADOS

CONGRESO



Alejandro Yovera y otros congresistas que fueron desaforados

Los casos en los que los legisladores cometieron actos que han tenido un alto costo político para ellos



Alejandro Yovera y otros congresistas que fueron desaforados

Con el desafuero de **Alejandro Yovera**, sobre quien pesa una condena de dos años de prisión suspendida **por consignar información falsa en su hoja de vida**, se ha ampliado la lista de los congresistas que dijeron adiós a sus cargos por sonados escándalos.

Desde empleados fantasmas hasta sentencias judiciales, algunos "padres de la patria" han sabido cometer actos que no solo los han puesto en el ojo de la opinión pública, sino que les han tenido un alto costo político para ellos.

Antes de **Alejandro Yovera**, fue Michael Urtecho el último congresista desaforado, en diciembre de 2013. En su caso, además de ser destituido, fue inhabilitado durante diez años para el ejercicio de la función pública, por haber recortado el sueldo a sus trabajadores de su despacho parlamentario.

Otros legisladores, en tanto, no fueron tan conocidos por sus nombres, sino por los singulares apodos que la opinión pública terminó por colocarles. Ese es el caso de **'Come pollo'** José Anaya y **'Roba luz'** Rocío González.

El primero fue acusado constitucionalmente por haber presentado boletas adulteradas de una pollería para justificar gastos y fue condenado a cinco años de cárcel.

A la segunda, se le vacó del parlamento en 2009 luego de que un juez ordenara su captura por hurto de electricidad realizado por una empresa de su propiedad, en agravio de la estatal Sociedad Eléctrica de Arequipa.

En tanto, en mayo de 2007, **Elsa Canchaya** fue desaforada del Congreso y sentenciada por el Poder Judicial debido a irregularidades en la contratación de su empleada del hogar,

En marzo de 2008 **Tula Benites** fue desaforada por contratar a una empleada fantasma.

ANEXO 13

EVIDENCIAS DE LAS ENTREVISTAS

Dr. Víctor García Toma



Dr. César Landa Arroyo



Dr. Raúl Chanamé Orbe



Dr. César Delgado Guembes



Dr. Gerardo Eto Cruz



ANEXO 14

VIDEOS, AUDIOS, FOTOS DE ENTREVISTAS Y OTROS

Videos, audios y fotos de las entrevistas realizadas a los Especialistas en Derecho Constitucional (Ex Magistrados del Tribunal Constitucional, Abogados Litigantes, Miembro del Jurado Nacional de Elecciones y Docente de la Academia de la Magistratura) y Derecho Parlamentario (Ex Oficial Mayor del Congreso – Jefe del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas).

